

**LOS ESTUDIOS DE HISTORIA EN
LA UNIVERSIDAD DE MADRID
(1939-1983)**

Este trabajo está dedicado con todo mi afecto a Elena Hernández Sandoica, M^a Carmen García Nieto y Cristina Segura, mis maestras, a mi familia a la que quiero con el alma y a todos mis compañeros del Archivo General de la UCM quienes ponen cada día su entusiasmo en intentar dar a conocer la historia de esta institución.

“Esta nueva política educativa y la reforma que propugna comprenderá en el futuro una reforma integral de la sociedad y sus viejas estructuras, al modo de una revolución silente y pacífica que será, sin embargo, tremendamente más eficaz y profunda que cualquier otra para conseguir una sociedad más justa”.

Introducción al “*Libro Blanco*”
José Luis Villar Palasí

ÍNDICE

I. Introducción

II. Análisis del marco legislativo

- 1. La inmediata posguerra y los antecedentes de la Ley de Ordenación de la Universidad Española**
- 2. La Ley de Ordenación de la Universidad Española de 1943**
- 3. La Ley General de Educación de 1970**

III. Evolución de los estudios de Geografía e Historia en la Universidad de Madrid a través de sus planes de estudios

IV. Análisis docente y administrativo: de la Facultad de Filosofía y Letras a la Facultad de Geografía e Historia y su estructura departamental.

V. Conclusiones

VI. Apéndices

- Anexo I.- Ministros de Educación (1938-1983)**
- Anexo II.- Rectores de la Universidad de la Universidad de Madrid (UCM). (1939-1984)**
- Anexo III. Decanos de la Facultad de Filosofía y Letras (1939-1975) y de la Facultad de Geografía e Historia (1975-1986)**
- Anexo IV.- Índice de legislación consultada (1936-1983)**
- Anexo V.- Cuadro comparativo del profesorado**
- Anexo VI.- Índice de siglas utilizadas**

VI. Bibliografía

I. INTRODUCCIÓN. EL MARCO HISTORIOGRÁFICO

El tema elegido para el estudio que aquí presentamos es la evolución de los estudios de Historia en la Universidad de Madrid en el periodo 1939 – 1983. Se trata de analizar, teniendo como marco la Universidad de Madrid, la evolución intrínseca de la enseñanza universitaria de la Historia (entendida en sentido amplio, con todas las especialidades a las que dio lugar) a través de los planes de estudio y, por otra parte, seguir la evolución docente y administrativa de dichas enseñanzas, mediante la creación de Departamentos y de la propia Facultad de Geografía e Historia.

Así pues, tres serían los ejes que articulan este estudio:

1.- Análisis del marco legislativo general que ha regido la educación universitaria a lo largo del dilatado periodo que abordamos y las grandes leyes que lo definen, sin cuyo referente y contexto sería imposible comprender los niveles organizativos inferiores.

2.- Evolución disciplinar de los estudios de Geografía e Historia a través del análisis de los planes de estudio. Con ello se pretende hacer un mapa de la evolución de los estudios de Geografía e Historia, desde la concepción generalista inicial, ligada a la originaria Facultad de Filosofía y Letras, hasta la incipiente especialización alcanzada en los años setenta y que dio como consecuencia la creación de varias titulaciones independientes, partiendo todas ellas del tronco de la nueva Facultad de Geografía e Historia.

3.- Análisis de la organización interna de la propia Facultad, tanto docente como administrativamente, con la organización de los Departamentos y la división de la antigua Facultad de Filosofía y Letras para dar lugar, mediante adaptación y en paralelo con otras similares, a la de Geografía e Historia.

La razón principal de la elección del tema por mi parte –desde mi posición de archivera e historiadora a la vez- reside en la constatación práctica de que se trata de un tema inédito en cuanto al periodo abordado, a pesar de

que el análisis de los planes de estudio ha sido realizado en lo que respecta a otros grandes ámbitos y otras disciplinas (Filosofía y Letras, Matemáticas, Derecho, etc.), o bien parcialmente para periodos cronológicos concretos (por ejemplo, en el estudio de Carolina Rodríguez López para la inmediata posguerra en la UCM). Por otra parte, a medida que avanza este periodo y nos acercamos a las universidades en tiempos de democracia los estudios disminuyen y van siendo más y más puntuales o específicos, por lo que claramente se muestra, este estudio de la vida universitaria, como una historia aún por hacer.

Asimismo, aun siendo la Universidad de Madrid una de las que mayor producción historiográfica ha originado para la edad contemporánea, carece todavía de estudios pormenorizados sobre determinados periodos cronológicos, o de visiones de tipo general para el periodo que nos ocupa, y de ahí la necesidad de nuevas aportaciones que contribuyan a cubrir estas lagunas. Igualmente, sería de extraordinario interés la realización de estudios comparados entre las diversas universidades españolas, para éste u otros periodos concretos.

La elección del corte cronológico que emprendemos responde a que el conjunto del periodo refleja claramente el paso de los planes de estudio de tradición decimonónica, re-instalados en 1939 tras la contienda, a la progresiva especialización y desarrollo científico que culmina en los años setenta con la Ley General de Educación (LGE) y con el intento de implantar la autonomía universitaria (al menos en lo referido al ámbito docente), con la disgregación de las enseñanzas de Historia de las de Filología y Filosofía, y con la división administrativa de aquellas nuevas enseñanzas mediante la creación de la llamada Facultad de Geografía e Historia. Por medio, la creación de los Departamentos en 1965 transformaba radicalmente, al menos sobre el papel, la organización científico-docente de los estudios universitarios. Este periodo se cerraría con la publicación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) promulgada en 1983, una vez afianzada la transición a la democracia y definido el Estado de las autonomías, un marco y una normativa que responden a una coyuntura claramente diferente.

Es comúnmente aceptado que la ley del 70 supuso un intento de modernización de la universidad española, pero resulta verdaderamente difícil de comprender la magnitud de esa norma, si no es por contraste con la anterior del 43. Aunque las dos fueran leyes franquistas, se trata de instrumentos de muy distinta naturaleza, obviamente.

La elección de la Universidad de Madrid para comprobar esta evolución supone adentrarnos en la universidad de referencia como lugar de ensayo de las iniciativas estatales en materia de educación universitaria y, en los últimos años del franquismo, también escenario de primer orden de las tensiones sociales provocadas por el alto grado de masificación, de descontento estudiantil y de conciencia política alcanzado por su alumnado. La Universidad de Madrid pasó de ser el máximo exponente del centralismo universitario a convertirse en núcleo de oposición universitaria al franquismo. Ese centralismo también quedaba reflejado en sus planes de estudio, ya que era la universidad que impartía todas las especialidades, en donde se llevaba a cabo la celebración de oposiciones, e incluso se mantendría la lectura obligatoria de tesis doctorales en Madrid hasta mediados de los años 50.

En cuanto a la periodización, podemos decir que los dos ejes que marcan el periodo son las dos grandes leyes de educación, la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, que supuso la creación de patrones de la universidad franquista por excelencia, y la Ley General de Educación de 1970, que siendo una ley que comprendía y pretendía organizar el sistema educativo al completo, en todos sus niveles y en todas sus vertientes, introducía modificaciones sustanciales en el nivel superior. Se trataba de una ley adecuada a su tiempo dentro del contexto europeo, que pretendiendo la modernización de la educación, surgió sin embargo lastrada por un contexto político anacrónico, el del último periodo del franquismo, en una circunstancia de grave crisis económica, y obstaculizada por el peso de una fuerte oposición estudiantil. Lo cual hizo que sus logros fueran muy limitados, restando la posibilidad de experimentación previa y allanamiento del camino, de cara a la posterior Ley de Reforma Universitaria del 83.

En el aspecto puramente docente, como principal proyección, la Ley General de Educación intentaba introducir una cierta autonomía universitaria mediante la aprobación de Estatutos propios para cada universidad, lo que en principio favorecería una mayor autonomía docente. A partir de ese momento el Ministerio de Educación se limitaría a dictar las directrices para la elaboración de planes de estudio (es decir, los contenidos mínimos que el Estado debía garantizar para poder expedir los correspondientes títulos en todo el territorio nacional), pero sería cada universidad la que los desarrollaría específicamente.

Asimismo, la división de la Facultad de Filosofía y Letras era también consecuencia de la propia Ley de 1970, que favorecía la especialización de las enseñanzas, al tiempo que, con la división, pretendía poner remedio a la masificación que se vivía en las aulas (como anticipo a la ley, ya en 1968 se habían creado dos nuevas universidades en Madrid y Barcelona, así como nuevas facultades universitarias en Santander, San Sebastián y Badajoz).

Como adaptación previa, el ministro Lora Tamayo, antecesor de Villar Palasí (a quien se debe la Ley de 1970), ya en 1965, siguiendo aquella política ya tradicional de aplicar remedios parciales antes que cambios drásticos, había intentado solucionar la situación mediante la creación generalizada de la estructura departamental, así como había ensayado la introducción de nuevas categorías dentro del profesorado universitario, surgiendo la figura del Profesor Agregado. Su sucesor en el Ministerio, con la Ley General de Educación, no sólo mantendría los Departamentos creados a mediados de la década de los sesenta, sino que además introduciría un nuevo escalón en la jerarquía profesoral, la del Profesor Adjunto, todo ello junto a un abultado número de Profesores contratados, precaria y profusamente, ocupando las más variadas categorías (Catedráticos interinos, Adjuntos temporales, Adjuntos interinos, Encargados de curso, y Ayudantes, además de Colaboradores honorarios).

En cuanto a las fuentes utilizadas cabe señalar que este trabajo se concibe tan sólo como punto de partida de futuras investigaciones de archivo que permitan no solo ordenar sino estudiar en profundidad los ricos fondos existentes en los depósitos complutenses, por lo que pareció adecuado

comenzar por el análisis legislativo, es decir, el discurso del Estado a través la actividad normativa. En ese sentido se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de la legislación relativa a los aspectos anteriormente señalados, habiéndose analizado más de 130 disposiciones legales referidas a la materia.

Sin embargo, la legislación nos muestra sólo la iniciativa estatal, por lo que es necesario contextualizarla, analizando el momento en que surgen, el por qué de cada una de ellas y su grado de aplicación efectiva. Toda norma responde a una demanda, a una necesidad o a una voluntad particular, intervienen unos agentes concretos, y tiene unos receptores que la ejecutan o la reciben, por lo que no podemos abstraernos del contexto en que surgen. En muchos casos, como es el que nos ocupa, lo que se constata es que las normas, habitualmente, van muy a la zaga de las demandas o necesidades sociales, además de las académicas y/o científicas.

También se ha pretendido llevar a cabo una primera aproximación a la producción historiográfica sobre este aspecto. Al hablar de la historiografía existente para abordar el estudio de la Universidad en España durante el franquismo, y en particular en Madrid, hay que citar necesariamente algunos autores y obras ya clásicas, de las que no nos es posible prescindir. Entre las generales y más tempranas, las debidas a los hermanos Mariano y Jose Luis Peset, particularmente su *Historia de la Universidad española en los siglos XVIII y XIX* (1974). El primero de ellos, proveniente del mundo del Derecho, ha realizado numerosos estudios pormenorizados acerca de aspectos jurídicos determinantes en relación con la universidad liberal, en particular sobre los orígenes y desarrollo de la autonomía universitaria y el trabajo, también imprescindible para el tema que nos ocupa, sobre la Ley de Ordenación Universitaria de 1943. Hasta el momento, dicha norma apenas ha vuelto a ser estudiada en profundidad¹, y el estudio realizado por M. Peset sigue siendo un

¹ Aunque han sido numerosas las visiones generales: PARIS, Carlos: *La Universidad española actual: posibilidades y frustraciones*, Madrid, 1974 señala ya la pervivencia del modelo Moyano; FONTÁN, A.: *Los católicos y la Universidad española*, Madrid, 1961 señala como principal redactor de la ley al falangista Manuel Torres López; MONTORO ROMERO, R.: *La Universidad en la España de Franco (1939-1970) (Un análisis sociológico)*, Madrid, 1981; DE PUELLES BENÍTEZ, M.: *Educación e ideología...* ya citado; FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO PÉREZ, A.: “En torno a la idea de Universidad en la España de postguerra”, en *Educación superior y sociedad. Perspectivas históricas*, 2

claro referente. El propio autor sugiere que habría que superar su análisis literal ceñido al texto, teniendo en cuenta que tuvo una vigencia muy larga, más allá de la reforma de Lora Tamayo, llegando hasta 1970, para profundizar en su grado de aplicación y su capacidad de adaptación a lo largo del tiempo.

Por su parte José Luis Peset, junto a Elena Hernández Sandoica, dentro del proyecto de investigación, financiado por la Fundación Juan March a principios de los años ochenta, *Historia y actualidad de la Universidad española*, llevaron a cabo la elaboración de un marco teórico acerca de la universidad liberal y su proyección hasta nuestros días. La aproximación teórica a la Universidad madrileña a lo largo del siglo XIX y en particular al periodo 1868-1931 les lleva a identificar una lucha permanente entre las tendencias y elementos de modernización académica e incluso científica presentes en los movimientos reformistas que se propusieron mejorarla y la persistencia del tejido administrativo, burocrático, tradicional y arcaico en que se convirtió la inspiración napoleónica, que daría por resultado una estructura reticente a cualquier tipo de cambio procedente de las experiencias de los liberales moderados del s. XIX (Ley Pidal de 1845 y Ley Moyano de 1857). Interpretaciones que se pueden constatar básicamente en otras publicaciones posteriores de la misma autora: “Cambios y resistencias al cambio en la Universidad española (1875-1931)”; “Universidad y política en la España del siglo XIX. Madrid (1875-1898)” y “La Universidad de Madrid en el siglo XIX. Aproximación histórica”.

Las estructuras implantadas por los liberales derivaron en algunas de las prácticas más tradicionales de la Universidad y arraigaron de tal manera que muchas de ellas se han mantenido reconocibles hasta nuestros días, sostenidas en parte por un conformismo social generalizado respecto a la función cultural y el cultivo de la ciencia, y reproducidas gracias a un firme – aunque por lo general pasivo- consenso académico, en palabras de la profesora Sandoica. A ello se unía que la legislación reformista de los diferentes gobiernos liberal-progresistas (a veces más retórica que posibilista)

vols., Salamanca, 1985 o el propio LAÍN ENTRALGO, Pedro: *Descargo de conciencia (1930-1960)*, Madrid, 1976.

se vería continuamente contrarrestada por otra normativa subsiguiente, que simplemente anulaba a la anterior o reaccionaba fuertemente contra ella, de manera que a los intentos de cambio y actualización les seguirían constantes retrocesos. Así, las experiencias moderadas tendentes a destacar el centralismo, el exceso de burocratización y el dominio del Estado prevalecerían desde los planes de José Pidal (1845) y Claudio Moyano (1857) hasta prácticamente nuestros días –si entendemos por tales los años ochenta del siglo XX-. Los atisbos de cambio a que aspiraron a mediados de los años cincuenta los intentos de reforma del rector Laín Entralgo, y que se hubieran derivado en los años setenta de la legislación de Villar Palasí, terminaron finalmente en fracaso por unas u otras razones.

Los acontecimientos vividos por la universidad durante el periodo 1951-1956 supusieron un punto de inflexión en la interpretación del periodo franquista. Esos primeros intentos de reforma también han sido estudiados, entre otros autores, por E. Hernández Sandoica y J.L. Peset en diversos trabajos, entre ellos “Reforma desde el sistema y protagonismo estudiantil: la Universidad de Madrid en los años cincuenta”; “Universidad y oposición al franquismo. Reflexiones en torno a los sucesos de 1956 en Madrid”; “Laín en la Universidad de Madrid”. Desde el punto de vista de los procesos a que se sometieron los estudiantes, es imprescindible la recopilación efectuada por Roberto Mesa en *Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en Madrid*. El texto más completo, y que actualiza los estudios previos, es la obra colectiva (Hernández Sandoica, Ruiz Carnicer y Baldó) *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil* (2007), además de citar el muy reciente de Eduardo González Calleja (2009), para un periodo más amplio y con aspiración a cubrir un modelo teórico general. De todos ellos iremos proporcionando a lo largo de este trabajo valoración y usos diferentes.

De momento, haremos solamente un breve apunte de algunos de los textos citados más arriba. Los autores se centran en el momento inmediatamente anterior a los cambios introducidos por Laín y buscan explorar la respuesta ofrecida desde la Universidad. En ese sentido el rectorado de Laín

es entendido como un punto de inflexión desde dentro del propio sistema, en su doble naturaleza falangista y nacional-católica. Algunos de los puntos serían desplegados, en el caso de la profesora Hernández Sandoica, a través de trabajos de investigación de distintos niveles y naturaleza (tesis, tesinas y otros), sobre Historia de la Universidad, enmarcado en un proyecto de investigación llevado a cabo en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, razón por la cual este Departamento ha sido desde entonces un núcleo importante en cuanto a producción bibliográfica sobre la UCM.²

El hilo conductor de todas estas investigaciones es la ponderación del peso de la política en la universidad en los tres últimos siglos, dentro de un esquema dialéctico y pendular de cambio / resistencia al cambio o rupturas / continuidades. Pero también debemos citar a autores no pertenecientes a ese núcleo como Marc Baldó Lacomba, Manuel de Puelles Benítez, Juan Manuel Fernández Soria, etc. Redondea el conjunto el importante núcleo de estudiosos que aborda la historia de la Educación y la política educativa, no específicamente universitaria, pero en muchos aspectos relacionados con ella. Autores como Manuel de Puelles Benítez, Fernández Soria, Molero Pintado, Tiana Ferrer, etc. con abundante producción bibliográfica todos ellos.

Son numerosos también los estudios que desde la historia del franquismo han dedicado parte de su trabajo a la cultura, la educación, la universidad o determinadas instituciones académicas o universitarias durante el franquismo. Entre ellos, sin pretensión exhaustiva, podemos citar a Juan Pablo Fusi, Alicia Alted, Miguel Ángel Ruíz Carnicer, Marc Baldó o, más

² Véanse las memorias de licenciatura de RODRÍGUEZ FIERRO, A.: *Universidad y poder político: la Universidad de Madrid (1836-1945)*, Madrid, 1986 (microfichas); ALONSO GARCÍA, T.: *Entre el decreto y la realidad: la Universidad Literaria de Madrid en la época moderada (1845-1850)*, Madrid, 1986 (microfichas); GONZALO JIMÉNEZ, A.: *Vida académica y conflictos estudiantiles en la Universidad de Madrid en torno al asunto Morayta (1885)*, Madrid, 1986 (microfichas); RIVIÉRE, A.: *Filósofos y filosofías de la Historia en la Universidad Central, 1854-1868*, Madrid, 1989 (inédita) y las tesis doctorales de RIVIÉRE, A.: *Historia, historiadores e historiografía en la Universidad de Madrid (1845-1868)*, Madrid, 1992 (en parte publicada en RIVIÉRE, A.: *Orientalismo y nacionalismo español. Estudios árabes y hebreos en la Universidad de Madrid (1843-1868)*, Madrid, 2000); LAHUERTA, M^o Teresa: *Liberales y universitarios: la Universidad de Alcalá en el traslado a Madrid (1820-1837)*, Madrid, 1986. Todas ellas dirigidas por Elena Hernández Sandoica en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.

recientemente, Álvarez Cobelas. Del tercero de ellos, su estudio sobre el sindicato falangista universitario (SEU) es fundamental para entender el papel de control de dicha institución en la universidad del primer franquismo. Su estudio permite el conocimiento de las organizaciones estudiantiles fomentadas por el régimen. El SEU suponía un intento de llevar a cabo el control del aparato educativo como garantía de futuro del nuevo régimen. Se pretendía la cooptación de las clases dirigentes y la desmovilización de la clase obrera. Sin embargo, el fascismo fracasó en su proceso de fascistización, que no cuajó, mediante la instrumentalización del partido único. En España el fascismo se introdujo más que a través del partido único, a través de la Iglesia, la burocracia y el ejército. En este fascismo a la española, la Iglesia ganó la batalla a Falange, se trataba de un fascismo de estado, no de partido. Pero también dentro de la universidad se produjeron luchas internas entre Falange (estatismo y nacionalismo) e Iglesia (potestad espiritual). Reconoce Ruiz Carnicer que la preponderancia falangista en la universidad se dio más sobre el papel que en la realidad cotidiana, y constata y documenta la existencia frecuente de personalidades de doble militancia, católicos y falangistas, que acababan convirtiéndose en árbitros de la situación. Falange reclamaba su presencia en la universidad y logró situarse sólida y visiblemente a través del SEU, SEPES, Colegios Mayores del SEU, Instituto de Estudios Políticos, Instituto Balmes de Sociología del CSIC y la facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Por ello se puede hablar de “Universidad fascistizada”, entendiendo con ello la adaptación del esquema procedente de la antigua universidad liberal, trasnochada y plena de limitaciones, cubierto ahora del barniz azul de la parafernalia de posguerra, pero que seguiría produciendo muchas veces un tipo de ciencia y un tipo de relaciones institucionales y académicas ancladas en el pasado u orientadas, cuando se podía y mientras duró la situación, a los países del Eje.

Dedicadas a diseccionar los poderes del franquismo intervinientes en la universidad podríamos citar tanto la obra de López Médel *Ejército y Universidad* como la más general de Stanley Payne *Los militares y la política en la España contemporánea*; pero más interés tiene para nuestro objeto el texto de época de S. Montero Díaz *La ACN de P y la reconquista de la*

Universidad. En otro orden de cosas Fernández Soria, en *Educación, socialización y legitimación política (España 1931-1971)*, analiza el papel de Falange e Iglesia. Igualmente, Manuel de Puelles Benítez analiza el nacionalcatolicismo como fusión de religión y política, de manera especialmente acentuada en lo referido a la educación durante el franquismo. No podemos, sin embargo, detenernos ahora en reseñar toda la considerable historiografía existente, que analiza el papel de cada uno de esos elementos.

El franquismo, estudiado desde el prisma de los grupos de oposición al régimen, también ha producido un interesante aporte historiográfico a la historia de la universidad, por el papel determinante que tuvo ésta en los años finales del régimen. Desde ese punto de vista podemos citar desde algunas obras cercanas a los hechos, o que tienen valor testimonial, hasta las últimas y más recientes, producidas ya con un claro valor de aporte historiográfico. Entre los primeros, está el texto de David Jato *La rebelión de los estudiantes (Apuntes para una historia del alegre SEU)* de 1953; algunos artículos de Carlos París, reflexiones escritas en los años setenta, en primera persona, acerca de lo que supuso la oposición universitaria al franquismo; la obra de José María Maravall *Dictadura y disenso político...* de 1978; la de Pablo Lizcano, escrita desde la óptica periodística, *La generación del 56. La Universidad contra Franco...* fechada en 1981, o la introducción de Roberto Mesa a “Jaraneros y alborotadores...”, ya citada, sobre los sucesos de 1956, una importante aportación documental –como dijimos- publicado en 1982. Entre el segundo grupo podemos señalar la obra de Álvarez Cobelas *Envenenados de cuerpo y alma* del año 2004; las varias obras de Marc Baldó sobre el antifranquismo en la Universidad; la de Fernández Buey “Estudiantes y profesores universitarios contra Franco”; *Disidencia y subversión...* de Pere Ysàs, publicado en 2004; la obra colectiva de Elena Hernández Sandoica, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Marc Baldó Lacomba *Estudiantes contra Franco...* de 2007, o la más reciente *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil...* de Eduardo González Calleja, publicada en 2009, así como otras publicaciones de los autores sobre el tema.

Va siendo creciente la producción historiográfica dedicada a las diferentes universidades del Estado. Para la Universidad de Madrid podemos decir que son numerosos los trabajos referidos al siglo XIX e incluso al primer tercio del XX, pero más escasos los dedicados a los años 40 hasta nuestros días. Entre los existentes, de nuevo hay que citar a Elena Hernández Sandoica y José Luis Peset, que han estudiado específicamente el tránsito de la primera universidad liberal de Alcalá de Henares a la de Madrid. Los problemas que abordan en estos estudios hallan su trasunto, igualmente, al estudiar la época del rector Laín, y lo mismo hace Carolina Rodríguez López en su tesis doctoral, y aún más recientemente en otros trabajos, cuando ha abordado –para el Madrid de los años cuarenta-, el rectorado de Pío Zabala. Desde el punto de vista de esos autores, se trataba de una universidad mediocre, anodina, falta de modernidad, de clara atonía en el profesorado, marcada por una persistente penuria económica, falta de medios, de escasa voluntad transformadora (en el sentido de emprendimiento científico y social) y, al fin y al cabo, carente de un verdadero apoyo e interés por parte del Estado –que sin embargo la necesita como cantera de profesiones liberales y funcionariado, destinado a cubrir las ramas de la Administración-.

Curiosamente, son críticas que emergieron de los textos regeneracionistas a fines del siglo XIX y principios del XX, que están en el origen igualmente del esfuerzo que implican la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para la Ampliación de Estudios, y que se reproducen casi prácticamente similares en las quejas emitidas por los propios falangistas a finales de los años cuarenta, señalando esta vez condenatoriamente el escaso esfuerzo estatal por vincular a la universidad con Falange, más allá del mero terreno discursivo. En su retórica se alberga, trepidante, un reclamo constante –difícilmente creíble muchas veces- por obtener mejoras en investigación, una mayor especialización y la legitimación profesional.

Por lo demás, hay que señalar que, aunque cada vez van apareciendo más estudios sobre las diferentes universidades españolas, estaría pendiente llevar a cabo un estudio comparado acerca de cuál fue la recepción de las diversas normativas en cada una de ellas y como se vivió ese clima de

conflictividad, especialmente en lo que se refiere a los inicios de las dos universidades autónomas, la de Madrid y la de Barcelona, en contraste con las ya existentes. alguna monografía reciente permite, sin embargo, aportaciones muy esclarecedoras al respecto. Entre los estudios específicos más interesantes podemos señalar los de Ruiz Carnicer dedicados a la Universidad de Zaragoza; de María Fernanda Mancebo Alonso para el caso de Valencia; de Alberto Carrillo Linares para la Universidad de Sevilla; de Espuny i Espuny para el movimiento estudiantil en Barcelona; de Ricardo Gurriarán Rodríguez para la Universidad de Santiago o de Jesús María Palomares Ibáñez para la de Valladolid.

Los estudios sobre aspectos jurídicos en relación con la universidad son muy variados, y están centrados en un concepto jurídico-administrativo concreto, como puede ser la autonomía universitaria, o bien específicamente sobre una ley, un marco de opinión o reflexión acerca de la repercusión de una determinada norma, o tratarse, finalmente, de estudios en profundidad sobre un proceso legislativo. Entre ellos están, una vez más, los debidos a Mariano Peset y a María Fernanda Mancebo sobre la autonomía universitaria y sobre la Ley de 1943, así como la memoria de licenciatura de González Roldán *El proceso legislativo de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943*. Para llevar a cabo nuestro trabajo también nos ha sido muy útil el repertorio legislativo recopilado por Carolina Rodríguez López y Manuel Martínez Neira dedicado al periodo 1889-1939. Entre los artículos de opinión o escritos varios, desde el punto de vista de los profesionales de la educación, están los debidos a Carlos Berzosa *La Ley de Reforma universitaria y la política educativa*; José Gimeno Blat “Apuntes sobre la elaboración de la reforma educativa de 1968-70”; Puelles Benítez, muy diversos e interesantes; José Luis Fernández Cantos *Ley general de educación: espíritu y realidad de la reforma educativa española*; Martínez Tirado *Principios básicos y configuración del sistema educativo en la Ley General de Educación*; Jordi Monés i Pujol-Busquets *La Ley General de Educación de 1970*; Navarro Sandalinas *La Ley Villar y la formación del profesorado*, o Alejandro Tiana Ferrer *La Ley General de Educación veinte años después*, por citar solo algunos.

La depuración inmediata del profesorado al final de la guerra –un tema de cultivo más reciente, ligado al asunto de la memoria histórica- ha sido abordada por autores como Jaime Claret Miranda en *El atroz desmoche*; la obra colectiva *La destrucción de la ciencia en España*, dirigida por Luis Enrique Otero Carvajal, entre otros. María Fernanda Mancebo Alonso también lo estudió para el caso de Valencia y asimismo lo hizo en su tesis doctoral González Roldán. Con todo, éste es un tema aún falto de estudios pormenorizados para todas las universidades.

Finalmente, pero en ningún modo en último lugar, resultan fundamentales -y absolutamente necesarios también-, los trabajos realizados por los profesionales de archivos, en los que se dan a conocer a los posibles investigadores los fondos custodiados en esas instituciones. En este caso, resultan de directo interés los artículos publicados por Isabel Palomera Parra, Carlos Flores Varela, Mercedes Pérez, Ana Rocasolano y otros archiveros, sobre los fondos custodiados en el Archivo General de la Universidad Complutense, imprescindibles para conocer la documentación existente no sólo para estudiar la historia de la institución, sino también la evolución de las disciplinas en ella impartidas, los docentes y alumnos que en ella han estudiado y que en muchos casos son personajes relevantes de diferentes ámbitos de la cultura, la ciencia, la política..., además de determinados periodos históricos en los que la universidad ha tenido un papel relevante, etc. En definitiva, un panorama extraordinariamente amplio de posibilidades para fondos documentales que, sin embargo, por desconocimiento de su existencia y secular falta de organización y difusión durante un largo tiempo, en muchas ocasiones permanecen ignotos.

Como colofón, no por ello menos relevante, reseñamos las memorias y reflexiones realizadas por los protagonistas de los hechos y que son coetáneas a ellos, pues nos aportan el punto de vista de los agentes directamente implicados. A su través podemos analizar las diferentes personalidades y sensibilidades respecto al conflicto universitario, fundamentalmente. Pero no solo eso. Algunas de las memorias recogidas en este trabajo para una mejor comprensión de los presupuestos ideológicos que dieron origen a la Ley de

Ordenación Universitaria de 1943 son las de Manuel García Morente, Ernesto Giménez Caballero, Enrique Herrera Oria, Ramiro de Maeztu, José Pemartín o las del primer ministro de educación del franquismo, Pedro Sáinz Rodríguez. Para épocas posteriores son de interés las de Laín Entralgo, *Descargo de conciencia (1930-1960)* de 1976, o las de Ricardo Díaz Hochleitner “*La reforma educativa de la LGE de 1970: datos para una crónica*”, siendo el autor uno de los inspiradores de la citada ley. Pero sin duda serían muchas las que se podrían citar y cuyo estudio sería fundamental para una comprensión cabal de muchas de las prácticas académicas, y no solo naturalmente –tal y como viene repitiéndose usualmente- del movimiento estudiantil de los años sesenta y setenta.

Queremos insistir, en ese sentido de mejorar las interpretaciones, en otras fuentes que, por su riqueza e interés, deberían ser consultadas en futuros trabajos de investigación. Entre las fuentes archivísticas, de archivos tanto públicos como privados, para la Universidad de Madrid hemos de destacar el Archivo General de la UCM, que a pesar de la riqueza de sus fondos es escasamente conocido y ha sido poco explotado. En él se puede consultar la documentación producida por los órganos de gobierno y administrativos de la Universidad (Rectorado, Secretaría General, Decanatos, secretarías de alumnos, etc.), además de otro tipo de documentos informativos como pueden ser las Memorias, Anuarios y Guías de curso de la propia Universidad, que aunque de manera más desestructurada a veces nos facilitan información difícilmente asequible por otros medios.

Otro núcleo fundamental lo constituyen los archivos producidos por las principales instituciones educativas, como el Archivo Central del Ministerio de Educación y el Archivo General de la Administración (AGA), en Alcalá de Henares; el archivo del CSIC y el Centro de Información y Documentación de Educación (CIDE) que contiene valiosa información en relación con temas educativos de todo tipo. También los archivos y colecciones documentales particulares resultan de extraordinaria importancia, sobre todo para el estudio del movimiento estudiantil y de los grupos políticos intervinientes en la clandestinidad (algunos de ellos han sido utilizados en la obra *Estudiantes*

contra Franco, principalmente por la profesora Hernández Sandoica, o en el libro de Ricardo Gurriarán sobre Santiago de Compostela, constituyendo un importante aporte documental). Como ya se dijo anteriormente, es fundamental la lectura de las biografías y autobiografías de los protagonistas, así como la recopilación de fuentes orales de los testigos de primera mano. Finalmente, otras fuentes de interés son, cómo no, las hemerográficas y audiovisuales, siempre teniendo en cuenta su limitación o censura en épocas de dictadura.

En definitiva, inscribimos nuestro estudio –como hemos dicho básicamente atento al seguimiento normativo, imprescindible a nuestro juicio para una correcta ordenación documental- en una línea de investigación relativamente madura y floreciente, pero a la vez abierta a numerosos interrogantes que aún están pendientes de contestación.

II.1. LA INMEDIATA POSGUERRA Y LOS ANTECEDENTES DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Para el análisis de este primer momento, nos hemos basado fundamentalmente, en dos referentes: la obra, ya clásica, de Mariano y José Luis Peset, fundamental para el estudio de la evolución histórica de la Universidad en España³ y en concreto el estudio de Mariano Peset para todo lo referente a la Ley de Ordenación Universitaria⁴, y la obra de conjunto de José Luis Peset y Elena Hernández Sandoica en sus aspectos más teóricos⁵. Específicamente, para este primer periodo de posguerra en la Universidad de Madrid, se ha consultado el estudio de Carolina Rodríguez López dedicado al rectorado de Pío Zabala⁶. Para este apartado y para todo el trabajo en general, se han tenido como referencia en lo relativo a las fuentes documentales existentes en el AGUM los artículos elaborados por sus archiveros, Carlos Flores, Isabel Palomera, Mercedes Pérez Montes y Ana Rocasolano, entre otros.⁷

³ PESET, M. y J. L.: *La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*, Madrid, 1974. También han sido numerosos los artículos dedicados por estos autores a la autonomía universitaria: PESET, Mariano: "Los orígenes de la autonomía universitaria y el proyecto de García Alix de 1901", en J. L. Guereña y E. M. Fell (Eds.), *L'Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Âge à nos jours. II. Enjeux, contenus et images*, Tours, 1998; PESET, M. y MANCEBO, M^a Fernanda: "Un intento de autonomía universitaria: el fracaso de la reforma Silió de 1919", en *Homenaje a Juan Vallet de Goytisolo*, Madrid, 1988, tomo VI y PESET, M.: "La autonomía de las universidades", en J.L. Peset y otros, *Pasado, presente y futuro de la Universidad española*, Madrid, 1985.

⁴ PESET, M.: "La Ley de Ordenación Universitaria de 1943", en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991.

⁵ De los autores HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET, José Luis: *Universidad, poder académico y cambio social*. Consejo de Universidades, Madrid, 1990 y "Cambios y resistencias al cambio en la Universidad española (1875-1931)", en José Luís García Delgado (Ed.): *España entre dos siglos (1875-1931): continuidad y cambio*, VII Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Vol. 1, Madrid, 1988.

⁶ RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: *La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-1951)*, Dykinson, Madrid, 2002.

⁷ Véase PALOMERA PARRA, Isabel y otros: "La Documentación del Archivo General de la Universidad Complutense: Testimonio y Memoria de los Conflictos en la Universidad Española", *Actas de las IV Jornadas Archivo y Memoria. La memoria de los conflictos: legados documentales para la Historia*. CSIC y FFE (Fundación de los Ferrocarriles Españoles). Publicado en CD. Madrid, 2009; FLORES VARELA, Carlos y PALOMERA PARRA, Isabel: "La Documentación del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid en el Período Interrepublicano", *España entre Repúblicas 1868-1939*. Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha, 2007; FLORES VARELA, Carlos y PÉREZ MONTES, Mercedes: "El Fondo Documental de la Antigua Escuela de Veterinaria de Madrid (1792/1943)", *Boletín Informativo* (Sistema Archivístico de la Defensa): Ministerio de Defensa. Madrid, 2007; FLORES VARELA, Carlos: "El Archivo General de la Universidad Complutense: punto de inflexión" en, José Ramón Cruz Mundet (ed.): *Archivos Universitarios e Historia de las Universidades*,

En cuanto a la educación en los tiempos de la guerra, en los primeros años de contienda, la enseñanza universitaria no fue una preocupación fundamental para el bando de los sublevados ya que los posibles alumnos se encontraban en el frente y las aulas estaban cerradas.⁸ Una vez finalizada la lucha, el régimen, basándose en su experiencia previa a la guerra, se servía de los estudiantes como simple objeto de movilización, siendo convocados a las concentraciones que organizaba Falange⁹ o decretando la unificación de todos los escolares en el Sindicato Español Universitario (SEU).

No obstante, la enseñanza en general concitó bastante interés desde un principio, había que apresurarse en desmontar la obra republicana. El mayor interés se dedicó a la educación primaria y secundaria, que revestían mayor urgencia.¹⁰ Desde el mismo septiembre del 36, los sublevados promulgaron normas que suprimían la coeducación, se disponía que cada semana se impartiera una conferencia sobre cultura religiosa y se introducía la enseñanza de los idiomas italiano y portugués.

Las disposiciones relativas al nivel universitario, por su parte, aun siendo de carácter parcial, fueron anunciando las líneas que se seguirían más tarde. Progresivamente, se fue otorgando más y más poder a los Rectores como

UCIII, Madrid 2003; PALOMERA PARRA, Isabel y PÉREZ MONTES, Mercedes: "La Universidad de Madrid en la Guerra Civil: Fuentes Documentales del Archivo General de la Universidad Complutense". Congreso Internacional "La Guerra Civil Española". Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006 y PALOMERA PARRA, Isabel: "La organización académica y administrativa de la Facultad: legislación y fuentes documentales", en *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República: Arquitectura y Universidad durante los años 30*, Santiago López-Ríos Moreno y Juan Antonio González Cárcelos (Coord.), Madrid, 2008.

8 Véase el propio PESET, M.: "La Ley de Ordenación Universitaria... citada más arriba, FERNÁNDEZ SORIA, J. M.: Educación y cultura en la guerra civil (España 1936-1939). Valencia, 1984; FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO, A.: *Vencer y convencer. Educación y política. España 1936-1945*. Valencia, 1993; MOLERO PINTADO, A. (ed.): "La educación durante la segunda República y la Guerra Civil (1931-1939)", *Historia de la Educación en España*, tomo IV, Madrid, 1991.

9 Por ejemplo en Burgos el 12 de octubre de 1937, ante Franco y Sainz Rodríguez, entonces Delegado Nacional de Falange y tras la guerra, primer Ministro de Educación. Véase ALTED VIGIL, Alicia: "Notas para la configuración y el análisis de la política cultural del franquismo en sus comienzos: la labor del Ministerio de Educación Nacional durante la guerra", en J. Fontana (Ed.), *España bajo el franquismo*, Barcelona, 1986; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*. S. XXI, Madrid, 1996; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: "El despertar del movimiento estudiantil en España (1900-1939)" en *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil*. La esfera, Madrid, 2007 y FERNÁNDEZ SORIA, J. M.: *Educación, socialización y legitimación política (España, 1931-1970)*, Valencia, 1998.

10 Véase: ALTED VIGIL, Alicia: *Política del nuevo estado. Sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil*. Madrid, 1984; FERNÁNDEZ SORIA, J. M.: *Educación y cultura...*

anticipo a lo que sería recogido en la Ley de 1943.¹¹ Desde ese puesto, en su labor inspectora, los rectores llegaban a controlar y vigilar incluso, como sucedía en la decimonónica Ley Moyano, la enseñanza primaria y las secciones administrativas que quedaban bajo la dependencia directa de los respectivos rectorados.¹²

En plena guerra ya, se decidió el cese de las clases en el nivel superior. Decía el legislador que *“la mayor parte de los escolares de los Centros Universitarios y de Enseñanza superior, en acendrado patriotismo, están luchando en los diversos frentes, ya como soldados voluntarios o forzosos, bien adscritos a las milicias militarizadas (Falanges, Requetés, etc.) que con el ejército coadyuvan a la salvación de España”*. Por eso *“los que no hacen esto o se hallan emboscados o luchan en contra, y ni los unos ni los otros merecen que las enseñanzas superiores se reanuden, con perjuicio de los que derraman su sangre generosa por la verdadera España”*. En compensación, la Orden de 11 de agosto de 1936¹³, establecía que, *“con el fin de evitar que los escolares que estuvieran en el frente resultaran perjudicados ante el comienzo de los cursos preparatorios, las matrículas, exámenes, convocatorias de exámenes de ingreso y fin de curso, se verificarían sin plazo de terminación”* (...) *“Tan pronto como fuera posible, se concederían convocatorias extraordinarias de exámenes de los escolares que por prestar servicios a la Patria no hubieran podido realizar estas pruebas”*.

Ya en septiembre del 36 se confería a los Rectores la capacidad de valorar, junto con los Decanos, la conducta de los maestros de enseñanza primaria, de los de los niveles secundario y profesional y se les encargaba recibir de las autoridades militares los informes sobre personal docente universitario para así elaborar las relaciones de personal de cada centro.¹⁴

¹¹ Así el Rector, como jefe del Distrito, había de confeccionar la relación de las vacantes producidas por ausencias no justificadas, defunciones, desapariciones o suspensiones por comportamientos desfavorables.

¹² Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España –BOJDNE- nº 13, de 29 de agosto de 1936.

¹³ Publicada en el BOJDNE, nº 6, de 14 de agosto.

¹⁴ El profesorado universitario, según norma de la Junta de Defensa Nacional, debía presentarse en sus destinos el 15 de septiembre. Los que no lo hicieran debían acreditar la imposibilidad de efectuarlo. Durante ese mismo mes de septiembre el personal de enseñanza superior debía presentar sus plan de

La Orden de 4 de enero de 1937, emitida por la Junta Técnica, regulaba el modo en que Catedráticos, Auxiliares y Ayudantes de Universidad habían de prestar sus servicios durante la guerra. Quedaban obligados a ofrecer sus conocimientos y su esfuerzo en trabajos de investigación, conferencias y labores especializadas al servicio del Ejército, como auxiliares. Entre las actividades de que se ocuparían estaba la organización de cursos de divulgación, preparación de materias especiales, extensión del conocimiento, cursos para extranjeros, etc. El objetivo era impulsar la “cultura nacional”. Los cursos serían de asistencia libre y gratuita y se realizarían en las Universidades de la zona nacional bajo la advocación de Menéndez Pelayo.

La Universidad también colaboraba en la censura de libros. Así, en cada Distrito, se crearon comisiones depuradoras, una vez más presididas por el Rector, que se encargaban de retirar de las bibliotecas todo el material considerado contrario a los nuevos principios.¹⁵

Las primeras reformas de cierta relevancia se dieron en 1938. En el mes de enero quedó formado el primer gobierno, con lo que quedaba establecido el reparto de poder entre los diferentes grupos participantes en la contienda. La fuerte presencia de la Iglesia determinaba un Nuevo Estado conservador y tradicional y, en compensación al apoyo prestado al levantamiento, se reservó para sí la educación. Los monárquicos de Acción Española, con Pedro Sainz Rodríguez a la cabeza, se encargaron del Ministerio de Educación Nacional en tanto que Falange, sería la encargada de proporcionar aires de totalitarismo, marcialidad y disciplina, siguiendo la tónica vigente en la Europa fascista previa a la II Guerra Mundial. Se reservó, pues, el poder sobre los medios de comunicación y propaganda desde el Ministerio de Interior y su Servicio de Prensa y Propaganda.

trabajo que más tarde sería o no aprobado por una Junta formada por el Rector, los Decanos de las Facultades y Directores de los Centros Superiores”. Véase BOJDNE nº 24 de 19 de septiembre de 1936.

¹⁵ Para la función normativa en cuanto a bibliotecas véase ESCOLAR, H.: *La cultura durante la guerra civil*, Madrid, 1987 y *Biblioteca en Guerra*. Biblioteca Nacional. Madrid, 2005.

El 23 de septiembre de 1938 se promulgó la Ley de Bases que regulaba el Bachillerato universitario¹⁶, la única de calado de las emitidas durante la guerra en materia educativa. Los estudios de Bachillerato se concebían exclusivamente como preparación a los estudios universitarios, lo mismo que en el siglo XIX, convirtiéndose en instrumento para la selección de las nuevas élites, procedentes de grupos minoritarios de clase media y de las burguesías locales, quienes desde el inicio se habían identificado con el Nuevo Estado.

Su redacción en forma de Ley de Bases permitía gran discrecionalidad en su aplicación, y por lo tanto, un alto grado de control efectivo por parte del Estado. Sin embargo el Bachillerato, a diferencia de lo que sucedería con la educación superior, no quedaba totalmente sujeto al monopolio del Estado, sino que se abría la posibilidad de crear establecimientos privados, fundamentalmente de carácter religioso.

Del mismo modo, desde esos primeros momentos se puso de manifiesto la intención de llevar a cabo una reforma universitaria, tanto que el mismo día que se promulgaba la ley reguladora de los estudios de bachillerato, una Orden ministerial establecía la creación de una comisión, integrada por Catedráticos de Universidad (presidida por Pio Zabala (Rector de Madrid) e integrada por Inocencio Jiménez y Vicente (catedrático de Zaragoza), Ciriaco Pérez Bustamante (Santiago), Emilio Jimeno Gil (Barcelona) y Juan José López Ibor (Madrid), con el objetivo de estudiar y ofrecer propuestas para la reorganización de la vida universitaria, que serían valoradas posteriormente por el Ministerio, entre otras, establecer el Examen de Estado.¹⁷

En unos meses se redactaría un anteproyecto de ley que decía pretender, como ya hiciera Primo de Rivera y su ministro Callejo, instaurar la autonomía universitaria –avanzada por César Silió desde el Ministerio de

¹⁶ Ley de 20 de septiembre de 1938 sobre Reforma de la Enseñanza Media (BOE 23)

¹⁷ No obstante, en sus memorias Sainz Rodríguez se atribuye a sí mismo la redacción del proyecto, quien a sabiendas de la fecha en que habría de abandonar el Ministerio (fue cesado el 29 de abril de 1939), lo habría dejado presentado con el objeto de que se iniciase un periodo de información pública en todos los centros. Véase SÁINZ RODRÍGUEZ, P.: *Testimonio y recuerdos*, Barcelona, 1978.

Instrucción Pública.¹⁸ Pero lejos de ello, lo que se perseguía en realidad era establecer un control rígido de las universidades, de sus alumnos y profesores, al igual que el fracasado plan Callejo. De la autonomía sólo quedaría el nombre.¹⁹

Desde las instancias ministeriales, pero sobre todo desde las filas falangistas, sin embargo, pretendía imponerse un modelo universitario de nueva planta, totalitario en sus comportamientos, de signo imperial y antiliberal, y más allá de este remake católico del pasado liberal, la Universidad (a diferencia de otros niveles educativos como el bachillerato) debía convertirse en una institución diseñada a la medida del nuevo Estado. En ese sentido hablarían de *proyecto de reforma*, con todas las reservas en cuanto a sus consecuciones en esa hora.

Los estudios de Mariano Peset y Carolina Rodríguez abundan en información en cuanto a la reflexión teórica que sustentaba el ideal de Universidad franquista. En ese contexto, la Universidad de Madrid, la Central, ocuparía un lugar destacado como campo de experimentación de las “nuevas” tendencias fascistoides, experimento que sin embargo a la larga resultaría frustrado, prevaleciendo tradiciones, problemas y protagonistas procedentes de tiempos y circunstancias pasados que tanto interna como socialmente aún tenían mucho peso.²⁰

En cualquier caso, si no se logró una reforma efectiva y radical, lo que sí se perseguía y se consiguió fue el desmantelamiento de la experiencia universitaria republicana, y en particular de lo que había supuesto la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Se consiguió tanto en el aspecto físico como consecuencia de la destrucción material provocada por la propia contienda

¹⁸ Decreto de 19 de mayo de 1921.

¹⁹ Véase PESET, M.: “La autonomía de las universidades” y M. F. MANCEBO y PESET, M.: “Un intento de autonomía universitaria...” ambas citadas anteriormente.

²⁰ Para la dialéctica cambio/resistencia al cambio, téngase como referencia la obra de HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Cambios y resistencias al cambio en la Universidad española (1875-1931)” y de la misma autora y PESET, José Luis: *Universidad, poder académico y cambio social*, cit.

bélica, como en el personal mediante la depuración de sus docentes,²¹ y en el ideológico, en cuanto al contenido de sus enseñanzas.

El procedimiento legislativo para la redacción de la Ley de Ordenación Universitaria tuvo un desarrollo sumamente prolijo que se prolongó desde 1939 hasta 1943 y que pasó de la ambiciosa pretendida *Ley de Reforma*, como quería Falange, a la más “simple” *Ley de Ordenación*.²²

El Proyecto de Ley de Reforma universitaria de 1939 tuvo una primera fase de discusión en la Universidad. El primer paso, como se dijo más arriba, fue la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Proyecto de Ley de Reforma universitaria en abril del 39, para su informe por los Claustros universitarios²³. En la propuesta ministerial se disponía la apertura de un periodo de información de “diez días” para que esos Claustros universitarios, Doctores y Licenciados de los correspondientes Distritos pudieran remitir al Ministerio, por conducto de los Rectorados, las observaciones que estimaran oportunas.

Sin embargo, los cambios habidos en el Ministerio como consecuencia del cese de Sáinz Rodríguez²⁴ justo el mismo día en que aparecía publicado el proyecto de ley en el BOE, hicieron que hasta que no se hubo producido el

²¹ Para el estudio de la depuración de docentes en la Universidad española véanse entre otros MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: “Depuración de profesores en la Universidad de Valencia”, en *La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1939-1975)*, coord. por Josefina Cuesta Bustillo, 2009; MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: “Consecuencias de la guerra civil en la Universidad valenciana: depuraciones y exilios”, en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, N^o 4, 2001 y “Profesores universitarios en el exilio”, en *Cuadernos republicanos*, n^o 54, 2004. GONZÁLEZ ROLDÁN, G.: *El nacimiento de la universidad franquista. La depuración republicana y franquista de los catedráticos de universidad*. Tesis doctoral, UNED, Madrid, 2000; CLARET MIRANDA, Jaime: *El atroz desmoche*. Crítica, Barcelona, 2006; OTERO CARVAJAL, Luís Enrique (dir.): *La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo*. Editorial Complutense, Madrid, 2006, además de otros textos mas concretos y pertinentes sobre los catedráticos en cuestión.

²² Tanto el debate previo, como el proceso legislativo pueden ser seguidos pormenorizadamente en la obra de RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: *La Universidad de Madrid...*, citada anteriormente y en GONZÁLEZ ROLDÁN, G.: *El proceso legislativo de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943 (1939-1943)*, Madrid, UNED, 1985, 2 vols. (Dir. Javier Tusell)

²³ Orden de 25 de abril de 1939, disponiendo la publicación del Proyecto de Ley de Reforma universitaria para informe de los claustros universitarios, publicada en el BOE de 27 de abril (justo el mismo día del cese del ministro que la firmaba).

²⁴ Cese de Sainz Rodríguez por el Decreto de 27 de abril del 39 (BOE 28)

nombramiento de Ibáñez Martín²⁵, no se retomara la actividad reformadora del Ministerio. Así, desde la Dirección General de Enseñanza Superior y Media, se remitió a través de los rectores, la Orden Circular de 9 de marzo de 1940 para recordar el cumplimiento de la disposición del 39²⁶, con lo que el inicio efectivo en el intercambio de opiniones no tuvo lugar hasta abril de 1940.

Al igual que sucediera con la Ley de reforma del Bachillerato, este Proyecto también se redactó inicialmente en forma de Ley de Bases, con ocho directrices generales y cuatro artículos, siendo el primero de ellos el que recogía las catorce bases. En las directrices se recuperaban el ideal de “hispanidad”, el concepto de tradición y la idea de formación patriótica y moral inspirada en el sentido religioso. Se confirmaba el espíritu de normas anteriores a la guerra²⁷, particularmente del Decreto de 1924, en lo relativo al reconocimiento de la personalidad jurídica de las Universidades, pero siempre bajo la estrecha tutela del Estado. Se afianzaba el principio de autoridad de la Universidad, se planteaba un cambio radical en cuanto a los métodos de formación y selección del profesorado universitario y se establecía el examen de Estado como requisito para la obtención del título profesional correspondiente. Finalmente, el proyecto proponía una reducción de Centros y/o Facultades de manera que facilitara el reducir la dotación económica.

El artículo primero, como dijimos, agrupaba las catorce bases. La base I recogía la idea de Universidad como organismo rector de la Cultura educativa, apoyada en el Consejo de Distrito y en el Consejo Superior Universitario como órgano asesor y de coordinación.

²⁵ Por Decreto de 9 de agosto de 1939 (BOE 11)

²⁶ Según consta en AGUCM. Secretaría General, Caja 2, consistente en un cuestionario de diez puntos, para su cumplimentación y remisión en el plazo de 40 días.

²⁷ Concretamente el Decreto de 9 de junio de 1924 y el Real Decreto-Ley de 19 de mayo de 1928 sobre reforma universitaria, reformas ambas bajo la dictadura de Primo de Rivera, en las que la autonomía universitaria aparecía más seriamente recortada. La Universidad tenía carácter de corporación de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar. Así podía adquirir bienes, poseerlos y administrarlos, pero siempre con la autorización del Ministerio, al que debía dar cuenta en todo caso. Es decir, recuperaba la idea del plan Silió (Decreto de 21 de mayo de 1919), pero sin autonomía. Véase PESET, M.: “La autonomía en las universidades” cit.

La base II establecía la consideración de la Universidad como persona jurídica y organismo oficial, con capacidad de actuación, pero siempre tutelada por el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional. La Base III establecía el carácter, estructura y fines de la Universidad, su doble carácter de Centro de investigación y alta Cultura y de Escuela profesional. Integrada por las Facultades, Institutos, Escuelas, Colegios y Centros Oficiales ya existentes y los que pudieran crearse.

Como fines se recogían el desarrollo de los ideales de Hispanidad y el “sentido tradicional y católico de nuestro pensamiento imperial”; la necesidad de promover una cultura propia y original; la utilización de métodos de investigación especializados y la instrucción y educación profesional de los alumnos. Para facilitar esos fines, la Universidad debería organizar servicios benéfico-docentes, de patronato y protección escolar, Colegios Mayores, residencias, campos de deporte, etc. y debería establecer como obligatorio para los alumnos el Libro Escolar.

De la Base IV a la VII se recogían los aspectos relativos a la administración y gobierno de la Universidad y su distrito. Los órganos unipersonales de Gobierno serían el Rector, Jefe superior de la Universidad y su demarcación y representante del Gobierno, por el que es nombrado y el Vicerrector, designado por el Ministerio. Los órganos colectivos de gobierno son a su vez, el Consejo de Distrito (formado por Rector, Vicerrector y Decanos, Vocales representantes de Centros docentes y representación de la jerarquía eclesiástica); el Claustro ordinario (constituido por Catedráticos numerarios, jubilados y excedentes no voluntarios y Profesores adjuntos), convocado por el Rector y siempre que lo dispongan los Reglamentos; la Comisión Ejecutiva (Rector, Vicerrector, Decanos, un Catedrático por cada Facultad, designado por su Decano y un Secretario (el de la Universidad), que actuará como Comisión permanente del Claustro y regirá la vida económico-administrativa de la Universidad y será el Consejo del Rector; la Junta Económica de la Comisión Ejecutiva (compuesta por el Rector y dos Vocales nombrados por la Comisión Ejecutiva entre Catedráticos y Profesores adjuntos que actuarán como Administrador e Interventor); la Junta de Facultad, formada

exclusivamente por Catedráticos numerarios y Profesores adjuntos. Los Auxiliares numerarios y temporales tendrían voz, pero no voto, en tanto que el Claustro extraordinario estaría integrado por Catedráticos numerarios, jubilados y excedentes, Profesores adjuntos, Directores de establecimientos oficiales de Enseñanza del distrito universitario y todos los Doctores matriculados.²⁸

La Universidad en sentido lato estaría formada por autoridades, funcionarios y subalternos de la Universidad. De arriba abajo, el Rector (nombrado por el Gobierno entre Catedráticos numerarios, representante en la Universidad y en todos los establecimientos de Educación del Distrito); el Vicerrector (Catedrático nombrado por el Ministerio que sustituye al Rector); los Decanos (Presidentes de las Facultades. Nombrados por el Ministerio entre Catedráticos, a propuesta del Rector); el Secretario General (cargo provisto por el Ministerio, a propuesta de la Comisión Ejecutiva y que recaerá en un Catedrático numerario, Profesor adjunto o Auxiliar); Secretario de Facultad (designado por el Decano de entre sus Catedráticos, Profesores adjuntos o Auxiliares, nombrado por el Rector); los Servicios burocráticos (personal administrativo del Cuerpo General de Funcionarios Técnicos del Ministerio de Educación Nacional y que, en caso de necesidad, la Comisión Ejecutiva podrá nombrar Auxiliares complementarios de carácter temporal con cargo a la Hacienda de la Universidad); Servicios subalternos (prestados por el Cuerpo de bedeles y mozos de Laboratorio, remunerado, nombrado y reglamentado por la propia Universidad).

La base VII, por su parte, recogía el régimen económico-administrativo de la Universidad que se regiría por dos Reglamentos: uno administrativo y otro económico. El Reglamento económico incluía los necesarios apartados de ingresos y gastos. Los Ingresos de la Universidad consistían en subvenciones

²⁸ Como queda recogido en el proyecto, son doctores matriculados los que desempeñan función docente en la Universidad; los que hayan acreditado notoriamente su vocación científica por publicaciones y/o trabajos de investigación de mérito sobresaliente; los que hayan acreditado su interés por la Universidad mediante donativos o servicios prestados a la misma; los Doctores sin misión docente a los que el Claustro ordinario otorgue el ingreso en el Claustro Extraordinario; los Doctores “honoris causa” de la Universidad que les hubiere elegido y las personas o representantes de las Corporaciones a quienes el Claustro Ordinario confiera este derecho en consideración a pruebas relevantes de su amor a la Institución universitaria.

del Estado; subvenciones de Corporaciones públicas; subvenciones, donativos y legados de particulares; ingresos propios en metálico (el 50% del importe de las matrículas); intereses de su capital y abintestatos. Los Gastos de la Universidad eran a su vez, los ocasionados por servicios de carácter general; los consignados en los Presupuestos internos de Facultades e Institutos especiales y las capitalizaciones.

Las Facultades tendrían su propio régimen económico, formado por los Ingresos provenientes de las consignaciones del presupuesto de la Universidad y los procedentes de legados, fundaciones o bienes propios. Los Gastos serían los acordados por las Juntas de profesores.

La Comisión Ejecutiva formaría el Presupuesto de la Universidad, que habría de contar con informe favorable del Claustro ordinario. Aprobado éste, las Facultades formarían el suyo, que habría de contar con la autorización de la Comisión Ejecutiva. La rendición de cuentas de la Universidad tenía lugar ante el Claustro ordinario y la de las Facultades, previa aprobación de la Junta de Profesores, ante la Comisión Ejecutiva. Las instituciones especiales (Clínicas, Colegios Mayores, Residencias, etc.), tendrían un régimen económico análogo al de las Facultades. Por último, el Ministerio se reservaba el derecho de inspección sobre la vida económica de las Universidades, inspección que ejercería de manera periódica según lo establecido en el Reglamento económico.

La base VIII recogía la organización de las Enseñanzas. Las Universidades podían organizar los estudios del Doctorado; crear nuevas Cátedras, Seminarios y Laboratorios de Cultura superior; establecer cursos monográficos y fundar Museos, Bibliotecas especializadas y Centros de publicaciones científicas. En cuanto a los estudios, el título de Doctorado se obtendría tras la realización de tres cursos monográficos de enseñanza superior y la aprobación de una tesis dirigida por un profesor, ya fuese numerario o adjunto.

La base IX especificaba el contenido de los Planes de Estudio y pruebas de suficiencia. Las Universidades podrían diseñar libremente el cuadro de enseñanzas y organizar los estudios que habilitasen para obtener un Certificado universitario y establecer las pruebas académicas a superar por sus alumnos, siempre respetando las enseñanzas profesionales que estableciera el Ministerio de Educación Nacional de cara a mantener la uniformidad entre Universidades y los años de escolaridad que fijara la Administración Central para cada Licenciatura.

Cada Facultad haría constar las calificaciones del alumno en el Libro Escolar y podría expedir un Certificado de suficiencia que facultaría al alumno para presentarse al Examen de Estado. El Ministerio de Educación Nacional, por su parte, se reservaba la potestad de organizar dicho examen y expedir los títulos de Licenciado a quienes lo aprobasen. Dicho examen constaría de tres ejercicios: uno escrito eliminatorio, uno oral y uno práctico.

La base X establecía las categorías de personal docente que podrían existir en la Universidad. En primer lugar Catedráticos numerarios (en propiedad de la dirección y responsabilidad de una disciplina científica) y cuyo ingreso se hacía mediante concurso-oposición entre Profesores adjuntos de Universidad); Profesores adjuntos (Doctores que tengan a su cargo, sin adscripción en propiedad, una asignatura del cuadro de enseñanzas de la Facultad. Acceso por concurso-oposición, al que sólo podrían presentarse Auxiliares con un mínimo de cinco años de servicio y Catedráticos oficiales de Enseñanza Media, que fuesen Doctores y con un mínimo de cuatro años de desempeño en sus cargos); Auxiliares (Doctores y Licenciados encargados de enseñanzas complementarias o trabajos pedagógicos coadyuvantes a la disciplina, en coordinación con el trabajo del Catedrático y bajo su dirección. Acceso mediante concurso entre Doctores y Licenciados, con prioridad de los que ya fuesen Ayudantes. Nombramiento por cuatro años prorrogables por cuatro más); Ayudantes retribuidos (subordinados a los Catedráticos y Profesores adjuntos, encargados de trabajos prácticos de Laboratorio, Clínicas, Seminarios, etc. Debían ser Licenciados en la Facultad y Sección de que se tratase. Nombramiento por la Facultad respectiva, debiendo renovarse todos

los años); Ayudantes gratuitos (cuando se estime conveniente, adscritos al servicio de Laboratorios, Seminarios, etc. Podrían serlo alumnos recién licenciados, de mérito sobresaliente y para que mejorasen su formación científica); Profesores honorarios (personalidades de gran relieve científico o pedagógico nombrados por el Claustro ordinario) y Profesores temporales (designados por una Facultad, con la aprobación del Claustro ordinario, para enseñanzas especiales o exposición y aplicación práctica de métodos originales de investigación).

Las bases XI a XIV recogían los fines de la educación superior. A saber: la base XI señalaba que en cada Facultad habría adscrita una enseñanza de Apologética, relacionada directa o indirectamente con la moral de la profesión. Así, la Universidad restauraba la vida corporativa-religiosa. La base XII recogía que las Universidades establecerían Residencias y Colegios Mayores en la capital del Distrito, instituciones que podrían ser fundadas por entidades oficiales o particulares. La base XIII establecía un sistema de Protección escolar para alumnos dotados de aptitudes excepcionales para el estudio y carentes de medios económicos.²⁹ Finalmente, la base XIV, establecía la disciplina académica. El Ministerio determinaría el régimen disciplinario del personal docente, del administrativo y del cuerpo escolar, en tanto que la Universidad establecería el del personal subalterno. El artículo segundo abría la posibilidad de que existieran, además de los Centros universitarios implantados y sostenidos por el Estado, otros costeados por Corporaciones, Organismos privados y particulares.

El artículo tercero convertía la Comisión de Reforma Universitaria, creada por Orden de 20 de septiembre del 38 y dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media, en Comisión Asesora de Enseñanza Universitaria, encargada temporalmente de la función técnica consultiva necesaria para la aplicación y desarrollo de la nueva Ley, con lo cual rebajaba obviamente su capacidad e importancia.

²⁹ Medidas que se completarían posteriormente con la publicación de la Ley de 19 de julio de 1944 de Protección Escolar (BOE 21)

Según lo que había pretendido el legislador, y si bien siempre bajo control, la publicación del Proyecto dio pie a un gran debate interno en el seno de la Universidad española, en el que volvieron a ponerse de manifiesto actitudes favorables y resistentes al cambio.³⁰ En este debate, la Universidad de Madrid, tuvo un papel protagonista como referente estatal, como lugar de experimentación de las nuevas iniciativas, pero también, de manera muy especial, por el papel que desempeñó su Rector, Pío Zabala, quien, ya curtido en labores legislativas previas, fue presidente de la Comisión de Reforma Universitaria, participó activa y directamente a lo largo de todo el procedimiento y llegó incluso, a ser ponente en el Proyecto de Ley que llegó a las Cortes.³¹

El mencionado proyecto de Ley también tuvo su propio debate en el seno de la Universidad de Madrid. Allí el debate surgió tempranamente, auspiciado por su Rector, tan pronto como se publicó el Proyecto en el Boletín Oficial del Estado. Procedente de esos primeros momentos se tiene constancia de la existencia de un primer borrador conservado en los fondos del Archivo General de la Universidad Complutense (AGUCM)³² y que ha sido consultado por Carolina Rodríguez en sus trabajos sobre la época.

De su consulta se pueden extraer aquellos temas que suscitaron un mayor debate, como son el papel de la Iglesia en la nueva Universidad; el tema recurrente de la autonomía universitaria³³ y su derivada de la configuración de los planes de estudios; la reaparición del examen de Estado, presente ya en la reforma de 1919; la expedición del título de Doctor; el monopolio del Estado en la expedición de títulos; composición y funcionamiento de los órganos de

³⁰ Véase para otros momentos, esta permanente dialéctica, en PESET, M. y J. L.: *La Universidad española (siglos XVIII y XIX)*, cit. y de HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Cambios y resistencias al cambio en la Universidad española (1875-1931)”, cit. y “La Junta de Ampliación de Estudios y la Universidad” en *La Universidad de Córdoba en el Centenario de la Junta para la Ampliación de Estudios*, Enrique Aguilar Gavilán (coord.) Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2008.

³¹ Recuérdese que ya, con anterioridad, había participado en la redacción del Decreto de 1919 y del Estatuto de la Universidad de Madrid en 1921.

³² AGUCM. Secretaría General caja 2.

³³ Véase PESET, M. y MANCEBO, M^a Fernanda: “Un intento de autonomía universitaria...”; PESET, M.: “Los orígenes de la autonomía universitaria...” y “La autonomía de las universidades” cit.; HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Universidad y política en la España del siglo XIX. Madrid (1875-1898)” en J. L. Guereña y E. M. Fell (Eds.), *L’Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Âge à nos jours. II. Enjeux, contenus et images*, Tours, 1998 y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET, José Luis: *Universidad, poder académico y cambio social*, cit.

gobierno; la definición de las figuras del Rector y Vicerrector; los recursos de la Universidad; la composición del cuerpo docente; la jerarquización y carrera docente y otros menores.

La Universidad se concebía como una *corporación estatal*.

En cuanto a la autonomía universitaria se vuelve a planteamientos anteriores como el de García Alix en 1901 o el del ministro Silió en 1919, intentando aunar la reivindicación autonómica con los recortes de libertad de las reformas de Primo de Rivera. Bajo un mensaje y propósito reformista lo que finalmente subyace es la tradición de la Ley Moyano. La autonomía universitaria en ningún caso fue entendida en sentido democrático, como participación de todos los sectores universitarios, sino como libertad de “manejo” por parte de las autoridades según la conveniencia de cada momento, pudiendo incluso, oponerse a los designios estatales si les convenía. Por el contrario, ahora, se reclamaba aún más autoridad para el Rector y los Decanos, al tiempo que se reafirmaba la figura del Catedrático numerario frente a los Profesores adjuntos y a los temporales.

En cuanto a los estudios, se apostaba por una mayor libertad en cuanto a la organización del Doctorado; los opinantes de la Central se mostraban recelosos respecto al examen de Estado y a la composición de los tribunales que lo habían de juzgar, así como a la expedición del título de licenciado por parte del Estado. Señalaban también la carencia de profesorado disponible, para lo que proponían la participación de profesores de la América española, Italia, Alemania y Portugal -las potencias amigas-, al tiempo que propugnaban una estricta jerarquización del profesorado y buscaban perfilar la figura del Profesor adjunto mediante una mayor subordinación respecto al catedrático, la única autoridad admisible en relación a una concreta disciplina.

Respecto a la posibilidad de creación de centros de enseñanza superior, la Universidad no quería perder su monopolio en ningún caso. Sin embargo, debido a las vicisitudes y cambios ministeriales que más arriba se han señalado, ese primer borrador quedó poco menos que en el olvido.

Como ya se dijo más arriba, cuando ya se había apaciguado el primer debate en la Universidad madrileña, se envió a todas las Universidades la Orden Circular del la Dirección General de Enseñanza Superior y Media, de 9 de marzo de 1940 enviada con la intención de reabrir el debate una vez incorporado al puesto el nuevo ministro Ibáñez Martín.

Dicha Orden se recibió en las Universidades, vía Rectorado, junto con un cuestionario de 10 puntos y recordando la necesidad de debatir el Proyecto en las Facultades y emitir el informe preceptivo. Nada más dictarse la Orden, la Universidad de Madrid trató el asunto en la Junta de Gobierno de 2 de abril de 1940³⁴, recibiendo el Rectorado de inmediato los informes de cada una de las Facultades.

La selección de esos diez puntos concretos por parte de las autoridades ministeriales mostraba la decisión de conducir estrechamente el debate del proyecto, al tiempo que señalaba cuáles eran sus preocupaciones. Los puntos a tratar eran los siguientes:

- 1.- Régimen de gobierno de la Universidad
- 2.- Modificaciones de los planes de estudios actuales
- 3.- Patrimonio y presupuesto universitario
- 4.- Ingreso del alumnado en la Universidad y en las distintas facultades
- 5.- Sistema de selección del profesorado especial (Ayudantes y Auxiliares)
- 6.- Número de Universidades y distribución de facultades
- 7.- Sistema de pruebas, indicando la conveniencia de separar la función docente de la examinadora
- 8.- Periodo escolar (curso anual o de dos semestres)
- 9.- Limitación de matrícula
- 10.- Residencias de estudiantes

Atenderemos aquí solamente al informe de la Facultad de Filosofía y Letras, fechado el 11 de mayo de 1940³⁵ por ser la Facultad que nos ocupa, pero también porque de ella provenía el Rector, Pío Zabala y Lera, Catedrático

³⁴ Véase el Acta de dicha Junta. AGUCM. Secretaría General, caja 1, libro 1, p. 143-144.

³⁵ AGUCM. Secretaría General. Caja 2.

de Historia Contemporánea y verdadero protagonista en la confección de la Ley.³⁶

El informe se manifestaba en general favorable a la línea del proyecto, así como lo hacía su Decano, el geógrafo Eloy Bullón Fernández. Como temas de controversia o que se prestaron a discusión podemos apuntar los siguientes: abundaban en la necesidad de una mayor jerarquización, en la necesidad de reafirmación de los Catedráticos numerarios y de la subordinación a ellos del resto de las escalas docentes, llegando a proponer, incluso, la eliminación del profesorado adjunto (lo cual contradice aquella convicción primera de que faltaba profesorado).

Coincide con el texto del proyecto en lo relativo a la función y autoridad del Rector, Vicerrector y Decanos, defendiendo también la provisión del cargo de Secretario general desde la Universidad y, como es de suponer, sin contar para tales cargos con los profesores adjuntos, sino tan sólo con los Catedráticos numerarios.

Se refuerza en este informe también la centralización del poder decisorio, mediante la solicitud de mayores poderes para el Decano y mayor responsabilidad para sus cuadros, lo que permitiría a éstos un relativo margen de actuación autónoma frente al Rectorado y al Ministerio. En el caso de la Facultad de Filosofía, se solicitaba igualmente una mayor actuación de su Decano en la gestión económica del centro. Así, los presupuestos de cada Facultad debían ser realizados directamente por los Decanos, con la consulta pertinente a la Junta de Facultad. Los Decanos se configuraban así como verdaderos presidentes de sus Facultades con capacidad para elaborar sus propios presupuestos.

³⁶ Véase de RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: “Estudio introductorio” a *España bajo los Borbones* de Pío Zabala y Lera. Institución “Fernando el Católico” C.S.I.C., Zaragoza, 2009; “Poder y mentalidad: los primeros pasos de la Universidad de Madrid” en *Poder y mentalidad en España e Iberoamérica* / coord. por Enrique Martínez Ruiz, 2000; “Anhelos de reforma: Madrid ante el proceso de reforma universitaria en el primer franquismo (1939-1940)”, en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, nº 2, 1999; “El nacimiento de la Universidad franquista: Madrid ante el proyecto de Ley de Reforma Universitaria de 1939” en VVAA, *Tiempos de silencio*, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Valencia, 1999 y su obra ya citada *La Universidad de Madrid en el primer franquismo...*

Proponía también esta lectura el aprovechamiento de las ventajas que ofrecía la autonomía universitaria en dos sentidos, la organización de las materias (autonomía pedagógica) y en cuanto a libertades en la función examinadora. Respecto a los planes de estudio, la Facultad de Filosofía y Letras proponía discrecionalidad en la determinación de los contenidos de sus enseñanzas, reclamando la autonomía pedagógica en cuanto a la confección de los planes. Solicitaba que se le conservase el plan de estudios vigente y que se le dejara potestad para ir introduciendo en el mismo aquellas modificaciones que la experiencia y el progreso científico aconsejasen. Reclamaban asimismo autonomía en el mantenimiento de las funciones docente y examinadora propias del proceso educativo, eliminando así cualquier posible injerencia del Ministerio mediante la asignación de la capacidad examinadora a personas diferentes de las que hubieran impartido las clases.

De ese modo se intentaba reducir la intervención del Ministerio en el procedimiento de acceso. La Facultad consideraba oportuno el mantenimiento de la colación de títulos de bachiller por parte de los institutos nacionales de segunda enseñanza, pero el ingreso en la Universidad debería ser ponderado por la Facultad que el alumno hubiera elegido.

Otros aspectos eran igualmente matizados. Así Zabala consideraba necesaria la eliminación de algunos centros docentes dada la escasez de medios; pero valoraba favorablemente la duración del periodo escolar de un año académico, y en cuanto a la limitación de matrículas, se apostaba por una selección puramente cualitativa, apoyada en el mayor nivel de conocimientos demostrados en el ingreso. Por último, se asumía como propia la propuesta ministerial sobre la organización de las residencias estudiantiles, apoyando el que la Universidad se hiciera cargo del gobierno de los centros que hasta el momento había gestionado la Junta de Ampliación de Estudios (JAE). Una antigua pugna con el pensamiento liberal por el control de la juventud se resolvía por el momento favorablemente a los conservadores al actuarse así.

Finalizado el debate en el seno universitario y enviados los informes al Ministerio, el debate se trasladó a otros ámbitos fuera de la Universidad, los

trabajos preparatorios para la promulgación de la Ley que pretendía adaptar la Universidad a la nueva realidad necesitaron aún, de varios documentos previos.³⁷

Dentro del proceso de discusión y aprobación de la ley, en esta última fase, el debate salía del estricto entorno universitario, interviniendo ahora el Consejo Nacional de Educación y las Cortes Españolas, al que se añadió el Consejo de Rectores. La reforma universitaria pasaba a órganos diferentes que se encargarían de pulirla, revisarla y editarla, pero en cualquiera de estos tres ámbitos aparecían de nuevo eminentes Catedráticos madrileños, que intervinieron activamente mediante la presentación de enmiendas.

Al año siguiente, en 1941, se presentó un primer Anteproyecto de Ley para la Organización de las Universidades Nacionales.³⁸ Este anteproyecto era mucho más amplio y elaborado que el inicial, pues transformaba las bases de 1939 en doce capítulos. El capítulo I recogía la misión, funciones, personalidad jurídica, patronato, emblemas y ceremonial de las universidades. El capítulo II estaba dedicado a la creación de las universidades y los Distritos Universitarios. El capítulo III recogía los órganos para el ejercicio de las funciones primordiales universitarias, su institución en las universidades y normas generales para su funcionamiento. El capítulo IV se dedicaba a los servicios para el ejercicio de otras funciones universitarias, su institución en las universidades y normas generales para su funcionamiento. El capítulo V destinado al gobierno de las universidades y sus órganos y servicios. El capítulo VI se ocupaba de los órganos de representación corporativa de las universidades y consultivos para su gobierno. El capítulo VII era el relativo al profesorado universitario y sus derechos y obligaciones. El capítulo VIII trataba de los escolares, sus obligaciones y derechos. El capítulo IX organizaba los medios didácticos: bibliotecas, archivos, museos, laboratorios, clínicas, jardines botánicos, talleres y otros análogos. El capítulo X establecía el régimen y

³⁷ Se pueden consultar en AGUCM. Sección Rectorado, Caja 612. Para su estudio pormenorizado véase GONZÁLEZ ROLDÁN, G.: *El proceso legislativo de la Ley de Ordenación...* y de RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: "Anhelos de reforma: Madrid ante el proceso de reforma universitaria en el primer franquismo..."; "El nacimiento de la Universidad franquista..." y *La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad*, cit.

³⁸ AGUCM. Sección Rectorado. Caja 612.

personal administrativo y subalterno. El capítulo XI desarrollaba los medios económicos para la función universitaria. El presupuesto general de las universidades y su administración y finalmente, el capítulo XII se ocupaba de la disciplina académica.³⁹

El Anteproyecto fue sometido a discusión por el Consejo de Rectores y luego en el Consejo Nacional de Educación, donde se debatió en torno al funcionamiento de las Universidades pontificias; las relaciones entre los Centros de investigación y preparación profesional y la Universidad; se perfilaron claramente las funciones de los Colegios Mayores; se establecieron las diferentes categorías dentro del personal docente; se fijaron los contenidos de cada curso, la validez de los títulos o la distribución de los ingresos por tasas.

De la discusión sobre este primer anteproyecto salió un segundo, fechado en enero de 1942, denominado Anteproyecto de Ley para la organización de las Universidades Españolas⁴⁰ y que ya solo fue retocado antes de llegar a Cortes. A lo largo de estos debates el tema más candente fue el cambio de denominación. Se sustituyó el término “nacionales” por “españolas”, de manera que se incluyera aquellas que no fueran de creación estatal.

La Universidad se definía como corporación de maestros y escolares, al tiempo que asumía funciones investigadoras propias, distinguiéndose de las ostentadas por instituciones como el CSIC, las Reales Academias o el Instituto de España. Esta apreciación dejaba entrever cierto recelo hacia esas instituciones, en particular la primera, por parte de la Universidad, un recelo heredado del antiguo antagonismo con la JAE. De ahí la insistencia en fijar la diferenciación institucional de funciones en el panorama científico español.

³⁹ Véase la tesis de GONZÁLEZ ROLDÁN, G.: *El proceso legislativo...* y la de RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina, ambas citadas anteriormente.

⁴⁰ *Anteproyecto de Ley para la organización de las Universidades Españolas*, Madrid, 1942. AGUCM. Sección Rectorado. Caja 612.

En el texto de 1942 la religión y la Iglesia católica se incorporaban de manera troncal a la filosofía educativa: “La Universidad acomodará todas sus enseñanzas al dogma y la moral católica” y se coloca bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino. Se organizaron los distritos universitarios y se establecieron los requisitos para la creación de nuevas Universidades. Sólo podrían crearse por el Estado y mediante Ley. No obstante, previo acuerdo con la Santa Sede, se podría otorgar categoría de universidad a fundaciones de la Iglesia, pero no se les asignaría distrito. Serían Universidades pontificias, pero no “católicas”, ya que católicas, en el sentido de “universales” tanto como confesionales, se entendía que lo eran todas por definición.

Los títulos académicos de validez profesional solo podrían conseguirse en las Universidades nacionales. Los alumnos de las pontificias habrían de realizar las pruebas de conjunto y el examen final. Los planes de estudio, en cualquier caso, deberían estar ratificados por el Estado. El artículo noveno estipulaba la existencia de doce universidades⁴¹ y por lo tanto, de doce distritos universitarios⁴², evidenciando la pugna entre ellas por acaparar distritos mayores.

Se abordaba ampliamente el tema del ceremonial y ritos universitarios, y en cuanto a la organización universitaria y sus normas de funcionamiento, las Universidades constarían de Facultades, de Escuelas de Formación Profesional, de Institutos Universitarios de Investigación Científica, de Escuelas Superiores de Veterinaria, de Colegios Mayores y de una Dirección de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria. Como puede observarse, una estructura básica que ha llegado hasta hoy.

Se establecía la distribución de estas Facultades y de sus respectivas secciones. Éstas organizarían sus enseñanzas y sus pruebas, y otorgarían los grados académicos de acuerdo con las normas que para cada una de ellas dictara el Ministerio. Se abordaron así las disciplinas generales y especiales,

⁴¹ Barcelona, Granada, La Laguna, Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

⁴² Recogidos por RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: *La Universidad de Madrid...* cit.

las pruebas académicas, las pruebas finales para la consecución del grado de licenciado, la expedición de títulos (únicos para cada Facultad) y la expedición del grado de doctor.

La actividad desempeñada por los institutos o escuelas de formación profesional debía depender de las Universidades. Así como la investigación científica, que debía quedar siempre subordinada a la Universidad. Se organizaban los Colegios Mayores y los servicios complementarios: la Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico y Extensión Universitaria; la Dirección de Formación religiosa; el SEPES (Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior) de Falange Española y Tradicionalista de las JONS (FET y de las JONS); el Servicio complementario de educación universitaria; la Milicia universitaria; el SEU; el Servicio de Protección escolar; el Servicio para la Selección y Orientación profesional de los escolares y el Servicio para la Orientación e Inspección de las actividades culturales en el distrito universitario. Todos estos servicios complementarios se canalizarían a través de los Colegios Mayores.

Se establecieron también, lógicamente, las funciones de los órganos de gobierno de la Universidad: Rector, Vicerrector, Decanos; Directores de los Institutos y servicios complementarios. El Claustro Universitario, Junta de Gobierno, el Consejo de Educación del distrito universitario, las Juntas de Facultad, las Juntas de los institutos o escuelas profesionales. Otros poderes jerárquicos serían los Directores de los Colegios Mayores; el Director de Publicaciones, Intercambio científico y Extensión Universitaria, el Director encargado de la Formación religiosa universitaria, el Jefe del SEPES, el Jefe de la Milicia universitaria y el Jefe del SEU. En la cúspide el Rector se reafirma como jefe de toda la Universidad, de sus órganos, funcionales y de sus servicios orgánicos complementarios.

Se debatieron asimismo las obligaciones y derechos del cuerpo docente universitario y de los escolares, así como el régimen administrativo de las Universidades. Existiría un Secretario general y un Oficial mayor. Las Facultades, Institutos o Escuelas Profesionales contarían, con un secretario

propio. Se trataron también los medios económicos y la formación del presupuesto, la disciplina académica del personal docente, de los escolares y del personal administrativo, bibliotecario y subalternos. En definitiva, el Rector obtuvo cada vez más y más poder, a todos los niveles dentro de la Universidad, como resultado del triunfo de las propias respuestas universitarias.

Concluido el debate en el Consejo de Rectores y el Consejo Nacional de Educación, el texto definitivo del Proyecto llegó por fin a las Cortes en mayo de 1943, postulado como *Proyecto de Ley sobre la Ordenación de la Universidad Española*⁴³. A su llegada, se abrió el plazo preceptivo para presentación de enmiendas, que terminó el 17 de junio de 1943. Posteriormente, fue nombrada una ponencia encargada de dictaminar las enmiendas recibidas por el texto, cuyo informe se emitió el día 23 de junio (ponencia en la que de nuevo figuraba el Rector Pío Zabala).

La discusión sobre el texto tuvo lugar en la Comisión de Educación Nacional de las Cortes (de la que también formaba parte Pío Zabala), a la que los procuradores pudieron enviar sus observaciones. Algunas de estas observaciones presentadas fueron tenidas en cuenta y se incorporaron en un nuevo texto, esta vez definitivo, que fue dictaminado por la Comisión de Educación de las Cortes el día 6 de julio.⁴⁴ Finalmente, el texto fue aprobado en el pleno del 15 de julio y publicado como Ley, fechada el 29 de julio y publicada en el BOE del 31.⁴⁵

⁴³ Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas, n° 8 (29 mayo 1943)

⁴⁴ Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas, n° 18 (8 julio 1943)

⁴⁵ Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943, (BOE 31).

II.2. LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DE 1943

Como se vio en el capítulo anterior, el procedimiento legislativo para la redacción de la Ley tuvo un desarrollo sumamente prolijo que se prolongó desde 1939 hasta 1943, en el que, como ha estudiado minuciosamente Carolina Rodríguez López, tuvieron la oportunidad de intervenir, y lo hicieron, los protagonistas académicos, pero también los políticos del momento entre los que se encontraban numerosos profesores de la Universidad de Madrid, con su propio Rector, Pío Zabala, a la cabeza.

Tras las aportaciones de enmiendas y observaciones, se fueron incorporando a la Ley ciertos aspectos relevantes que ayudan a entender mejor su lectura última. Después de vivos debates la norma quedó como se sigue: se abandonó formalmente el modelo de Ley de Bases, constando la definitiva de 13 capítulos cuyos enunciados reflejan finalmente los acuerdos adoptados respecto a los temas fundamentales de debate, en 101 artículos y 15 disposiciones finales y transitorias, de los que analizamos lo más relevante a continuación. La Ley de Ordenación Universitaria de 1943 se proponía configurar el marco educativo superior en la Universidad franquista cuyos principios quedaban recogidos en la propia exposición de motivos de la Ley.

Ciñéndonos exclusivamente al estudio textual de la norma, la propia exposición de motivos es verdaderamente clarificadora, ya que al ir haciendo un repaso por su particular visión de la historia de la educación superior en España desde época medieval, pone de manifiesto de manera meridiana la concepción ideológica de los legisladores y marca las líneas directrices, al menos sobre el papel, de lo que sería la educación superior española a lo largo de los prácticamente treinta años siguientes, razón por la que no nos resistimos a reproducir literalmente muchos de sus párrafos.

Sus dos referentes son: el “concepto hispánico de universidad” tomado del modelo medieval de la Universidad salmantina, sometida a la “Religión” y a la “Patria” y su influencia hacia el s. XV en el pensamiento europeo; y la

universidad cisneriana y su destino imperial, que llevó el pensamiento científico español no sólo a Europa sino al continente americano: *“tal florecimiento universitario es el creador del ejército teológico que se apresta a la batalla contra la herejía para defender la unidad religiosa de Europa y de la falange misionera que ha de afirmar la unidad católica del orbe”*. Universidad cisneriana creadora de una ciencia humanista que dotó al Imperio español de contenido y pensamiento.

Aluden así al humanismo de Luis Vives, queriendo ver en la Universidad hispánica una misión espiritual, la de transmitir la cultura por medio de la enseñanza a través de la unidad de la ciencia católica, de su espíritu moral, de disciplina y de servicio. De ambos modelos retoman, como pilar fundamental, la institución de los Colegios Mayores, tras el malogrado intento previo de la época de Primo de Rivera.

A esta época ideal y en cualquier caso efímera, contraponen la nefasta “crisis del s. XVIII, caracterizada por influencias extrañas: *“La restauración cultural del s. XVIII no fue más que un meteoro fugaz, eclipsado por la invasión francesa, que trajo a nuestras aulas la rígida influencia del sistema napoleónico y tras ella, la desorientación, la inestabilidad, el perpetuo cambio de postura en el régimen universitarios, abierto de par en par a toda suerte de exotismos”*

Ven los legisladores en cambio, en la Ley Moyano un intento de ordenación, que no obstante, sólo afectó a lo externo, sin plantear a fondo una reforma verdadera. Situación que aún se vería malograda en los años sucesivos debido a la maraña de disposiciones, *“tan variables como la política al uso y los bandazos revolucionarios de la osada y efímera legislación de 1868”*. Desde entonces a fin de siglo, las únicas novedades fueron algunos nuevos planes de estudios, muchos de ellos efímeros también.

En 1900, con el Ministerio de Instrucción Pública y García Alix se volverían a cambiar los planes de estudios, quedando postergada sin embargo, una vez más, una reforma en profundidad de la universidad. En ese contexto, se alude a la ILE como anatema, motivo de todos los males presentes, causa y

origen de la penetración de lo anticatólico, lo amoral y lo antiespañol: *“Vivíamos momentos de crisis y de ruina en que si la educación intelectual estaba desquiciada, había sucumbido también en manos de la libertad de Cátedra la educación moral y religiosa, y hasta el amor a la Patria se sentía con ominoso pudor, ahogado por la corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de la Institución Libre, que se esforzaba por dominar el ámbito universitario”*. En tal escenario, verdaderamente apocalíptico, consideraban *“la Reforma autonómica de Silió como un conato de bien intencionada restauración tradicional, pero al injertarse en un clima pernicioso de liberalismo pedagógico, habría de malograrse fatalmente”*. Incapaz su decreto de corregir la deriva, continúa el texto *“tras ella, otra vez tornó la Universidad a su irremisible y caótica inercia, cómoda y pasivamente acogida a la legislación de mil ochocientos cincuenta y siete y a la fronda de centenares de disposiciones producidas por el acarreo de más de medio siglo”*. Una vez más, *“la Dictadura del ínclito General Primo de Rivera volvió a plantear una reforma en profundidad. A este efecto, concedió a las Universidades personalidad jurídica, reguló su capacidad civil, restauró Colegios Mayores y acometió la reorganización de las Facultades”*.⁴⁶ Pero *“la caída de la Monarquía precipitó aún más la catástrofe de nuestros centros de cultura, y la República lanzó a la Universidad por la pendiente del aniquilamiento y la desespañolización, hasta el punto de que brotaron de su propia entraña las más monstruosas negaciones nacionales”*.

En ese contexto cobraba sentido a su parecer, la “Cruzada antiliberal” emprendida por el bando vencedor: *“Al recuperar España su substancia histórica con el sacrificio y la sangre generosa de sus mejores hijos en la Cruzada salvadora de la civilización de Occidente, y al proclamar con la victoria el principio de la revolución espiritual, se hace indispensable encarnar esa mutación honda de los espíritus en una transformación del orden universitario que, a la par que anude con la gloriosa tradición hispánica, se adapte a las normas y al estilo de un nuevo Estado, antítesis del liberalismo y ejecutor*

⁴⁶ Estos párrafos entresacados de la Ley nos adelantan ya en qué espejos se miran los legisladores. Son sus referentes la reforma autonómica de Silió con influencias de la legislación de Primo de Rivera y de fondo, a pesar de su tono de crítica, la Ley Moyano.

implacable de la consigna sagrada de los muertos: devolver a España su unidad, su grandeza y su libertad”.

En cuanto a la concepción de la institución universitaria, ahora se presentaba como una *corporación* a la que el Estado confiaba una empresa espiritual. La Ley devolvía a la Universidad la plenitud de sus funciones tradicionales. Se robustecía para ello la función docente desde el punto de vista formal: ordenación de los órganos facultativos y colación de grados, formación de la profesionalidad a través de Institutos, Escuelas o cursos facultativos o extra-facultativos, de manera que los jóvenes universitarios salgan de las aulas no ya sólo con los conocimientos científicos generales y propios de su Facultad, sino con los más concretos que habilitan para el ejercicio de las diversas actividades profesionales.

Se reorganizaba a la vez, la función investigadora intentando crear en torno a las Cátedras y Facultades núcleos que formasen y capacitasen a los investigadores, en conexión con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se restauraban los Colegios Mayores en calidad de órganos obligatorios. No podría existir Universidad que no poseyera, como mínimo, un Colegio Mayor y todos los alumnos habrán de estar adscritos a uno, habitasen en el colegio o no.

Esta ampliación de las funciones universitarias, se completaría con lo que preceptuase la Ley Orgánica de la Administración docente, por la que cada Universidad se convertiría en centro rector de su demarcación cultural. Según el texto de la propia ley, ésta es la columna vertebral de la reforma, inspirada en los más sólidos principios tradicionales.⁴⁷ Pues la Ley, además de *reconocer los derechos docentes de la Iglesia* en materia universitaria, *“quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica. Todas sus actividades tendrán como guía suprema el dogma y la moral cristiana y lo establecido por los sagrados cánones respecto de la enseñanza. Después de muchos años de*

⁴⁷ Con esta afirmación el texto legislativo reconocía de manera explícita que se inspiraban en “los más sólidos principios tradicionales”, por más que los revistieran de un discurso pretendidamente innovador. Y para llevar a la práctica esos principios tradicionales, se apoyan en la Iglesia a la que se le reconocen sus derechos en materia de educación universitaria y en Falange, poniéndose abiertamente a “su servicio”.

laicismo en las aulas, por primera vez, será preceptiva la cultura superior religiosa. Según la Encíclica de Pío XI se establecerá en todas las Universidades el ambiente de piedad que contribuya a fomentar la formación espiritual en todos los actos de la vida del estudiante". Por otra parte, "la Ley exige el fiel servicio de la Universidad a los ideales de la Falange, inspiradores del Estado. Este fervor encarna en instituciones de profesores y alumnos, al tiempo que en cursos de formación política y de exaltación de los valores hispánicos". Desde el documento se señala al Profesorado su función docente, "el servicio más noble y el mejor tributo rendido a la memoria de la juventud que supo sucumbir en la hora del sacrificio, siguiendo el ejemplo de José Antonio, auténtico arquetipo de universitario".

Pero al mismo tiempo, el "nuevo estado" se vestía de tradicionalismo, con la recuperación de su ceremonial y simbolismo: *"Tal propósito innovador no desconoce lo tradicional ni en el aspecto más externo. Por ello, la Ley restaura los patronatos, ceremoniales, emblemas y actos que decoran el honor universitario".* Volviendo al marco de Falange, y dentro de un contexto demagógico, la Ley hacía alusión a la *"justicia social"*, para que no se perdieran las inteligencias útiles a la Patria. Se pretendía crear así un régimen de protección para los escolares capaces y sin recursos, un sistema de tasas de distintos tipos en relación con las posibilidades económicas del alumno y se establecía asistencia sanitaria para los estudiantes enfermos. No era otra cosa que una manera de premiar la afinidad política y la docilidad, ya que se exigía explícitamente el encuadramiento para poder optar a cualquiera de esas ayudas.

Se ponía, en fin, de manifiesto que se trataba de una *"nueva Universidad, dotada de personalidad jurídica, en una justa línea media que excluye el intervencionismo rígido y la "autonomía abusiva"*. Esa "nueva" institución conserva sin embargo, todas las Universidades existentes, sin perjuicio de establecer después disposiciones complementarias que regulasen la distribución de las Secciones de las distintas Facultades, así como los Institutos profesionales según las exigencias de cada región española.

El único órgano individual directivo de gobierno sería, en todas ellas el Rector, a quien asistirían las demás autoridades delegadas, así como los diversos órganos colectivos, de carácter permanente unos, transitorios los otros, pero todos circunscritos a una función de colaboración y consejo.

En cuanto al régimen económico, se confería a la Universidad una *“prudente autonomía financiera”*, se dice estimular el mecenazgo, y en lo relativo al régimen administrativo se regulaba su funcionamiento con un criterio de uniformidad, autonomía y pretendida rapidez de los servicios.

Finalmente, aludía el texto a que una verdadera reforma universitaria *“reclamaba un espíritu nuevo en las personas encargadas de llevarla a la realidad”*, por eso la Ley exigiría condiciones rigurosas para el acceso a la Cátedra. De manera análoga, *“determinaba los rígidos deberes del escolar, encuadrándolo en el ejército juvenil que la Universidad representa, y haciéndole amar las virtudes fundamentales del estudio, el honor, la disciplina y el sacrificio”*.

Procedemos ahora al análisis de los aspectos más relevantes del articulado. El capítulo I recogía la misión, funciones y personalidad jurídica, así como lo relativo al patronato, emblemas y ceremonial de las Universidades. En el artículo 2, la Universidad se concebía como una corporación, bajo la dirección del Ministerio de Educación Nacional. Eran misiones de la Universidad conferir los grados académicos de Licenciado y Doctor y orientar las funciones docentes, y la labor cultural y educativa dentro del Distrito Universitario. En el artículo 3 se establecía que la Universidad, inspirándose en el sentido católico, consustancial a la tradición universitaria española, acomodaría sus enseñanzas a las del dogma y la moral católica, así como a las normas del Derecho canónico vigente.

Según el artículo 4, en armonía con los ideales del Estado nacionalsindicalista, la Universidad ajustaría sus enseñanzas y sus tareas educativas a los puntos programáticos del Movimiento. Por el artículo 5 conseguiría la Universidad personalidad jurídica plena, pero “en todo lo que no

estuviera limitada por la ley, dentro del ejercicio de sus funciones universitarias y siempre bajo la necesaria autorización del Ministerio de Educación Nacional", lo que de hecho recorta bastante esa personalidad jurídica plena.

El artículo 6 colocaba la Universidad bajo la advocación y patrocinio de Santo Tomás de Aquino cuya fiesta habría de guardarse, y se le conferiría solemnidad con la celebración de actos religiosos y académicos. Ello implicaba la recuperación del ritual tradicional y aseguraría la presencia de la Iglesia católica en cualquier tipo de acto universitario. Decía el artículo 7 que cada Universidad tendría su emblema corporativo, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. También podrían tenerlo las Facultades y demás órganos y servicios universitarios y enseguida se aplicarían sus gestores a elaborar ese reconocimiento de identidad. El artículo 8 facultaba a cada Universidad para diseñar un ceremonial propio que habría de ser aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.

El capítulo II estaba dedicado a los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria. Siguiendo el orden del articulado, para el artículo 9, reconocía el Estado español los derechos docentes de la Iglesia católica en materia universitaria, como contenido íntegro y total.

El capítulo III estaba dedicado a las Universidades y sus Distritos Universitarios. Según el artículo 10 las Universidades habrían de ser establecidas mediante Ley. Es decir, su creación requerirá de la aprobación ministerial y su paso por las Cortes. Los artículos 11 y 12 confirmaban la existencia de doce Universidades, cada una con su distrito universitario. El de Madrid, específicamente, comprendería las provincias de Madrid, Segovia, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real. Con lo cual, respecto a la ordenación anterior, la Universidad de Madrid incorporaba Segovia a su distrito.

En el capítulo IV se desarrollaban aspectos relativos a los órganos para el ejercicio de las funciones primordiales universitarias y las normas generales para su funcionamiento. El artículo 13 decía que las universidades estarían formadas por Facultades universitarias; Institutos o Escuelas de Formación

Profesional e Institutos de Investigación Científica; Colegios Mayores y el Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria (SPICEU).

El artículo 14 describía las Facultades como órganos específicos de la función docente, destinados a preparar y habilitar a los escolares para que realizasen los cursos ordinarios de sus enseñanzas y donde pudieran hacer las pruebas pertinentes para la colación e investidura de los grados académicos de Licenciado y Doctor. Según el artículo 15 las Facultades universitarias serían: Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia, Ciencias Políticas y Económicas, y Veterinaria.

Son exactamente las mismas que existían anteriormente, con la excepción de la Facultad de Veterinaria, antes Escuela, y la de Ciencias Políticas y Económicas de nueva creación, y que es una encomienda especial que se hace a la Universidad de Madrid. Era la Facultad representativa del nuevo régimen, destinada a transmitir los principios políticos del Movimiento. En la disposición final y transitoria se aclaraba sin embargo, que por no pertenecer a la Universidad, quedaban excluidas de estas normas las Escuelas especiales de Arquitectura e Ingenieros, los organismos que de ellas dependieran, las Escuelas de formación de sus profesiones auxiliares, así como aquellos Centros de investigación o de estudio que por referirse a ingeniería o arquitectura, no atañían tampoco a la Universidad. En cualquier caso, se insiste en que no se podría crear ninguna Facultad distinta de las anteriores si no era por Ley. Es decir, su establecimiento requeriría la aprobación del Estado.

Según el artículo 16, para impartir las enseñanzas, las Facultades podrían dividirse en Secciones, determinándose en los Decretos de organización de cada Facultad.

Las normas de organización de las distintas enseñanzas se disponían en el artículo 18:

a) Para el ingreso en cualquier Facultad el candidato deberá de estar en posesión del Título de Bachiller y haber cumplido los diez y seis años de edad, o cumplirlos dentro del año natural en que se verifique la inscripción. Los Reglamentos de organización de las Facultades establecerían un examen especial de ingreso propio para cada una de ellas, que serviría para la selección de alumnos.

b) El Ministerio de Educación Nacional podría limitar el número de alumnos que comenzarían sus estudios en cada una de las Facultades, previo informe del Consejo Nacional de Educación y con los asesoramientos y estadísticas que hubiera solicitado de la Junta Política de FET y de las JONS, de los Ministerios interesados y de los Colegios o servicios profesionales.

c) Se fijaba el inicio y final del curso, del tres de octubre al treinta de junio. Las enseñanzas se organizarían en dos periodos cuatrimestrales: del 5 de octubre al 14 de febrero y del 15 de febrero al 15 de junio. Los planes de estudio de cada Facultad determinarían el número de cuatrimestres de cada disciplina.

f) Quince días antes del comienzo de cada curso académico quedaría impreso y se anunciaría en el cuadro de cada Facultad el plan completo de enseñanzas distribuidas en uno o dos cuatrimestres. Asimismo, a principio de curso se haría público el calendario escolar, que establecería el Rector de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y que sólo podría ser modificado por Orden Ministerial.

g) En cada Facultad se organizaría un servicio diario de ordenación e inspección de la vida interna a cargo de un Profesor universitario.

Estipulaba el artículo 19, a su vez, que las Facultades determinarían el carácter de las pruebas académicas, bien cuatrimestrales, de asignatura, de curso, de grupos de disciplinas o de conjunto de cursos, que podrían ser calificadas con aprobado, notable y sobresaliente, pudiéndose conceder una matrícula de honor por cada veinte o fracción de veinte alumnos matriculados.

Como podía leerse en el artículo 20, para obtener el grado de Licenciado sería necesario que el candidato superase pruebas orales, escritas y prácticas, en la forma aprobada por cada Facultad. Las pruebas finales para la colación

de grado se convocarían en los meses de junio y septiembre. Una vez superadas, se procedería al acto solemne de investidura y a la expedición del título por el Ministerio de Educación Nacional, en el que debería constar la Universidad que otorgaba el grado. En cada convocatoria se podrían conceder dos premios extraordinarios por cada Facultad o Sección, que darían derecho a la expedición gratuita del título.

Las Universidades, finalmente, podrían conferir el grado de Licenciado en cada una de las Facultades. El grado y el título serían únicos para cada Facultad, aunque sus enseñanzas estuvieran divididas en Secciones, pero se haría constar la Sección por que se obtuviere.

Como recordaba el artículo 21 el grado de Doctor representaba la plenitud de titulación académica y añadía al de Licenciado el valor de una especial dedicación al estudio y a la investigación científica. Habilitaría y sería exigido para el acceso a las funciones docentes universitarias y, como categoría científica, constituiría un mérito superior al de Licenciado para optar a determinados cargos y funciones profesionales. Las disposiciones especiales que regulasen el acceso a los cargos de la Administración para los que se requirieran títulos facultativos, determinarían el grado de mérito que hubiera de concederse al título de Doctor.

Para la obtención del título de Doctor sería indispensable la aprobación de una tesis defendida públicamente y premiada con un solemne acto de investidura. El título lo expediría el Ministerio de Educación Nacional. Cada Facultad o Sección podría conceder dos grados de Doctor con premio extraordinario. Todas las Universidades podrían conferir el grado de Doctor de sus Facultades⁴⁸. Previa autorización expresa del Ministerio de Educación Nacional, las Universidades podrían conferir el grado de doctor “honoris causa”.

⁴⁸ Sin embargo, no podrían llevar a cabo la lectura de la tesis en ellas. El contenido de este artículo quedaba limitado por la disposición transitoria cuarta, de manera que el monopolio de las lecturas lo tendrá Madrid hasta 1954, como se verá más adelante.

Dedicado a las convalidaciones de títulos académicos extranjeros, a efectos de su valor profesional en España, el artículo 22 hacía al Ministerio de Educación Nacional competente único en el asunto.

El artículo 23 decía que los Institutos o Escuelas de Formación Profesional eran los órganos universitarios para formar profesionalmente a los escolares. Unos y otros podrían funcionar bajo la dependencia inmediata de la Facultad con la que estuvieran vinculados por la naturaleza de sus estudios o como órganos independientes universitarios. Podrían ser establecidos por iniciativa de la propia Universidad o de otras Corporaciones públicas o privadas o de particulares.

Según el artículo 25 los Institutos o Escuelas concederían títulos profesionales que expediría al Ministerio de Educación Nacional, o bien diplomas y certificados de estudios. Los estudios se organizarían de acuerdo a Reglamentos especiales. Completando este punto, el artículo 26 establecía que cuando el volumen de investigación excediera del propio de una Cátedra, se crearían Institutos de Investigación Científica, con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, bien por iniciativa de la propia Universidad, del CSIC o de otras Corporaciones públicas o privadas e incluso de particulares, que funcionarían como Secciones de los Institutos Nacionales dependientes del CSIC. Por su parte, los centros que el CSIC crease, o que surgieran de otro modo, podrían ser adscritos a la Universidad mediante acuerdo.

Un bloque del articulado se dedicaba a los Colegios Mayores, decía el 27, “son los órganos para el ejercicio de la labor educativa y formativa general que incumbe a la Universidad”. Todos los escolares universitarios deberían pertenecer, como residentes o adscritos, a un Colegio Mayor, toda vez que a través de él “se cumplirían las funciones educativas que, con carácter obligatorio, deberían realizarse paralelamente a los estudios facultativos”.

Cuando hubiera suficiente número de Colegios Mayores en su distrito, sería obligatoria incluso la residencia de los escolares en algunos de ellos, salvo los que vivieran con sus familiares o tutores. Solo el Rector podría

dispensar de dicha obligatoriedad. En cuanto a su establecimiento, decía el artículo 28 que los Colegios Mayores podrían instituirse en las Universidades, bien mediante iniciativa y fundación directa de ellas, por parte de FET y de las J.O.N.S., por corporaciones públicas o privadas, o por particulares. Sería necesario para ello que el Ministerio, previo informe de la Universidad respectiva y del Consejo Nacional de Educación, les otorgase el prescriptivo reconocimiento mediante Orden ministerial.

El artículo 29 establecía que la organización de los Colegios Mayores y sus funciones serían reguladas por un Decreto del Ministerio de Educación Nacional de carácter normativo, a cuyos preceptos deberían someterse para la redacción de sus propios Reglamentos.⁴⁹

Siguiendo el desarrollo del articulado, el artículo 30 establecía que el SPICEU poseía funciones de difusión de la cultura, enseñanza no propiamente facultativa o profesional e intercambio científico. Sus competencias consistían en la dirección e impulso de las publicaciones universitarias, organización de cursos especiales independientes de los propiamente facultativos o profesionales, organización de cursos para extranjeros, intercambio de profesores o alumnos con Universidades nacionales o extranjeras, dirección de

⁴⁹ No obstante, los Colegios Mayores quedaron regulados a lo largo del periodo de vigencia de esta Ley sobre todo por normativa previa a la ley:

- Decreto de 19 de febrero de 1942 por el que se confirman y crean diversos Colegios Mayores en las Universidades (BOE 9 marzo). Entre los que se confirman en la Universidad de Madrid, hemos de señalar el “Cardenal Jiménez de Cisneros” y el “Santa Teresa de Jesús”, femenino. De nueva creación para esta Universidad son el Colegio Mayor “Generalísimo Franco”, el “José Antonio Primo de Rivera” y el femenino “Isabel la Católica”.

- Decreto de 21 de septiembre de 1942 por el que se organizan los Colegios Mayores Universitarios (BOE 1 octubre) y que determina la organización de dichas instituciones. Es interesante señalar que apunta a las corrientes extranjerizantes del s. XVIII como causa de la desaparición de los antiguos Colegios Mayores de tradición medieval. Con la norma, se persigue su resurgir, de manera que se convirtieran en el órgano fundamental de la Universidad, donde se completase la preparación científica encomendada a las Facultades, sirviendo de residencia obligatoria de los escolares, así como de enlace entre la Universidad y los familiares de los alumnos. Siempre manteniendo la separación masculinos – femeninos.

- Orden de 3 de octubre de 1942 por la que se aplica el Decreto de 21 de septiembre anterior, por que se organizan los Colegios Mayores Universitarios (BOE 9). Señala que los Colegios Mayores preexistentes han de regirse por el mismo Decreto de organización que los nuevos, el citado anteriormente.

- Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se modifican los artículos 5º y 12º del de 21 de septiembre de 1942 referente a los Colegios Mayores Universitarios (BOE 24). Modifica aspectos relativos a la obligatoriedad de residir en un Colegio Mayor, estableciendo algunas salvedades y aspectos relativos al nombramiento y competencias de los Directores.

Pero sería finalmente la Ley General de Educación de 1970 y el Decreto 2780/1973, de 19 de octubre, que regulaba los Colegios Mayores Universitarios (BOE 10 noviembre) los que intentarían adaptar la institución a los nuevos tiempos.

Cátedras o cursos especiales que, sin estar adscritos a los planes de estudios facultativos o profesionales, existieran o se creasen en la Universidad, cualquiera que fuera su origen fundacional y edición de programas, temas de Cátedra y publicaciones escolares, en relación con el SEU. En las funciones tercera, cuarta y quinta el SPICEU ejercería sus funciones de acuerdo con el CSIC, y en las del apartado d) en lo relativo a profesores, lo haría de acuerdo con el SEPES de FET y de las JONS, en tanto que lo que se refiere se refiere a los alumnos, lo acordaría con el SEU.

El capítulo V estaba dedicado a los órganos y servicios para el ejercicio de otras funciones universitarias y normas generales para su funcionamiento.

Según el artículo 31 los órganos encargados de las demás funciones universitarias eran la Dirección de la formación religiosa universitaria, el Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior (SEPES) de FET y de las JONS, el Sindicato Español Universitario (SEU), la Milicia Universitaria y el Servicio de Protección Escolar. La mayoría de esas instancias fueron decisivas en la vida escolar hasta los años 60.

Por el artículo 32 se establecía la Dirección de Formación Religiosa Universitaria cuya función sería ejecutar las normas establecidas de mutuo acuerdo por la Iglesia y por el Ministerio de Educación Nacional. Así habría de dirigir los cursos de cultura superior religiosa, obligatorios, y cuyas pruebas habrán de superarse favorablemente; se ocuparía de la asesoría religiosa del SEU; estaría encargada de la dirección de todas las prácticas religiosas en cualquier órgano universitario; también de la superior dirección y organización de los templos y de las instituciones religiosas o piadosas de carácter universitario.

El artículo 33 hablaba del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., con las siguientes funciones: proponer al Rector, para su aprobación y la del Ministerio de Educación Nacional, la organización de los cursos obligatorios de formación política para los escolares, cuyas pruebas habrían de superarse

favorablemente; difundir el espíritu político del Movimiento entre el profesorado universitario, comunicando a todo él sus consignas por medio de sus jerarquías específicas, previo conocimiento del Rector, y proponer a la aceptación del Rector y organizar cuantas instituciones culturales o de protección afectasen al profesorado universitario.

Importante en extremo, el artículo 34 se ocupaba del Sindicato Español Universitario de Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S. Se regiría por sus propias normas y serían sus competencias: agrupar a todos los estudiantes universitarios; encuadrar a los estudiantes comprendidos en edad militar dentro de la Milicia Universitaria y a las estudiantes universitarias, en la Sección Femenina del SEU, a través de la cual realizarían el Servicio Social de la Mujer; infundir mediante actividades e instituciones el espíritu de la Falange en los escolares; participar en la selección de los alumnos universitarios para el intercambio, pensiones o ampliación de estudios en centros nacionales o extranjeros, siendo preceptivo para la designación el informe favorable acerca de la formación política de los candidatos; conceder gratuitamente libros y material de enseñanza a los estudiantes que previa solicitud y justificación de escasez de medios económicos, debieran percibirlos, y proporcionar cuantas ayudas pudieran establecerse para sus afiliados, tendiendo a la organización de Mutualidades y Cooperativas; informar a los estudiantes sobre diversos aspectos de la enseñanza y tramitar sus asuntos a través de un Centro Nacional de Orientación y Trámite (CNOT) y de sus respectivas Delegaciones en los diferentes Distritos Universitarios; organizar de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, del Frente de Juventudes y de las disposiciones rectorales, el Servicio Obligatorio de Trabajo (SOT), cualquiera que fuera el lugar en que hubiera de realizar sus tareas; determinar, conforme a la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, los planes obligatorios de Educación Física y Deportiva y organizar Comedores y Hogares del Estudiante, Albergues de verano e invierno y cuantas instituciones fomentaran el espíritu de camaradería entre sus afiliados y mejoraran su preparación para la *vida humana* (sic).

El artículo 35 se ocupaba de la Milicia Universitaria, cuyo objetivo sería facilitar al Ejército el reclutamiento de la Oficialidad de Complemento entre una juventud selecta por su cultura y preparación y hacer compatibles, en lo posible, los estudios universitarios con la instrucción militar. La Milicia se habría de regir por normas propias y sus Jefes actuarían dentro de la Universidad de acuerdo con las autoridades académicas. Tras los discursos previos, quedó claro que la Milicia se sometía a las autoridades académicas y que en ningún caso sería aquella la encargada de mantener el orden en los recintos universitarios como se pretendió por parte de algún sector.

Según el artículo 36, el Servicio de Protección Escolar se establecía para la aplicación en la Universidad de los principios de justicia social, en aras de la protección moral y material de los escolares. Se ocuparía de conceder a los escolares *moral e intelectualmente aptos* y de modestos medios económicos las becas, pensiones o auxilios que les permitiesen cursar estudios universitarios, llevando también la administración y propuesta de concesión de becas; fijaría las tasas escolares; organizaría y dirigiría la protección y asistencia médico-sanitaria de todos los escolares; vigilaría y procuraría la mejora de las casas de alojamiento de los escolares, en tanto no residieran todos ellos en Colegios Mayores o con sus familiares; ejerciendo vigilancia sobre la vida de los escolares, y sosteniendo comunicación con los padres o tutores de los escolares, informándoles acerca de su conducta y aprovechamiento.

El Servicio de Protección Escolar ejercería estas funciones en estrecha relación con el SEU, cuyo informe previo sería preceptivo para las actividades señaladas en primero, segundo, cuarto y quinto lugar. Todos estos órganos y servicios suponían la materialización de la presencia competitiva entre ellos, de los tres grupos de poder en la institución universitaria: Iglesia, Falange y Ejército, de manera que cada uno pugnaba por ejercer mayor control tanto sobre el profesorado como sobre el alumnado.

El capítulo VI se dedicaba al Gobierno de las Universidades, de sus órganos y servicios.

El artículo 37 recordaba que el gobierno de la Universidad sería ejercido por el Rector, en tanto que, como delegados del Rector establece los siguientes cargos: Vicerrector (uno sólo), Decanos de las Facultades, Vicedecanos, Directores de los Institutos o Escuelas de Formación Profesional y de los Institutos de Investigación, Directores de los Colegios Mayores, Director del Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria, Director de la formación religiosa universitaria, Jefe del Distrito del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., y Jefe de Distrito del Sindicato Español Universitario

Este artículo convertía al Rector en “delegado del Estado” y jefe supremo de su Universidad y Distrito, de manera que todas las demás autoridades funcionan delegadamente. Se mantienen, las formalidades académicas en cuanto a formas de democracia interna, pero el verdadero poder se concentra en manos del Rector, como refuerzan los contenidos de los artículos 38, 39 y 40, por tanto tendrá tratamiento de Magnífico y Excelentísimo, y preside todos los actos académicos de su Distrito (salvo si los preside el Jefe del Estado, el Presidente de Gobierno, el Ministro de Educación Nacional u otro Ministro, o el Subsecretario o Directores Generales del Departamento). Su nombramiento y cese sería por Decreto del Ministerio de Educación Nacional, pero su suspensión hasta el cese sería por Orden Ministerial. El nombramiento debería recaer en un Catedrático numerario de Universidad y, a la vez, militante de FET y de las JONS. Falange hacía, de este modo, patente su poder y control del personal docente requiriendo que el Rector fuera, no ya fiel al Movimiento, sino directamente militante del partido.

Desde un punto de vista más orgánico, según el artículo 41 eran atribuciones del Rector la representación jurídica de la Universidad, la colación e investidura de los grados universitarios y concesión de diplomas de estudios, la superior dirección de los órganos, servicios y medios didácticos universitarios, la propuesta para la creación o reconocimiento de los Colegios Mayores y su incorporación a la Universidad, la ordenación general de los pagos con cargo al presupuesto de la Universidad y dirección general de la

vida económica de la Universidad, la expedición o visado de los documentos que haya de expedir la Universidad, la función disciplinaria y la propuesta o informe para el nombramiento o cese del personal universitario y subalterno.

Todas éstas eran sus atribuciones formales específicas, pero en realidad las atribuciones reales iban mucho más allá, su presencia, su aprobación, su autorización estaba presente en la práctica totalidad de la vida universitaria, no había asunto o actividad en que él no interviniese o hubiera de conocer: conceder la condición de alumno, conceder el traslado de expediente a otra Universidad, eximir a un alumno de su pertenencia o adscripción a un Colegio Mayor, rechazar por impropio el alojamiento de un alumno, dar la aprobación para la organización de los cursos, conceder a un docente permiso para ausentarse de la localidad en que imparte sus clases, concederle un permiso, es el responsable de los medios didácticos... En fin, el Rector era responsable último de buena parte de las actividades universitarias.

El Vicerrector, como quedaba recogido en el artículo 42 tenía funciones delegadas del Rector. A su vez, le sustituía el Decano más antiguo. El cargo habría de recaer sobre un Catedrático numerario de Facultad a propuesta en terna por el Rector. Su designación y cese se haría por Orden Ministerial y tendría tratamiento de Excelentísimo.

Le seguía el Decano que según se recogía en el artículo 43, sería un catedrático numerario, de nombramiento y cese por Orden ministerial a propuesta en terna por el Rector, con tratamiento de Ilustrísimo. Como competencias delegadas del Rector el Decano ejercía la vigilancia y ejecución de las normas, el informe al Rector acerca del profesorado y elevaba a la aprobación rectoral la organización de los cursos, el índice de necesidades de la Facultad, la elaboración del presupuesto y las denuncias por faltas académicas del personal de la Facultad y de los escolares para su subsanación. Para el ejercicio de funciones que no fueran de carácter ejecutivo e inspector, el Decano debería oír a la Junta de Facultad.

El artículo 44 se destinaba al Vicedecano, de nombramiento y cese por Orden ministerial, a propuesta de entre una terna de Catedráticos numerarios por el Rector. Tendría tratamiento de Ilustrísimo. El artículo 45 se ocupaba de los Directores de Institutos o Escuelas de Formación Profesional, que serían nombrados de forma análoga a los Decanos, por Orden ministerial entre una terna propuesta por el Rector que debería oír previamente al/los Catedrático/-os de las disciplinas a que afectase el Instituto de Investigación Científica. Ejercerían funciones similares al Decano en sus respectivos organismos.

El artículo 46 destinado a los Directores de Colegios Mayores, estipulaba su nombramiento y cese mediante Orden ministerial, a propuesta del Rector y previo informe de la Secretaría General de FET y de las JONS. Cuando los Colegios fueran fundación de Falange, de Corporaciones o de particulares, el Rector trasladaría al Ministerio informe de la propuesta del Patronato o Entidad fundadora. Los Directores de los Colegios Mayores habrían de poseer siempre grado académico superior o título equiparable. Sus competencias incluían la vigilancia y ejecución de las normas para el cumplimiento de la función educativa; elevar a la aprobación rectoral las medidas relacionadas con la organización de los actos y cursos complementarios educativos, la propuesta para el nombramiento del personal y cursar las denuncias por faltas académicas de todo el personal del Colegio; elevar a la Junta de Gobierno los presupuestos y las cuentas del Colegio para su aprobación, y la inspección inmediata de los servicios administrativos propios del Colegio Mayor y la organización de su régimen interno, de acuerdo con sus Estatutos.

Cuando el Colegio Mayor fuera fundación de Falange, de Corporaciones o de particulares, el Director tendría las mismas funciones y obligaciones (*que si fuera fundado directamente por la Universidad*), pero gozaría de autonomía en cuanto a la designación de su personal, concesión de becas, y en materia administrativa y económica, de acuerdo con las normas fundacionales.

Por el artículo 47 se establecía un Director del Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria. Nombrado por Orden ministerial de entre una terna de Catedráticos numerarios de Facultad

propuesta por el Rector, sus competencias consistían en la preparación y propuesta al Rector para su aprobación de toda la labor propia del Secretariado, ya sean cursos, conferencias o publicaciones, y la entrega al Administrador de la Universidad de las ediciones de libros o revistas una vez impresas y preparación del proyecto de presupuesto para someterlo al Rector.

Existiría un Director de formación religiosa universitaria, cuyo cargo quedaba regulado en el artículo 48. Nombrado por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta del respectivo Ordinario eclesiástico, previo informe del Rector, entendía en cuanto a la organización de las enseñanzas de cultura superior religiosa, que eran obligatorias para todos los escolares, y la vigilancia del desarrollo de estas enseñanzas; además de encargarse de redactar una propuesta-informe al Rector para su nombramiento, previa aprobación por el Ordinario eclesiástico, del personal necesario para la enseñanza o la formación religiosa, así como la custodia y conservación de los templos universitarios.

El artículo 49 se ocupaba del Jefe del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., que habría de ser Catedrático numerario y *militante del Partido*, nombrado para cada Universidad y Distrito Universitario por el Delegado Nacional de Educación de FET de las JONS, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, previo informe del Rector. Podría ser separado del cargo por el Delegado Nacional o por el Ministerio, y tenía como competencias la organización de los cursos escolares de formación política, cuyos planes generales serán establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, con arreglo a las normas y programas que designara el Ministro Secretario General del Movimiento. Asimismo, debería hacer una propuesta-informe al Rector, cumplidos previamente los trámites jerárquicos pertinentes respecto a FET de las JONS, de las personas que hubieran de ser encargadas de los cursos de formación política, para su aprobación y nombramiento por el Ministerio de Educación Nacional, y supervisaría la organización de los actos político-universitarios previa aprobación del Rector.

Por lo demás, tenía capacidad para elevar propuestas al Rector y para ejecutar cuantas iniciativas juzgase conducentes a la difusión del espíritu del Movimiento en el profesorado universitario, así como las relativas a instituciones culturales y de protección al profesorado. El Jefe del SEPES habría de ser efectivamente militante de Falange.

El artículo 50, no menos decisivo para la vida práctica de la Universidad, se ocupaba del Jefe del Sindicato Español Universitario para cada Universidad y Distrito universitario. Nombrado por el Jefe Nacional del SEU de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, previo informe del Rector, podría ser separado de su cargo por el Jefe Nacional del SEU y sería suspendido en sus funciones por el Ministro de Educación Nacional a propuesta razonada del Rector. De acuerdo con la Ley del Frente de Juventudes y sus propios Estatutos, entendía en la dirección y organización de todos los estudiantes en la disciplina del Movimiento, difundiendo en ellos su espíritu y doctrina; la realización de actos políticos y culturales, en colaboración con el SEPES; la representación de todos los escolares ante la corporación universitaria y sus órganos y servicios; la ejecución de las funciones establecidas en el artículo 34 de esta Ley (dedicado al SEU); la ejecución, previa aprobación del Rector, de cuantas iniciativas juzgara oportunas para mejorar la formación de los escolares en tanto hubieran de efectuarse dentro del ámbito universitario, y la elevación al Rector de cuanto creyera oportuno sugerirle para el mejoramiento de la labor universitaria. El SEU, como sabemos, era el órgano de encuadramiento obligatorio de los escolares en la Universidad.

El capítulo VII de la Ley estaba dedicado a los órganos de representación corporativa de las Universidades y los órganos consultivos para su gobierno. El único órgano de representación corporativa, como establecía el artículo 51, era el Claustro Universitario. Los órganos consultivos para el gobierno de las Universidades, lo eran tanto del Rector como de las autoridades inmediatas de los diversos órganos y servicios universitarios, eran la Junta de Gobierno y el Consejo de Distrito Universitario.

El Claustro Universitario, según el artículo 52, estaba presidido por el Rector y el Secretario general de la Universidad. Tendrían derecho y obligación de concurrir a las reuniones convocadas por el Rector todos los Catedráticos y profesores, así como las autoridades inmediatas de los diferentes órganos y servicios universitarios. También podrían concurrir los Catedráticos jubilados y excedentes y los Doctores que se hubieran incorporado a él, según vimos ya en el proyecto de ley más arriba. El Claustro se reuniría preceptivamente para los actos solemnes corporativos (apertura de curso, recepción y juramento de los nuevos profesores y escolares, investidura de grados de Licenciado y Doctor, tomas de posesión del Rector y Vicerrector, solemnidades religiosas de la Universidad, asistencias de la Universidad a fiestas y actos solemnes a que fuera invitada, y todos aquellos de naturaleza análoga que a juicio del Rector merecieran la presencia corporativa de la Universidad).

De la Junta de Gobierno se ocupa el artículo 53. Órgano colectivo de consulta y asesoramiento del Rector en sus funciones directivas, la Junta sería presidida por el Rector, actuando como Secretario el general de la Universidad u estaría formada por el Vicerrector, los Decanos de las Facultades y los Jefes de Distrito del SEPES y del SEU.

El Rector convocaría a sus sesiones a las autoridades inmediatas de los restantes órganos o servicios universitarios, así como al Administrador e Interventor general. Para que pudiera realizar su función asesora, el Rector debería consultarla obligatoria y periódicamente sobre los asuntos concernientes a la vida universitaria.

El Consejo de Distrito Universitario, establecido en el artículo 54, sería presidido por el Rector y como Secretario, actuaría el general de la Universidad. Asesoraría al Rector en el ejercicio de las funciones de inspección y orientación de las actividades docentes y culturales en el Distrito Universitario que le atribuyera la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Nacional.

Las Juntas de Facultad, por el artículo 55, quedaban conformadas como órganos de asesoramiento de los Decanos. Para su función asesora serían

convocadas obligatoria y periódicamente por los Decanos e informadas de todos los asuntos concernientes a la respectiva Facultad. Serían presididas por los Decanos y actuaría como Secretario el de la Facultad. Tendrían derecho a formar parte de ellas, con la obligación de asistir a sus sesiones, todos los Catedráticos y profesores de Facultad y los Delegados de los Jefes del Distrito del SEPES y del SEU. Las demás Juntas de los distintos órganos y servicios se constituirían de forma análoga y tendrían funciones semejantes a las de la Facultad en el ámbito de su competencia.

Por lo demás, realmente el Claustro es desde ahora simplemente un órgano de representación corporativa, siendo órganos de consulta y asesoramiento la Junta de Gobierno (para la Universidad en concreto) y el Consejo de Distrito Universitario (para las funciones de orientación e inspección en el resto del Distrito).

El capítulo VIII estaba dedicado al profesorado universitario, sus obligaciones y derechos. De acuerdo al artículo 56, los profesores universitarios serían Catedráticos numerarios o extraordinarios de Facultad, Profesores adjuntos de Facultad, Ayudantes para clases prácticas, clínicas y laboratorios u Profesores encargados de Cátedra o curso en cualquier órgano o servicio universitario. Existía una marcada diferenciación entre los Catedráticos, personal fijo por oposición y omnipotentes “dueños de su cátedra”, y el resto del profesorado contratado y/o temporal.

Así lo hacía ver el artículo 57, por el que los Catedráticos numerarios de Facultad universitaria formarían un Cuerpo de funcionarios *del Estado*, y una vez Fijado el número, se formaría el Escalafón general de Catedráticos numerarios de Universidad. Se ascendería en dicho escalafón, como es notorio, por rigurosa antigüedad de nombramiento.

El ingreso en el Cuerpo sería mediante oposición, cuyo procedimiento se regiría por un Reglamento, como fija el artículo 58. Según ese reglamento, las Cátedras vacantes serían provistas bien por oposición directa o por concurso de traslado entre catedráticos numerarios de la misma asignatura. La

convocatoria siempre se haría a Cátedra o Cátedras iguales y a una Universidad determinada.

Cuando la provisión fuera mediante concurso, éste sería resuelto por el Ministerio de Educación Nacional. Sería mérito preferente para el candidato en un concurso el haber desempeñado con asiduidad la Cátedra de la que fuese propietario en la correspondiente Universidad.

Por lo demás, la oposición se realizaría siempre en Madrid⁵⁰, en turno único y ante un Tribunal nombrado por el Ministerio de Educación Nacional y constituido por cinco miembros, tres como mínimo Catedráticos de igual o análoga disciplina, uno designado entre personas especializadas en la materia, y el Presidente, que debería pertenecer al CSIC, al Consejo Nacional de Educación o a las Reales Academias.

Los ejercicios serían orales y escritos, teóricos y prácticos, valorándose las publicaciones científicas, la labor docente y la metodología de la disciplina, así como su pedagogía. Serían requisitos imprescindibles para tomar parte estar en posesión del título de Doctor, presentar un trabajo científico escrito expresamente para la oposición, haber desempeñado función docente o investigadora efectiva durante dos años como mínimo en una Universidad del Estado, en Institutos de Investigaciones o Profesionales de la misma o del CSIC, o ser Profesor numerario de Escuela especial superior o Catedrático de Centros oficiales de Enseñanza Media, además de expresar públicamente su firme adhesión a los principios fundamentales del Estado, acreditada mediante certificación de la Secretaría General del Movimiento (en este caso ya no se requería ser militante, sino mostrar su adhesión fehaciente), contar con licencia del Ordinario respectivo, cuando se tratase de eclesiásticos, y seguir los demás trámites e informes que el Reglamento determinase.

El nombramiento sería siempre a propuesta del Tribunal examinador y con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional.

⁵⁰ Ello, junto a la obligatoriedad de leer la tesis en Madrid reforzaba el centralismo universitario madrileño.

A partir de lo fijado en el artículo 59, serían obligaciones y derechos de los Catedráticos numerarios:

- a) Considerar la labor universitaria como servicio obligatorio a la Patria
- b) Prestar juramento de fiel servicio, quedando sometido a la disciplina académica; uso del traje doctoral y medalla de Catedrático en todos los actos solemnes universitarios; asistencia a los Claustros y a las Juntas de Facultad a que pertenezca y desempeño de los cargos de gobierno que le pudieran ser confiados en la Universidad.
- c) Optar en concurso de traslado a las Cátedras vacantes de su disciplina en cualquier Universidad.
- d) Fijar su residencia en la localidad en que radicara la Facultad en que prestase servicios, que sólo podría abandonar con permiso del Rector.
- e) Redacción de la ficha diaria de Cátedra, reflejando en ella la labor desarrollada y sometiéndola cada día al visado del Decano.
- f) Durante el periodo lectivo, disfrutarían anualmente de un permiso de hasta quince días continuados, concedido por el Rector y que podría ser ampliado hasta treinta días por el Ministerio de Educación Nacional. En caso de enfermedad, le sería concedida licencia por el Ministro a propuesta del Rector, con el informe favorable del Decano, prorrogable hasta seis meses con todo el sueldo.

En caso justificado, podrían obtener dispensa de la función docente durante un curso para finalidades científicas o pedagógicas, mediante Orden del Ministro de Educación Nacional, a propuesta del Rector, con reserva de Cátedra, que desempeñaría entretanto un profesor adjunto o un encargado de curso y finalmente, podrían obtener la excedencia voluntaria después de dos años efectivos de ejercicio de la enseñanza (concedida por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta del Rector), con pérdida del sueldo y por un tiempo no inferior a un año ni superior a diez. El excedente habría de reingresar mediante nueva oposición o por concurso de traslado entre Catedráticos numerarios, cuando existiera vacante de su Cátedra, habiendo de esperar a las resultas finales del mismo.

- g) Podría obtener la jubilación voluntaria según las leyes de los Funcionarios del Estado, así como la excedencia forzosa (otorgada por el Ministerio de Educación Nacional), siempre con pérdida del sueldo y con

reserva de su Cátedra, cuando lo exigiera el desempeño de un alto cargo en el Gobierno de la nación, por el tiempo que durase su desempeño. La Jubilación forzosa, vendría como sanción según el Reglamento de disciplina académica, y existiría también el cese voluntario o forzoso en su caso, por medida disciplinaria, con pérdida de todos sus derechos.

h) Entre otras obligaciones, todavía quedaba el presentar a la aprobación rectoral los temas que habrían de desarrollarse en el cuatrimestre/-es de la disciplina. El Programa aprobado, habría de ser explicado en su integridad y de acuerdo con las normas inspiradoras del Estado.

i) Intervenir en las pruebas académicas que determinasen los Reglamentos de la Facultad respectiva.

j) La percepción del sueldo sería con arreglo a su categoría en el Escalafón correspondiente. También formaría parte de la Mutualidad de Catedráticos de Universidad.

k) Finalmente, le incumbía al catedrático el ejercicio por escrito ante el Rector o el Ministro, del derecho de petición o queja en asuntos académicos.

El artículo 60 hablaba de un asunto ligado a la escasez de profesores y a la forma en que Falange trató de reforzar su papel, el desdoblamiento de Cátedra. Cuando el número de alumnos o las necesidades de la enseñanza lo aconsejasen, el Ministerio, a propuesta del Rector, oída la Junta de Facultad y la de Gobierno, podría desdoblar una Cátedra.

El Ministerio podría incluir en el Escalafón general de Catedráticos numerarios un máximo de diez Catedráticos que en lugar de estar adscritos a una Cátedra propia, lo estarían a una con titular cuando a éste se le hubiera concedido el privilegio de no tener que explicar el conjunto de su disciplina. Serían propuestos de entre los numerarios de la misma asignatura que ya figurasen en el Escalafón por el titular privilegiado, propuesta que aprobada por el Rector, oída la Junta de Facultad y la de Gobierno sería elevada al Ministerio, que resolvería por Orden ministerial previo informe del Consejo Nacional de Educación. Estos Catedráticos tendrían derecho a participar en los concursos de traslado de las Cátedras que estuvieran ocupando.

En casos excepcionales, además, y de acuerdo con el artículo 61, podrían nombrarse Catedráticos extraordinarios. Habrían de ser titulares de grados académicos superiores y de notorio prestigio en el orden científico. La iniciativa competía al Ministerio y Rector, pero la propuesta debería ir informada por el CSIC, el Consejo Nacional de Educación y la Real Academia correspondiente. Propuesta e informes habrían de estar ampliamente motivados, con expresión de la obra científica, publicaciones, investigaciones y cualquier otro dato que permitiera establecer juicio de valor de su personalidad científica ante los organismos y entidades culturales nacionales y extranjeras.

Desempeñarían la Cátedra para la que hubieran sido nombrados, incluida o no en el plan general de la Facultad respectiva, con iguales derechos y obligaciones que los numerarios, excepto su sueldo que sería fijo y constaría en el Decreto de nombramiento. No formarían parte del Escalafón de Catedráticos numerarios, por lo que al quedar vacante la Cátedra que se les hubiera creado, ésta se consideraría suprimida.

Los Profesores adjuntos, según el artículo 62, accederían a sus plazas mediante concurso-oposición y previa propuesta rectoral al Ministerio de Educación Nacional. Su nombramiento sería por cuatro años, prorrogables por otros cuatro. Debían estar en posesión del grado de Doctor y jurar firme adhesión a los principios fundamentales del Estado, acreditada mediante certificación de la Secretaría General del Movimiento. Como méritos, se les valoraría una labor científica comprobada mediante publicaciones y experiencia docente. En el ejercicio de sus funciones se les aplicarían preceptos similares a los Profesores numerarios: prestación de juramento, uso del traje académico, residencia, labor docente, permisos, disciplina, pruebas y derechos de petición.

El Rector podría nombrar, según consta en el artículo 63, Ayudantes para clases prácticas, clínicas o laboratorios a propuesta del Decano o Director del órgano en que hubieran de prestar servicio, oído el Catedrático o Profesor interesado, previo informe de la Jefatura Provincial del Movimiento. No podrían, en ningún caso, asumir la explicación de lecciones teóricas de los programas. Deberían poseer el grado de Licenciado. Cuando estuviera vacante una

Cátedra numeraria, según el artículo 64, el Rector podría proponer al Ministerio el nombramiento de un Profesor encargado de Cátedra por un periodo de tiempo que no podría exceder de tres años.

El encargado habría de ser Doctor y acreditar su experiencia profesional, así como su firme adhesión a los principios fundamentales del Estado mediante certificación de la Secretaría General del Movimiento. Asimismo, podrían ser agregados al servicio de una Cátedra las personalidades profesionales pertenecientes a Centros o Instituciones públicas o privadas que hubieran sido incorporadas a la vida universitaria por precepto legal. Dichos Profesores agregados podrían ser tanto Licenciados como Doctores.

También podrían nombrarse encargados de Cátedra, como dice el artículo 65, para los Institutos o Escuelas Profesionales, cuando no tuvieran escalafón propio. En caso de vacante, las Cátedras numerarias serían desempeñadas por Profesores adjuntos o a falta de ellos, por profesores encargados de curso que poseyeran título de Licenciado o Doctor. Ello dice el artículo 66.

Igualmente, el Ministerio podría nombrar Profesores encargados de curso para la enseñanza religiosa (en los Institutos o Escuelas profesionales) y de formación política, así como para la educación complementaria de los escolares. En el ejercicio de sus funciones les serían aplicables los mismos preceptos que a los profesores adjuntos.

Según el artículo 67, los profesores de los Institutos de Investigación serían nombrados por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta del Rector, de entre Catedráticos numerarios o extraordinarios de Facultad y recibirán una gratificación aparte de sus emolumentos de Catedráticos. Serían sus obligaciones, aparte de las propias de Catedráticos, las que fijara el Rector de la Universidad y, una vez obtenido el informe del CSIC, serían aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional.

El capítulo IX se dedicaba a los escolares, sus obligaciones y derechos. La cualidad de estudiante universitario se adquiría por concesión del Rector, decía rotundo el artículo 68. Los requisitos a cumplir eran los siguientes: estar en posesión del título de Bachiller, aprobar el examen de ingreso, dictamen sanitario favorable previa formación de ficha médica del Servicio de Protección Escolar y cuantos datos pudiera aportar el candidato para la fijación de las tasas académicas que debería abonar, concesión de becas o auxilios en su caso. Ante la negativa del Rector para la admisión como alumno, como permitía el artículo 69, se podía recurrir ante el Ministerio de Educación Nacional.

Una vez fijada la tasa académica, el estudiante obtendría el Libro Escolar y su inscripción en el primer curso de Facultad, Instituto o Escuela y en un Colegio Mayor en calidad de residente o adscrito, *“comunicando en este caso, con toda precisión cuál habría de ser su alojamiento, que podría rechazar como impropio el Rector”*. Esto demuestra el fuerte control que trató de establecerse, aunque sin mucho éxito, entre los estudiantes.

En el acto solemne de comienzo de curso cada estudiante prestaría juramento de cumplir fielmente sus obligaciones universitarias, continuaba el artículo 69, recibiría la carta de identidad y el distintivo del SEU que le acreditarían y le permitirían ostentar su calidad y dignidad de escolar universitario, quedando sometido a la disciplina académica.

Eran obligaciones y derechos del escolar, de acuerdo con el artículo 70, considerar la labor universitaria como servicio obligatorio a la Patria; la pertenencia al SEU; ostentar su uniforme o, en su caso, el de la Milicia Universitaria en los actos solemnes; usar el distintivo del SEU; asistir obligatoriamente a las lecciones, tanto de los cursos facultativos como de enseñanza religiosa, de formación política y demás enseñanzas complementarias, a no ser que se lograra obtener, según las normas de esta ley, la dispensa de escolaridad establecida para los diversos estudios; recibir asistencia del Servicio de Protección Escolar y trasladarse para continuar sus estudios a otra Universidad en casos justificados a juicio del Rector; prestar los

servicios universitarios, atendida la diversidad de sexos; obtener, por medio del Servicio de Protección Escolar, para conocimiento de sus padres o tutores, noticias periódicas del proceso de su vida académica; ejercer individualmente, por escrito, ante el Decano, el Rector y el Ministerio el derecho de petición o queja en toda clase de asuntos académicos por los conductos reglamentarios y a través de los mandos del SEU.

El capítulo X remitía a la organización de los medios didácticos. Todos los medios didácticos de las Universidades, dice el artículo 71, como Bibliotecas, Archivos, Museos, Seminarios, Laboratorios, Clínicas y Hospitales Clínicos, Jardines Botánicos, Talleres y otros (...) se considerarían concedidos a las Universidades para su uso, cuando fueran propiedad del Estado, encomendándoseles su mejor organización, incremento, perfecta instalación y custodia.⁵¹

El Rector, como Jefe Superior de todos los órganos, servicios y medios didácticos universitarios, establecería las normas de utilización, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, según dicta el artículo 72. A su vez, el 73, recogía las funciones delegadas por el Rector en relación con los medios didácticos, y el artículo 74 estaba dedicado a las Bibliotecas de las Universidades. Aunque constasen de diferentes sedes, se insiste en que éstas constituirían una unidad con el nombre de Biblioteca de la Universidad y contarían con un catálogo general y los parciales necesarios.

El Director de la Biblioteca sería el Bibliotecario general, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional mediante concurso entre funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, previo informe del Rector y lo mismo para el personal técnico o auxiliar necesario. Una vez nombrados, éstos se considerarían funcionarios al servicio de la Universidad, sometidos a las órdenes reglamentarias del Rector y a la disciplina académica.

⁵¹ Es curioso señalar cómo en esta Ley se hace una mención específica a los Archivos considerados como medios didácticos, con mucha más relevancia de la concedida posteriormente, aún en nuestros días, depositando en la Universidad la responsabilidad de “su mejor organización, incremento, perfecta instalación y custodia”, encomienda que, al menos en lo que respecta al Archivo, fue de escaso cumplimiento.

El personal subalterno se nombraría a su vez mediante relación de trabajo, en la misma forma que el general de la Universidad. Por el artículo 75 se fijaban las obligaciones y derechos del Bibliotecario general y del personal de Biblioteca: quedaban bajo las órdenes del Rector y deberían procurar la ejecución de las normas para el régimen interno de custodia, adquisición, catalogación y servicio de libros a los lectores.

El Bibliotecario general sería, al mismo tiempo, Director del Archivo Histórico Universitario, que se formaría con los fondos antiguos y los procedentes de los Archivos Administrativos, de los que pasarían a aquél todos los documentos con antigüedad superior a veinte años, según el artículo 76.⁵²

Por último, y según el artículo 77, los Museos de Ciencias, Clínicas y Hospitales Clínicos, Laboratorios, Observatorios, Talleres, Granjas de experimentación y análogos, tendrían un Director propio, nombrado igual que el Bibliotecario general.

El capítulo XI remitía al régimen y personal administrativo y subalterno. El régimen administrativo de las Universidades, por lo que puede leerse en el artículo 79, se regularía de acuerdo a las siguientes normas: la forma de los documentos y su tramitación sería uniforme en todas las Universidades, las Universidades funcionarían con autonomía administrativa, salvo que preceptivamente debiera elevarse un asunto a conocimiento o resolución del Ministerio de Educación Nacional.

⁵² Cabe destacar la alusión explícita que se hace en una ley general de estas características al Archivo, marcando claramente la diferencia entre Archivo Histórico y Archivos Administrativos, estableciendo incluso el plazo de las transferencias en veinte años. Primaba en esta organización el criterio historicista que establecía una división clara entre los archivos históricos (considerados medios didácticos y los administrativos, dependientes de la Secretaría General de la Universidad), con ello se perpetuaba la situación de dependencia del Archivo Histórico respecto de la Biblioteca, ya que al poseer una única Dirección y generalmente escasez de medios, lo habitual es que los esfuerzos y dotación, tanto material como personal, favorecieran en mayor medida a la Biblioteca en detrimento del Archivo. Los Archivos administrativos, bajo la competencia del Secretario General, se encontraban con la inexistencia de un sistema de transferencias fluido, ya que el Archivo Histórico permanecía colapsado lo que hacía imposible el ingreso de documentación, así como de personal técnico que se encargase de ellos, siendo ésta una de las principales causas del abandono de esas fuentes imprescindibles para la investigación.

De acuerdo con lo reglamentado en el artículo 80, el jefe inmediato de todos los servicios administrativos de cada Universidad sería el Secretario general, bajo las órdenes directas del Rector. Se requeriría ser Catedrático numerario para ocupar el cargo, y el elegido sería nombrado por el Ministerio, a propuesta en terna del Rector. Sus competencias consistirían en la jefatura directa del personal administrativo e informe previo al Rector sobre la plantilla de personal administrativo, técnico y auxiliar. El Rector, oída la Junta de Gobierno elevaría la propuesta al Ministerio. Asimismo, el Secretario informaría los nombramientos del personal que hubiera de cubrir la plantilla. Igualmente, se contempla la jefatura inmediata de los servicios administrativos de la Universidad, aún cuando algunos de éstos pudieran tener Secretario propio; la expedición y certificación de los documentos y acuerdos universitarios que no correspondieran a Secretarios específicos; la redacción y custodia de los libros de actas del Claustro Universitario y la Junta de Gobierno; la custodia y ordenación del Archivo Administrativo de la Universidad⁵³; la propuesta al Rector de iniciativas para mejorar la organización de los servicios administrativos y de los órganos y servicios docentes y técnicos de la Universidad; la redacción, al final del curso, de la Memoria, utilizando las fichas de Cátedra de los Profesores y el Archivo universitario, recogiendo datos estadísticos; la organización de los actos solemnes universitarios y la conservación y cumplimiento del Protocolo y el ceremonial.

El Oficial Mayor, por el artículo 81, ejercería sus funciones bajo las órdenes inmediatas del Secretario general y las superiores del Rector. El cargo recaería en un funcionario del Cuerpo Técnico-administrativo del Ministerio de Educación Nacional. El nombramiento y cese serían similares al del Secretario general. Eran responsabilidades suyas el ejercicio de las funciones propias del Secretario en caso de vacante, enfermedad, o ausencia legal; la coordinación de las Secciones y Negociados administrativos; la formación anual del inventario de todo el material de la Universidad, así como la custodia de los edificios y material no estrictamente docente. Igualmente se ocuparía de la jefatura inmediata del personal subalterno; y la vigilancia y organización de

⁵³ Frente al Archivo Histórico considerado como “medio didáctico”, el Archivo administrativo se consideraba claramente bajo la competencia del Secretario general como un órgano administrativo más.

estos servicios y la propuesta al Rector, a través del Secretario, para su elevación al Ministerio de Educación Nacional, de la plantilla necesaria.

Siguiendo con el artículo 82, tenemos que las Facultades, Institutos o Escuelas Profesionales y Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión universitaria tendrían su propio Secretario de cada centro. Se designaría y cesaría por Orden ministerial, a propuesta del Rector, y de acuerdo con el Decano o Jefe director del órgano correspondiente. Habrían de ser Catedráticos o Profesores universitarios para las Facultades y Secretariado de Publicaciones, y Profesores de Institutos o Escuelas profesionales para estos órganos y servicios y ejercerían las funciones propias del cargo en sus correspondientes órganos y servicios. En cuanto a la plantilla de personal subalterno, como dicta el artículo 83, una vez fijada, la nombraría el Rector y se regiría por la legislación común de trabajo.

El capítulo XII se refería a los medios económicos para la función universitaria y el presupuesto general de las Universidades. Las normas que regían el régimen económico de las Universidades quedaban fijadas en la Ley del 43, por medio del artículo 84.

Los ingresos provendrían de tasas académicas, expedición de títulos, certificaciones y similares, venta de publicaciones y otros, y se emplearían en el cumplimiento de los fines de la Universidad. El 30% de estos ingresos se destinaría a la formación del capital universitario. Cada Universidad tendría su patrimonio que administraría autónomamente, con la limitación de que habría de adaptar su Presupuesto general único a las normas de la presente Ley y sus Reglamentos; asimismo habría de destinar a los capítulos, artículos y apartados correspondientes del mismo las subvenciones que para fines específicos y concretos les fueran concedidas por el Estado, la Provincia, el Municipio y otras Corporaciones o por particulares; deberían someter a aprobación del Ministerio de Educación Nacional el presupuesto anual y las cuentas del ejercicio anterior, que serían remitidas por el Ministerio al Tribunal de Cuentas, una vez aprobadas por aquél, según lo establecido por la Ley de Contabilidad.

Los presupuestos universitarios deberían ser presentados dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de los Presupuestos generales del Ministerio de Educación Nacional, y las cuentas, a su vez, en el mes de enero.

Por el artículo 85 se establecían los conceptos que integrarían la Sección de ingresos:

- a) Rentas de patrimonio no adscritas a fines especiales
- b) Rentas de patrimonio adscritas a fines especiales
- c) Aportaciones obligatorias del Estado no adscritas a fines especiales
- d) Aportaciones obligatorias del Estado adscritas a fines especiales
- e) Ingresos por el Libro Escolar, tasas académicas, títulos, certificaciones y análogos.
- f) Ingresos por descuento de Habilitación de personal y material, ejercida por el Administrador general.
- g) Ingresos por publicaciones
- h) Legados, donativos o subvenciones que se recibieran para su inversión o para el incremento patrimonial.
- i) Abintestatos de todo el personal docente universitario cuando hubieran de pertenecer al Estado.

En cuanto al artículo 86, establecía que para los derechos fiscales académicos se fijarían tasas generales, independientemente de las deducciones, incluso supresión, a que pudieran tener derecho “según dotas intelectuales y morales de los escolares”, así como los medios económicos de sus padres. Una disposición especial posterior determinaría la escala de tasas, así como las normas para su aplicación.

Las rentas del Patrimonio Universitario no adscritas a fines especiales, habrían de ser destinadas a gastos de instalación permanente y medios didácticos, según el artículo 87. Por el 88, a su vez, las rentas adscritas a fines especiales por sus donantes, habrían de figurar en el Presupuesto de gastos adscritas a los fines propios, en tanto que según el 89, el Estado consignaría en el Presupuesto de Educación una cantidad no inferior a ciento cincuenta mil pesetas para cada Universidad, en concepto de aportación no adscrita a fines

especiales. Este tipo de aportaciones, así como las de otras Corporaciones públicas no adscritas a fines especiales, habrían de ser destinadas a gastos generales, así como a medios didácticos y material docente.

Según el artículo 90 el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional consignaría, además de las cantidades destinadas a sueldos y gratificaciones de personal, construcción o adquisición de edificios universitarios nuevos o ampliaciones de los actuales, otras (cantidades) no libradas para su ingreso en el Presupuesto universitario según los preceptos generales, y que deberían ser destinadas a las aportaciones a los fines especiales siguientes:

- a) Bibliotecas, Museos, Archivos y Seminarios⁵⁴.
- b) Clínicas y Hospitales Clínicos.
- c) Laboratorios, especificando cada uno de ellos en caso de que la subvención fuera para un destino expreso.
- d) Granjas, Jardines Botánicos, Talleres e instalaciones y material deportivo.
- e) Pequeñas reparaciones en los edificios universitarios.
- f) Reparaciones y adquisición de mobiliario y material de Laboratorios y Clínicas, Hospitales Clínicos y material no inventariable para los servicios universitarios.
- g) Becas y protección escolar.
- h) Viajes y excursiones de carácter científico y cultural.

Todo crédito destinado a la Universidad que figurase en el Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, así como los extraordinarios concedidos a las mismas, se librarían en firme al Administrador general de la Universidad y habrían de figurar en los Presupuestos en la partida de ingresos y en los correspondientes capítulos de gastos para inversión en los fines especiales a que se destinasen. En ningún caso se librarían las consignaciones que figurasen en los Presupuestos generales a favor de las Universidades mientras éstas no estuvieren aprobadas por el Ministerio, tanto los Presupuestos como

⁵⁴ Según lo expuesto, se trata de fondos al margen del Presupuesto “general” que se consideran destinados a fines especiales. Lo que no se sabe es si existía una partida independiente para cada objetivo o si se trataba de un montante global que repartía discrecionalmente la Universidad.

las cuentas. Los ingresos generados por el Libro Escolar, tasas académicas, títulos, certificaciones y análogos, figurarían en el Presupuesto, dice el artículo 91, como no adscritos a fines especiales.

De estos ingresos, descontado el 30 % (destinado a la formación del capital universitario), el 20% se emplearía en gastos permanentes o de material universitario y la cantidad restante (50%), al abono de las gratificaciones del personal universitario docente o administrativo, formándose un fondo común de todas las Universidades que luego se distribuiría proporcionalmente, según disposiciones especiales. La mitad de los ingresos en efectivo por expedición por títulos académicos se destinaría a la retribución del profesorado numerario de las Universidades.

Los ingresos por descuento de habilitación de material y personal, realizada por el Administrador general de la Universidad, se destinarían a la Mutualidad de Catedráticos numerarios, única para todas las Universidades. Eso disponía el artículo 92, en tanto que el 93 decía que los ingresos por publicaciones figurarían en el Presupuesto para ser destinados a nuevas publicaciones y al abono de honorarios o derechos de los autores respectivos.

El artículo 94 hablaba de los legados y donativos, en el sentido de que cuando no dispusiera lo contrario el testador, donante o abintestato, se entenderían percibidos para incremento del capital universitario. En otro caso figurarían como ingresos en el Presupuesto del año siguiente. También se destinarían a capitalización, además de los ingresos “por tasas académicas, expedición de títulos, certificaciones y similares, venta de publicaciones y otros”, el superávit de las cuentas anuales, que no podrían ser aprobadas si no se justificaba en ellas la capitalización correspondiente al ejercicio anterior, presentando al efecto la relación por duplicado de los bienes y valores que, al fin de cada ejercicio, constituyeran la totalidad del capital universitario.

La obligación de capitalizar, en fin, no sería dispensada a las Universidades mientras no pudieran sostener con las rentas, gratuitamente, al veinticinco por ciento, como mínimo, de los alumnos alojados en los Colegios

Mayores de fundación directa universitaria y atender además el posible déficit en el sostenimiento de los mismos. Cuando el Ministerio, a petición de la Universidad, reconociera que se había acumulado capital suficiente para las indicadas atenciones, se podría autorizar que los fondos destinados a capitalización se aplicaran a los fines de cultura que se estimase conveniente.

El Patrimonio de las Universidades, según el artículo 95, estaría formado por los bienes siguientes:

- a) Bienes propios
- b) Bienes procedentes de fundaciones docentes civiles extinguidas en el Distrito Universitario
- c) Los que las leyes le atribuyeran en adelante
- d) Legados y donaciones (para capitalización)
- e) Edificios que se adquiriesen o construyeran

En cuanto al Presupuesto de cada Universidad, sería único y anual. Se redactaría conforme a la presente Ley y se aprobaría por el Ministerio de Educación Nacional. En él, figurarían en los capítulos de gastos todos los relativos a los distintos órganos universitarios, con excepción de los Colegios Mayores fundados por iniciativa privada. El Presupuesto de la Universidad sería administrado según las normas generales de contabilidad por el Rector como ordenador de pagos, el Administrador general y el Interventor general, como estipula el artículo 97.

El Administrador general, según lo recogido en el artículo 98, sería nombrado por el Ministerio a propuesta del Rector. El nombramiento recaería preferentemente en un Catedrático numerario de Facultad. Sus competencias eran la administración del patrimonio universitario, la colaboración con el Rector o Interventor para la redacción del Presupuesto general de la Universidad, y su función como habilitado de personal, material y demás servicios necesarios para la percepción de fondos que, por figurar en los Presupuestos generales del Estado, exigieran tal actuación, ingresando en el Presupuesto universitario los descuentos propios de este servicio. Quedarían

exentos de todo descuento de habilitación los sueldos del personal administrativo y de Bibliotecas.

El Interventor general, como queda recogido en el artículo 99, lo sería a nombramiento y cese del Ministerio de Educación Nacional, a propuesta del Rector, de entre Catedráticos numerarios. Sus competencias consistirían en la intervención de todos los gastos e ingresos del Presupuesto general de la Universidad.

Por el artículo 100, el Ministerio de Educación Nacional redactaría un Reglamento económico que regiría todas las Universidades y fórmulas para los presupuestos y cuentas, y regularía todo lo relativo a obras urgentes, operaciones de préstamo, cantidades no invertidas y demás extremos que se estimasen necesarios para la buena marcha del régimen universitario.

En cuanto a la administración de rentas de la Universidad, de esta manera, se observaba una gran intervención del Estado que era quien aprobaba los presupuestos, sin embargo abría otras posibilidades, aunque todo el sistema contable estaría sujeto en todo caso al Administrador general nombrado por el Ministerio y a la Intervención general del Estado.

El capítulo XIII recogía todo lo relativo a la disciplina académica. La disciplina académica, que se recogía pormenorizadamente en el extenso artículo 101, afectaría separadamente al personal docente, a los escolares, y al personal de Bibliotecas, Museos y medios didácticos análogos, así como personal administrativo y subalterno.

Las faltas del personal docente podrían ser leves y graves y dentro de cada grupo, de carácter religioso-moral, político, docente o administrativo.⁵⁵ Las faltas leves serían sancionadas por el Rector, previa comprobación y asesoramiento de la Junta de Gobierno. La sanción de faltas graves requeriría expediente, incoado con conocimiento del Ministerio de Educación Nacional.

⁵⁵ Como se puede ver la disciplina académica iba mucho más allá de las faltas propias del ámbito docente, incluyendo la religión, y la moral.

Una vez terminada su tramitación el Rector comunicaría la propuesta de sanción al Ministerio para su imposición y ejecución. Por falta grave se podría llegar a imponer la separación del Cuerpo de profesores, sin perjuicio de otras que pudieran darse.

Las funciones de la Junta de Gobierno en materia de disciplina se extenderían al personal técnico de todos los organismos y servicios universitarios. Las sanciones graves se harían constar en el expediente personal del interesado, habiéndose de determinar el alcance que hubiera de atribuírseles, como deméritos computables administrativamente.

Por su parte, las faltas de los Escolares podían ser individuales y colectivas⁵⁶, leves y graves. Las faltas leves serían sancionadas, con el visto bueno del Rector y previa comprobación por los Profesores, Decano, Directores de Institutos o Colegios Mayores, según su naturaleza. Se daría cuenta también al Mando correspondiente del SEU. Las faltas graves se sancionarían previo expediente y conocimiento de la Junta de Gobierno. Tramitado el expediente, la propuesta de sanción que decidiera el Rector sería elevada al Ministerio de Educación Nacional, que la impondría y ejecutaría en su caso. Se podría llegar a expulsar al sancionado de una sola Universidad o incluso, de todas las Universidades.

Para la mutua repercusión que pudieran tener las sanciones impuestas por la Universidad y por el SEU, se dictaría un Reglamento especial⁵⁷, de común acuerdo con los Ministerios competentes y la Secretaría general del

⁵⁶ A diferencia de lo que ocurría con los docentes, los alumnos también eran objeto disciplinario no sólo individualmente, sino como colectivo, lo que de nuevo volvía a poner de manifiesto el control férreo ejercido sobre el alumnado, de manera que estuviera sometido y así evitar los disturbios que habían caracterizado al periodo prebélico. Las faltas colectivas fueron objeto de especial consideración a lo largo del periodo comprendido entre esta ley y los años 70, al ser faltas colectivas se consideraban de mayor gravedad. Véase GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo: *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea (1865-2008)*. Alianza Editorial, Madrid, 2009.

⁵⁷ La materia disciplinaria quedó regulada por el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprobaba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional (BOE 12 octubre) y posteriormente por el Decreto de 13 de enero de 1956 que modificaba el de 8 de septiembre de 1954, precisando su ámbito de aplicación (BOE 18 enero 1956).

Movimiento, además de la propia Universidad. Las sanciones graves, finalmente, se harían constar en el Libro Escolar.

Las faltas del personal administrativo, del de Bibliotecas y análogos, y del personal subalterno, podrían ser igualmente leves y graves y se les aplicarían normas similares a las anteriores. La máxima sanción sería la separación del servicio a la Universidad, sin perjuicio de las que el Ministerio juzgase oportuno imponer al personal que formase parte de Cuerpos dependientes de su jurisdicción. Las sanciones por faltas graves constarían en los respectivos expedientes. De todo expediente disciplinario se pasaría pliego de cargos al interesado, que tendría derecho a contestar.

De las abundantes Disposiciones finales y transitorias, sólo recogemos aquí las que se consideran relevantes para nuestra investigación. Son, a saber, la segunda, por la que la ordenación de las enseñanzas en las Facultades, así como la organización y el régimen de las mismas, se determinarían por Decreto aprobado por Consejo de Ministros y la tercera, que establecía que la reforma del plan de estudios se llevaría a efecto de forma escalonada, además de la cuarta, que estipulaba que para que pudiera cumplirse lo ordenado en el artículo veintiuno respecto a la colación del grado de Doctor, sería preciso que el Ministerio autorizase por Decreto a cada Universidad cuando estimase que había alcanzado plenamente la debida organización.

Entretanto, los estudios del grado de Doctor que determinasen los Reglamentos podrían cursarse en todas las Universidades, siempre que estuviesen establecidas en ellas las disciplinas necesarias. La tesis sería juzgada en la Universidad de Madrid⁵⁸ por un Tribunal de Catedráticos de la disciplina objeto de la tesis, de las distintas Facultades de España. En el título se haría constar la Universidad de procedencia, la cual debería publicar la tesis del nuevo Doctor.

⁵⁸ Dicha restricción, amparada en que no todas las Universidades podían ofrecer todas las materias, se mantendría hasta 1954. La normativa que lo regulaba será analizada en el capítulo dedicado a la evolución de los estudios.

Otras disposiciones que nos incumben son la quinta, por la que se decía que la colación de grados, base de la expedición de títulos con valor profesional, sólo podría hacerse en las Universidades del Estado con arreglo a las normas establecidas en esta Ley. De ese modo, los alumnos que cursasen estudios en centros adscritos a Universidades oficiales, afiliados al SEU, recibirían también *obligatoriamente* en dichos Centros todas las enseñanzas complementarias que en esta ley se establecen para los estudiantes universitarios. Igualmente, la sexta establece que para la implantación de la cultura superior religiosa a que se refiere el capítulo quinto de esta Ley, se dictaría el Decreto correspondiente⁵⁹, previo acuerdo de la Iglesia y del Ministerio de Educación Nacional.

La disposición novena avanzaba la modificación de la ley, en cuanto hace referencia a la intervención de los órganos políticos universitarios de FET de las JONS cuando por decisión del Mando Nacional del Movimiento se produjera una reforma en la estructura de los mismos.

En cuanto a la décima, estipulaba que para la implantación de la formación política y de los organismos y servicios a que se refiere el capítulo quinto de esta Ley, se dictarían los Decretos oportunos, de acuerdo con las jerarquías correspondientes. Así La formación política quedaría regulada por el Decreto de 29 de marzo de 1944, que establecía en las Universidades cursos para la formación política de los escolares y que se impartió hasta 1977, en que fue suprimida mediante el Real Decreto 426/1977 de 4 de marzo, que hacía desaparecer la asignatura de Formación Política en la Universidad.⁶⁰

Por la undécima, se autorizaba a permanecer a los Secretarios de las Universidades que estuvieran ejerciendo sus cargos en propiedad en el momento de la publicación de la Ley, de modo que continuarían

⁵⁹ Efectivamente, la impartición de la asignatura de religión quedaría regulada por el Decreto de 26 de enero de 1944 (rectificado) en que se establece en las Universidades españolas la enseñanza religiosa (BOE 22 febrero) y ya en los años 70, para su acomodación a la Ley General de Educación, por la Orden de 20 de diciembre de 1976 por la que se regulan las actividades de formación religiosa en Centros de enseñanza universitaria (BOE 29). El análisis detallado de las disposiciones se verá más adelante en el capítulo dedicado a la evolución de los estudios.

⁶⁰ BOE de 10 de abril de 1944 y de 22 de marzo de 1977, respectivamente.

desempeñándolos, aunque no reuniesen los requisitos exigidos por el artículo ochenta.

Finalmente, en la treceava, se dictaba que las Clínicas y Hospitales Clínicos, tendrían doble función, docente y benéfica, por lo que dependerían del Presupuesto de Educación Nacional sin perjuicio de que se les aplicase el Decreto de 27 de enero de 1941 sobre coordinación de servicios sanitarios, y la catorceava establecía exclusiones a lo dictado. Por tratarse de una Ley destinada exclusivamente a la ordenación universitaria *“quedaban excluidas de sus normas las Escuelas especiales de Arquitectura e Ingenieros, los organismos que de ellas dependieran, las Escuelas de formación de sus profesiones auxiliares, así como aquellos Centros de investigación o de estudio que por referirse a ingeniería o arquitectura, no atañían a la Universidad”*. Es decir, que los estudios de ingenierías y arquitectura, quedaban al margen de la Universidad.

Analizado el texto de la norma, podemos decir que la Ley de 1943 constituía la primera legislación con rango de Ley de la posguerra que estuviera destinada a regular específicamente el ámbito de la educación superior. Destaca su largo periodo de vigencia, casi 30 años, lo que la convierte, sin duda, en el persistente marco de referencia de la Educación Superior a lo largo del Franquismo. Por esa misma razón requiere de entrada, dos tipos de análisis, por una parte el estudio textual y puntual de la norma en el momento en que nace y por otro, tan importante o más, su desarrollo y grado de aplicación, así como la legislación “menor” que la modifica y adecúa permitiendo su adaptación al paso del tiempo.

La ley, como ya se dijo, es el resultado de la labor legislativa de los dos primeros ministros de Educación del franquismo, Pedro Sainz Rodríguez y José Ibáñez Martín. El primero representaba los valores más tradicionales, de fuertes convicciones monárquicas, partidario del bando franquista desde el comienzo del levantamiento, siendo el principal artífice de la depuración del profesorado una vez concluida la guerra. Su huella, quedó sobre todo patente

en la Ley de reforma del Bachillerato⁶¹, preparatoria de la reforma en la Universidad, la cual, sin embargo, no pudo llevar a sus últimas consecuencias puesto que sólo llegó a presentar el Anteproyecto de Ley en el año 39⁶², momento en que dimitió de su cargo por discrepancias políticas.

Tras la renuncia de Sáinz Rodríguez, fue nombrado ministro José Ibáñez Martín, quien desempeñó el cargo durante el amplio periodo comprendido entre 1939 y 1951. Ibáñez Martín era miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y antiguo colaborador del dictador Primo de Rivera, ligado a Acción Española. Cuando estalló la Guerra Civil había sido presidente de la Diputación de Murcia y diputado en las Cortes Españolas de la II República por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Vinculado a la sublevación del ejército franquista desde el principio, se ocupó de representar los intereses de la dictadura en Hispanoamérica.

Se puede decir que fue un peso pesado del primer franquismo, sucediéndose en su persona numerosos cargos, tales como el de Ministro de Educación (1939-1951), Presidente del Consejo de Estado (1951-1958) y Presidente del CSIC (1939-1967). Fue también procurador en Cortes en sucesivas legislaturas, Presidente de la Comisión de Justicia y, a partir de 1958, Embajador de España en Portugal hasta su jubilación en 1969.

Su nombramiento conllevó una amplia reestructuración en el Ministerio de Educación, acabando con los vestigios del antiguo Ministerio de Instrucción Pública.⁶³ Su labor consistió fundamentalmente, en adaptar la educación a los intereses del nuevo régimen, en el que era un factor principal la Iglesia Católica, continuando con la depuración de maestros, que se prolongaría en el

⁶¹ Ley de 20 de septiembre de 1938 de reforma del Bachillerato que supuso la consagración del nacionalcatolicismo en la enseñanza y el menoscabo de la escuela pública en favor de la Iglesia.

⁶² Orden de 25 de abril de 1939 disponiendo la publicación del Proyecto de Ley de Reforma universitaria para informe de los claustros universitarios (BOE 27)

⁶³ La Ley de 13 de agosto de 1940 (BOE 4 septiembre), creó el Consejo Nacional de Educación, designando sus vocales por Decreto de 27 de enero de 1941 (BOE 3 febrero) y su rectificación del 4. La Comisión Permanente – formada por Albareda, y Eijo y Garay, entre otros-, se creó por Decreto de 29 de abril 1941 (BOE 4 mayo). Los arreglos de plantilla fueron determinados por el Decreto de 15 de junio de 1939 y numerosas órdenes que lo desarrollan. Véase SEAGE, J. y DE BLAS, P.: “La administración educativa en España (1900-1971)”, en *Revista de Educación*, nº 240 (1975).

tiempo más de lo esperado. Fue el fundador también en 1939, del CSIC y su presidente durante 28 años. Éste nuevo organismo sustituía a la JAE, integrando en él los centros de investigación antes dispersos.⁶⁴

En lo relativo a la Universidad, durante su mandato, más allá de la actividad legislativa, se inició la reconstrucción de la Ciudad Universitaria⁶⁵; se fundaron numerosos Colegios Mayores; se dotaron cátedras de ampliación de estudios; se creó el Cuerpo de Capellanes; se instituyó la protección escolar⁶⁶; se crearon nuevas Facultades de Ciencias Políticas y Económicas; se incorporaron a la Universidad con carácter de Facultad las Escuelas de Veterinaria, etc.

Finalizada la contienda y emprendida ya la reforma educativa en los niveles inferiores, concebidos como preparación a los niveles superiores, había llegado el momento de abordar la reforma de la Universidad. Para el nuevo estado, la Universidad tenía un valor simbólico que ejemplificaba a la perfección el espacio madrileño, la Ciudad Universitaria.

Se quería ante todo hacer tabla rasa del pasado inmediato republicano y de su especial empeño en el ámbito de la educación superior. Y tanto fue así, que sorprendentemente, de inmediato y aun cuando quizá había cuestiones más urgentes que recomponer, el nuevo gobierno derogó de raíz la legislación educativa republicana y comenzó a aplicar la depuración sistemática de su profesorado, de manera que no quedase rastro de él, recurriendo incluso a su eliminación física con carácter ejemplar⁶⁷. El primer franquismo se propuso el radical desmantelamiento de todo vestigio de la obra republicana.

⁶⁴ Creado por Ley de 24 de noviembre de 1939 (BOE 28). Dos Decretos de 10 de febrero de 1940 regulaban su funcionamiento y nombraban sus vocales respectivamente (BOE 17) y finalmente una Ley de 22 de julio de 1942 modificaba algunos artículos de la de 1939 (BOE 7 agosto).

⁶⁵ La Ley de 10 de febrero de 1940 organizaba la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria (BOE 17). Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina y VALLE MORÁN, Inés: *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y Universidad durante los años 30*, en Cuadernos de Historia Contemporánea, Nº 30, 2008 y LÓPEZ-RÍOS MORENO, Santiago y GONZÁLEZ CÁRCELES, Juan Antonio (coord.): *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República: Arquitectura y Universidad durante los años 30*, Madrid, 2008.

⁶⁶ Ley de 19 junio de 1944 de Protección Escolar (BOE 21).

⁶⁷ A este respecto véanse MANCEBO, Maria Fernanda, CLARET MIRANDA, Jaume y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique (dir.), citadas más arriba.

El nuevo estado desconfiaba de los intelectuales y en su mayoría, de ciertos núcleos universitarios, pero sobre todo quería poseer el control férreo de los alumnos, de sus personas, de sus mentes a través de los contenidos impartidos y más aún, de sus conciencias.

Le urgía por ello crear un cuerpo docente y un estudiantado sumiso y adepto al régimen, de manera que fuera el germen de las nuevas clases dirigentes. Por presión de Falange se otorgan prebendas a los estudiantes excombatientes del bando nacional, exonerándoles de determinados cursos y aligerándoles los exámenes, mientras que a aquellos que habían realizado estudios en zona republicana no se les reconoció lo estudiado, por lo que se vieron obligados a repetir estudios y exámenes, debiendo abonar las tasas nuevamente, un favoritismo que se vio plasmado incluso normativamente y que a algunos les supuso el apartarse definitivamente del estudio.

Sin embargo, más allá de esta enconada oposición y de una deslegitimación explícita de la pedagogía republicana⁶⁸, en general, existía una limitada reflexión teórica acerca del modelo de educación superior que se quería implantar. En los niveles inferiores la Iglesia seguiría gobernando sus colegios con los contenidos tradicionales de la enseñanza, simplemente se daría más relevancia a la religión y a la transmisión de una historia fuertemente ideologizada –en la tradición de Menéndez Pelayo y Acción Española, siguiendo el pensamiento de su impulsor Sainz Rodríguez-.

En cuanto a las aspiraciones del nuevo estado en relación a la educación superior, cabe plantearse algunos interrogantes: ¿Existía una reflexión teórica previa acerca de cómo había de ser la Universidad en el bando vencedor?. ¿Se pretendía instaurar un modelo nuevo y totalitario semejante a lo ocurrido con los fascismos italiano o alemán?. ¿En el modelo español tenía mayor peso la innovación o la adaptación de modelos previos anteriores a la

⁶⁸ La alusión a la Institución Libre de Enseñanza pone de manifiesto “vivíamos momentos de crisis y de ruina en que la educación intelectual estaba desquiciada, había sucumbido también en manos de la libertad de Cátedra la educación moral y religiosa, y hasta el amor a la Patria se sentía con ominoso pudor, ahogado por la corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de la Institución Libre, que se esforzaba por dominar el ámbito universitario”.

experiencia republicana?. ¿Cómo se sitúan respecto a la ley los distintos grupos intervinientes en la contienda y en el gobierno posterior?. Veremos a continuación algo a propósito de todo ello, comenzado por los principales ideólogos del primer franquismo respecto a la educación.

Para José Antonio Primo de Rivera, la Universidad era el ámbito en el que habría de desenvolverse el SEU, sindicato único aglutinador de todos los miembros de la comunidad educativa, como superación de la lucha de clases y de las luchas partidistas. Por su experiencia personal, José Antonio Primo de Rivera desconfiaba de los intelectuales y los universitarios, a los que creyó en buena parte causantes del declive de su padre. Como líder y fundador del SEU⁶⁹ en 1935, intentaba aplicar a la Universidad fórmulas provenientes del nacionalsindicalismo. Para él, los camaradas estudiantes tenían tres deberes esenciales: formarse profesional y sindicalmente, abrir la ciencia para la totalidad de España, y trabajar por Falange.

Sin embargo, el pensamiento joseantoniano no se planteaba un modelo concreto de Universidad a instaurar y el mensaje de Falange resultaba difícilmente encuadrable en los nuevos propósitos políticos, en tanto que el ideal de revolución falangista era rechazado de plano por quienes mediante el levantamiento militar pretendían, precisamente, recuperar el antiguo orden. Mientras tanto, la Iglesia había adquirido un lugar preponderante en el nuevo régimen y se encargaba de recuperar los elementos de la tradición conservadora. Frente a la carencia teórica falangista respecto a la educación, emergían los planteamientos católicos que por su trayectoria histórica y seriedad pragmática habían sido siempre considerados y respetados. Falange quedaba prácticamente relegada a las cuestiones en que el régimen de Franco precisaba al Partido: control de los efectivos docentes y socialización estudiantil, tareas ambas en las que fracasó estrepitosamente.

⁶⁹ Los estatutos del SEU fueron aprobados por Decreto de 21 de noviembre de 1937 (BOE 23) y la Orden de 5 de febrero de 1938 (BOE 1 marzo). Véase JATO, D.: *La rebelión de los estudiantes (Apuntes para una historia del alegre SEU)*, Madrid, 1953 y RUIZ CARNICER, M. A.: *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*. S. XXI, Madrid, 1996.

José Pemartín, católico y monárquico de Acción Española, fue Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media del Ministerio de Educación Nacional y una de las personas que más influyó en los nuevos planes de estudio. Para él la nación española era “un ser histórico-ético de sustancialidad católica”, principio que se concretaría en la enseñanza positiva de la religión y en la prohibición de enseñar nada que fuer contrario a la ortodoxia. El fascismo es así, en nuestro caso, una concepción ética y totalitaria con un fundamento religioso y espiritual.

Si en el ámbito de la enseñanza inferior y media se permitía y aun se alentó la existencia, junto a la oficial, de una enseñanza privada, fundamentalmente confiada a la Iglesia, debido a que se había visto diezmada por una “depuración generalizada”, la Universidad quedaba reservada en cambio al Estado, pero también con una presencia fuerte de la religión en todas las facultades (incluso en Medicina y Ciencias), y no sólo como asignatura, sino como ausencia de cualquier enseñanza o actitud que fuese contra la religión o el dogma. Incluso en algunas universidades se habría de crear una Facultad de Teología donde se pudieran formar quienes iban a encargarse de estas misiones. Sin embargo, no se autorizaría la creación de una Universidad separada católica, sino que la propia Universidad española era católica por definición.

Respecto a la autonomía universitaria, se pretendía unidad en lo esencial, pero *libertad en lo instrumental*, cierta autonomía en lo económico y administrativo pero siempre bajo la atenta *vigilancia e inspección del estado*. Los Rectores actuaban como verdaderos delegados del Ministerio, pero se mantenía el formalismo de su elección en las Universidades.

Cada universidad debería especializarse en una determinada Facultad, para alcanzar la descentralización y “sano regionalismo” (no separatismo, como había ocurrido con Cataluña y el País Vasco, cuya Facultad de Letras y Escuela de Ingenieros, respectivamente, deberían ser eliminadas). Y así, se pretendía que los que fueran a estudiar fuera tuvieran que “empaparse de españolismo”. También se señalaba como “traidora intelectual” a la Universidad

de Madrid, por causa del gran peso que en ella había alcanzado la Institución Libre de Enseñanza, anti-católica y anti-española, de la que no ha de quedar piedra sobre piedra...”⁷⁰

Su actitud ultraconservadora se ponía de manifiesto en cuanto que consideraba necesaria la estabilización del nivel superior docente y a través de su catolicismo.⁷¹ En definitiva, pocos elementos originales para una Universidad nueva. Como finalidad, estaba el evitar que la Iglesia se apoderase de la educación y la reconstrucción de las universidades, pero sin tener claro el modelo a seguir.

Otro ideólogo falangista, aunque en versión tardía y más moderada, es Pedro Laín Entralgo.⁷² Para él la misión de la universidad consistiría en la transmisión de los saberes; la enseñanza profesional; la formación en todos los órdenes de la existencia; la investigación y la incitación a la educación a través de la extensión universitaria y la creación de “mitos” intelectuales en la sociedad. Como premisa apuntaba, que para que la universidad alcanzara una mayor extensión e intensidad se necesitaban previamente unas determinadas condiciones de subsistencia que garantizaran la plena dedicación, hacían falta bibliotecas, clínicas y laboratorios... con lo cual, recogía los ideales básicos de la República, pero tamizándolos con su lenguaje culto.⁷³

Distinguía entre los estudiantes, en general, que pretendían conseguir un título, ser buenos profesionales y los pocos que pretendían iniciarse en la investigación y convertirse en hombres de ciencia, pero que ni la familia, ni la

⁷⁰ En palabras de José Pemartín, en su obra *Qué es lo “Nuevo”: Consideraciones sobre el momento español presente*, Cultura Española, Santander, 1937.

⁷¹ Ideas inspiradas en obras como GIMÉNEZ CABALLERO, E.: *Genio de España*, 1932; MAEZTU, R.: *Defensa de la Hispanidad*, Cultura Española, 1934; el propio GARCÍA MORENTE, M.: *Discurso correspondiente a la apertura del curso académico 1942-1943*, Madrid, 1942.

⁷² LAÍN ENTRALGO, Pedro: “Político universitario”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, 1952.

⁷³ Para el estudio del rectorado de Pedro Laín Entralgo en la Universidad de Madrid, véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET REIG, José Luís: “Laín en la Universidad de Madrid”, en *Cuadernos hispanoamericanos*, nº 446-447, 1987 y de la misma autora HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Reforma desde el sistema y protagonismo estudiantil: la Universidad de Madrid en los años cincuenta”, en *La universidad española bajo el régimen de Franco: actas del congreso celebrado en Zaragoza del 8 al 11 de noviembre de 1989* / Juan José Carreras Ares, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, 1991.

sociedad les impulsaban en ese sentido por los apremios económicos, ni tampoco por las enseñanzas que se impartían. Debía enseñarse el sentido genérico de las disciplinas y estimular el conocimiento de una cultura básica, todo ello completado con la formación religiosa, política y física, como era preceptivo en el marco general de la Universidad española del momento.

Según Laín, la sociedad debería colaborar con la Universidad y ésta debería abrirse a la sociedad pero sin quedar supeditada a una subordinación pragmática. El Estado debe regular y ordenar, mediante el control de los títulos, la selección de los docentes mejores y la determinación de los saberes mínimos para el profesional.

Junto a falangistas, encontramos otros ideólogos como son los católicos, y entre ellos, Juan José López Ibor⁷⁴, cercano a Sainz Rodríguez y al Opus Dei. López Ibor, contraponía el hombre fáustico, depredador y poderoso, al español y cristiano. La Universidad española debería volver a las alturas que tuvo en la época del imperio con Alcalá y Salamanca, la Universidad grande y auténtica frente a los modelos extranjeros que intentó introducir la ILE.

Sus propuestas reproducían el ideal orteguiano de introducir la cultura en la Universidad. La teología debía insertar su espíritu en las aulas, el espíritu español, ecuménico y católico, según Maeztu. También abogaba por el deporte y el juego, como vivero de virtudes y servicio de trabajo. Asimismo consideraba que la investigación debía estar en la Universidad y no en Institutos aparte, como sucedió con la ILE. No situándose al margen de ella. Por último, reprochaba a la ILE su postura frontal respecto a las oposiciones como medio de selección del profesorado, volviendo a abogar por ellas como sistema de selección.

Están además los propagandistas de Acción Católica y Enrique Herrera Oria,⁷⁵ quien pretendía demostrar que la gran pedagogía de la España imperial

⁷⁴ *Discurso a los universitarios españoles*, Salamanca, 1938.

⁷⁵ HERRERA ORIA, Enrique: *Historia de la Educación Española desde el Renacimiento*. Ediciones Veritas, Madrid 1941.

se había visto destrozada por judíos y masones, volviendo su mirada hacia Vives y Nebrija. Destacaba cómo la enseñanza imperial no era cosa del Estado sino de religiosos y sacerdotes: *“el sentido católico de la tradición española no fue estatal, sino nacional. El Estado español reconocía como nacional todo lo que brotó de España, partiera de quien partiera, siempre que fuera católico y español”*. El fin primordial de la Universidad era, a su juicio, la formación de las clases directoras, a través de las lenguas clásicas y la escolástica. Los colegios jesuitas eran el culmen de la educación. Los Colegios Mayores eran, a su vez la pieza clave para la preparación de esas clases directoras, como limpieza de sangre, para evitar judíos y conversos. De los Colegios salió la clase dirigente y selecta que gobernó en los viejos y altos tiempos. El derrumbe de la educación imperial se produjo por causa del judaísmo y la masonería, que junto al enciclopedismo se propusieron acabar con la Compañía de Jesús hasta conseguirlo en 1767. La decadencia de la formación humanista y la destrucción de los Colegios Mayores fueron las consecuencias inmediatas, entre tanto, América se perdió.

Así, en la mencionada y decisiva obra, Herrera dedicaba extensos fragmentos a demostrar que la ILE era obra de la masonería. La ILE era una obra judeo-masónica, dado que Krause era masón y de ahí el acercamiento de Sanz del Río. Según su particular visión las obras educativas de Luis de Zulueta, Azcárate o Giner ponen de manifiesto su heterodoxia y oposición al catolicismo. En contraposición, debería volverse ahora la vista al Padre Manjón, a Poveda, fundador de la orden teresiana, etc.

Sus propuestas, consistían en que habría Universidades estatales, semiestatales y pontificias, las dos primeras subvencionadas por el Estado (en menor grado en el segundo caso), mientras que las pontificias serían ayudadas en mayor o menor medida según conviniera. De este modo, las posibilidades de la Iglesia serán inmensas. En segundo lugar, las Universidades serían autónomas, con la inspección del Estado y de la Iglesia, serían centros de “formación profesional, de investigación y de formación religiosa, física y cívica, todo dentro del actual Movimiento salvador de España”. Y finalmente, los títulos profesionales los expediría el Estado, mediante un examen ante docentes y

profesionales (Examen de Estado), pero las Universidades podrían dar otros títulos académicos, que no requerirán la intervención del Estado. Se trataría de dos o tres exámenes en la carrera, ante tribunales de profesores –no el de la asignatura- y otras personas competentes.

En cuanto a la organización universitaria, Herrera presentaba algunas ideas un tanto inconcretas y hace referencias a las Universidades inglesas. La Universidad sería la suma de todas las instituciones de cultura superior del Distrito universitario, en especial los Colegios Mayores, esenciales para su funcionamiento. Se establecerían recintos universitarios en todas las ciudades en que fuera posible y allí “los rectores vigilarían las diversiones y espectáculos”. En lo referido al gobierno de la Universidad, estaría formado por un “senado”, con representación de las Facultades, los profesionales y los Directores de los colegios, un Consejo de Administración para asuntos económicos y una Comisión Ejecutiva formada por el Rector y cuatro Consiliarios -como en la antigua Alcalá, en la que éstos eran estudiantes-.

Los profesores serían perpetuos o temporales, ingresando éstos últimos por oposición, concurso especial o contrato de la Universidad, una novedad ésta que no prosperaría en mucho tiempo. Junto a ello, ve los Colegios Mayores como restauración de los antiguos, que identifica con los de Inglaterra. Se trata de formar en otros foros a los estudiantes, como élite (idea tradicional, apuntada también por Ayala y la ACNP y por el propio Herrera Oria), esa nueva vía de formación universitaria para minorías dirigentes que ya había intentado Primo de Rivera.

De los contenidos sin embargo apenas se preocupaba, con tal que la religión estuviera presente –este aspecto lo regularía un Concordato-, sugiriendo que se fundasen algunas facultades de teología y filosofía escolástica y se enseñasen en todas “conocimientos dogmáticos y morales que todo católico culto debería poseer”, así como nociones de la moral profesional. A ello había que añadir el deporte por razones de higiene y morales (claramente, éstos eran los puntos de inspiración principal de Ibáñez Martín).

Pero, ¿cómo articular estos planteamientos, no siempre compatibles y ciertamente ambiguos para conseguir volver al vetusto modelo de Universidad del antiguo régimen?. Estaba claro que ambas, Falange e Iglesia, habían de estar presentes a la vez. Sin embargo, Falange apenas contaba con un bagaje ideológico y de reflexión previa acerca de lo que había de ser la educación superior en el nuevo estado (a diferencia de lo que ocurría en los modelos fascistas italiano o alemán y por supuesto en el entorno de la Iglesia católica, dedicada tradicionalmente a estas cuestiones), así que el ideario volcado en el texto legislativo, tal y como fue estudiado por Mariano Peset⁷⁶, se convertía en una suerte de sincretismo que tomaba ideas y propuestas de experiencias previas y de diferentes procedencias, siempre y cuando contribuyeran a asegurar determinados aspectos, tales como la eliminación de todo vestigio del ideal de educación republicana y la transmisión de los ideales tradicionales, conservadores y católicos propios de la época pre-republicana. Eso sí, manteniendo en última instancia el control en manos del estado, por más que el discurso se revistiera de autonomía, reforma y novedad.

Asimismo, era fundamental llegar a una “entente” entre los principales agentes protagonistas y valedores del nuevo régimen, a saber: Falange, Ejército e Iglesia, de manera que cada uno obtuviera y asegurara su parcela de poder correspondiente, siempre vigilados y arbitrados por el propio estado. La pugna entre ellos por la obtención de mayores cotas de intervención y de poder, quedó bien a las claras en la fase previa de discusión de la ley, previamente a su aprobación definitiva.

Como es propio de los regímenes totalitarios y dictatoriales, finalizada la contienda se imponía la eliminación, la aniquilación del contrario, en todos sus aspectos y manifestaciones, hasta no dejar rastro. En el ámbito universitario, ese proceso de depuración y represión fue inmediato. Ya el 5 de septiembre de 1936 se convocaba a todos los profesores para asignarles tarea en la guerra o

⁷⁶ PESET, M.: “La Ley de Ordenación Universitaria de 1943” citada anteriormente.

en actividades en la retaguardia, implicándoles cursos o cursillos hasta la reapertura de las Universidades.⁷⁷

La depuración de maestros fue misión fundamental para los primeros ministros de Educación del franquismo, misión que se prolongó en el tiempo, obsesivamente, más de lo esperado. La depuración del profesorado, el exilio de los “vencidos” y el miedo generado por la dura represión instaurada por el nuevo estado fue el contexto en que se desarrolló esta ley que acabamos de comentar.

Aunque ya se cuenta con monografías y estudios sectoriales y concretos, todavía hoy no existen análisis definitivos ni completos de lo que supuso la depuración y salida al destierro de los profesores universitarios⁷⁸. Es difícil cuantificar, por lo tanto, el menoscabo que supuso su ausencia o eliminación para la ciencia y la cultura española, ya que muchos de los huidos, encarcelados, privados de la cátedra y muertos eran verdaderamente representativos en su especialidad.

Esos controles también se impusieron desde la ley. Se extremó el control sobre las Universidades, sobre profesores y alumnos, sobre programas y contenidos de la enseñanza, sobre la expedición de títulos académicos que facultaban para el desempeño profesional de determinadas funciones y/o profesiones y que reforzaron el monopolio estatal. Los controles ideológicos fueron instrumentados administrativamente desde la propia organización universitaria, por una ley que de denominarse de “reforma” en el anteproyecto, pasó a ser de “ordenación” en su redacción definitiva.

⁷⁷ Orden de 5 de septiembre de 1936 (BOE 10), completada por la de 4 de enero de 1937 (BOE 7), sobre la suspensión de las clases y los cometidos a desempeñar por los profesores.

⁷⁸ Véanse los estudios entorno al tema de la profesora María Fernanda Mancebo Alonso, orientados algunos de ellos al caso específico de la Universidad de Valencia: “Las primeras oposiciones “patrióticas” a cátedras de historia en 1940-1941”, en *Spagna contemporanea*, N° 36, 2009; *La España de los exilios. Un mensaje para el s. XXI*. PUV, Valencia, 2008; “Consecuencias de la guerra civil en la Universidad valenciana: depuraciones y exilios”, en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, N° 4, 2001; “La Universidad del exilio. El Estado franquista, editor pirata (1939-1945)”, en *La universidad española bajo el régimen de Franco: actas del congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989* / Juan José Carreras Ares, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, 1991 y “Profesores universitarios en el exilio”, en *Cuadernos republicanos*, n° 54, 2004. Otras obras de carácter general y más antiguas, pero no por ello menos interesantes son ABELLÁN, J. L.: *El exilio español de 1939*, 6 vols., Madrid, 1976 y RUBIO, J.: *La emigración de la guerra civil de 1936-1939*, 3 vols. Madrid, 1977.

Para cubrir las bajas, desde el principio, se propició el ingreso de nuevos profesores adictos, valiéndose para ello del “tradicional” sistema de oposición con tribunales conformados a propósito, con un gran peso de miembros del CSIC, que reorganizado tempranamente sobre los restos de la ILE y la JAE, fue estructurado con profesores adictos al régimen y en gran medida, por la intervención de José María Albareda, cercanos al Opus Dei. De manera que, indirectamente, esta institución avanzaba en su influencia penetrando también en la Universidad.⁷⁹

Superado el trámite del sistema de ingreso, la ley, de nuevo, exigía a los opositores, aparte del Doctorado y dos años de experiencia docente, la demostración fehaciente de su “firme adhesión a los principios generales del Estado, mediante certificación de la Secretaría General del Movimiento”, (artículos 58 d) cuarto y 62 a) y a los eclesiásticos, licencia de su ordinario, (artículo 58 d) quinto). El control y la sumisión política eran incuestionables. La adhesión era condición indispensable para presentarse a cualquier oposición y poder ejercer como docente. En los tribunales existían representantes de la Iglesia y del Movimiento. Una vez conseguida la plaza, los profesores contaban con numerosos mecanismos de control. Sujetos a la docencia y a la disciplina académica⁸⁰ a través del Rector y el Decano, dentro de las líneas tradicionales de la estructura liberal universitaria, aparecían ahora redoblados poderes.⁸¹ A los profesores se les juzgaba tanto desde el punto de vista religioso-moral, como desde el político y docente o administrativo (artículo 101 b).

⁷⁹ Sobre la intervención de Albareda, véase GUTIÉRREZ RÍOS, E.: *José M^a de Albareda. Una época de la cultura española*, Madrid, 1970. Sobre el Opus Dei, ARTIGUES, D.: *El Opus Dei en España, 1928-1962. Su evolución ideológica y política*, París, 1971; YNFANTE, J.: *La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa mafia*, París, 1970. Para conocer sus patronatos e institutos, así como quiénes ocupaban los principales cargos, véase *Estructura y normas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas*, Madrid, 1947

⁸⁰ Les sería de aplicación, junto a los escolares y personal técnico y administrativo el *Reglamento de disciplina académica*, aprobado mediante el Decreto de 8 de septiembre de 1954 (BOE 12 octubre), modificado por el Decreto de 13 de enero de 1956 (BOE 18)

⁸¹ Resulta interesante comparar este esquema con modelos anteriores, particularmente con los Consejos de disciplina de Bustos de 1859, arts. 75-81, 171-182, dirigidos especialmente a los alumnos; y sobre profesores, con los arts. 170 y 171 de la Ley Moyano.

Por si esto no fuera suficiente, se había creado el SEPES, con un catedrático numerario y falangista al frente, encargado de reforzar la difusión del nuevo espíritu entre profesores y alumnos (artículos 33 y 49).⁸²

El control rectoral se extendía a los programas a explicar, a través de la ficha de cátedra, y se completaba mediante la censura de libros, establecida desde el principio con carácter general y también ejercida por el propio Rector (artículo 59 g), o el expurgo de las bibliotecas que, consideradas como medios didácticos, también quedaban bajo la dependencia del Rector.⁸³ De esa manera, tanto la actividad de los profesores como los contenidos de la enseñanza estaban severamente fiscalizados, lo mismo que ocurría en general a lo largo del s. XIX, pero que sin embargo, no había ocurrido durante la República.

Pero aún preocupaba más el control de los estudiantes. Para hacerse con ellos, la norma de sometimiento a la disciplina académica y al Rector, aún con formas más duras, no era suficiente, por lo que se crearon nuevos mecanismos de represión y control. Era preciso encuadrarlos y vigilar bien sus actividades, lo que se conseguía mediante su afiliación obligatoria al SEU, incluyendo el juramento de cumplir fielmente sus deberes universitarios, su tarjeta de identificación y su uniforme (artículos 69 y 70, apartados b) y c).⁸⁴ El sindicato vertical, se convirtió en una pieza esencial para controlar y concienciar a los escolares durante el largo periodo del franquismo.

Todavía se contaba con una pieza más, los Colegios Mayores, herencia ideológica de la Dictadura de Primo de Rivera. Creados por Decreto de 21 de septiembre de 1942, como órganos para la labor educativa y formativa de la

⁸² En la práctica, este organismo no funcionó de manera tan estricta y con tanta duración como el SEU. Su cometido prácticamente quedó reducido a encargarse de la asignatura de Formación política.

⁸³ Existía la obligación de los profesores de presentar “a la aprobación rectoral, con un mes de antelación al comienzo del curso, los temas que hayan de desarrollarse en el cuatrimestre o cuatrimestres de la disciplina. El programa aprobado habría de ser explicado en su integridad y de acuerdo con las normas inspiradoras del Estado”. En general, sobre censura de libros y bibliotecas, véase ALTED VIGIL, A.: *La política del Nuevo Estado sobre patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española*, Madrid, 1984.

⁸⁴ La unificación del sindicato se había producido poco antes mediante el Decreto de 23 de septiembre de 1939 (BOE 9 de octubre).

Universidad, podrían ser fundados por la propia Universidad, por Falange, por corporaciones públicas o privadas, o por particulares. Todos los escolares habían de integrarse en ellos obligatoriamente, bien como residentes, bien como adscritos, salvo que vivieran con sus familias o que fueran dispensados por el Rector (artículos 26, 27 y 28). En los Colegios se procuraría una formación religiosa, política y cultural –mediante vigilancia en las aulas o clases especiales, bibliotecas...-, pero también tendrían campo de deportes y gimnasio. Con la recuperación de esta institución, se pretendía conseguir un control total del alumnado, incluso de su vida privada (si es que podía existir en ese contexto), y en cierto modo, sobre todo al principio, se logró.

Los Directores de los Colegios, nombrados por el Ministerio con el visto bueno del Rector, vigilaban el cumplimiento de las normas y solicitaban al Rector la aprobación de los actos o cursos que se organizaran, cursaban las denuncias del personal del Colegio, etc. Los que no eran fundación de la propia Universidad gozaban de una cierta autonomía, como ya vimos.⁸⁵

Sin embargo, en la práctica, la pretensión de sujetar a los alumnos mediante su adscripción obligatoria a los Colegios, no fue posible a medio plazo por no poder llegar a crearse un número suficiente de ellos como para absorber el número creciente de matriculados en la institución universitaria. Llama la atención que, incluso desde el Servicio de Protección escolar, también se vigilaba “la vida del alumno”, llegando a señalar en el artículo 36 f) cómo una de sus funciones era “*sostener comunicación con los padres o tutores de los escolares, informándoles acerca de su conducta y aprovechamiento*”.

El sistema de concesión de becas y auxilios era discrecional. No sólo la capacidad intelectual y los medios económicos familiares eran tenidos en cuenta para la asignación de becas y/o exenciones, sino también las cualidades morales. La obtención de becas o cualquier tipo de ayuda de comedores, residencias, etc. era de este modo un tanto arbitraria, ya que se había de contar con la aprobación del SEU.

⁸⁵ Decreto de 21 de septiembre de 1942 (BOE 1 octubre); Decreto de 19 de febrero de 1942 (BOE 9 marzo), que confirmaba los Colegios existentes y creaba otros.

Finalmente, otra forma de represión, quizá más sutil, que también se dejó sentir en la educación, consistía en la ejercida a través de un fundamentalismo religioso enarbolado por un catolicismo ultraconservador cuya función era controlar las conciencias de los ciudadanos mediante su presencia en todas las esferas, ya fuera de la vida pública o del ámbito privado. La educación se consideraba un servicio a la patria y era la transmisora principal de los valores del nuevo estado. Se trataba de una educación obligatoriamente confesional en la que el alumnado estaba en situación de permanente minoría de edad mediante la anulación del individuo, sin margen para expresar sus propias ideas o tomar iniciativas, sin que quedara margen alguno de libertad. Externamente se exigía uniformidad y obediencia. El alumno debía asistir obligatoriamente a clase, y no se podía trasladar de Universidad si no era con la aprobación del Rector. Lo primero, con todo, estuvo lejos de cumplirse nunca.

Con todo ello se pretendía sin embargo, el control férreo de las formas de vida y las conciencias, así como el acallamiento de las posibles voces discordantes. Tanto el profesorado como el estudiantado habían de estar perfectamente encuadrados y controlados y de ello se ocupaban tanto la propia administración como la iglesia, creyendo asegurar el cumplimiento de la norma moral, religiosa y política, tanto en su vertiente pública como en la privada. De ahí el papel central de los Colegios Mayores a los que era obligatorio adscribirse siempre que no se viviera en el domicilio paterno, tanto si se residía en uno de ellos como si se residía en otro tipo de alojamiento. Los alumnos habían de estar perfectamente identificados en cada momento (a ello se debe la implantación de una tarjeta de identificación), comunicando al Rector con toda precisión dónde se alojaban. Teniendo a los alumnos controlados y, de ser posible, reunidos físicamente se podían evitar algaradas.

En cuanto a la pregunta de si la Ley de 1943 presentaba atisbos de modernidad o si por el contrario suponía la pervivencia de modelos anteriores, el análisis realizado por Mariano Peset⁸⁶ para responder a esta pregunta, es

⁸⁶ En el artículo ya citado “La Ley de Ordenación Universitaria de 1943”

realmente concluyente. El autor, gran conocedor de la legislación liberal en materia educativa realiza un estudio comparado del articulado de la nueva ley respecto a la legislación liberal producida a partir de la ley Moyano llegando a la conclusión de que realmente, el nuevo régimen es sobre todo, heredero de situaciones anteriores, y que la Ley de 1943, en realidad, supone la conservación cristalizada del modelo liberal, siguiendo completamente en lo fundamental las grandes líneas de la Ley Moyano más la legislación complementaria posterior, sin apenas variaciones.

A pesar de que el discurso del régimen intentó que apareciera como una “ley nueva” para un “nuevo estado”, la que iba a ser en principio una “ley de reforma” en realidad no hace sino modificar modelos que ya se habían probado anteriormente, eso sí, adaptándolos a sus particulares intereses y “corrigiendo las derivas” que se hubieran podido producir en discrepancia con las “nuevas” propuestas ideológicas de entidad totalizadora.

Como régimen conservador, autoritario y fascistizante, al franquismo le interesaba reforzar la presencia de todos los elementos tradicionales preexistentes e incluso le convenía rescatar otros de carácter historicista, para reforzar el control central, más fuerte ahora que en época liberal, manteniendo la presencia de la Iglesia y el Ejército. Así pues, el aspecto novedoso se podría decir que queda reducido a la presencia de Falange como nuevo poder, garantizada a través de la introducción de nuevas instituciones como el SEU o el SEPES, instancias que precisamente el tiempo se encargó de demostrar su falta de arraigo frente al sustrato liberal que siguió sobreviviendo incluso a la propia ley.

En ocasiones la Ley del 43 ha sido calificada de totalitarista o fascista, lo cual es cierto en el sentido del fuerte control ejercido por un Estado que es totalitario. Sin embargo, en la práctica ese control no supone nada nuevo. No se siguió el modelo musoliniano, ni el alemán, extraños al mundo académico español.

A pesar de todo, la Ley de 1943 apenas ha sido estudiada, habiéndosela abordado sólo a través de visiones generales⁸⁷ por lo que requeriría superar su análisis literal, para tener en cuenta que tuvo una vigencia muy larga, por lo que necesariamente hubo de irse adaptando al paso del tiempo. Como hipótesis diríase que, quizá pudo pervivir en el tiempo precisamente porque a medida que el régimen evolucionaba se fue desprendiendo del barniz falangista quedando en el fondo, una vez más, el sustrato de la Ley Moyano, que era el que seguía realmente arraigado en la comunidad universitaria española, y el que le permitía conservar su identidad.

En el modelo español había sin embargo, dos posibilidades: el modelo liberal de mediados del XIX y una posible autonomía que alguna vez apuntó. La autonomía supuso un intento verosímil a la altura de 1919 o durante los primeros años de la República, y sin embargo quedó desvirtuada por la Dictadura de Primo de Rivera, con la concesión limitada de personalidad jurídica, la creación de patronatos y la re-creación de los Colegios Mayores. La Ley del 43 se nutrió de forma sincrética de los dos modelos preexistentes, de la vieja Universidad liberal sustancialmente, con aditamentos procedentes de la Dictadura anterior. Con ello se lograban dos ventajas: no se innovaba en una época de penuria económica, con lo cual no se creaban organismos nuevos y como tampoco había interés por impulsar la ciencia, los escasos recursos se destinaban al CSIC y se aprovechaban las posibilidades que poseía el esquema liberal, centralizador y jerárquico para dar rienda suelta a su afán de control.

A la hora de rastrear los paralelismos entre la Ley del 43 y la legislación liberal y primorriverista, diremos que el art. 5º, proclamaba la plenitud de personalidad jurídica, eso sí, reducida a “todo lo que no esté limitada por la ley y siempre dentro de las funciones universitarias”. Para adquisiciones,

⁸⁷ Algunas de ellas: PARIS, Carlos: *La Universidad española actual: posibilidades y frustraciones*, Madrid, 1974 señala ya la pervivencia del modelo Moyano; FONTÁN, A.: *Los católicos y la Universidad española*, Madrid, 1961 señala como principal redactor de la ley al falangista Manuel Torres López; MONTORO ROMERO, R.: *La Universidad en la España de Franco (1939-1970) (Un análisis sociológico)*, Madrid, 1981; DE PUELLES BENÍTEZ, M.: *Educación e ideología... ya citado*; FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO PÉREZ, A.: “En torno a la idea de Universidad en la España de postguerra”, en *Educación superior y sociedad. Perspectivas históricas*, 2 vols., Salamanca, 1985 o el propio LAÍN ENTRALGO, Pedro: *Descargo de conciencia (1930-1960)*, Madrid, 1976.

enajenaciones, presupuesto, etc., sin embargo, “sería necesaria la autorización del Ministerio de Educación Nacional”. Igual que hiciera Primo de Rivera, le permitía ciertas facultades de administración, pero sujetas siempre a un detallado presupuesto aprobado por el Ministerio”.⁸⁸

Según el artículo 10, las Universidades deberían ser fundadas por ley y habrían de contar al menos con diez Facultades. El artículo 11 confirmaba las doce Universidades preexistentes, las diez de Moyano mas las fundaciones posteriores de La Laguna y Murcia. Cada una de ellas con las Facultades preexistentes, las que había en 1936 (artículo 16). La presente ley se limitaba a la enumeración de Facultades en general, sin especificar las existentes en cada Universidad como hacía la Ley Moyano, señalando eso sí, la existencia de Secciones en cada una de ellas, consecuencia de adaptaciones posteriores. En la Ley de 1943 aparecían nuevas Facultades debido a la incorporación de las escuelas especiales de Veterinaria y la creación, única, de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.⁸⁹

La división del territorio nacional en doce Distritos universitarios, asignados a cada una de las doce Universidades, también era una norma de origen liberal. Ello implicaba que la enseñanza en todos sus niveles dependía en última instancia, en el distrito respectivo, del Rector y de la Universidad. La Universidad no sólo era así el centro de enseñanza superior, sino también la cabeza de la delegación ministerial, hasta la Ley de Villar Palasí.

Según la redacción del artículo 21, parecía que esta ley acabaría con la concentración del Doctorado en Madrid y que aunque la Central fuera la Universidad más dotada, cedería este privilegio secular. Sin embargo, la cuarta disposición transitoria matizaba que sería necesario que el Ministerio

⁸⁸ Interesa la comparación con el Decreto-ley de 9 de junio de 1924 (Gazeta del 10), en que se perciben las limitaciones y sujeción al Ministerio. Véase la obra de PEMARTÍN, J.: *Los valores históricos de la dictadura española*, Junta de propaganda patriótica, Madrid 1929.

⁸⁹ La Ley Moyano, en sus arts. 127 y 136 enumeraba las diez Universidades existentes, con las respectivas Facultades de cada una de ellas. Se exigía también su creación mediante ley, art. 13 al 18. En la Ley del 43 las Escuelas especiales, a diferencia de la Ley de 1857, quedaban no sólo fuera de la Universidad como en aquella, sino de la Ley. Ni siquiera se mencionaban. Hay que advertir que la Ley de 9 de septiembre de 1957 y la de bases que la precedió, de 17 de julio, son leyes de instrucción pública, generales; no así el reglamento de 22 de mayo de 1859, ceñido a Universidades.

autorizase mediante Decreto el momento en que se estimase que cada Universidad había alcanzado la organización plena de los estudios, y los decretos para ello aún tardarían en llegar.⁹⁰

En lo relativo al gobierno de la Universidad, las leyes liberales seguían el modelo administrativo propio, basado en funcionarios designados por el Estado en los que se concentraba individualmente el poder decisorio y junto a ellos, órganos colectivos con funciones exclusivas de asesoramiento y deliberación.⁹¹ En la Universidad el esquema era: Rector designado por el Ministerio, asesorado por un Consejo Universitario, formado por los Decanos de las Facultades y los Directores de Escuelas especiales, profesionales o de Institutos de Segunda Enseñanza (artículo 38). Todas las demás autoridades lo eran por delegación.

En cuanto a las atribuciones rectorales (artículo 41), el Rector representa indiscutible e irrenunciablemente al poder central: ostenta la representación jurídica, su dirección, ordena los pagos, expide y da el visto bueno a los documentos, goza de facultades disciplinarias y de poder discrecional en algunos asuntos (decidía las tasas, concedía becas, concedía la condición de alumno, decidía la permanencia o no de alumnos en Colegios Mayores, aplicaba disciplina al personal docente y escolar, etc.) Es por lo tanto un delegado del poder central, siendo siempre un catedrático nombrado por el Ministerio y, como aportación de Falange, militante del partido.

Los Decanos, igualmente, son propuestos por el Rector pero elegidos por el Ministerio, tienen funciones de vigilancia, debiendo informar al Rector, someter a él la organización docente y las necesidades de la Facultad (artículos 37 y 44).⁹² La diferencia fundamental respecto al periodo liberal es que el gobierno emanaba entonces del parlamento elegido en las urnas, que

⁹⁰ Los primeros no llegarían hasta la tardía fecha de 1953, Decretos de 6 de noviembre y 4 de diciembre confiriendo esta potestad a las Universidades de Salamanca y Barcelona respectivamente. El Decreto de 25 de junio de 1954 (BOE 12 julio) abría la posibilidad a todas Universidades.

⁹¹ Modelo liberal que se repite en Diputaciones provinciales, Alcaldías etc. Véase OLIVÁN, A.: *De la Administración pública*, Madrid, 1843 o GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: *Revolución francesa y Administración española*, Madrid, 1981.

⁹² Semejante a lo establecido en la Ley Moyano, en los artículo 260 y siguientes y artículos del 1 al 14 de su Reglamento.

era quien aprobaba las leyes, mientras que en el momento que nos ocupa se trataba de un poder autocrático y dictatorial.

La piramidal jerarquía del gobierno universitario se ponía de manifiesto en el artículo 37, que recogía que “el gobierno de la Universidad será ejercido por el Rector, siendo todos los demás cargos, delegados”. Sometidos al poder unipersonal y ejecutivo del rector, sin contrapoderes. Así mismo, las Universidades son entendidas como corporaciones, siendo el Claustro un órgano de representación corporativa según los artículos 51 y 52.⁹³ Sólo se reunía éste por mandato del Rector para actos solemnes o corporativos, sin que tenga función decisoria alguna.

Como órganos consultivos del Rector aparecen la Junta de Gobierno y el Consejo de Distrito universitario (artículo 51). En la de Moyano la función consultiva no estaba diversificada, sólo existía el Consejo Universitario para la Universidad y el Distrito. Primo de Rivera, al establecer los Patronatos, dividió estas tareas: Junta de Gobierno para la Universidad y el Consejo de Distrito con una representación más amplia.⁹⁴ En la de 1943, de nuevo aparece una Junta orientada a la vida interna de la Universidad y el Consejo, de composición más amplia, para todos los niveles de enseñanza en el Distrito. En cualquier caso, los dos son órganos puramente consultivos, al estilo de la administración francesa, todos nombrados desde arriba y absolutamente subordinados al Rector, y ese mismo esquema se repite con los Decanos. Sólo en mínimos casos es preceptiva la consulta por parte del Rector (artículos 51-55). El Rector debía oír a la Junta en lo relativo a las cuentas de los Colegios Mayores (artículo 46 c) o junto a la Facultad en los concursos de traslado (artículo 58 a), para desdoblar cátedra (artículo 60) o para cesar a algunos cargos (artículos 74 y 77).

⁹³ En la Ley Moyano el claustro ordinario formado por catedráticos, tenía funciones de asesoramiento al Rector, mientras que el extraordinario era reunido solamente para las solemnidades, arts. 277-279 y 59-68 del Reglamento.

⁹⁴ Para la época de la Dictadura véase el Decreto-ley de 25 de agosto de 1926 (Gaceta 29); para la organización en la Ley Moyano, los arts. 268-269 y alguna mención en el Reglamento de Bustos, art. 1º, num. 4. La existencia de claustros quitó protagonismo al Consejo universitario o Junta de Gobierno, que se refuerza por el Decreto de 21 de enero de 1935. Sobre esta época se puede consultar MANCEBO, M. F.: *La Universidad de Valencia en guerra. La F.U.E. (1936-39)*, Valencia 1988.

En otros aspectos también se siguieron minuciosamente pautas anteriores. Así, por ejemplo, las materias a estudiar se recogieron específicamente. Así los Decretos de 7 julio de 1944 para las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia, Veterinaria y Ciencias Políticas y Económicas. Igualmente, Moyano había establecido las materias en la Ley articulada de 9 de septiembre (artículos 25-46) para Facultades universitarias, después las ingenierías y la enseñanza profesional; planes que fueron variando los sucesivos Ministros por Decreto. Tampoco cambiaron los mecanismos de selección de profesorado, que continuaron siendo las oposiciones a cátedra, cuestión que ya había preocupado a los sucesivos ministros desde Moyano en adelante.⁹⁵ El Ministerio de Ibáñez Martín intentó desde un principio hacerse con la designación de los miembros de los tribunales. El requisito principal sería que tres de ellos deberían ser catedráticos de Universidad, mientras que el presidente podría ser miembro del CSIC o de los institutos de investigación o bien, del Instituto de España.⁹⁶

El Ministerio designaba, pues, el tribunal: tres catedráticos numerarios de la misma disciplina o análoga, otro que podía ser persona especializada en la materia y el presidente, que pertenecería al CSIC, al Consejo Nacional de Educación o a las Academias. También en este caso, aun cuando existía mayor control ministerial que en el Reglamento de 1931, se seguían, una vez más, las huellas de las experiencias propias de universidades anteriores con el método de oposición, propio del sistema español y desconocido en otros países. En lo relativo al turno de concurso, la Ley de 1943 dejaba las manos completamente libres al Ministerio una vez oída la propuesta de la Universidad –formulada a su vez por el Rector, tras oír la Junta de Facultad y la Junta de Gobierno- y al Consejo Nacional de Educación.

⁹⁵ Reguladas en adelante por el Decreto Romanones, de 8 de abril de 1910 y posteriormente por el Decreto de 24 de julio de 1930 de Elías Tormo. Véase PESET, M. y J. L.: *La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*, Madrid, 1974 y PESET, M.: “Oposiciones y selección del profesorado durante los años de la Restauración”, *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, I, 2 (1987).

⁹⁶ Decreto de 13 de julio de 1940 (BOE 28), que determina los ejercicios conforme a 1931; Decreto de 24 de julio de 1930 de Tormo (Gazeta 30) y Decreto de 25 de junio de 1931, (Gazeta 26).

La financiación correría, como en las Universidades liberales, a cargo del Estado. Desde el proyecto gaditano de 1814 o el Reglamento general de 1821, se había distinguido entre Universidad pública y privada según quién la costeaba, Estado o particulares (aunque en este caso, con fiscalización gubernamental). A partir de 1842 los bienes y rentas universitarias pasaron al presupuesto público, hasta confundirse con éste. Así, si en otras etapas educativas se mantuvo la enseñanza privada, la universitaria siempre fue pública.⁹⁷ También en la Ley de 1943 las Universidades eran públicas y por lo tanto costeadas con el presupuesto estatal. Sin embargo, la normativa al respecto presenta alguna influencia del ideario pseudoautonomista de la Dictadura de Primo de Rivera. Al proclamar la personalidad jurídica de los centros superiores, se cree obligada a añadir algunos matices en su financiación, pero que no alteran el principio esencial anterior.

Cada Universidad tendría su propio patrimonio o capital, que administraría autónomamente, pero siempre quedaría obligada a cumplir las reglas presupuestarias que le imponían la ley y los reglamentos: el capital estaría formado por el 30% de las tasas, derechos por expedición de títulos, certificaciones, legados o donaciones o los que se le atribuyeran mediante ley, (artículo 95 en relación con el 84). Las rentas o ingresos de este patrimonio, junto a aportaciones del Estado u otros entes públicos, resto de ingresos por tasas y certificaciones, legados o donaciones, abintestatos de personal docente y descuentos por habilitación de la administración universitaria, serían el activo del presupuesto, con algunas prescripciones. Determinadas cantidades se adscribían a fines especiales –el Estado aseguraba tan sólo 150.000 pesetas de libre disposición-, como adquisiciones o reparación de edificios, bibliotecas, museos, clínicas, etc. En suma, los ingresos se especificaban por capítulos según la finalidad –como es usual en la contabilidad pública-, y se presentaban y aprobaban por el Ministerio, al que también se rendían cuentas una vez gastado; el presupuesto se administraba por el Rector, con un administrador

⁹⁷ Sobre las transformaciones de las haciendas universitarias véase PESET, M. y J. L.: *La Universidad española...* citada anteriormente y PESET, M. y J. L.: “Los gastos públicos de enseñanza en España (1842-1875). Una rectificación de datos anteriores”, *Hispania*, 39 (1979).

general y un interventor –nombrados por el Ministerio en la persona de sendos catedráticos-, según el capítulo XII, en sus artículos del 84 al 100.

Haremos ahora un rápido repaso a las fuerzas sociales y políticas que intervienen en el ámbito educativo. La ley de 1943, como se vio en el debate previo a su aprobación definitiva, nacía como resultado de la pugna entre las diversas fuerzas con representación en el nuevo estado, interesadas en garantizar cada una su parcela de poder dentro del campo educativo, a saber: la Iglesia, la Falange y el Ejército.⁹⁸

Cada una de esas fuerzas intentaría asegurar su presencia en la administración de la Universidad. Sin embargo hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos los límites en la pertenencia a uno u otro grupo eran bastante difusos. Con frecuencia, en los actores principales, se daba una doble “militancia” o pertenencia. En muchos casos, los principales protagonistas no sólo eran fervientes católicos defensores de la Iglesia, sino que además eran miembros de Falange y muchos de ellos habían participado activamente en la contienda desde las filas del ejército.⁹⁹

La presencia del Ejército quedaba incorporada a la ley a través del establecimiento de la milicia universitaria. Se trataba de reclutar entre el alumnado los alféreces provisionales para la escala de complemento. De esa manera se mantenía la relación entre ejército y Universidad, se conseguía una milicia más formada y se facilitaba el compaginar el servicio militar con los estudios. En un clima de exaltación castrense, era una oportunidad para imbuir ideología y virtudes militares a los universitarios. Con todo, el ejército sólo incidiría lateralmente en los dominios académicos. La ley apenas dedicaba un capítulo a la milicia universitaria (artículos 35 y 70 b).¹⁰⁰ Sin embargo, encontró

⁹⁸ Para el análisis de la presencia de estas fuerzas en la Universidad, véase PESET, M.: “La Ley de Ordenación Universitaria de 1943” y RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: *La Universidad de Madrid en el primer franquismo...*, ambas citadas anteriormente.

en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991.

⁹⁹ En relación con este aspecto puede resultar interesante el análisis de DE MIGUEL, A.: *Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los ministros del régimen*, 7ª edición, Barcelona, 1975.

¹⁰⁰ Véase el Decreto de 14 de marzo de 1942 por el que se aprueban las instrucciones para el reclutamiento y formación de la Oficialidad y Clases de Complemento (BOE 2 abril). Aunque tardío, se

una oposición radical a su pretensión de ser quien mantuviera el orden dentro del recinto universitario, por lo que la propuesta quedó finalmente desestimada.

La Iglesia, en cambio, resultó ser un elemento esencial en el texto final de la Ley.¹⁰¹ La Universidad española era católica por definición. Más allá del artículo 3, un tanto retórico, el artículo 9 resultaba fundamental puesto que reconocía explícitamente los derechos docentes de la Iglesia conforme a los sagrados cánones.

Así mismo, se le reconocía el derecho a fundar Universidades católicas, cosa que sin embargo, no se permitiría en la práctica hasta muchos años después, en que se fundó (1962) la Universidad del Opus Dei de Navarra. Los centros existentes, como Deusto, Comillas o El Escorial, siguieron estando obligados a realizar los exámenes en la cabeza del respectivo Distrito. Frente a las pretensiones de la Iglesia, el Ministerio dejaba todo atado y bien atado, como puede verse en la disposición final 5ª.¹⁰²

Sin embargo, en la propia Universidad estatal, nacional y católica, a la Iglesia se le asignaba una Dirección de Formación Religiosa en cada Universidad, que quedaba encargada de los cursos de religión y los actos de culto, la dirección de los templos o instituciones piadosas universitarias, etc. Los Directores serían designados por el Ministerio a propuesta del ordinario, arts. 32 y 48.

ocupa de este sector, LÓPEZ MEDEL, J.: *Ejército y Universidad*, Madrid, 1963, así como de los Colegios Mayores militares, desde posiciones cercanas al SEU. En general, acerca del Ejército en España, se puede consultar el libro clásico de PAYNE, S. G.: *Los militares y la política en la España contemporánea*, París, 1968 y del mismo autor: *Falange. Historia del fascismo español*, París, 1966, autor que en un intento por entender la época de Franco, dedicó su análisis a los dos poderes de la dictadura.

¹⁰¹ Respecto a la presencia de la Iglesia, no es posible por lo numerosa recoger toda la bibliografía existente, tan sólo citaremos alguna: RUIZ RICO, J.J.: *El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971)*, Madrid, 1977; TELLO, J. A.: *Ideología y política. La Iglesia católica española (1936-1959)*, Zaragoza, 1984; HERMET, G.: *Los católicos y la España franquista. I. Los actores del juego político*, Madrid, 1985; LANNON, F.: *Privilegio, y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975*, Madrid, 1990.

¹⁰² Se reconoció la docencia a sus profesores por Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se establece en las Universidades españolas la enseñanza religiosa (BOE 8 febrero) y Ordenes de 3 y 4 de marzo de 1944 (BOE 5), estableciendo la fecha en que ha de comenzar a impartirse y el programa inicial.

Con el paso del tiempo, a partir de mediados de los años cuarenta y la derrota de los fascismos europeos, Falange fue perdiendo peso específico respecto al nacionalcatolicismo, convirtiéndose éste en el eje de la política del régimen de Franco, produciéndose en todos los ámbitos una exaltación católica y nacionalista en detrimento del nacional sindicalismo falangista. Esos principios quedaron reflejados en la retórica del momento, de manera que si antes estaba basada en los tópicos de la raza, la patria, la sangre derramada o los caídos, se fueron volviendo a reforzar la catolicidad de España, los valores inmortales del cristianismo o la reserva espiritual de occidente. Junto con ello, se retomaba la tradición y se recuperaba la simbología y el ceremonial. Se nombraban santos patronos de cada disciplina y la formación religiosa se convertía en obligatoria.

La educación se convirtió así en el principal instrumento conformador y reproductor del aparato ideológico al servicio del Estado, en la correa transmisora de los principios inspiradores del régimen, con un papel primordial de la iglesia católica y los principios del movimiento, de cara al exterior fuertemente revestidos de una parafernalia de estilo fascista.

Frente a la aspiración modernizadora de la educación republicana, el franquismo impuso desde un principio la vuelta a los ideales más tradicionales y ultraconservadores, volviendo su mirada a la época imperial española, cuando no más allá, a la medieval. Frente a la educación democrática y laica, se proponía una educación completamente constreñida en lo científico y sobre todo, confesional.

En lo respectivo a Falange, del anteproyecto de 1939 en que ni siquiera aparecía explícitamente, pasó en la Ley del 43 a ocupar un lugar destacado gracias a la creación del SEPES y a la conversión del SEU en el sindicato único y obligatorio para el ámbito universitario. Por ello, a simple vista, parecía haber sido la principal beneficiaria del juego de poderes que atravesó la Universidad.

Lo más novedoso quizá en esta ley es que Falange lograba imponer dos organismos de su hechura, uno para profesores, el SEPES y otro para los escolares, el SEU con sus respectivos jefes militantes del partido. En el primer caso, la designación se hacía por el Delegado Nacional de Educación de FET de las JONS, de acuerdo con el Ministerio, y en el segundo caso, la designación se hacía por el Jefe Nacional del SEU, también de acuerdo con el Ministerio. Ambos tenían un lugar en la Junta de Gobierno y en el Consejo Universitario, cercanos siempre al poder rectoral, y recordemos que también el Rector había de pertenecer necesariamente a Falange por el artículo 40.

La pertenencia al SEU era obligatoria, los alumnos se encuadraban en la milicia universitaria y las alumnas en la Sección Femenina del mismo sindicato. El SEU era el encargado de seleccionar los alumnos que optaban por ampliar sus estudios en el extranjero, de conceder libros y medios didácticos gratuitos, de organizar el Frente de Juventudes y Servicio Obligatorio de Trabajo (SOT) y finalmente, de vigilar el funcionamiento de comedores, hogares y albergues. Sin embargo, Falange quedaba al margen del proceso de selección del profesorado. Ahí la ventaja clara era de los propagandistas y el Opus Dei. Aunque como ya se ha señalado, en la práctica, los católicos también pertenecían a Falange, con lo que se producía una conjunción perfecta.

En cualquier caso, la Universidad española se convirtió en un organismo controlado institucionalmente por Falange. Tendríamos Rectores afiliados, catedráticos adheridos al Movimiento y los estudiantes encuadrados en el SEU y en el Servicio de Protección Escolar –que distribuía becas, proporcionaba asistencia médico-sanitaria, y vigilaba las residencias de estudiantes cuando no obtenían plaza en los Colegios Mayores, manteniendo el contacto con las familias de los estudiantes, en colaboración con el SEU-. Incluso se pensó en poner un uniforme a los estudiantes, además de dotarles del distintivo del SEU (artículos 69 párrafo final, 70 b) y c).

Asimismo, al igual que a la Iglesia, se le concedió la capacidad de impartir las asignaturas de formación política y deportes a lo largo de todos los

años que durasen las correspondientes carreras, por los Decretos de 26 de enero y 29 de marzo de 1944.¹⁰³

La estética fascista era transmitida a través de los uniformes y de la formación física. La uniformidad es una constante retórica, desde los profesores con el traje académico a los alumnos con los uniformes del SEU. El reparto suponía finalmente el dominio ideológico de los dos grupos sobre los claustros y las aulas, interesados más en el adoctrinamiento y el control que en una enseñanza libre y crítica. Con ello se quería asegurar la continuidad del régimen, evitando que los futuros dirigentes se desviaran de sus postulados, función ideológica que ya era tradicional de épocas anteriores.¹⁰⁴

Sin embargo, a pesar de la perdurabilidad de la ley del 43, la prepotencia falangista se quebró en 1956, con los sucesos que costaron el cargo a Ruiz Giménez. En palabras de Ruiz Carnicer *“sólo teniendo en cuenta la totalidad de estos aspectos [de descontento más o menos soterrados] podemos entender cómo un choque puntual, un hecho breve y circunstancial, se convierte de pronto en el reconocimiento público, abierto y difundido de la existencia de un clima contrario al régimen entre los estudiantes y cómo hace que se genere la primera crisis de la dictadura, llegándose a suspender un par de artículos del Fuero de los Españoles por vez primera, forzando una remodelación de gobierno”*.¹⁰⁵

¹⁰³ Publicados en el BOE de 26 enero y 10 de abril de 1944 respectivamente.

¹⁰⁴ PESET, M. y J. L.: *La Universidad española...* citado anteriormente

¹⁰⁵ Véase RUIZ CARNICER: “Años cincuenta: génesis de la movilización universitaria contra Franco” en *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil*. La esfera, Madrid, 2007 y las siguientes aportaciones de HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Estudiantes en la universidad española (1956-1975): cambio generacional y movilización antifranquista” en *El Franquismo y la Transición en España: Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Coord. por Damián Alberto González, Madrid, 2008; “Represión y radicalización del movimiento estudiantil (1965-1969)” y “Pluralidad y fragmentación del movimiento estudiantil (1970-1973)” en *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil*. La esfera de los libros, Madrid, 2007; “Reforma desde el sistema y protagonismo estudiantil: la Universidad de Madrid en los años cincuenta”, en *La universidad española bajo el régimen de Franco: actas del congreso celebrado en Zaragoza del 8 al 11 de noviembre de 1989* / Juan José Carreras Ares, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, 1991 y finalmente, “Universidad y oposición al franquismo. Reflexiones en torno a los sucesos de 1956 en Madrid”, en J. Tusell, A. Altet y A. Mateos (Coords.), *La oposición al régimen de Franco*, Madrid, 1990, tomo II.

Los movimientos estudiantiles y los cambios sociales determinaron la supresión del SEU y la readaptación de las asignaturas puramente doctrinales en los inicios de disgregación del nacionalcatolicismo como recoge Elena Hernández Sandoica *“el sindicato falangista, SEU, fue suprimido de facto en 1965, precisamente cuando más necesitaba el sistema su tarea de indoctrinación, para salir al paso de las ingentes necesidades prácticas derivadas de la ampliación de matrícula; era el momento en que todo un conjunto de nuevas instituciones, facultades y centros se desgajaban de los anteriores. Pero la institución se hundió, en efecto, una vez que ya era imposible sostener por más tiempo su ficción de control sobre el estudiantado”*.¹⁰⁶

Respecto a la ordenación de las enseñanzas de las carreras técnicas, la Universidad se situaba en el punto jerárquico más alto en lo que respecta a su función científica. La Ciencia residía en la Universidad, y sólo siendo universitario se podía ser científico entendiéndose que el único espíritu científico había de ser por fuerza el universitario.

A pesar de la posición hegemónica y jerárquica que se otorgaba a la Universidad en relación con la ciencia, la creación temprana del CSIC como heredero de la JAE y aglutinador de los Institutos de investigación por ellos inventados, y su incorporación al panorama educativo superior como autoridad científica indiscutible en algunas actuaciones universitarias, se veía por algunos sectores como una herencia perniciosa¹⁰⁷, por lo que la ley incluía al CSIC en el conjunto de los órganos universitarios. No obstante, su pronta organización y el establecimiento de sus vocalías permitieron el acceso a buena parte de sus puestos a católicos cercanos al Opus Dei, con lo cual se aseguraba que la ciencia no quedaría en ningún caso fuera de la ortodoxia. Sin embargo, en

¹⁰⁶ Véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “La dictadura franquista y la universidad, 1951-1975 (Con especial atención al caso de Madrid)”, *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, nº 5, 2002.

¹⁰⁷ De forma explícita, el catedrático de Filosofía y Letras, Juan Yela Utrilla, llegaba a manifestar: “entendemos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha de ser absorbido completamente por la Universidad (...) De hecho, aunque el nombre haya cambiado, todos los españoles que tenemos ojos, veremos siempre en el CSIC una sucesión de artilugios y organismos creados por la Institución Libre de Enseñanza frente a la Universidad, siquiera se haya pretendido reformar el espíritu de los mismos”.

algunos aspectos, y en ciertos casos, la pura existencia de la institución enfrentaba los intereses de la Universidad y los del CSIC.¹⁰⁸

Para finalizar este apartado, destacaremos brevemente el papel central que la Universidad de Madrid, como en los tiempos que remontan al cambio poderoso de los liberales, seguiría teniendo.

La Universidad de Madrid, además de totalmente “remozada” en cuanto a su personal por obra de la depuración de docentes, resultaba claramente beneficiada por la nueva Ley, en buena parte como consecuencia de la presencia duradera de su Rector, Pío Zabala.¹⁰⁹ La Universidad de Madrid con esta ley reforzaba claramente su papel central, como modelo a seguir por el resto de las Universidades del Estado. Su Distrito quedaba ampliado por la anexión de Segovia a su territorio, se le encomendaba la organización de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y se ratificaba como único escenario posible para la defensa y lectura de las tesis doctorales. Como resultado de todo ello, la Ley fue muy favorablemente recibida por la Universidad madrileña.

Se consagraba así el centralismo madrileño en sentido geográfico en cuanto a su organización y en cuanto al poder que ejercían sus altos cargos y su influencia en la esfera política. Las directrices centralistas y la nueva ordenación económica universitaria reforzaban ese ya secular centralismo madrileño, pero también lo hacían los planes de estudio, con las prebendas académicas que éstos otorgaban a Madrid.

¹⁰⁸ Para este apartado véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Tres décadas de educación superior en España: Universidades e Investigación”, en Cuadernos del Instituto Antonio Nebrija, 11/1 (2008).

¹⁰⁹ Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: Estudio introductorio a *España bajo los Borbones* de Pío Zabala y Lera. Institución “Fernando el Católico” C.S.I.C., Zaragoza, 2009.

II.3. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 1970

La alta conflictividad y los sucesos acaecidos en la Universidad española a finales de los años 60 habían puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de transformaciones que le permitieran adaptarse a una sociedad que demandaba cambios y que apenas nada tenía que ver con la de los años 40. Por esta razón, la Ley de 1970 venía precedida por una serie de disposiciones dadas con carácter de urgencia relativas a la reforma de la Universidad y a la posibilidad de crear asociaciones estudiantiles. Todas medidas coyunturales mientras se aprobaba la Ley General de Educación.

Recordemos que en 1954 se había aprobado el Reglamento de disciplina académica¹¹⁰ el cual distinguía entre faltas que pudiera cometer el personal docente, facultativo y técnico y las de los escolares, y en ambos casos haciendo un especial hincapié en su comisión de forma colectiva. Entre las faltas de los docentes se encontraban las “manifestaciones contra la Religión y la moral católica o contra los principios e instituciones del Estado” (siendo un agravante el cometerlas dentro de la función docente), la insubordinación contra las autoridades académicas (siendo un agravante la insubordinación colectiva), y la incitación o estímulo en las manifestaciones colectivas de los escolares. Entre las de los escolares se encontraban igualmente las “manifestaciones contra la Religión y la moral católica o contra los principios e instituciones del Estado”, así como la inasistencia a clase, otorgando también mayor gravedad a las faltas carácter colectivo.

Todas las faltas se harían públicas, figurarían en la hoja de servicios o expediente académico y Libro Escolar y las correcciones impuestas se publicarían en el tablón de anuncios del Centro, o si se imponían mediante Orden ministerial, se publicarían en el BOE. Las sanciones podrían llegar, incluso, a la inhabilitación general y perpetua. Dentro de los locales de los Centros docentes no se podría celebrar reunión alguna sin permiso de la

¹¹⁰ Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional (BOE 12 octubre)

autoridad académica competente. Además, en circunstancias anormales, las autoridades académicas podrían acordar el aislamiento de los Centros docentes y en caso de urgencia la decisión la adoptaría el Ministro de Educación Nacional, quien daría cuenta al gobierno. Se establecían asimismo Tribunales de Honor para juzgar los actos deshonorables cometidos por el personal docente, facultativo y técnico, cuyas resoluciones eran inapelables.

En 1956 y 1958¹¹¹, ante los acontecimientos que se estaban viviendo¹¹², de nuevo dos Decretos precisaban el carácter de faltas colectivas, revisando la calificación de algunas faltas de los escolares. Las faltas colectivas de asistencia a clase, de desobediencia colectiva a las disposiciones reglamentarias o administrativas de las correspondientes autoridades y la incitación o estímulo a las demás, tendrían en todo caso la consideración de faltas graves y podrían ser sancionadas con la pérdida de matrícula. Por razones académicas y disciplinarias, la tramitación ordinaria podría ser sustituida por la actuación del Consejo Universitario de Disciplina, compuesto

¹¹¹ Decreto de 13 de enero de 1956 por el que se modifica el de 8 de septiembre de 1954, que aprobó el Reglamento de Disciplina académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, y precisando su ámbito de aplicación (BOE 18) y Decreto de 5 de septiembre de 1958 por el que se precisa la naturaleza de las faltas colectivas (BOE 27) respectivamente. Obsérvese la oportunidad de estos decretos surgidos en unos momentos verdaderamente convulsos como fueron los sucesos de febrero de 1956, que en palabras de Miguel Ángel Ruiz Carnicer “supusieron la primera crisis seria de la dictadura llegándose a suspender un par de artículos del Fuero de los Españoles, forzando una remodelación de gobierno”.

¹¹² Recuérdenos los sucesos de febrero del 56 en que se hizo manifiesta la oposición al SEU generándose graves disturbios que terminaron con un falangista herido y el cierre de algunos centros durante semanas, sucesos que fueron la razón del cese de Laín como Rector de la Universidad de Madrid y del Ministro Ruiz-Giménez. Para el estudio de estos acontecimientos véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET REIG, José Luis: “Laín en la Universidad de Madrid”, en *Cuadernos hispanoamericanos*, nº 446-447, 1987; de HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Universidad y oposición al franquismo. Reflexiones en torno a los sucesos de 1956 en Madrid”, en J. Tusell, A. Altet y A. Mateos (Coords.), *La oposición al régimen de Franco*, Madrid, 1990, tomo II; “Reforma desde el sistema y protagonismo estudiantil: la Universidad de Madrid en los años cincuenta”, en *La universidad española bajo el régimen de Franco: actas del congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989* / Juan José Carreras Ares, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, 1991; “La dictadura franquista y la universidad, 1951-1975 (Con especial atención al caso de Madrid)”, *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, nº 5, 2002; de la misma autora “Represión y radicalización del movimiento estudiantil (1965-1969)” y “Pluralidad y fragmentación del movimiento estudiantil (1970-1973)” en *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil*. La esfera de los libros, Madrid, 2007 y “Estudiantes en la universidad española (1956-1975): cambio generacional y movilización antifranquista” en *El Franquismo y la Transición en España: Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Coord. por Damián Alberto González, Madrid, 2008. De RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: “Años cincuenta: génesis de la movilización universitaria contra Franco” y de BALDÓ LACOMBA, Marc: “Los primeros sesenta: consolidación del antifranquismo en la Universidad”, ambos en *Estudiantes contra Franco (1939-1975)*, cit.

por las Juntas de Gobierno o de las Facultades o Escuelas, según correspondiera.

A la altura de 1965¹¹³, sin embargo, se publicó un nuevo Decreto que resultaría de gran alcance por cuanto supuso, de hecho, la disolución del SEU¹¹⁴. El SEU había intentado conectar con los estudiantes llevando a cabo servicios asistenciales, fomentando la práctica de actividades deportivas, culturales y formativas, pero las demandas ahora eran de otra naturaleza. Había intentado ser un órgano de participación y representación corporativa estudiantil, pero tampoco en este caso había conseguido sus objetivos. A esas alturas su credibilidad era nula y las disensiones también surgían desde dentro, toda vez que su función de contener las reivindicaciones estudiantiles había concluido con el más absoluto de los fracasos.¹¹⁵

Por lo tanto, el Decreto reconocía que las Asociaciones de Estudiantes constituían el medio de incorporación de los estudiantes a la comunidad académica para la promoción de sus intereses y que integraban en su conjunto asociativo al SEU, por lo que parecía conveniente crear una Comisaría que, dentro de la acción del Movimiento, asumiera las funciones de institución intermediaria entre la sociedad y el Estado para conseguir la armonía de intereses.¹¹⁶ Los alumnos, por el hecho de su inscripción en un Centro de enseñanza superior, quedaban incorporados a la Asociación del Centro respectivo, siendo dicha Asociación parte integrante de la correspondiente Corporación académica (Facultad, Escuela o Centro), a cuya disciplina quedaba sometida. El conjunto de estas Asociaciones integraría el SEU, entidad corporativa reconocida por el Estado como cauce de promoción de los intereses profesionales de los estudiantes.

¹¹³ Decreto 818/1965, de 5 de abril, por el que se regulan las asociaciones profesionales de estudiantes (BOE 7)

¹¹⁴ Para todo lo relativo al SEU resulta imprescindible la obra de RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*. S. XXI, Madrid, 1996; “El despertar del movimiento estudiantil en España (1900-1939)” y “Años cincuenta: génesis de la movilización universitaria contra Franco” en *Estudiantes contra Franco 1939-1975...cit.*

¹¹⁵ Véase también de RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana*. Síntesis. Madrid, 2004.

¹¹⁶ La disolución formal del SEU quedaba así enmascarada bajo la creación de unas “Asociaciones Profesionales de Estudiantes” escasamente representativas y vacías de contenido, eso sí, manteniendo la obligatoriedad de pertenencia sólo por el hecho de matricularse.

Las Asociaciones de Estudiantes estarían regidas por los siguientes órganos colegiados: Consejo de Facultad o Escuela, Consejo de Distrito y Consejo Nacional. Sus componentes serían elegidos por los estudiantes, iniciándose la elección en los representantes de cursos y cada uno de aquellos órganos elegiría de entre sus miembros un Presidente. Los estudiantes de una misma rama de enseñanza podrían agruparse en Asociaciones Nacionales en las que se integrarían las de Facultades, Escuelas o Centros de una misma especialidad docente. De esta manera la función representativa estudiantil se llevaría a cabo dentro del orden de los Principios Fundamentales que informaban la vida política y social de España.

Para el artífice del Decreto, la actividad universitaria “no era compatible con la existencia y actuación de cualquier organización política parcial en su propio seno, fuera del orden jurídico vigente, no con la utilización de las estructuras estudiantiles para fines distintos de su específico cometido”. Los estudiantes estarían representados a través de los vocales elegidos por los órganos de representación, es decir Consejo de Facultad o Escuela, Consejo de Distrito y Consejo Nacional (artículo 4). Las cuotas que los estudiantes abonasen con su matrícula se destinarían al cumplimiento de fines atribuidos a los órganos estudiantiles y serían administradas por sus entidades representativas de manera reglamentaria.

Para el ejercicio de las funciones de carácter cultural, formativo, asistencial y deportivo en lo que rebasasen la función estrictamente académica y como órgano de enlace entre las Asociaciones de Estudiantes y las instituciones del Estado y del Movimiento, se creaba una Comisaría para el SEU con categoría de Delegación Nacional, cuyo titular sería nombrado por Decreto, a propuesta del Ministro Secretario General del Movimiento. Mientras no entrasen en vigor las normas reglamentarias establecidas por el Decreto, las funciones de estas Asociaciones quedaban asumidas, a nivel de Cursos, Facultad o Escuela, por los Delegados elegidos por los alumnos y por los órganos del SEU que existían en aquellos momentos.¹¹⁷

¹¹⁷ Sin embargo, ese mismo año en febrero, un mes después se volvió a reunir una asamblea que solicitó la desaparición del SEU. No se pedía la democratización del SEU sino su total desaparición.

Posteriormente, las Órdenes de 3 de junio del 65 y la de 15 de marzo del 66¹¹⁸ establecían una reglamentación provisional, sobre todo en lo relativo al régimen electivo, con vistas al comienzo del curso y hasta que se aprobara la definitiva. En cada Centro de Enseñanza Superior se constituiría una Asociación de Alumnos regida por una Junta directiva o Consejo de la Asociación, cuyos cargos se elegirían por todos los alumnos oficiales. Dicha Junta directiva estaría compuesta por Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocales. La elección se llevaría a cabo al comienzo del curso, en el mes de noviembre, en que se elegiría Delegado y Subdelegado de curso. Una cuestión importante es que “el voto sería obligatorio para todos los alumnos oficiales y los que no votasen quedarían privados de su condición de oficiales”¹¹⁹, siendo nula la votación en la que no participase al menos un 80%.

Todos los Delegados y Subdelegados de curso constituirían a su vez el Consejo de Centro o Junta directiva de la Asociación de alumnos, y el Presidente y Vicepresidente tendrían que ser alumnos Delegados de los dos últimos cursos o bien de Doctorado. La Junta directiva sería convocada por el Presidente o, en todo caso, una vez al trimestre. Habría un Orden del día (de la que se daría cuenta al Decano o Director) y un acta firmada. La Asociación podría promover actividades de orden cultural, siempre previa autorización de los órganos correspondientes de la Universidad. En la Junta de profesores de Facultad o Escuela los estudiantes estarían representados por el Presidente de la Asociación y por otros miembros de la Junta directiva elegidos por sus componentes. Los medios económicos con que habrían de contar serían las cuotas y subvenciones de la inscripción obligatoria de todos los alumnos matriculados.

¹¹⁸ Orden de 3 de junio de 1965, complementaria del Decreto 818/1965, por el que se regulan las asociaciones Profesionales de Estudiantes (BOE 5) y la Orden de 15 de marzo de 1966 por la que se autoriza la constitución de Asociaciones Profesionales de Estudiantes en los Centros docentes que se indican (BOE 19) respectivamente.

¹¹⁹ Esta era la respuesta a la escasa participación del alumnado en esas elecciones, justamente al mismo tiempo que se estaban convocando elecciones paralelas con una elevada participación por parte de los sindicatos ilegales. “Tanto es así que el Rectorado hizo pública una nota por la que se exigía que los alumnos que no hubieran votado en las elecciones de las APEs presentasen un justificante, salvo pena de pérdida de su condición de alumnos oficiales”, véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Represión y radicalización del movimiento estudiantil (1965-1969)” en *Estudiantes contra Franco...cit.*

Los Presidentes de todos los Centros del Distrito Universitario componían el Consejo de Distrito y entre ellos elegirían a su Presidente, que representaría a los alumnos en la Junta de Gobierno de la Universidad. Asimismo, designarían los representantes en la Junta de Protección Escolar, Asesoría del Seguro Escolar y en el Consejo de Administración de la Mutuality. Los Presidentes de todos los Consejos de Distrito, a su vez, formarían el Consejo Nacional de Asociaciones de Alumnos y entre ellos designarían representantes en el Consejo Nacional de Protección Escolar, Consejo de Administración y de la Mutuality del Seguro Escolar y Patronato del Fondo para el Desarrollo del Principio de Igualdad de Oportunidades. Los cargos no podrían ser remunerados.

En el caso de que las actividades de la Asociación representada por su Junta directiva rebasaran el ámbito de las competencias establecidas en el Decreto de 5 de abril de 1965 y Órdenes complementarias y se originasen desórdenes, faltas colectivas a clase o desacato a las autoridades académicas, el Decano podría suspender toda actividad de la Asociación por un periodo entre uno y tres meses, estando facultado para ordenar el cese de los miembros de la Junta poniéndolo en conocimiento del Rector, que en su caso ratificaría la orden y procedería a la nueva elección de cargos, sin perjuicio de las sanciones que correspondieran a las faltas por aplicación del Reglamento de Disciplina Académica.

Los estudiantes de una misma rama podrían agruparse en Asociaciones Nacionales, en las que se integrarían las de Facultades, Escuelas o Centros de una misma especialidad docente. Los Decanos o Directores de Centro, finalmente, podrían dictar las disposiciones que estimasen convenientes para el buen funcionamiento de las Asociaciones de Alumnos en todo aquello que no estuviese previsto por la susodicha Orden. Lo contenido en ella sería de aplicación, asimismo, en las Escuelas Técnicas de Grado Medio, Escuelas profesionales de Comercio, Escuelas Superiores de Bellas Artes y Conservatorios Superiores de Música y Declamación, centros docentes dependientes todos ellos del Ministerio de Educación Nacional. La norma del 66 autorizaba la constitución de Asociaciones en todos aquellos centros que,

sin ser de Educación Superior, dependieran del SEU, citándolos explícitamente.

En cuanto a la subsiguiente reorganización universitaria, de gran importancia, hay que citar el Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, de medidas urgentes de reestructuración universitaria, que supondría la creación de las universidades autónomas de Madrid y Barcelona¹²⁰. En él se señalaba cómo el crecimiento de población en las grandes ciudades había creado dificultades pedagógicas y de espacio en los centros, que obligaban a poner fin a la estructuración en distritos universitarios conteniendo una sola Universidad. Asimismo, el régimen uniforme de regulación universitaria resultaba inadecuado a las necesidades de cada Universidad e incluso de cada unidad facultativa, por lo que se abría la posibilidad de que cada Universidad pudiera tener sus propios Estatutos.¹²¹

Por otra parte, se ponía de manifiesto la necesidad de reestructuración de la Universidad estatal, debiéndose adecuar a una realidad social que había experimentado un profundo cambio. Por todo ello se consideraba necesario un examen previo detenido, con la participación e informe del Consejo Nacional de Educación, del Consejo de Rectores, de los Claustros generales de las Universidades, de la adecuada representación estudiantil¹²² y de cuantos elementos de la sociedad consideraba el legislador como legitimados para influir en tal reordenación, ya que según su propio parecer, formular un proyecto de Ley prescindiendo de asesoramiento previo sería frustrar su

¹²⁰ Publicado en el BOE de 7 de junio. Con la creación de nuevas universidades y centros se pretendía poner remedio a la creciente masificación de las universidades, especialmente las de Madrid y Barcelona. Sin embargo, como se verá después, tampoco ésta fue la solución ya que la carencia de infraestructuras y medios de todo tipo seguirían siendo una constante.

¹²¹ Así se intentaba dotarlas de cierta dosis de autonomía, que posteriormente se aplicaría al resto de las universidades estatales.

¹²² Es importante señalar que la Universidad del franquismo era “una Universidad para los alumnos, pero sin los alumnos” ya que eran considerados en una permanente minoría de edad, sin capacidad de opinión ni decisión. Más allá de haberlos convertido en la razón de ser del SEU, sólo se les contemplaba como sujetos “pacientes” del Reglamento de disciplina académica de 1954, o bien como sujetos activos de faltas colectivas que había que delimitar claramente – según Decreto de 1958 (BOE 27)-. Desde 1968, gracias a sus movilizaciones y protestas, habían conseguido cierto protagonismo, claramente, pues se les otorgaba la capacidad de constituir Asociaciones de Estudiantes por el Decreto 2248/1968 de 20 de septiembre que se verá más adelante (BOE 23). Y ya en los 70, el Decreto 2925/1974 de 17 de octubre (BOE 21) y la Orden de 21 de octubre de 1974 (BOE 22) regularían su participación a nivel universitario, permitiéndoles dialogar con las autoridades académicas a través de los delegados.

eficacia. Manifestaba que las reformas habían de ser esenciales, no simples retoques de detalle en el funcionamiento universitario. La gravedad de ciertos problemas suscitados por la masificación de la enseñanza en las grandes ciudades había generado tal nivel de conflictividad entre el estudiantado que ello no permitía demorar más la solución, a la espera del proyecto de Ley. Era necesario ensayar, mediante medidas de urgencia, criterios que pudieran informar la futura Ley.¹²³

De ahí que las reformas que el Decreto-Ley en cuestión establecía fueran en principio de aplicación sólo a los nuevos centros docentes creados en virtud del mismo, sin alterar la regulación de las Universidades previamente existentes. Era un hándicap el hecho de que los presupuestos generales a esa altura del año (era el mes de junio) ya estaban aprobados, uniéndose a ello las dificultades para llevar a cabo en esas fechas la selección del profesorado, y tampoco estaban disponibles locales apropiados, lo que imponía un alcance limitado incluso a reformas que no pretendían ser definitivas.

Se creaba, de ese modo, una nueva Universidad en Madrid (la UAM), que constaría de las Facultades de Ciencias; Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección de Económicas); Derecho; Filosofía y Letras y Medicina y otra nueva también en Barcelona (la UAB), quedando pendiente en este caso la decisión acerca de los estudios que comprendería. Se creaba también una Universidad en Bilbao, con la Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Económicas o Comerciales (Sección de Económicas) y Facultad de Medicina, y se autorizaba la creación de una Facultad universitaria en Santander, en San Sebastián y en Badajoz. Las enseñanzas en esos nuevos centros deberían implantarse gradualmente.

Se autorizaba de paso la reestructuración de los preexistentes distritos universitarios con el objeto de conseguir una distribución adecuada del número de estudiantes, al tiempo que se incrementaría la plantilla de catedráticos

¹²³ Una vez más se querían ver los conflictos causados por razones exclusivamente académicas (masificación en las aulas) susceptibles de ser resueltos mediante nueva normativa “de urgencia”, cuando en realidad eran reivindicaciones de orden político las que subyacían.

numerarios y profesores Adjuntos para lograr una media de 50 alumnos por profesor (objetivos que, claramente, no se consiguieron).¹²⁴ Se crearon también los Institutos Politécnicos Superiores de Barcelona y Valencia.

Los nuevos centros estarían regidos provisionalmente por un Estatuto propio de cada uno de ellos, en el que se recogería lo relativo a su organización, régimen docente y económico-administrativo, estatuto que aprobaría el Gobierno a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previo informe del Ministerio de Hacienda en materia económica y con los asesoramientos e informes que, en su caso, se estimasen pertinentes.

Los órganos de gobierno de las nuevas Universidades podrían estructurarse de modo que, reforzando su autonomía funcional y financiera, se separasen las tareas típicamente universitarias de las gerenciales o administrativas, pudiendo éstas, delegarse en un “pro-rector” designado por Decreto, sin que hubiera de pertenecer al estamento docente. Los puestos de catedráticos, agregados y adjuntos de los nuevos centros se cubrirían en primera convocatoria mediante concurso general de traslado.

En cuanto a los estudiantes, dos medidas de importancia quedaron realmente luego en el papel. Para lograr la igualdad de oportunidades se incrementarían los “préstamos sobre el honor” y se establecería un sistema de becas para quienes careciendo de medios económicos suficientes poseyeran las condiciones intelectuales precisas para seguir estudios universitarios. Para ello se contaría con cantidades adscritas a la Enseñanza Universitaria en el Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades. El Gobierno, asimismo, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, podría utilizar, en las Universidades existentes o en las de nueva creación, la constitución y organización de entidades representativas de estudiantes que permitieran canalizar sus aspiraciones en cada Facultad o Universidad,

¹²⁴ Dicha reestructuración fue recogida por el Decreto 2749/1970, de 22 de agosto, sobre delimitación de los Distritos correspondiente a las nuevas Universidades creadas en Madrid y Barcelona por el Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio (BOE 28 septiembre). Según éste, el Ministerio de Educación y Ciencia a propuesta de la Junta Nacional de Universidades (y hasta su constitución, por el Consejo de Rectores), determinaría los Centros docentes que en Madrid y Barcelona pasarían a depender de las nuevas Universidades.

siempre que aquellas fueran solicitadas por el porcentaje mínimo que se determinase del alumnado del Centro.¹²⁵

De nuevo, en el mismo año, tan sólo un mes después, se publicaba un segundo Decreto que desarrollaba el anterior¹²⁶ y abundaba en la composición y organización de los centros creados. La nueva Universidad Autónoma de Barcelona, cuyos estudios habían quedado pendientes en el Decreto anterior, se decidía ya que constara de las Facultades de Filosofía y Letras; Medicina; Ciencias y Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección de Económicas y Comerciales). Se precisaban también los estudios a impartir en Bilbao, cuya universidad que constaría de las facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección de Económicas), Medicina y Ciencias (Sección de Químicas)¹²⁷. Las Universidades de Santander y Badajoz contarían a su vez con facultades de Ciencias y la de San Sebastián contaría con Derecho, dependiendo cada una de sus respectivos distritos.

Las nuevas universidades de Madrid y Barcelona no tendrían distrito universitario propio, de manera que los Rectores ceñirían sus funciones a sus propios centros (artículos del 41 al 44 de la Ley de 1943). Los Rectores respectivos distribuirían el alumnado entre ambas, en la medida de lo posible.

En tanto se nombraran órganos de gobierno según las nuevas normas, se autorizaba al Ministerio de Educación y Ciencia para que por Orden Ministerial pudiera designar comisiones que se encargasen de las funciones administrativas y docentes, asumiendo aquellas que leyes y reglamentos atribuían a las Juntas de Gobierno y a los Claustros de Facultad. En cuanto a la apertura de cauces de expresión del alumnado, como ya se dijo anteriormente, el Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria, en su artículo sexto, abría la posibilidad de que se crearan “entidades representativas de estudiantes” no ya puramente

¹²⁵ En ese sentido, muy poco después, fue aprobado el Decreto 2248/1968 de 20 de septiembre, sobre Asociaciones Estudiantiles (BOE 23) que se verá más adelante.

¹²⁶ Decreto 1774/1968, de 27 de julio, que desarrollaba el artículo primero del Decreto-ley de 6 de junio sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria Publicado en el BOE de 30 de julio.

¹²⁷ Ésta última, novedad respecto al Decreto previo.

“profesionales”, lo cual se materializó mediante el Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, sobre Asociaciones de Estudiantes.¹²⁸

El Decreto asumía que se había iniciado en la Universidad española un proceso de reorganización que requería la participación del estamento estudiantil en la vida académica, tanto en los aspectos culturales como en los profesionales. Por ello se daba cauce a la posibilidad de que los estudiantes creasen sus propias asociaciones dentro de las Universidades y sus centros, sin perjuicio de las federaciones que pudieran establecerse. Dichas Asociaciones de Estudiantes, eso sí, deberían estar inspiradas y orientadas por fines específicamente universitarios.

Los principios que regirían el sistema asociativo serían la *libertad y voluntariedad de asociación* y la *autonomía*, con la única sujeción a los requisitos legales mínimos establecidos en la Ley de Asociaciones (de 24 de diciembre de 1964), mediante la elaboración de Estatutos donde las asociaciones estudiantiles establecieran su organización interna. Las funciones que en el régimen general se encomendaban a la autoridad gubernativa en el ámbito universitario pasaban a la autoridad académica. Otros principios serían los de *representatividad y participación*, tanto a nivel interno dentro de las propias asociaciones como en cuanto a la participación estudiantil en los órganos de gobierno y consulta universitarios, salvando siempre el derecho y el deber de los estudiantes que no formasen parte de dichas asociaciones a intervenir en las elecciones y a estar representados y finalmente, los principios de responsabilidad y publicidad.

¹²⁸ Publicado en el BOE de 23 de septiembre. Resulta realmente clarificador observar la evolución que siguen a lo largo del tiempo las relaciones Universidad-alumnos. En el año 54 los alumnos, son considerados por Reglamento disciplinario, junto a docentes y demás funcionarios. Dicho Reglamento tiene fundamentalmente un carácter represivo y sancionador, en que las faltas se consideran desde los puntos de vista ético, moral e ideológico, fundamentalmente cometidas individualmente. En el año 56 la modificación normativa dada era la respuesta a los cambios sustanciales que se habían empezado a producir en el movimiento estudiantil. A partir de ese momento se revisaba la clasificación de “faltas colectivas” que serían consideradas graves y sancionadas como tal. En 1958, se precisaba la naturaleza de las faltas colectivas, la manera de juzgarlas y las sanciones. En 1965 el SEU da paso a Asociaciones Profesionales de Estudiantes a las que habían de pertenecer todos los alumnos oficiales, de forma obligatoria. Se concebían como asociaciones “orgánicas”, parte integrante de las distintas Facultades y Centros. Pero no sería hasta 1968 cuando una vez más la fuerza de los hechos hiciera plantearse al gobierno la necesidad de abrir cauces (aunque fueran limitados) de participación y canalización de las expectativas del alumnado, cada vez más y más reivindicativo e implicado con el movimiento estudiantil.

El Decreto recogía asimismo el modo de elección de los representantes estudiantiles ante los organismos académicos, especialmente en los claustros, y establecía su participación en los órganos de gobierno de la Universidad para promover, gestionar y defender sus intereses. También podrían los estudiantes constituir asociaciones con fines específicos en los ámbitos académico y profesional, con “exclusión de fines ajenos y siempre dentro del respeto al ordenamiento jurídico de la Nación y la Universidad española.”

Cada curso elegiría, mediante sufragio directo, igual y secreto, a su Delegado, Subdelegado y siete Consejeros. Todos ellos integrarían el Consejo de Curso, debiendo los electos ser alumnos oficiales y habiendo alcanzado un mínimo de votos del 25% de los alumnos oficiales de su propio curso. El conjunto de todos los Consejeros de curso de cada Centro integraría la respectiva cámara, la cual elegiría de entre todos los Delegados de curso al Delegado y Subdelegado de Centro, a los Jefes de Departamento y a los que hubieran de dirigir las distintas actividades en cada Centro. Podrían promover Asociaciones de Estudiantes los alumnos que se hallasen en pleno uso de sus derechos académicos. En sus estatutos se recogería su denominación, domicilio, fines específicos, órganos directivos y forma de administración, así como el procedimiento de adquisición y pérdida de la condición de asociado, sus derechos y deberes, el patrimonio fundacional, los recursos económicos y presupuesto anual y la aplicación que se daría al patrimonio social, de manera que en caso de ser disuelta la asociación, aquél habría de revertir en alguna institución universitaria, siendo requisito para su constitución como Asociación el que el número de promotores alcanzara el cinco por ciento del alumnado oficial del ámbito a que la Asociación pretendiera circunscribirse. En cualquier caso, el mínimo serían cincuenta alumnos.

El Ministerio de Educación y Ciencia debería aprobar directamente los Estatutos de cada Asociación. En cada Rectorado existiría un Registro de Asociaciones de Estudiantes de su ámbito, y en el Ministerio de Educación se encontraría el Registro Nacional de Asociaciones de Estudiantes, ambos públicos. Toda asociación habría de contar con un Libro de Actas, un Libro registro de los miembros de la asociación y un Libro de Contabilidad, los dos

últimos diligenciados por el juez municipal decano y que estarían siempre a disposición de las autoridades académicas y judiciales. Las Asociaciones de Estudiantes, a su vez, podrían federarse.

Las autoridades académicas y las Direcciones Generales del Ministerio podrían decretar la suspensión de las actividades de las asociaciones estudiantiles por un plazo no superior a tres meses, pudiendo suspender también actos concretos o acuerdos de éstas, actuaciones contra las que se podría interponer el correspondiente recurso. Los acuerdos o actuaciones contrarios a los Estatutos o a lo establecido en el Decreto, podrían ser suspendidos o anulados por la autoridad judicial a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal. A iguales instancias podría el Juez acordar la suspensión provisional de una determinada Asociación. El artículo noveno recogía las causas de disolución. Con todo, a pesar de la importancia de lo contenido en el Decreto, habría que esperar hasta 1974 para que se dictara su desarrollo.¹²⁹ Normas previas como aquéllas eran posiblemente imprescindibles para proceder a dar curso a la Ley General de Educación, que aunque resultara frustrada apenas se intentó su puesta en marcha, iba a cambiar sustancialmente el panorama educativo español en todos los niveles, de manera que ya no habría marcha atrás.

La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970¹³⁰, cuyo estudio se aborda a continuación, supuso ciertamente un hito en el panorama educativo español, más allá de ciertos elementos susceptibles de crítica, tanto en aquella misma época como a posteriori. Se trataba de una ley de carácter globalizador, que intentaba modernizar, racionalizar y sentar las bases del “sistema educativo español” entendido como un todo, afectando a todos los niveles educativos, revisando todo tipo de enseñanzas y reordenando todos los elementos y agentes sociales que pudieran intervenir en el hecho

¹²⁹ Con posterioridad a la Ley General de Educación este Decreto que concedía a los estudiantes la posibilidad de crear asociaciones se vería completado con el Decreto 2925/1974, de 17 de octubre, por el que se regulaba provisionalmente la participación estudiantil a nivel universitario (BOE 21) y por la Orden de 21 de octubre de 1974 que desarrollaba el Decreto sobre participación estudiantil (BOE 22), ambos se recogerán más adelante.

¹³⁰ Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE 6). Llama la atención la alusión en el propio enunciado a la cuestión crucial de su financiamiento, su gran punto débil que la llevaría al fracaso.

educativo, partiendo de la reorganización interna ministerial y del funcionariado docente, incluidas las enseñanzas dependientes de otras entidades, ya fueran éstas públicas o privadas.

A partir de ese momento, se entendía que la educación no era sólo un deber, sino fundamentalmente un derecho común a toda la población, y por eso la que habría de llamarse “ley Villar” establecía unos mínimos irrenunciables en la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza para todos los españoles, hasta llegar a los catorce años, al tiempo que señalaba la conveniencia de extender las enseñanzas preescolares.¹³¹ En su afán modernizador, organizaba también las enseñanzas de carácter técnico y profesional hasta los niveles superiores creando la Formación Profesional de I, II y III grado. A este tipo de enseñanzas se incorporaban los Centros de Formación Profesional Industrial y las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.¹³² Se reorganizaron también las enseñanzas medias y se creó el Curso de orientación universitaria, COU, preparatorio para el ingreso en la universidad.

En el ámbito universitario, además de permitir la reorganización interna de los centros, las modificaciones de los planes de estudio y su régimen de autogobierno mediante la aprobación de Estatutos para cada Universidad y la reforma de las categorías del profesorado, incorporaba al sistema en el nivel universitario numerosas disciplinas que habían quedado al margen en la ley del 43: así las Escuelas Normales; las Escuelas Técnicas de Arquitectura e Ingeniería; los estudios artísticos (Escuelas Superiores de Bellas Artes, el Conservatorio de Música y las Escuelas de Arte Dramático); los estudios de Periodismo; el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) y los Institutos Politécnicos Superiores, que se integrarían en las Escuelas Técnicas Superiores. Con el rango de Escuelas universitarias se incorporaban las Escuelas de Idiomas; las de Ayudantes Técnicos Sanitarios y las Escuelas Profesionales de Comercio. También se integrarían en el sistema educativo

¹³¹ Estos principios, fundamentales desde nuestro punto de vista, no tendrían marcha atrás y suponían un cambio en la concepción de la educación como un derecho irrenunciable y al mismo tiempo con carácter de obligatoriedad en los niveles básicos.

¹³² En esto se recogía el impulso otorgado por el anterior Ministerio de Lora Tamayo hacia las enseñanzas técnicas y profesionales.

general los centros dependientes de las Delegaciones Nacionales de Juventudes, de Sección Femenina, Educación Física y Deportes y demás Organizaciones del Movimiento y de la Organización Sindical.

Un aspecto fundamental en la filosofía subyacente de esta Ley era su flexibilidad, de manera que la educación se entendía como un “continuum”, un fin en sí misma, y ningún itinerario era rígido, se podía iniciar en cualquier punto y reconducir en cualquier momento a lo largo de la trayectoria educativa del individuo. Se establecía así la educación permanente de los alumnos. En ese sentido se regularon las enseñanzas para adultos, el acceso a la Universidad para mayores de 25 años y la educación a distancia (ya fuera para los emigrantes residentes en el extranjero o para aquellos españoles que, por las razones que fuera, no podían asistir regularmente a clase, de ahí el surgimiento de la UNED en 1972 y el INBAD en 1975). También se reconoció el derecho a recibir educación especial cuando fuera preciso.

Sin embargo, a pesar de las evidentes mejoras frente a lo existente, fue una ley desafortunada que hubo de enfrentarse a serias dificultades de todo tipo, ya antes de su promulgación y aún más desde el momento en que se acordó promulgarla, tantas y tan graves que llegaron a impedir, de hecho, su total puesta en marcha.

La Ley partía de presupuestos, explicitados en su exposición de motivos, como que el sistema educativo nacional debía proporcionar oportunidades a la totalidad de la población, garantizando el derecho a acceder a la educación. Había de dar respuesta a la necesidad de preparación especializada de gran número y diversidad de profesionales requeridos por la sociedad del momento, al tiempo que debía asegurar la conservación y enriquecimiento de la cultura nacional, del progreso científico y técnico, la capacitación del individuo para afrontar los nuevos retos del mundo contemporáneo y la contribución urgente a la edificación de una sociedad más justa. El legislador reconocía que el marco legal imperante hasta el momento en España respondía al esquema decimonónico y desfasado de la Ley Moyano, reflejo de un estilo clasista, contrario a lo que ahora se pretendía, democratizar la enseñanza. Aquella ley

trataba de dar respuesta a las demandas de una España de quince millones de habitantes, con una población en su mayoría analfabeta, constituida fundamentalmente por jornaleros y “pobres de solemnidad”, en definitiva, una estructura socioeconómica preindustrial. De ahí un sistema educativo dirigido a una sociedad estática y una universidad cuya estructura y organización respondían a modelos importados de otros países. Este espíritu había pervivido gracias a las múltiples reformas parciales que habían permitido su adaptación a las necesidades actuales, pero en general las respuestas siempre habían ido a la zaga de la presión social.

El nuevo contexto requería en cambio una reforma amplia, profunda y previsor de las nuevas necesidades en el ámbito educativo, más allá de medidas tangenciales y apresuradas, de remedios de urgencia. Era necesaria una reforma integral. Existía el deseo de dotar al país de un sistema educativo más justo, más eficaz, y acorde con las aspiraciones de la sociedad dinámica y creadora en que, a lo que se veía, se iba convirtiendo la española.

Para la elaboración de la ley se había recurrido al “asesoramiento de los sectores profesionales más capacitados y de las entidades más representativas de la sociedad española”¹³³. Su redacción había venido precedida por un estudio en profundidad de la situación preexistente: *“La educación en España: bases para una política educativa”* (el llamado Libro Blanco) publicado en febrero de 1969, síntesis de la situación educativa española y avance de las líneas generales de la política educativa a aplicar. Mediante este estudio previo se intentaba recoger el sentir general, considerado imprescindible para lograr el consenso social respecto al tema.¹³⁴ De forma explícita se manifestaba que el espíritu de la ley no consistía en la aplicación de dogmas pedagógicos, ni en la imposición autoritaria de un determinado tipo de criterios, sino en un ánimo abierto al ensayo, la reforma y la colaboración, viniera de dónde viniera.

¹³³ Intervinieron organismos como el Consejo Nacional del Movimiento, la Organización Sindical, el Instituto de Estudios Políticos, la Comisión Episcopal de Enseñanza, las asociaciones de profesores, las hermandades de inspectores, las Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sin embargo quedaron fuera amplios sectores del profesorado y sobre todo, el alumnado de los niveles medios y superiores, que fue obviado.

¹³⁴ Sin embargo la Ley fue muy criticada por diferentes sectores desde el propio estudio.

La ley trataba de huir del uniformismo que impediría que cada Centro docente fuera considerado con sus peculiaridades, y para ello se inclinaba por el régimen de Estatutos individuales y de la autonomía de los centros. Entre sus objetivos se encontraba el hacer partícipe de la educación a toda la población española, completar la educación general con una preparación profesional que capacitase al individuo para la incorporación a la vida laboral (Formación Profesional), ofrecer igualdad de oportunidades educativas a los españoles, sin más límite que su capacidad para el estudio, establecer un sistema educativo caracterizado por su unidad y flexibilidad de interrelaciones, posibilitando la educación permanente, y construir un sistema educativo permanente en un sentido no selectivo del alumno, sino tendente a potenciar las capacidades.

El periodo de Educación General Básica (EGB) se establecía como único, obligatorio y gratuito para todos los españoles, eliminando cualquier discriminación en aras de la igualdad de oportunidades educativas. En la enseñanza secundaria, el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) ofrecería una amplia diversidad de experiencias práctico-profesionales, intentándose que “cuando las condiciones económicas del país lo permitieran, llegara a ser gratuito”. La enseñanza universitaria se enriquecería y flexibilizaría a su vez, al introducir en ella distintos ciclos, instituciones y más ricas perspectivas de especialización profesional.¹³⁵ El objetivo era que en cualquier momento del proceso educativo, superada la Educación General Básica, se ofrecieran al alumno posibilidades de formación profesional, así como de reincorporación a los estudios en cualquier época de su vida laboral.

Se aspiraba a mejorar el rendimiento y calidad del sistema educativo considerándose fundamental la formación y el perfeccionamiento continuos del profesorado, así como la dignificación social y económica de la profesión

¹³⁵ Los estudios universitarios quedaban divididos en tres ciclos que pretendían graduar el acceso de alumnos a los distintos niveles universitarios. La superación de cada uno de ellos daba lugar a la consecución de un título independiente (diplomatura, licenciatura y doctorado), que facultaba para el desempeño de determinados puestos y profesiones. Mediante la reforma de los planes de estudio, la Ley perseguía una mayor especialización.

docente,¹³⁶ para lo que se creaban los Institutos de Ciencias de la Educación (ICEs), que fueron establecidos a partir de entonces en todas y cada una de las universidades españolas. La ley implicaba asimismo revisión de los contenidos educativos, orientándolos más hacia los aspectos formativos y capacitación del alumno para aprender por sí mismo que a la erudición memorística, tendiendo a una adecuación entre las materias de los planes de estudio y las exigencias de la sociedad (una declaración constante de este tipo, sin embargo, provocó reacciones muy fuertes por parte del movimiento estudiantil, que identificaba “sociedad” con intereses económicos y tecnocráticos).¹³⁷ Se preveía la introducción de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, de evaluación del rendimiento escolar, así como la creación de servicios de orientación educativa y profesional, y la racionalización de múltiples aspectos del proceso educativo que evitaría la subordinación del mismo al éxito de los exámenes.

La reforma partía del análisis de la realidad educativa del momento, contrastada con experiencias de otros países, y obedecía a incitaciones y pautas europeístas, en relación con la inserción progresiva de España en el marco europeo-occidental.¹³⁸ La buscada flexibilidad de la ley permitiría en principio realizar las reorientaciones e innovaciones que, a lo largo de su puesta en práctica, resultaran necesarias. La dirección de toda la actividad educativa correspondería al Estado como responsable último. Entre sus funciones estaría formular la política en este sector, planificar la educación y evaluar la enseñanza en todos sus niveles y Centros. El funcionamiento jurídico de la Ley estaría supeditado en todo momento, sin embargo, a la pedagogía.

¹³⁶ Pretensión que no se lograría en el ámbito de la educación superior debido al continuado aumento del número de estudiantes (en contra de las previsiones) y a la escasez de medios, que obligó a la contratación de un número elevado de “profesores no numerarios” en condiciones claras de precariedad. En palabras de Marc Baldó en “Los primeros sesenta: consolidación del antifranquismo en la Universidad”, *Estudiantes contra Franco, cit.* “el crecimiento de estudiantes, había obligado a nombrar profesores no numerarios que se contrataban en precario y entre los que existía gran variedad de salarios y tipos de vinculación. Compartían, sin embargo, la inestabilidad del puesto de trabajo y un sueldo corto” p. 163.

¹³⁷ Según lo recogido por Marc Baldó “ni la Ley General de Educación de 1970 fue el instrumento potente que hubiera debido ser, aunque sí lo único que en mucho tiempo hubo para reformar la universidad, ni resultó posible remediar la crisis: su aplicación no enmendó la precariedad de recursos y fue, además, contestada severamente por los estudiantes porque era una reforma tecnocrática -y no democrática- que venía a satisfacer, se diría, las necesidades de mano de obra barata de un mercado de trabajo dominado por el gran capital, al que el franquismo servía sin ambages” en “Los primeros sesenta: consolidación del antifranquismo en la Universidad”, *Estudiantes contra Franco, cit.*, p. 158.

¹³⁸ La Ley se miraba en los modelos europeos pretendiendo, en un momento de aperturismo, la progresiva integración de España en el marco europeo-occidental y en ese sentido la Ley era semejante a sus coetáneas, no así en cuanto al marco político en que surgía.

Una extensión y generalización del sistema educativo como las que pretendía esta ley, implicaba un aumento considerable del gasto público que como ya se avanzaba en la redacción del texto, exigiría un esfuerzo importante del país. Para ello, la ley preveía un plazo de diez años para la aplicación de la reforma¹³⁹. Requeriría una cuidadosa planificación a nivel nacional, provincial y local, basada en el conocimiento exhaustivo del mapa escolar y una cuidada previsión de las necesidades educativas en los años inmediatos, para así poder arbitrar los recursos necesarios.¹⁴⁰ Su coste financiero se distribuiría en anualidades, incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado –los cuales no verían incrementadas las partidas, sin embargo, suficientemente para su ejecución-. Para que la aplicación resultara un éxito, se añadía, era necesaria “una mentalidad nueva e ilusionada”, inspiradora de la reorganización profunda de la administración educativa. Y, sobre todo, se quería contar con “una actitud solidaria de los docentes, de manera que contribuyeran con su competencia profesional, imaginación y entusiasmo”. La ley recurría así, una vez más, al voluntarismo de los docentes: “la nueva política educativa habría de ser un acto de fe en el futuro de España y en la capacidad renovadora de los españoles. La reforma educativa constituiría una revolución pacífica y silenciosa, pero la más eficaz y profunda para conseguir una sociedad más justa y una vida cada vez más humana”.

El Título preliminar (artículos del 1 al 6) recogía como principios *“formación humana integral, desarrollo armónico de la personalidad y preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; integración y promoción social y fomento del espíritu de convivencia; todo ello de conformidad con los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino”*.¹⁴¹ Consideraba imprescindible la adquisición de hábitos de estudio y trabajo por parte del estudiante, y aspiraba a la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales que permitieran

¹³⁹ Cuyos plazos de implantación fueron recogidos en Decreto de calendario de aplicación de la reforma educativa que se recogerá a continuación.

¹⁴⁰ Quizá fue éste el punto más discutible de la ley, ya que desde el principio careció de los medios necesarios e imprescindibles para su puesta en marcha. El estado franquista no respaldó con presupuestos adecuados la puesta en marcha de la Ley.

¹⁴¹ Por más que la ley intentaba ser novedosa, permanecía supeditada a los principios del régimen.

impulsar y acrecentar el desarrollo social, cultural, científico y económico del país, sin obviar las peculiaridades regionales. Según los Principios del Movimiento Nacional y el Fuero de los Españoles la educación era tanto un derecho como un deber.

La EGB sería obligatoria y gratuita, y también lo sería la FP de primer grado. Después, se pretendía que la gratuidad se extendiera al Bachillerato. Tendrían los mismos derechos y deberes los extranjeros residentes en España. Se aplicaría el principio de igualdad de oportunidades en función de la capacidad intelectual, la aptitud y el aprovechamiento personal mediante la concesión de ayudas, subvenciones o préstamos para alumnos que carecieran de medios económicos. La educación tendría la consideración de servicio público fundamental, y el Estado procuraría la formación del profesorado.

El artículo cuarto recogía las competencias del Gobierno en materia de educación: determinación de la política educativa en todos sus niveles; programación de las realizaciones; creación y supresión de Centros estatales de enseñanza, presentación a las Cortes de los proyectos de ley de creación, autorización para la creación o supresión de Universidades, Facultades y Escuelas Técnicas Superiores que no estuviesen situadas en la misma ciudad donde tenía su sede una Universidad; estímulo y protección de la libre iniciativa de la sociedad; reglamentación de todas las enseñanzas y concesión o reconocimiento de todos los títulos correspondientes; supervisión de todas las instituciones de enseñanza estatal y no estatal, y adopción de las medidas necesarias para la ejecución de la Ley.

El artículo cinco recogía que las entidades públicas y privadas y los particulares podrían promover y sostener centros docentes, lo que abría el ámbito educativo a la iniciativa privada. La familia tenía como deber y derecho inalienables la educación de sus hijos, obligación familiar jurídicamente exigible. Se desarrollarían programas de educación familiar y se estimularía la constitución de asociaciones de padres de alumnos.

En el artículo sexto el Estado reconocía y garantizaba los derechos de la Iglesia católica en materia de educación conforme al Concordato vigente de 1953. Se garantizaba la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral de la Iglesia católica en los centros, tanto estatales como no estatales, de enseñanza.¹⁴² Las tasas por educación tenderían a ser equivalentes al coste de las enseñanzas.

El Título primero abordaba la composición del Sistema educativo y su capítulo I las disposiciones generales (artículos del 9 al 12). El sistema garantizaba la educación permanente, aseguraría la unidad del proceso educativo y facilitaría la continuidad del mismo a lo largo de la vida. La conexión y las interrelaciones de los distintos niveles permitirían el paso de uno a otro, ofreciendo oportunidades de reincorporación. Debería establecerse un sistema de revisión y actualización periódica de planes y programas de estudio. Se unificaba el calendario escolar para todo el territorio nacional y los horarios escolares quedaban limitados reglamentariamente. Se establecía un sistema de pruebas que permitiría la valoración del rendimiento de los alumnos. Para mayor objetividad habría constancia escrita de cada alumno. La calificación otorgada al final de cada curso comprendería una apreciación cualitativa, positiva o negativa, y una valoración ponderada para el supuesto de que aquella fuera positiva. También se valoraría el rendimiento de los Centros. El sistema educativo comprendería: Educación Preescolar; Educación General Básica; Bachillerato; Educación Universitaria; Formación Profesional y Educación permanente de adultos. Las Bibliotecas, Museos, Archivos y otras instituciones científicas y culturales cooperarían con el sistema educativo y permitirían el acceso gratuito a sus fondos.

El capítulo II recogía los niveles educativos (artículos del 13 al 39). La educación preescolar abarcaría hasta la edad de 5 años. Sería voluntaria y

¹⁴² Suponía el reconocimiento de los privilegios que la Iglesia católica había venido teniendo tradicionalmente en la educación española. Se abandonaba aquella unión consustancial Iglesia-Estado del primer franquismo, pero se garantizaba la enseñanza religiosa en todos los centros educativos ya fueran públicos o privados. Dejaba de ser obligatoria en el nivel universitario, sin embargo, al permitir la apertura de centros privados, se le reconocía la posibilidad de sostener centros educativos en todos los niveles incluido el universitario (la Universidad privada de Navarra estaba en funcionamiento desde 1962), abandonando así el “monopolio” por parte del Estado defendido siempre por Falange y mantenido por la ley del 43.

comprendería la etapa de Jardín de infancia (2–3 años) y la Escuela de párvulos (4–5). Sería gratuita en los centros estatales y también en los no estatales que solicitasen el concierto. La EGB sería obligatoria, entre los 6 y los 13 años de edad. Dividida en dos etapas: de 6 a 10 y de 11 a 13. Los programas y orientaciones pedagógicas serían establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia “para su adaptación a las diferentes zonas geográficas y matizados de acuerdo al sexo”. Al término de la EGB, los que la hubieran superado con aprovechamiento recibirían el título de Graduado Escolar, y los que no obtuvieran el título recibirían un Certificado de Escolaridad que habilitaría para el ingreso en los Centros de Formación Profesional de primer grado. El título de Graduado Escolar permitiría además el acceso al Bachillerato. El BUP preparaba el acceso a los estudios superiores o la Formación Profesional de segundo grado y se desarrollaría en tres cursos, entre los 14 y los 16 años. El Plan de Estudios de Bachillerato comprendería materias comunes, optativas, y enseñanzas y actividades técnico-profesionales.

El trabajo escolar no podría exceder de las 33 horas semanales. Habría pruebas de suficiencia para los alumnos que no superasen las pruebas habituales, y aquellos que no las superasen, estarían obligados a repetir curso. El Título de Bachiller lo otorgaba el Ministerio de Educación y Ciencia, habilitaba para cursar Formación Profesional de segundo grado y permitía seguir el curso de orientación universitaria.

Los fines de la educación universitaria (en la que nos detendremos particularmente), eran completar la formación integral de la juventud, preparar los profesionales requeridos por el país,¹⁴³ fomentar el progreso cultural, desarrollar la investigación con libre objetividad, y formar científicos y educadores, contribuir al perfeccionamiento del sistema educativo nacional y al desarrollo social y económico del país. Dichos estudios vendrían precedidos de

¹⁴³ En esta pretensión quisieron ver los estudiantes una finalidad meramente utilitarista de la educación universitaria, llamada a formar élites cualificadas y útiles para el Estado de cara a cubrir las necesidades en el mercado de trabajo.

un curso de orientación, el COU.¹⁴⁴ La educación en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores constaría de tres ciclos: un primer ciclo de tres años, un segundo ciclo de dos años y el tercer ciclo de especialización y preparación para la investigación y la docencia. En las Escuelas Universitarias constaría de un solo ciclo de tres años.

El COU tenía como finalidad profundizar la formación en Ciencias Básicas; orientar a los alumnos en la elección de carreras o profesiones para las que demostrasen mayores aptitudes o inclinaciones, y formarles en la utilización de las técnicas de trabajo intelectual propias del nivel de educación superior. A este curso accederían quienes hubieran obtenido el título de Bachiller o hubieran superado la Formación Profesional de segundo grado. Su desarrollo comprendería un plan de estudios con un núcleo común de materias y otras optativas que facilitasen la orientación vocacional; cursillos y seminarios a cargo de especialistas para exponer el panorama de las ciencias y profesiones y, finalmente, entrenamiento en la utilización de técnicas de trabajo intelectual. Sería programado y supervisado por la Universidad y desarrollado en los Centros estatales de Bachillerato y en los no estatales homologados y autorizados al efecto, de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación y Ciencia. La valoración final del COU se basaría en la calidad de las actividades desarrolladas por los alumnos, acreditada por resúmenes orales o escritos de las explicaciones recibidas, adquisición de técnicas de trabajo intelectual y de cuantas tareas se determinasen. Se establecerían enseñanzas de recuperación para quienes no superasen el COU, el cual tan sólo podría ser repetido un número limitado de veces, como se estipularía reglamentariamente.

Quienes superasen el COU, tendrían acceso a la enseñanza universitaria, pudiendo establecer las Universidades criterios de valoración para el ingreso en las diversas Facultades, Escuelas Superiores Técnicas y Escuelas Universitarias, siempre previa autorización del Ministerio de

¹⁴⁴ El COU sustituía al “Preu” y concluía en la prueba de Selectividad, a la que el movimiento estudiantil se opuso frontalmente. La prueba era un instrumento para establecer “numerus clausus” por lo que se veía en ella una manera de seleccionar el alumnado de forma que tendría más posibilidades para acceder a la Universidad quien tuviera más medios económicos para preparar dicho examen. Curiosamente, el SEU siempre se manifestó contrario a la prueba que también contó con la oposición frontal del movimiento estudiantil.

Educación y Ciencia. También podrían tener acceso a la educación universitaria los mayores de veinticinco años que no habiendo cursado los estudios de Bachillerato superasen las pruebas que reglamentariamente se establecieran a estos efectos a propuesta de las Universidades.

Los planes de estudios de los Centros universitarios comprenderían un núcleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas. Serían elaborados por las propias Universidades, de acuerdo a las directrices marcadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, previo dictamen de la Junta Nacional de Universidades.¹⁴⁵ La ordenación de cada curso respondería a un planteamiento preciso de objetivos, contenidos, métodos de trabajo y calendario escolar y fomentaría la utilización de métodos modernos de enseñanza. Se establecería un régimen de tutorías para que cada profesor-tutor pudiera atender a un grupo limitado de alumnos¹⁴⁶, ayudándoles a superar las dificultades del aprendizaje y recomendándoles las lecturas, experiencia y trabajos que considerase necesarios. Finalmente, se estimularía la participación activa de los alumnos de cursos superiores como tutores auxiliares.

La valoración del aprovechamiento en los distintos ciclos se llevaría a cabo según lo establecido en el Estatuto de cada Universidad, con arreglo a las siguientes directrices: prioridad de la evaluación continua a lo largo del curso, de manera que las pruebas tendrían sólo carácter supletorio;¹⁴⁷ la evaluación de cada alumno se haría en la medida de lo posible, de forma conjunta por todos los profesores del mismo en cada curso y se establecería reglamentariamente el límite máximo de permanencia en la Universidad de los alumnos no aprobados.

¹⁴⁵ Con ello se intentaba dar un margen a la autonomía docente de cada Universidad de manera que sólo tendrían que ajustarse a unos mínimos que vendrían fijados por las directrices para elaboración de los planes de estudio. Con la división en ciclos y el establecimiento de asignaturas optativas y especialidades se pretendía diversificar las enseñanzas en concordancia con el aumento exponencial de alumnos en las aulas.

¹⁴⁶ Este tipo de atención aparentemente “personalizada” al menos sobre el papel, en realidad apenas se dio y no tanto por falta de voluntad del profesorado, sino debido al incumplimiento de la ratio propuesta de un profesor por cada cincuenta alumnos –ratio que en la práctica quedó incluso desbordada-, lo que hacía prácticamente inviable ese seguimiento.

¹⁴⁷ La evaluación continua fue otra de las propuestas incumplidas. Una vez más la masificación y la escasez de medios y de profesorado llevó a ratios elevadísimas de alumnos por profesor con lo que la estimación de forma continuada se conseguía a duras penas.

Aquellos que hubieran superado las enseñanzas de primer ciclo de una Facultad o Escuela Técnica Superior, seguido de las pertinentes enseñanzas de Formación Profesional de tercer grado; y los que concluyesen los estudios correspondientes a una Escuela Universitaria, obtendrían el título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente, que habilitaría para el ejercicio profesional y daría acceso a las enseñanzas de segundo ciclo. Quienes hubieran terminado los estudios de segundo ciclo obtendrían el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, que habilitaría para el ejercicio profesional y permitiría el acceso al tercer ciclo. Tras la superación del Tercer ciclo, mediante la previa redacción y aprobación de una tesis, se obtendría el título de Doctor.

El capítulo III abordaba la Formación profesional (artículos del 40 al 42). La Formación profesional de primer grado sería el siguiente nivel de estudios para los alumnos que habiendo cursado EGB, no prosiguieran estudios de Bachillerato. Estaba abierta a quienes poseyeran el título de Bachiller y los que habiendo terminado FP de primer grado desearan seguir las enseñanzas complementarias que fueran precisas.

Finalmente, a la Formación profesional de tercer grado podían acceder quienes hubieran concluido el primer ciclo de Facultad, Escuela Superior Técnica o fueran graduados de Escuela Universitaria, y aquellos que habiendo cursado Formación Profesional de segundo grado hubieran seguido las enseñanzas complementarias correspondientes. Cada grado (I, II, III), constaría de dos años de enseñanzas. El Gobierno sería el encargado de la aprobación de los planes de estudios de FP. Serían elaborados por el Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con los Ministerios correspondientes, la Organización Sindical, y una vez oídos los Colegios profesionales y entidades directamente relacionados con la materia.

El capítulo IV estaba dedicado a la educación permanente (artículos 43 a 45). La ley abría la posibilidad de cursar EGB, BUP y FP a quienes por cualquier razón no hubieran podido cursarlos en su momento; establecía la existencia de cursos de perfeccionamiento, promoción, actualización y

readaptación profesional, así como de promoción y extensión cultural. También contemplaba la ley estimular la educación permanente mediante cursos organizados por las universidades y programas de perfeccionamiento profesional y de extensión agraria. El capítulo V se destina a las enseñanzas especializadas (artículo 46), aquellas no integradas en los niveles, ciclos y grados del régimen común. El VI aborda las modalidades de enseñanza (artículos 47 a 48), impulsando la enseñanza a distancia, por correspondencia, radio y televisión, con cursos nocturnos y en periodos no lectivos, y con especial atención a los emigrantes (españoles en el extranjero) y sus hijos, al tiempo que se creaban cursos especiales para extranjeros residentes en España.

El capítulo VII iba dedicado a la educación especial (artículos 49 a 53). Establecía el tratamiento educativo adecuado para *“todos los deficientes e inadaptados”* de manera que permitiera una incorporación a la vida “social” tan plena como fuera posible. Igualmente, los escolares superdotados serían objeto de atención especial. La educación de estos alumnos se desarrollaría en los centros escolares de régimen ordinario, pero de manera individualizada. Se estimularía la localización y diagnóstico a edades tempranas a través de los servicios médicos escolares y de orientación educativa y profesional, con la colaboración del profesorado y de Licenciados y Diplomados en Pedagogía terapéutica y centros especializados.

El Título segundo, capítulo primero (artículos 54 a 57), recogía disposiciones generales. Todos los centros docentes establecidos en España y los centros docentes españoles radicados en el extranjero quedarían sometidos a la nueva Ley, figurando en el Registro de Centros docentes del Ministerio de Educación y Ciencia y sometidos a su inspección. Aquéllos serían estatales, creados y sostenidos por la Administración del Estado, y no estatales, dependientes de la Iglesia o de otras instituciones o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Se impulsaría la participación y coordinación entre los órganos de gobierno de los centros docentes y los representantes de las APAS cuando se tratase de alumnos hasta el nivel de Bachiller o FP1 y de las Asociaciones de Padres y Asociaciones de Alumnos cuando se tratase de

centros de FP2 o de educación universitaria¹⁴⁸. El capítulo II estaba dedicado específicamente a los centros docentes estatales, que se dividían en: Educación Preescolar y General Básica (Jardines de Infancia, Centros de Párvulos y Colegios Nacionales); Institutos Nacionales de Bachillerato, y Centros de Educación Universitaria.¹⁴⁹

Respecto a la organización de la Enseñanza Universitaria, la ley recogía que la educación universitaria se impartiría en los Departamentos¹⁵⁰, Institutos, Escuelas y Colegios universitarios. Las Universidades sólo podrían ser creadas y suprimidas por medio de una Ley que determinaría también su distrito (esto sólo en el caso de las públicas). Tendrían personalidad jurídica y patrimonio propio y gozarían de plena capacidad para realizar todo género de actos de gestión y disposición, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Gozarían de autonomía, pudiendo determinar por sí mismas los procedimientos de control y verificación de conocimientos, el cuadro y sistema de sus enseñanzas y su régimen de docencia e investigación.¹⁵¹ Asumirían, bajo la coordinación del Ministerio de Educación y Ciencia, la gestión y administración de los Centros y servicios propios y la supervisión de los Centros universitarios no estatales a ellas adscritos.

La hacienda de cada Universidad comprendería el conjunto de sus bienes, derechos y recursos. Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines gozarían de exención tributaria absoluta, así como de los beneficios que la legislación pudiera atribuir a las Fundaciones benéfico-docentes. Serían recursos propios de la Universidad las tasas académicas e ingresos obtenidos por prestación de servicios propios de sus actividades; las subvenciones provenientes de fondos públicos (Estado, Organismos autónomos,

¹⁴⁸ Resulta llamativa la mención de Asociaciones de padres de alumnos en el nivel universitario.

¹⁴⁹ La Ley recogía pormenorizadamente la organización de cada uno de ellos. Del artículo 58° al 60° la Ley se dedicaba a la organización de los centros de Educación Preescolar y Bachillerato. La organización de los centros de Educación Universitaria se recogía ampliamente entre los artículos 63° y 88° y de ellos nos ocuparemos más detenidamente. Los artículos del 63 al 68 recogían normas generales.

¹⁵⁰ Los Departamentos eran las nuevas estructuras surgidas con la Ley 83/1965, dada por el ministro Lora Tamayo, y con la que se pretendía incentivar y favorecer la investigación científica además de la enseñanza, agilizando la gestión y la organización docente.

¹⁵¹ Se abría así margen a una cierta autonomía al menos docente ya que la económica seguía siendo limitada y siempre sometida al Ministerio.

Corporaciones locales u otras Corporaciones públicas); las donaciones de que pudieran ser objeto; el producto de la venta de bienes propios y compensaciones por enajenación de activos fijos; los ingresos provenientes de operaciones de crédito realizadas para el cumplimiento de sus fines y las rentas y cualquier otro ingreso de carácter periódico o no y de naturaleza patrimonial.

Contarían con un presupuesto de carácter anual, que debería estar coordinado con los Presupuestos generales del Estado. El presupuesto de cada Universidad sería elaborado por ella misma y elevado al Ministerio de Educación y Ciencia, el cual, con su informe, lo remitiría al de Hacienda, para que éste lo sometiera a la aprobación del Gobierno. La Universidad se encargaría de ejecutar dicho presupuesto, estando por ello sometida al control jurisdiccional del Tribunal de Cuentas del Reino. En cada ejercicio las Universidades formularían una Memoria de sus actividades y resultado, así como los balances y cuentas preceptivos.

Cada Universidad se regiría por un Estatuto propio, según lo prescrito en la propia Ley, que se aprobaría mediante Decreto a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia. Su elaboración habría de ceñirse al procedimiento que establecieran disposiciones complementarias dadas por la Junta de Gobierno de la Universidad, oído su Patronato. Los Estatutos habrían de regular al menos los siguientes aspectos: la organización académica; la enumeración, estructura y competencia de los órganos de gobierno; el procedimiento de elección o designación de los titulares de órganos de gobierno; los criterios para la adopción y aplicación de los planes de estudio y de investigación; el procedimiento interno para la adscripción y contratación del personal docente y de investigación; las normas básicas sobre el régimen de admisión de alumnos y, finalmente, el régimen económico y presupuestario de cada Universidad.¹⁵² Los Estatutos determinarían los preceptos de las leyes de Administración y

¹⁵² Siempre dentro del estrecho margen que dejaba el Ministerio de Educación, las universidades conseguían cierta autonomía y autogobierno. Sin embargo, el clima de conflictividad estudiantil creciente en la Universidad española derivó con frecuencia en la suspensión y nula aplicación de los derechos. La mayoría de las Universidades sólo llegaron a tener Estatutos provisionales, y las que fueron creadas como experimento de autogobierno, las Autónomas de Madrid y Barcelona, también los vieron suspensos.

Contabilidad del Estado, Entidades Estatales Autónomas, Contratos del Estado y Funcionarios Civiles del Estado en vigor de cuya aplicación estuviera dispensada la Universidad en cuestión. A tal fin los Estatutos deberían ser informados por el Ministerio de Hacienda antes de su elevación al Consejo de Ministros.

En su artículo 67 la Ley recogía que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, podría suspender el régimen estatutario de un Centro universitario cuando perturbaciones graves de orden académico, administrativo o financiero hicieran aconsejable la medida, y que establecería normas provisionales por las que se regiría el Centro afectado durante el periodo de suspensión.¹⁵³

Las Universidades se coordinarían a través de la Junta Nacional de Universidades, que habría de ser oída preceptivamente en cuestión de planificación de la educación universitaria; proyectos de creación y/o supresión de Universidades estatales y no estatales; proyectos de creación o supresión de nuevas Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Colegios Universitarios; propuesta de creación y concierto de Colegios Universitarios adscritos y denuncia de dichos conciertos; planes de estudios; requisitos y estudios mínimos exigibles para la colación de los distintos títulos universitarios; disposiciones generales sobre el régimen de equivalencia de estudios nacionales y convalidación de estudios y títulos universitarios extranjeros; normas generales a que habrían de ajustarse los acuerdos que las Universidades pudieran contraer entre sí o con Centros de investigación, ya fueran nacionales o extranjeros así como con otras Entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras; proyectos de normas sobre distribución de fondos presupuestarios entre las distintas universidades, y en general, todas las cuestiones de principio que pudieran afectar a la educación universitaria.

¹⁵³ Y a buen seguro que lo hizo. El Gobierno se sirvió de esa discrecionalidad una y otra vez, decretando la suspensión de los Estatutos por plazo de un año en 1972 (Decreto 2056/1972 de 26 de julio por el que se aplica el artículo 67º de la Ley General de Educación -BOE 28-) y manteniendo sine die su provisionalidad mediante dos Decretos de 1974 y 1977.

Del artículo 69 al 75 se recogía la estructura de la Universidad. Estarían integradas básicamente por Departamentos (una novedad fundamental que, sin embargo, a efectos administrativos y de coordinación académica, se agruparán en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores), además de Institutos, Escuelas, y Colegios universitarios.¹⁵⁴ Los Departamentos constituían las unidades fundamentales de enseñanza e investigación en disciplinas afines que guardasen entre sí relación científica. Cada Departamento tendría la responsabilidad de las correspondientes enseñanzas en toda la Universidad y en él estarían agrupados todos los docentes de las mismas. Con todo, como hemos advertido, a efectos administrativos y de gestión –los que acaban prevaleciendo sobre los docentes e investigadores–, cada Departamento estaría integrado en aquella Facultad o Escuela Técnica Superior en cuyo plan de estudios ocupasen sus disciplinas un lugar preferente. A los efectos de coordinación académica cada Departamento estaría representado además en todas aquellas Facultades en las que impartiera enseñanza. Los Directores de Departamento serían nombrados por los Rectores entre Catedráticos numerarios, en la forma y por el tiempo que determinase el Estatuto de la universidad respectiva. Sus funciones serían coordinar la docencia e investigación del mismo y facilitar y supervisar la actividad de su profesorado.

Las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores serían Centros de ordenación de las enseñanzas conducentes a proporcionar la colación de grados académicos de todos los ciclos de una determinada rama del saber. Podrían ser *orgánicas*, a las que corresponderían, además de las funciones ordenadoras, la administración de los Departamentos en ellas integrados, y *no orgánicas*, aquellas cuya función estuviera reducida a la ordenación de las enseñanzas. Los Institutos Universitarios o Centros de Investigación y de especialización agruparían, a este sólo efecto, personal de uno o varios Departamentos universitarios y personal propio. Estos Institutos podrían estar

¹⁵⁴ Con la organización académica en Departamentos avanzada ya por la Ley 83/1965 de estructura de las Facultades universitarias y su profesorado, se pretendía superar la rigidez de la estructura de centros favoreciendo así el desarrollo de la investigación mediante una mayor autonomía de las enseñanzas. Sin embargo, en la práctica, los Departamentos permanecieron supeditados a los centros más allá de lo que suponían estrictamente los aspectos puramente administrativos.

orgánicamente integrados en una Facultad universitaria, Escuela Técnica Superior o directamente en la Universidad.

Los Institutos de Ciencias de la Educación (ICEs) se integrarían directamente en cada universidad, encargándose de la formación docente de los universitarios que se incorporasen a la enseñanza en todos los niveles, del perfeccionamiento del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocuparan cargos directivos, así como de realizar y promover investigaciones educativas y prestar servicios de asesoramiento técnico a la universidad a que pertenecieran y a otros Centros del sistema educativo. Las actividades de los Institutos de Ciencias de la Educación en materia de investigación educativa serían coordinadas a través del Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, que atendería también al perfeccionamiento del profesorado en ejercicio en los propios Institutos.

Las Universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los Centros de investigación dependientes de otros Departamentos ministeriales, las Facultades eclesiásticas y Entidades públicas y privadas, podrían establecer entre sí acuerdos para la colaboración en investigación y especialización. Podrían establecerse Institutos de investigación adscritos a la Universidad mediante acuerdo con la propia Universidad y otras Instituciones públicas o privadas.

Los Colegios universitarios impartirían enseñanzas correspondientes al primer ciclo de la educación universitaria, bajo la dirección y con el mismo régimen de la Universidad a que pertenecieran. Las Escuelas universitarias impartirían y coordinarían estudios de un solo ciclo. Podrían integrarse en ellas unidades de docencia e investigación que no estuviesen incluidas en Departamentos.

Los artículos 76 a 88 recogían la composición de los órganos de gobierno y representación de la Universidad. Cada Universidad tendría su Patronato y Comisiones de Patronato para los diversos Centros que la compusieran, con las funciones y competencias que les eran encomendadas

por la Ley y los respectivos Estatutos¹⁵⁵. El gobierno y la representación de la Universidad se articularían a través de órganos académicos de dos tipos: unipersonales (Rector, Vicerrectores, Decanos y Vicedecanos, Directores y Subdirectores de Escuelas Técnicas Superiores, Directores de Escuelas y Directores de Colegios Mayores) y colegiados (Claustro universitario; Junta de Gobierno, Claustros, Juntas y Comisiones de Facultades o Escuelas Técnicas Superiores, y Claustros y Juntas de Escuelas y Colegios universitarios). Asimismo, cada universidad contaría con un Gerente.

Al Rector correspondía la dirección, coordinación y supervisión de la vida universitaria. Nombrado por decreto a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia entre Catedráticos numerarios, según estatutos y oídos los órganos de gobierno y el Patronato de la Universidad, ostentaría la autoridad delegada del Ministerio de Educación y Ciencia en el distrito y tendría la representación corporativa de los Centros docentes estatales radicados en el mismo. Los Vicerrectores serían nombrados a propuesta del Rector. El Gerente, en cambio, sería nombrado libremente por el Ministerio entre titulados universitarios, de conformidad con el Rector y oído el Patronato. Se encargaría de la gestión económico-administrativa y de la jefatura de todo el personal no docente; de la ejecución de los acuerdos del Patronato en materia administrativa o económica y de todas aquellas cuestiones que le atribuyera el estatuto de su Universidad. Los Decanos y Directores de Escuelas Técnicas Superiores serían nombrados por el Ministerio de Educación y Ciencia entre Catedráticos numerarios, con arreglo a lo previsto en cada Estatuto. Los Vicedecanos y Subdirectores se nombrarían a propuesta de Decanos y Directores.

Los Directores de los Institutos Universitarios serían nombrados también por el Ministro, entre Catedráticos numerarios, a propuesta del Rector y según estatutos. Los Directores de los Colegios Universitarios serían nombrados por el Rector entre Catedráticos y según estatuto, oídos los órganos de gobierno y la Comisión de Patronato. Cuando se tratase de colegios adscritos, el director

¹⁵⁵ Como novedad respecto a la ley del 43, la Ley General de Educación recuperaría la figura del Patronato universitario surgida en 1926, bajo la Dictadura de Primo de Rivera, institución que tendría gran peso en el desarrollo de esta Ley y los futuros Estatutos.

se elegiría a propuesta de la entidad colaboradora. Los Directores de Escuelas universitarias serían elegidos entre sus Catedráticos numerarios, a propuesta del Rector y oídos los órganos de gobierno de la Escuela y la Comisión de Patronato.

El Patronato universitario era el órgano de conexión entre la sociedad y la universidad. Estaría compuesto por un número inferior a veinte miembros, que serían nombrados según marcara el correspondiente estatuto, de entre personalidades representativas propuestas por las corporaciones locales del distrito universitario, los colegios profesionales, los procuradores en Cortes de representación familiar, la Organización Sindical, el profesorado de los centros docentes, las asociaciones de padres de alumnos, de alumnos y antiguos alumnos de entidades públicas y personas privadas propuestas por el propio Patronato y la Junta de gobierno de la Universidad. El Presidente del Patronato sería designado por el Ministro de Educación y Ciencia a propuesta del propio Patronato. Todos los miembros deberían residir en el distrito y el Presidente no podría ostentar cargo público de autoridad en él.

Rector y Gerente podrían asistir con voz y voto a las reuniones del Patronato cuando se requiriese por la índole de los asuntos. Cuando asistiera, lo presidiría el Rector, que podría suspender la ejecución de los acuerdos del Patronato, poniendo en conocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia, en el plazo de 48 horas, las razones que motivasen su decisión, siendo el Ministro quien decidiría en el plazo de diez días. La organización y funciones del Patronato quedaban reguladas por el estatuto que preveía el artículo 66 de la ley y las disposiciones que deberían desarrollarla. Cada Patronato tendría un Secretario, que asumiría las funciones que le asignase el estatuto.

La composición, organización y funcionamiento del Claustro vendrían dados, lógicamente, por el estatuto de la Universidad, que debería garantizar la adecuada participación de profesores y alumnos y la máxima representatividad. Entre sus funciones estaría el asesorar, bien fuese en pleno o en comisiones, a las autoridades de gobierno en las cuestiones académicas presentadas por el Rector, así como asistir a los actos corporativos. A su vez, la Junta de

Gobierno y las Comisiones delegadas de ella asistirían al Rector con arreglo a lo establecido en estatutos, donde se fijarían sus competencias, composición y participación respectiva de las autoridades académicas y las distintas categorías del profesorado universitario, el alumnado y el personal administrativo y subalterno, en función de la naturaleza, eficacia y competencias del órgano correspondiente. En cualquier caso, debería existir una Comisión de Estudios, encargada de la coordinación del régimen docente.

En cuanto a la Comisión de Patronato, existiría una en cada Facultad, Escuela Técnica Superior, Colegio Universitario y Escuela Universitaria. Estaría integrada por un Presidente, propuesto por el Patronato de la Universidad y nombrado por el Ministerio, y no más de diez vocales representantes (similares a los del Patronato, artículo 83). Las Comisiones de Patronato desempeñarían en relación con los centros y en coordinación con el Patronato universitario, funciones análogas a las de éste, según lo estipulado en estatuto.

El Estatuto de cada universidad establecería a su vez la composición del Claustro de los Centros integrados en ella, así como el modo de designación de sus miembros, entre los que habrían de contarse representantes de los profesores y los alumnos. El modo de designación debería asegurar la máxima representatividad de los designados. Asimismo, el Estatuto habría de recoger la organización y normas de funcionamiento de dicho Claustro. Decanos y Directores de Escuelas estarían asistidos en sus funciones por una Junta y/o por Comisiones, con arreglo a lo establecido en el Estatuto. Los Directores de Colegios universitarios y Escuelas universitarias estarían asistidos por Juntas y/o Comisiones, de acuerdo a los Estatutos, que también fijarían su composición y competencia.

Una vez finalizada la organización universitaria, la Ley dedicaba el artículo 90 a la organización de los Centros de Formación Profesional. En cualquiera de sus tres grados, contarían con un Director; un Claustro de profesores y órganos colegiados con representación de las APAS, de la Organización Sindical, de Corporaciones locales y de las Entidades o Empresas públicas o privadas. El primer y segundo grado se impartirían en

centros creados al efecto o en las secciones que se establecieran en los Centros de EGB o Bachillerato. Los centros de tercer grado formarían parte de la universidad, de acuerdo con los Estatutos.

Finalmente, del artículo 90 al 93 la Ley se refería a otros centros estatales. Además de los centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, los demás Departamentos ministeriales, la Secretaría General del Movimiento, la Organización Sindical, la Iglesia y las Entidades y Empresas públicas y privadas podrían cooperar, mediante concierto, con el Ministerio para la realización de estas enseñanzas o bien creando o sosteniendo centros propios, que se regirían por la propia ley.¹⁵⁶ Las empresas exigirían a sus trabajadores, en el momento de su admisión, la posesión de alguno de los grados de Formación Profesional, y permitirían al personal en activo acudir a los cursos de perfeccionamiento, habilitación y actualización que organizaran los centros docentes. Otros centros estatales podrían ser los de enseñanzas a distancia, enseñanza para adultos, centros docentes españoles en el extranjero o centros de Educación Especial.

El capítulo III de la Ley (artículos 94 al 10) estaba dedicado a los centros no estatales. La ley abría la posibilidad de que existieran centros promovidos por particulares. Todas las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española, tanto públicas como privadas, podrían crear centros docentes semejantes a los centros estatales, pero necesitarían en todo caso autorización previa. Los establecidos o dirigidos por personas o entidades extranjeras se ajustarían a lo dispuesto en los acuerdos internacionales. Sin embargo, la autorización para crear universidades no estatales sólo podría ser concedida por leyes específicas.

La Educación General Básica, así como la Formación Profesional de primer grado, serían de carácter gratuito en todos los centros, ya estatales o no estatales, siendo estos últimos subvencionados por el Estado, para lo cual se

¹⁵⁶ Este apartado es importante por cuanto existían numerosas enseñanzas promovidas por distintas entidades al margen del Ministerio de Educación y Ciencia, y suponía un intento de controlar y reconducir esas enseñanzas, y sobre todo las titulaciones expedidas por ellas.

establecerían conciertos. Los centros de Bachillerato y de Formación Profesional de segundo grado podrían ser: libres, cuyos alumnos serían evaluados en centros estatales; habilitados, cuya evaluación la llevarían a cabo tribunales mixtos, constituidos en los propios centros e integrados por profesores de éstos y de los centros estatales y, finalmente, homologados, donde la evaluación se efectuaría por el profesorado del propio centro. Los centros no estatales podrían acordar con el Estado conciertos específicos, siendo el Gobierno quien estableciera las normas generales a que deberían ajustarse los conciertos en los distintos niveles educativos, siempre con el dictamen previo del Consejo de Estado.

Los centros no concertados dispondrían de autonomía para establecer su régimen interno, selección del profesorado con titulación suficiente, procedimiento de admisión de alumnos, régimen disciplinario y régimen económico, dentro de las disposiciones de la ley. Los alumnos de los centros no estatales estarían exentos del abono de las matrículas y tasas oficiales, pero sí habrían de satisfacer las que pudieran fijarse por apertura de expediente académico y pruebas de evaluación. Las entidades y empresas que empleasen el trabajo de la mujer a cualquier nivel, en el número mínimo que el Gobierno señalare, a propuesta de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo, oída la Organización Sindical, estarían obligadas a contribuir, en las condiciones que reglamentariamente se preceptuasen, a la creación y sostenimiento de centros de Educación Preescolar para los hijos de sus empleadas.¹⁵⁷

La estructura, régimen administrativo y económico de los centros docentes extranjeros establecidos en España se acomodarían a lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales correspondientes y, en cualquier caso, estarían sometidos a la inspección estatal. Los centros extranjeros de Educación Superior requerirían la previa adscripción a una universidad

¹⁵⁷ Esta medida reflejaba por una parte la aceptación de un hecho como era la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral y, por otra parte, un cambio de sensibilidad que tendría su repercusión ya que a partir de ese momento algunas empresas que contaban con mano de obra femenina, efectivamente implantaron “guarderías” en los centros de trabajo. Un ejemplo de esta práctica fue la empresa de automóviles Barreiros. Sería interesante contrastar si esta práctica llegó a tener una aplicación efectiva y generalizada.

española. Se ajustarían en su estructura y métodos al Convenio de adscripción, que debería ser aprobado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, y una vez oída la Junta Nacional de Universidades.

El capítulo IV, en el artículo 101, recogía el nuevo estatus concedido a partir de ese momento a los Colegios Mayores, así como la existencia de otro tipo de Residencias.¹⁵⁸ Los Colegios Mayores se configuraban como “órganos que participaban en la formación y convivencia educativa, integrados en la Universidad y agrupando a este fin tanto a los alumnos residentes como aquellos otros que, sin residir en ellos, se adscribieran *voluntariamente*”.¹⁵⁹ Al frente de cada Colegio habría un Director, autoridad delegada del Rector, quien le nombraría. El Director estaría asistido por un Consejo Asesor de Profesores de la Universidad, cuyo procedimiento de nombramiento vendría en Estatutos. Los Colegios Menores tendrían análoga organización y funciones de formación y convivencia educativa, asimismo adscritos a los Centros que se determinasen¹⁶⁰. También existirían Residencias, centros residenciales que, no mereciendo la calificación de Colegios Mayores o Menores, se colocarían bajo la vigilancia y supervisión de los Centros educativos previstos por esta ley. Podrían promover la creación de Colegios Mayores o Menores toda persona pública o privada. Para el acceso a los Colegios Mayores o Menores subvencionados por el Estado se daría preferencia a los alumnos de mejor rendimiento educativo y, en caso de igualdad, a los de menos recursos económicos. Las denominadas Escuelas Hogar, ejercerían en la Educación General Básica las funciones formativas correspondientes a dicho nivel, y se integrarían en el respectivo Centro.

¹⁵⁸ Lo recogido por la Ley General de Educación de 1970 en este capítulo se completaría con el Decreto 2780/1973, de 19 de octubre, que regulaba los Colegios Mayores Universitarios (BOE 10 noviembre) y que en realidad suponía la adaptación de dicha institución a los nuevos tiempos. Este Decreto se analizará más adelante.

¹⁵⁹ Es importante esta matización, ya que dejaba de ser obligatoria la pertenencia o adscripción a uno de ellos. A partir de este momento, aunque con algunas peculiaridades, eran entendidos como residencias y dejaban de ser el instrumento de control del alumnado por la Falange, como lo habían sido durante el primer franquismo. Su organización aún sería matizada en 1973, como se recogerá más adelante.

¹⁶⁰ La Ley hacía referencia a la figura de los Colegios *Menores*, no mencionada anteriormente en la Ley del 43 y de la que tampoco se han encontrado referencias posteriores.

El Título III recogía un aspecto de especial relevancia, lo relativo al profesorado. El capítulo 1 (artículos 102 a 106) recogía las disposiciones generales. La Ley establecía la titulación mínima requerida para el acceso a las diferentes plazas.¹⁶¹ Los profesores de Educación Preescolar y de Educación General Básica habrían de estar en posesión del título de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero técnico; los Profesores de Bachillerato y agregados de Escuelas Universitarias, el de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto: los profesores de Formación Profesional de primer grado habrían de contar con el título de Formación profesional de segundo grado; para ser profesor de Formación Profesional de segundo grado, deberían contar con el de Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico, y para ser profesor de Formación Profesional de tercer grado, deberían poseer el de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y certificado de especialización.

En el caso de los centros de educación universitaria, los aspirantes deberían contar con el título de Doctor (excepto para Escuelas Universitarias y en el caso de los Ayudantes). Para todos ellos se requeriría formación pedagógica adecuada, que iba a correr a cargo de los Institutos de Ciencias de la Educación con arreglo a las siguientes bases: los profesores de Educación Preescolar y Educación General Básica requerirían formación en las Escuelas universitarias específicas; los de Bachillerato, Escuelas Universitarias y Formación Profesional, después de la titulación científica respectiva, habrían de formarse mediante cursos intensivos en el ICE, excepto aquellos que hubieran seguido la especialidad de Pedagogía en sus estudios universitarios. En el caso de aspirar a profesor de Educación Universitaria, por último, se requería formación en el ICE durante el período de Doctorado o prácticas como Profesores ayudantes. Además, en cualquier nivel, se requerirían estudios o experiencias prácticas relativos a la especialidad que hubieran de enseñar en aquellos niveles y disciplinas que reglamentariamente se determinasen.

La Universidad, a través de los Institutos de Ciencias de la Educación y de los centros experimentales adjuntos, asumiría una función de orientación y

¹⁶¹ Esta apreciación era importante sobre todo en los niveles inferiores y medios, ya que la enseñanza privada contaba con profesorado que no poseía la titulación requerida.

de especial responsabilidad en la formación y el perfeccionamiento del personal docente y directivo de los Centros de enseñanza. Se organizaría de forma sistemática el perfeccionamiento del personal docente en ejercicio, habilitándose bolsas de estudio. Y se reconocía el llamado “año sabático”: los profesores de educación universitaria tendrían derecho, cada siete años, a una licencia con sueldo durante un curso para realizar viajes de estudios o estudios especiales, previa aprobación del programa de trabajo, cuya realización efectiva debería ser justificada posteriormente.

Los profesores ausentes de la docencia o la investigación durante más de dos años, al reincorporarse deberían dedicarse durante un curso académico al perfeccionamiento docente o a tareas de investigación. Podrían ser dispensados si la ausencia fuera inferior a cinco años, previo informe favorable de los órganos de gobierno del centro respectivo. La propia ley establecía los deberes y derechos fundamentales de los educadores. Como deberes se establecía el cumplimiento de las disposiciones sobre la enseñanza, cooperando con las autoridades educativas para lograr la mayor eficacia de las enseñanzas, en interés de los alumnos y la sociedad; extremar el cumplimiento de las normas éticas propias de la función educativa; aceptar los cargos académicos docentes y de investigación para los que fueren designados y el régimen de dedicación que exigiera el servicio, y asegurar de manera permanente su propio perfeccionamiento científico y pedagógico. Como derechos, se mencionaba el ejercer funciones de docencia e investigación empleando los métodos que considerasen más adecuados, dentro de las orientaciones pedagógicas, planes y programas aprobados; constituir asociaciones cuya finalidad fuera el mejoramiento de la enseñanza y el perfeccionamiento profesional con arreglo a las normas vigentes; intervenir en todo cuanto afectase a la vida, actividad y disciplina de sus respectivos centros docentes a través de los cauces reglamentarios, y ejercer por un tiempo limitado las funciones directivas para las que fuesen designados. Se establecería reglamentariamente el régimen de incompatibilidades¹⁶² en la

¹⁶² Éste era otro aspecto de relevancia recogido por la Ley ya que el pluriempleo era frecuente entre el profesorado como forma de compensar sus bajos ingresos. Tal situación era un problema acuciante en el

docencia estatal y no estatal, y un sistema de estímulos para el perfeccionamiento de la docencia. Asimismo, se instituía la Orden al Mérito Docente (pensionada).

El capítulo II, en sus artículos 107 a 123, recogía la forma de acceso del profesorado estatal. El sistema de ingreso se basaría en los antecedentes académicos, preparación científica y pedagógica, datos personales y “caracterológicos” y aptitudes didácticas. Las normas relativas al acceso quedarían determinadas reglamentariamente. El profesorado estatal, en su conjunto, lo compondrían: Profesores de Centros de Educación Preescolar y de Colegios Nacionales de Educación General Básica; Profesores de Institutos Nacionales de Bachillerato; Profesores de Centros de Educación Universitaria y Profesores de Centros de Formación Profesional de primer y segundo grado.

Cada categoría formaría un Cuerpo específico: Cuerpo de Profesores de de Educación General Básica; Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato; Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato; Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Especializadas; Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Formación Profesional y Cuerpo de Profesores Agregados de Formación Profesional, para los niveles no universitarios. Los cuerpos específicos universitarios serían a su vez: Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias; Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias; Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad; Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad y Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.¹⁶³ Las funciones de los profesores de educación universitaria vendrían recogidas en los estatutos de cada Universidad, de acuerdo con las estipulaciones legales previas.

ámbito universitario, que suscitaba numerosas protestas por parte del estudiantado en cuanto al absentismo de los profesores. A partir de este momento, se requeriría la dedicación exclusiva.

¹⁶³ Al cuerpo de Profesores agregados de Universidad creados años antes por la Ley 83/1965 citada anteriormente, ahora se sumaba otro cuerpo nuevo, el de Profesores adjuntos de Universidad. Con ello se pretendía crear nuevos puestos (aunque aún resultaron insuficientes), establecer una “carrera profesional” que permitiera que los que adquiriesen la categoría de catedráticos tuvieran mayor formación y madurez, a diferencia de lo que había sucedido en los años cuarenta con la rápida promoción de personal, en ocasiones, con escasa formación ante la necesidad de cubrir vacantes producidas por la guerra, la depuración y el exilio, al tiempo que por el aumento de alumnos universitarios. Así se estratificaban más los cuerpos docentes, resultaban más baratos y por la necesidad de hacer currículum se estimulaba indirectamente la formación y la investigación.

Las funciones de los Catedráticos Numerarios de Universidad serían la docencia e investigación en las disciplinas de que fuesen titulares, la dirección de Departamentos e Institutos cuando les correspondiera, y el desempeño de cargos de autoridad académica. Los Profesores Agregados se encargarían de la docencia e investigación en sus disciplinas, colaborando con los Catedráticos en las tareas que se les asignasen en sus respectivos Centros y Departamentos. Los Profesores Adjuntos se encargarían, además de la investigación que se les encomendase, de la docencia en cursos, grupos o prácticas que les fueran asignados y la suplencia, por ausencia o vacantes, del profesorado de categoría superior, todo ello de acuerdo con la organización y necesidades del respectivo Departamento.

El profesorado de los centros de educación universitaria lo formarían en junto funcionarios de los cuerpos citados: Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias; Profesores Agregados de Escuelas Universitarias; Catedráticos Numerarios de Universidad; Profesores Agregados de Universidad y Profesores Adjuntos de Universidad, así como otros profesores contratados (los cuales iban a convertirse de hecho, en un plazo muy breve, en la masa importante con que se atendió la docencia a lo largo de la década subsiguiente a la promulgación de la Ley)¹⁶⁴. Así mismo, podrían nombrarse con carácter honorífico Colaboradores de cátedra, que además de su propia formación, podrían tener los cometidos de ayuda a la docencia e investigación que el titular de la cátedra les asignase.

El ingreso en los cuerpos docentes universitarios se efectuaría como profesor de una disciplina o grupo de disciplinas determinadas. Su posterior adscripción a una plaza concreta por el Ministerio de Educación y Ciencia se haría previa selección por las respectivas universidades, en función de los méritos de los solicitantes y de acuerdo con las normas reglamentarias que a

¹⁶⁴ Ver BALDÓ LACOMBA, Marc: “Los primeros sesenta: consolidación del antifranquismo en la Universidad”, cit.: “Los profesores no numerarios se contrataban en precario y entre ellos existía variedad de salarios y tipos de vinculación (catedráticos interinos, adjuntos temporales, adjuntos interinos, encargados de curso, ayudantes y colaboradores honorarios). Los numerarios pasaron sólo en tres años del 54 al 80% de la plantilla. Con el sueldo anual de un catedrático se podía pagar a 7,7 profesores no numerarios de categoría inferior”. P. 163

tal efecto se dictasen, así como de las establecidas en los Estatutos. En tanto no quedasen adscritos a una plaza, quedarían en expectativa de destino, pudiendo el Ministerio adscribirlos provisionalmente a servicios docentes universitarios o de investigación. De cada disciplina o grupos de disciplinas existiría una plantilla superior al número de plazas existentes, al objeto de poder atender de modo flexible las necesidades docentes y poder cubrir licencias, excedencias y demás situaciones. Todos los profesores tendrían dedicación exclusiva a la universidad y el régimen de incompatibilidades se establecería reglamentariamente.¹⁶⁵

El Reglamento de ingreso sería aprobado por el Gobierno, a propuesta y redacción del Ministerio, una vez oída la Junta Nacional de Universidades. En el nombramiento de Tribunales se buscarían objetividad y competencia, intentando un equilibrio entre la diversidad de corrientes científicas y la conveniente rotación de personas.

En concreto, al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias se accedería mediante concurso-oposición entre Licenciados universitarios, Ingenieros y Arquitectos que hubieran seguido cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación. Al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias se accedería de la siguiente manera: a un 50% de las plazas mediante concurso de méritos, en el que podrían participar Profesores agregados de las mencionadas Escuelas y Catedráticos numerarios de Bachillerato que estuvieran en posesión del título de Doctor, y al otro 50% se accedería mediante concurso-oposición entre Doctores, de acuerdo con las normas reglamentarias. Al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad se accedería mediante concurso de méritos entre Profesores agregados de Universidad. Se juzgaría independientemente la labor investigadora y profesional, apreciada por un Jurado, y la capacidad docente, que sería objeto de juicio diferenciado por los Directores de los Departamentos y Decanos o Directores de Escuelas Técnicas Superiores. Las plazas que no hubieran

¹⁶⁵ Con la adecuación de los salarios -al menos formalmente- y las medidas aquí recogidas se pretendía poner límite al pluriempleo de los docentes hasta ese momento, a veces la única manera de mantener un nivel de vida digno, pero que acababa repercutiendo en el nivel de la enseñanza que se impartía en la universidad.

podido ser provistas en la forma establecida en el apartado anterior se cubrirían mediante concurso-oposición entre Doctores que hubieran ejercido la docencia o la investigación y seguido cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación. Se podría acceder también, excepcionalmente, por nombramiento directo, en el caso de titulares de grados académicos superiores que hubieran alcanzado notorio prestigio en el orden científico.

En el Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad se accedería al 50% de las plazas por concurso-oposición entre Profesores Adjuntos. En las materias que se determinasen expresamente podrían concursar, juntamente con los Profesores Adjuntos, los Catedráticos de Bachillerato y de Escuelas Universitarias. Al 50% restante se accedería mediante concurso-oposición entre Doctores que hubieran seguido los correspondientes cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación. Al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad se ingresaría, a su vez, mediante concurso-oposición entre Doctores que hubieran desempeñado al menos durante un año funciones de Profesor ayudante o tareas de investigación o docencia en las Escuelas universitarias, Institutos Nacionales de Bachillerato y otros Centros que se determinasen y que hubieran seguido cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación. Los Agregados y Adjuntos se nombrarían únicamente para aquellos Departamentos en que la colaboración fuera precisa, en función del volumen de su tarea docente e investigadora. Los Ayudantes, finalmente, serían seleccionados entre Licenciados universitarios o Ingenieros y Arquitectos, a propuesta del correspondiente Departamento. Estarían vinculados con la Universidad mediante contrato de dos años, renovable por una sola vez por un periodo igual. Además, podrían ser contratados por tiempo limitado profesores, españoles o extranjeros, en razón de su prestigio y méritos reconocidos, para atender a campos de especialización restringida. Según la función que se les encomendase, a efectos académicos serían asimilados a Catedráticos numerarios, Agregados o Adjuntos. Para los Profesores contratados de excepcional prestigio cuyos servicios se considerasen necesarios de modo permanente, podrían establecerse contratos por tiempo indefinido que habrían de aprobarse por el Ministerio y que no implicarían la adquisición de la condición de funcionario público.

Los artículos 121 y 122 recogían las funciones y forma de acceso del profesorado de Formación Profesional y de Enseñanzas especializadas. En cualquier cuerpo de profesorado, para poder participar en un concurso habrían de acreditarse dos años de permanencia activa en su destino.

El capítulo III, artículo 124, estaba dedicado el profesorado no estatal. Estaría sujeto a la Ley en cuanto a la titulación mínima exigida y normas estatutarias que reglamentasen su relación de servicios, análogas a las del profesorado estatal. La habilitación para centros no estatales se obtendría completando la titulación con cursos en los ICEs. El Gobierno fijaría la relación numérica óptima alumnos-profesor en cada nivel y la plantilla mínima de cada centro, así como horarios, derechos y deberes de los Profesores en los órdenes técnico-docente y educativo. Oída la Organización Sindical, dictaría el Estatuto del personal docente y auxiliar no estatal y fijaría la remuneración mínima de tal profesorado, en todo caso análoga a la del profesorado estatal de igual nivel. Este Estatuto comprendería también al personal docente español en los Centros docentes extranjeros.

El título IV (artículos 125 a 131) aborda el Estatuto del estudiante. Los estudiantes tendrían el deber social del estudio, pero también derecho a elegir centro docente y a recibir formación. Reglamentariamente se establecería el correspondiente cuadro de faltas y sanciones. Por parte del Estado se reconocía obligación de mantener los centros docentes, profesorado y medios instrumentales necesarios, teniendo en cuenta la iniciativa privada, para asegurar el alto nivel y la eficacia de la acción educativa. Los estudiantes tendrían derecho a orientación educativa y profesional a lo largo de toda la vida escolar, mediante el establecimiento de un régimen de tutorías que permitiría adecuar el Plan de Estudios a la capacidad, aptitud y vocación de cada alumno, así como, al término de cada nivel o ciclo, informarles sobre las salidas que se les ofrecían. Asimismo, recibirían orientación profesional en relación con la situación y perspectiva del empleo.

Los estudiantes podrían, por su parte, cooperar activamente en la obra educativa a través de su participación en la orientación y organización de

actividades en los Centros docentes; podrían ampliar o intensificar la enseñanza en aquellas materias que suscitasen en ellos mayor interés, así como participar en la determinación de horarios y fechas de las actividades docentes; podrían formular reclamaciones motivadas, en casos de abandono o defectuoso cumplimiento de las funciones educativas, y tendrían posibilidad de emitir un escrito al finalizar sus estudios de Bachillerato, cada grado de la Formación Profesional y la Universidad antes de la expedición del título correspondiente, en el que harían constar su juicio personal, reservado y debidamente razonado, sobre las actividades educativas del centro respectivo y su profesorado, así como la valoración de los medios instrumentales que se hubieran empleado en su formación, todo ello con el fin de contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza que hubieran de recibir las promociones posteriores de alumnos.

Asimismo, tendrían derecho a la sanidad y a la seguridad social escolar. Contarían con un seguro escolar y régimen especial de Seguro escolar integrado en el sistema de la Seguridad Social, que les protegería ante el infortunio familiar, accidente o enfermedad y demás contingencias que pudiera afectar a la continuidad en sus estudios. Se autorizaba al Ministerio de Trabajo para que lo regulase, a fin de evitar dobles coberturas. Tendrían derecho preferente a ser atendidos en las Instituciones de rango universitario que tuvieran proyección médico-asistencial. Tendrían también derecho a beneficiarse de un sistema de ayudas al estudio, necesarias para evitar cualquier discriminación basada en consideraciones económicas, ayudas en las que estarían incluidos alimentación, alojamiento y transporte escolar mediante becas, becas-salario, préstamos y residencias; también, a través de instituciones sociales que permitirían la realización de prácticas de cooperación y mutualismo, tales como Mutualidades y Cotos escolares. Tendrían, en fin, derecho a facilidades necesarias para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas que contribuyeran al bienestar estudiantil, así como el acceso libre y gratuito a museos, bibliotecas y monumentos nacionales, y facilidades para el acceso a actos y espectáculos que contribuyesen a su formación cultural.

Se garantizaba asimismo la protección jurídica al estudio y la valoración objetiva del rendimiento educativo y al establecimiento de los oportunos medios de impugnación. Los alumnos tendrían el derecho, jurídicamente exigible, a que se impidiera durante el periodo de Educación General Básica y Formación Profesional de primer grado su dedicación a trabajos que perturbasen su asistencia escolar o perjudicasen su normal desarrollo físico-psíquico. Tendrían derecho al fomento de los aspectos educativos de los medios de comunicación social; al desarrollo normal de las actividades de los distintos centros docentes, y por otra parte el deber de no perturbar el orden y la disciplina académica.¹⁶⁶

Se les reconocía el derecho a constituir círculos culturales y deportivos en los niveles de Bachillerato y Formación Profesional y asociaciones en el de educación universitaria, dentro del marco de las finalidades propias de su específica misión estudiantil. Esto supondría la representación corporativa en los órganos de gobierno de los centros docentes, la realización de actividades formativas para los propios estudiantes y la participación de los círculos o asociaciones, en tareas de extensión cultural, a otros sectores del país de menor nivel educativo.¹⁶⁷

El Título V recogía lo relativo a la administración educativa. En su capítulo primero (artículos 130 a 134), se refería a la puesta en práctica de la Ley, sus plazos y su procedimiento. Se atendería primero a la implantación de la EGB, obligatoria y gratuita en todo el territorio nacional, mediante planes regionales o comarcales que establecieran la igualdad de oportunidades entre las zonas urbanas y rurales. La implantación del Bachillerato se realizaría en función de aquella otra, creando nuevos centros en función de la demanda,

¹⁶⁶ Éste deber, recogido explícitamente en el propio texto de la Ley, suponía un toque de atención a la situación de conflictividad estudiantil que ya se había hecho endémica desde los años 50.

¹⁶⁷ La posibilidad de crear asociaciones de alumnos venía propiciada por el anteriormente referido Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, sobre Asociaciones de Estudiantes (BOE 23), que intentaba abrir un cauce de representación estudiantil previo. Sin embargo este propósito parece que llegó a destiempo. El propio desarrollo interno del movimiento estudiantil y la presencia en su seno de corrientes ideológicas partidarias de la acción directa y contrarias a la participación representativa, determinó que la medida lejos de ser acogida favorablemente, suscitara entre los estudiantes actitudes abiertamente reticentes cuando no encontradas, despreciando ese cauce de participación que se abría. Con posterioridad, esas medidas fueron reguladas provisionalmente por el Decreto 2925/1974 de 17 de octubre, que regulaba provisionalmente la participación estudiantil a nivel universitario (BOE 21), y la Orden de 21 de octubre del mismo año que desarrollaba el Decreto anterior (BOE 22).

según la población escolar que fuera reuniendo los requisitos exigidos, el desarrollo de nuevas ramas derivadas del avance científico, y las necesidades de los distintos sectores profesionales. Sin embargo, la prioridad estaría en descongestionar los centros existentes y en la potenciación científica y docente.¹⁶⁸ Se crearían asimismo nuevos centros de Formación Profesional según las necesidades nacionales. En cuanto a su distribución geográfica, se tendría en cuenta la población escolar y las características sociales y económicas de la región. En los sucesivos Planes de Desarrollo Económico y Social se determinaría el número de puestos escolares a crear en los distintos niveles y las modalidades del sistema educativo y distribución regional de los mismos. En la creación de centros, se preveía su desdoblamiento en cuanto rebasasen el número reglamentario de alumnos y, al contrario, su supresión o fusión con otros, cuando quedasen por debajo del mismo.¹⁶⁹

El capítulo segundo (artículos 135 a 145) establecía los órganos de la administración educativa. El Ministerio de Educación y Ciencia propondría al Gobierno las líneas generales de la política educativa y planes de estudio¹⁷⁰ y

¹⁶⁸ La masificación y la falta de espacios fueron una constante no resuelta aun después de la Ley, que junto a la baja calidad de la enseñanza impartida y la escasa práctica científica favorecían el absentismo del alumnado al tiempo que avivaban sus reivindicaciones. Para ilustrar este aspecto véanse los textos de algunos de los autores que han abordado este periodo, fundamentalmente ÁLVAREZ COBELAS, José: *Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970)*, Siglo XXI, Madrid, 2004; YSÁS, Pere: *Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia (1960-1975)*, Crítica, Barcelona, 2004; el ya mencionado de RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *El Sindicato Español Universitario...* citado anteriormente; de HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Estudiantes en la universidad española (1956-1975): cambio generacional y movilización antifranquista” en *El Franquismo y la Transición en España: Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Coord. por Damián Alberto González, Madrid, 2008; “La dictadura franquista y la universidad, 1951-1975 (Con especial atención al caso de Madrid)”, *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, nº 5, 2002; “Tres décadas de educación superior en España: Universidades e Investigación”, en *Cuadernos del Instituto Antonio Nebrija*, 11/1 (2008); y la obra colectiva ya citada anteriormente de forma parcial *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil*.

¹⁶⁹ La falta de medios hizo que algunas de estas iniciativas resultaran inviables. Sin embargo, alguna expresión de ellas podemos encontrarlas un año antes, incluso, en la propia Universidad de Madrid. En 1969 ante la masificación que se estaba padeciendo y todo hay que decirlo, con el fin de tener un mejor control de las revueltas estudiantiles, se había procedido a la división de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y de la propia Filosofía y Letras que desde ese momento se repartía entre los dos edificios, A y B. Véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Represión y radicalización del movimiento estudiantil (1965-1969)”... cit. P.266

¹⁷⁰ En el ámbito de la enseñanza universitaria, dentro de los márgenes de autonomía concedidos a los centros, el Estado, a través del Ministerio, fijaba las directrices de elaboración de los planes de estudio como marco de mínimos comunes en todas las Universidades del Estado, como manera de garantizar unos conocimientos semejantes a todos cuantos se les concediese un título oficial, independientemente de la Universidad en que estudiaran.

ejecutaría sus acuerdos en este campo; propondría también la creación y supresión de centros estatales de enseñanza y los anteproyectos de ley de creación o autorización de universidades, Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, así como su supresión; ejercería la superior dirección de todas las Instituciones docentes, tanto estatales como no estatales; inspeccionaría y coordinaría todas las Instituciones docentes, estatales y no estatales; estimularía, orientaría y coordinaría la cooperación social y económica con las actividades educativas, y expediría -o autorizaría la expedición- de los títulos y nombramientos. Los documentos acreditativos de conocimientos sólo podrían denominarse “títulos” cuando, con tal finalidad, los expidiera o autorizara el MEC.¹⁷¹

El gobierno y administración de centros de enseñanza dependientes de otros Ministerios, de la Organización Sindical o de otras entidades públicas correspondería a cada uno de ellos, pero sería competencia del MEC determinar el nivel, ciclo o grado que correspondería a los estudios o prácticas desarrollados en cada uno de estos centros¹⁷²; fijar las titulaciones que habría de poseer su profesorado; aprobar los planes de estudios incluyendo las materias opcionales que cada centro pudiera ofrecer estableciendo los límites máximos y mínimos de las horas lectivas, y proponer al gobierno la adopción de las medidas necesarias para asegurar la coordinación y cooperación en relación con las actividades educativas de otros Ministerios y entidades públicas, especialmente la Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos. Estas disposiciones no serían de aplicación a las Academias Militares de Tierra, Mar y Aire, ni a los Centros de Formación del personal encargado del orden público, ni a los Centros de Formación eclesiásticos, que se regirían por sus propias normas, sin perjuicio de la coordinación y convalidaciones que pudiera establecer el MEC. Las enseñanzas de Formación Política Cívico-social y Educación Física y Deportiva, así como las enseñanzas de actividades domésticas en los centros estatales y no estatales, serían reguladas por el Gobierno teniendo en cuenta las competencias de los organismos del

¹⁷¹ Esta cuestión resultaba de relevancia por cuanto el Ministerio de Educación y Ciencia mantenía el control de la expedición de títulos, de manera que sólo tendrían validez oficial los expedidos por él.

¹⁷² El Ministerio también aprobaba las convalidaciones entre enseñanzas ofrecidas por los diferentes centros.

Movimiento.¹⁷³ Las actividades extraescolares y complementarias y el procedimiento para la selección de su profesorado serían establecidas por el Gobierno mediante propuesta conjunta del Ministerio de Educación y Ciencia y la Secretaría General del Movimiento.

La ordenación y supervisión de la educación religiosa, así como la selección de profesorado, serían competencia de la Iglesia y reguladas por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, previo acuerdo con la jerarquía eclesiástica. Las remuneraciones del profesorado de formación religiosa serían análogas a las del profesorado de los correspondientes niveles educativos.¹⁷⁴ También sería competencia del Ministerio la supervisión de las Fundaciones y Asociaciones de carácter docente y cultural y el control del cumplimiento de las cargas docentes y culturales en las transmisiones de bienes gravados con ellas. El Ministerio intervendría en el reconocimiento y

¹⁷³ Las enseñanzas de Formación Política Cívico-social y Educación Física y Deportiva, que son las que nos interesan en el ámbito de la enseñanza universitaria quedaban pendientes de regulación, teniendo en cuenta la opinión de los organismos del Movimiento. Pero primero la conflictividad social y política del país y posteriormente la muerte del Dictador hicieron que su “regulación”, o su des-regulación definitiva, se dilatará en el tiempo.

En cuanto a la Formación Política, el Real Decreto 426/1977 de 4 de marzo suprimía su enseñanza en la Universidad (BOE 22). La Ley General de Educación en su artículo 36 disponía que los planes de estudio serían elaborados por las Universidades según las directrices fijadas por el Ministerio. Pero la Orden de 23 de septiembre de 1972, que fijaba dichas directrices, tampoco establecía nada al respecto de las enseñanzas complementarias y sin embargo dichas materias siguieron apareciendo en los planes de estudio hasta 1976, en que la Orden Ministerial de 29 de noviembre por la que se establecían nuevos contenidos en las orientaciones pedagógicas del área social, determinaba que en los planes de estudios no volviera a aparecer la asignatura de Formación Política.

En lo referente a la Educación Física y Deportiva, la Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física (BOE 27) había establecido su obligatoriedad en todos los centros docentes, ya fueran oficiales, institucionales o privados, sin embargo el Real Decreto de 4 de marzo de 1977 estableciendo una nueva ordenación de la Educación Física en la Universidad (BOE 22), fijaba que la educación física no sería obligatoria, sino que se estimularía su práctica, para lo cual se creaba un Servicio de Educación Física y Deportiva dependiente de los Rectorados. Véase, para mayor información, el apartado correspondiente a los Planes de Estudio.

¹⁷⁴ La Ley de 1970 “garantizaba la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral de la Iglesia Católica en los Centros de enseñanza, tanto estatales como no estatales” y, aunque hoy parezca sorprendente, sus profesores seguían estando equiparados al profesorado de los correspondientes niveles educativos, aún teniendo en consideración la Ley 44/1967 de 28 de junio, reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa (BOE 1 julio) que establecía la libertad de practicar abiertamente religiones de otras confesiones. Como en el caso de la Formación Política y la Educación Física, la formación religiosa quedaba pendiente de regulación por parte del gobierno con el acuerdo de la jerarquía católica (todo estos aspectos estaban sujetos a Concordato), así la Orden de 20 de diciembre de 1976 reguladora de las actividades de formación religiosa en centros de enseñanza universitaria (BOE 29) decretaba que la asistencia a clase de formación religiosa sería voluntaria, no así en los niveles inferiores. En las universidades estatales se procuraría el fomento de la religión, para lo que se creaba un Servicio de Asistencia y Formación religiosa, cuya finalidad sería promover y organizar las prácticas religiosas de la comunidad universitaria y las actividades formativas. En los niveles inferiores, la religión seguiría siendo una asignatura obligatoria y sus profesores tendrían la misma consideración que el resto que impartían las demás asignaturas, aún cuando su selección quedaba en manos exclusivamente de la Iglesia.

clasificación de estas instituciones, aunque cumpliesen, además de fines docentes, otros fines asistenciales no docentes. Las Fundaciones regularmente constituidas podrían poseer toda clase de bienes, pero habrían de ajustar su gestión económica a las normas que reglamentariamente se establecieran, correspondiendo a los Patronatos, Administradores o titulares de las mismas la prueba del cumplimiento de los fines a que se destinasen. El Ministerio tendría a su cargo el control de los actos extraordinarios de gobierno y administración de las Fundaciones, estableciendo de forma reglamentaria la publicidad de los fines, recursos y gestión ordinaria de cada fundación.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio, podría crear, suprimir o modificar por decreto cuantas dependencias y organismos, autónomos o no, con nivel superior a Sección, debieran de ser reorganizados en el propio Ministerio, a fin de que pudieran servir en cada momento con la máxima eficacia a la nueva orientación de la política educativa y el planeamiento y programación de la educación. Con la misma finalidad, podría aprobarse por decreto el traspaso al MEC de competencias y organismos dependientes de otros departamentos ministeriales. El MEC adoptaría las medidas necesarias a fin de conseguir la normalización, racionalización y mecanización de la actuación administrativa de dependencias y organismos del Departamento. El Ministro y demás autoridades superiores del Ministerio podrían delegar o desconcentrar competencias en otras autoridades del Departamento. La desconcentración sería aprobada por un decreto y la delegación por una orden ministerial. La Presidencia del Gobierno y el Ministro podrían adoptar conjuntamente las medidas necesarias para dotar a dicho Departamento del personal técnico adecuado y necesario. En cada provincia existiría una Delegación Provincial de Educación y Ciencia y una Junta Provincial de Educación.¹⁷⁵ En el ámbito del distrito universitario se constituiría una Junta de Distrito presidida por el Rector. La composición y atribuciones de estas Juntas quedarían determinadas reglamentariamente y, en todo caso, formarían parte de ellas representaciones de los sectores estatal y no estatal de la enseñanza.

¹⁷⁵ Era una nueva manera de desconcentración de las funciones ministeriales.

En el Ministerio de Educación y Ciencia existiría un Servicio de Inspección Técnica de Educación, cuyos funcionarios constituirían un Cuerpo especial de la Administración Civil del Estado y cuyas funciones serían velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones en todos los Centros docentes estatales y no estatales, en el ámbito de la función educativa; colaborar con los Servicios de Planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y en la elaboración y actualización del mapa escolar de las zonas donde ejercieran su función, así como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de éstas; asesorar a los Profesores de Centros estatales y no estatales sobre los métodos más idóneos para la eficacia de las enseñanzas que impartieran; evaluar el rendimiento educativo de los Centros docentes y Profesores de su zona respectiva o de la especialidad a su cargo, en colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación, y colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal docente. Reglamentariamente, se darían normas complementarias para la inspección en los centros de educación universitaria. Esta inspección sería ejercida en todo caso por miembros procedentes de los cuerpos de Catedráticos de Educación Universitaria.¹⁷⁶

El Servicio de Inspección Técnica de Educación estaría constituido por especialistas de los distintos niveles de enseñanza. Los Inspectores serían seleccionados mediante concurso, entre los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes del Departamento, según el nivel de la especialidad correspondiente. Habrían de tener como mínimo tres años de práctica docente en centros del nivel a que concursase, poseer el título de Licenciado universitario, Ingeniero o Arquitecto y haber seguido los cursos especiales correspondientes en los Institutos de Ciencias de la Educación. Excepcionalmente, el Ministro podría nombrar como Inspectores extraordinarios a Profesores de relevantes méritos docentes. Los Inspectores deberían participar obligatoriamente en los cursos especiales de

¹⁷⁶ Además de establecerse el régimen de incompatibilidades y el requerimiento de dedicación exclusiva, se instauraba un Servicio de Inspección Técnica de Educación que velaría por el cumplimiento de la norma y la calidad de la enseñanza.

perfeccionamiento profesional de los ICEs, cada tres años como mínimo. El Jefe del Servicio sería de libre designación por el Ministro. La nueva estructura y funciones del Servicio de Inspección Técnica quedarían reguladas mediante decreto, a propuesta del Ministro, así como el sistema de pruebas a que habría de ajustarse la selección de los funcionarios del Servicio. Dependiendo del Ministro existiría también una Inspección General de Servicios, que ejercería su misión inspectora sobre la organización y funcionamiento administrativo de todos los Servicios, Organismos y Centros dependientes del Departamento, especialmente en lo que se refiere a personal, procedimiento, régimen económico, instalaciones y dotaciones.

El Consejo Nacional de Educación era el órgano superior de asesoramiento del Ministerio en materia de educación. Su organización venía dada por Gobierno a propuesta de dicho Departamento. Su funcionamiento sería en pleno o en Comisión permanente, según se estableciera reglamentariamente, e informaría con carácter preceptivo los proyectos de ley de reforma del sistema educativo, los proyectos de disposiciones generales que hubieran de ser aprobados por el Gobierno en desarrollo de la legislación general de educación, los proyectos de convenios internacionales de carácter cultural en que debiera intervenir el Ministerio, los proyectos de convenio entre el Ministerio y los órganos autónomos sometidos a su tutela y la Seguridad Social u otras entidades, preferentemente aquellas de carácter asistencial, y los demás asuntos de suficiente rango.

Los titulados que impartieran enseñanzas en los Centros no estatales se podrían organizar en Colegios de Doctores, Licenciados y Diplomados, que actuarían como órganos consultivos en aquellas cuestiones que afectasen a sus miembros en el orden profesional. El Ministerio organizaría su composición, ámbito y funciones, sin perjuicio de las competencias de la Organización Sindical y del Movimiento. La Junta Nacional de Universidades sería el órgano asesor del Ministerio para la coordinación de éstas, y estaría integrada por los Rectores y Presidentes de los Patronatos de las Universidades, bajo la presidencia del Ministro, pudiendo funcionar en pleno y en comisiones. El Consejo de Rectores tendría carácter de Comisión Permanente de la Junta

Nacional. Como asesores de la Junta podrían establecerse por el Ministerio comisiones, entre las cuales figurarían en todo caso las de Decanos de Facultades, Directores de Escuelas Técnicas Superiores y Directores de Escuelas Universitarias. Para terminar, la disposición final tercera establecía que el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Hacienda podría elevar la cuantía de las tasas académicas.

De las dieciséis disposiciones transitorias nos detendremos en algunas que nos merecen especial interés. La primera establecía que la implantación de la Ley sería gradual, en el plazo de diez años.¹⁷⁷ Los planes de estudio vigentes en la fecha de publicación de la Ley se extinguirían curso a curso. Una vez extinguido cada curso, se convocarían durante dos años académicos exámenes de enseñanza libre y, en su caso, las correspondientes pruebas de grado, reválida o madurez para los alumnos que tuvieran pendientes asignaturas. Transcurridas las cuatro convocatorias correspondientes, los alumnos que no hubieran superado las pruebas y desearan continuar estudios deberían seguirlos por los nuevos planes, mediante la adaptación que el Ministerio determinase. Se autorizaba al Ministerio para sustituir en el menor plazo posible las pruebas de grado del Bachillerato elemental y, a medida que se fueran implantando el Bachillerato Unificado Polivalente y el Curso de Orientación Universitaria, también las pruebas de grado de Bachillerato superior y de madurez, vigentes unas y otras hasta entonces para la obtención de los títulos de Bachiller elemental y superior, respectivamente.

La segunda disposición transitoria establecía que las unidades y cursos de Educación General Básica, en sus dos etapas, se agruparían en Centros únicos, bajo una sola dirección y régimen administrativo. Pero lo que tiene más relevancia para nosotros es que suponía la incorporación de determinados estudios a la universidad. Las Escuelas Normales y las de Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica estatales se integrarían en Universidades como Escuelas universitarias, en la forma que reglamentariamente se determinase. Las Escuelas Superiores de Bellas Artes, los Conservatorios de Música y las

¹⁷⁷ Este plazo vendría especificado incluso mediante el Decreto 2459/1970, de 22 de agosto, de calendario para la aplicación de la reforma educativa que se verá a continuación.

Escuelas de Arte Dramático también se incorporaban a la Educación universitaria en sus tres ciclos. Los estudios de Periodismo y demás medios de comunicación social quedaban igualmente incorporados en sus tres ciclos y titulaciones, de Diplomado, Licenciado y Doctor. El Gobierno, asimismo, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia y la Secretaría General del Movimiento, reglamentaría la incorporación a la universidad del Instituto Nacional de Educación Física con el rango de Instituto universitario.

Las Escuelas de Idiomas, las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Centros de Formación Profesional Industrial y las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se convertirían en Escuelas universitarias o Centros de Formación Profesional, según la extensión y naturaleza de sus enseñanzas. Los Institutos Politécnicos Superiores tendrían provisionalmente el mismo régimen económico y administrativo determinado por la Ley para las universidades. Una vez que se contase con los Centros y Departamentos precisos, estos Institutos se constituirían en Universidades, integradas fundamentalmente por la agrupación de Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas universitarias de carácter técnico. Se desarrollarían orgánicamente, y cuando fuera preciso en Departamentos, los estudios específicos de las enseñanzas mercantiles en todos los ciclos universitarios. Las Escuelas Profesionales de Comercio se integrarían en la universidad como Escuelas universitarias. Las Enseñanzas del Hogar quedarían equiparadas a la Formación Económica o Enseñanzas y Actividades Domésticas que quedaban establecidas en la ley para el Bachillerato.

La disposición transitoria cuarta fijaba que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo, acordaría la integración de las Universidades Laborales en el régimen académico establecido por la misma, aunque mantendrían su denominación.¹⁷⁸ En el mismo plazo y por acuerdo del

¹⁷⁸ Mediante estas disposiciones transitorias la Ley General de Educación incluía dentro del nuevo sistema educativo propuesto, en el ámbito que a nosotros nos interesa, el universitario, toda una serie de enseñanzas que tradicionalmente habían quedado al margen, lo que permitía una regulación más homogénea. Así quedaban incluidas en el ámbito universitario las Escuelas Normales, las Escuelas de Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica estatales -que habían quedado expresamente fuera en la ley del

Ministerio de Educación y Ciencia con la Secretaría General y Organizaciones del Movimiento, se establecería la integración en el sistema educativo general de los Centros dependientes de las Delegaciones Nacionales de Juventudes, Sección Femenina, Educación Física y Deportes y demás Organizaciones del Movimiento. Igualmente se integrarían, mediante acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Organización Sindical, centros dependientes de dicha Organización Sindical.

La disposición transitoria quinta resulta fundamental para nosotros, pues fijaba que en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley, se elevarían por las respectivas Universidades al Ministerio los proyectos provisionales de estatuto por los que habrían de regirse. Hasta que se constituyeran los Patronatos mencionados en el artículo 83, se constituiría un Patronato provisional de acuerdo con dicho artículo, que habría de ser oído preceptivamente y se disolvería una vez aprobados los definitivos. En el caso de que, dentro de los plazos establecidos, no se presentasen los proyectos de estatuto, los redactaría el Ministerio y los elevaría a la aprobación del Gobierno. En el plazo de los tres meses siguientes a dicha aprobación, deberían quedar constituidos los Patronatos universitarios, e inmediatamente después se constituiría la Junta Nacional de Universidades. En el plazo de un año, asimismo, se reorganizaría el Consejo Nacional de Educación según el artículo 45.

La disposición transitoria sexta suponía la integración de los funcionarios docentes en las escalas que se creasen, integración que se haría por decreto, a propuesta del Ministerio (...), previo informe del Ministerio de Hacienda, del Consejo Nacional de Educación y del Consejo de Estado y, en su caso, de la Comisión Superior de Personal y de las Asociaciones del Profesorado. Con el mismo criterio se produciría la integración del personal docente no escalafonado en los nuevos cuerpos especiales afines. En los casos en que no

43-; las Escuelas Superiores de Bellas Artes, los Conservatorios de Música y las Escuelas de Arte Dramático; los estudios de Periodismo y demás medios de comunicación social; el Instituto Nacional de Educación Física; las Escuelas de Idiomas, las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Centros de Formación Profesional Industrial y las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos; los Institutos Politécnicos Superiores; las enseñanzas mercantiles; las Escuelas Profesionales de Comercio y las Universidades Laborales.

fuera posible la integración, quedarían en situación de “a extinguir”. Los funcionarios de los cuerpos de Inspección del MEC existentes hasta ese momento, pasarían a formar parte del Cuerpo Especial de Inspección Técnica. Los funcionarios de los cuerpos de Directores Escolares podrían integrarse en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. Los funcionarios del Cuerpo de Magisterio Nacional, quedarían integrados en el nuevo Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, e impartirían enseñanzas de Educación Preescolar y Educación General Básica. Reglamentariamente se establecería la forma y procedimientos por los que mediante pruebas, concursos y concurso-oposición, según los casos, podrían acceder en turno restringido, a los cuerpos existentes, los Maestros o Profesores que hubiesen servido al Estado durante un mínimo de cinco años académicos completos en calidad de interinos.

Los Catedráticos numerarios de Enseñanza Media con título de Doctor podrían concursar en turno restringido, por una sola vez, a las vacantes en disciplinas iguales o que pudieran declararse análogas, del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas universitarias. El mismo derecho se otorgaría, por una sola vez, a los actuales Catedráticos de Escuelas Normales del Magisterio, Escuelas Profesionales de Comercio y Escuelas Técnicas de Grado Medio, siempre que se hallasen en posesión del título de Licenciado, respecto del Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato.

Según la disposición transitoria séptima, en el cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad que creaba la LGE se integrarían, mediante concurso restringido, quienes poseyeran el título de Doctor, hubieran obtenido el nombramiento de Profesores adjuntos o Profesores encargados de Laboratorio mediante concurso-oposición y hubieran prestado servicios continuados durante cinco años académicos completos como mínimo, o se encontraran prestándolos en la actualidad con una antigüedad mínima de tres años. El primer concurso-oposición que se celebre para el acceso al mencionado cuerpo tendría carácter restringido, entre los profesores Adjuntos, Adjuntos provisionales o interinos, Ayudantes o Encargados de grupo o curso que poseyeran el título de Doctor y estuvieran en sus funciones docentes con una

antelación mínima de tres años a la fecha de convocatoria del concurso-oposición. Los servicios prestados como Profesores Adjuntos antes de su ingreso en el nuevo cuerpo no se computarían a efectos económicos de antigüedad en el mismo.

Según la disposición transitoria octava se mantendría el régimen existente hasta el momento de las Mutualidades de los Cuerpos docentes, de acuerdo con sus propias normas. Mediante reglamentos se establecería un régimen de protección social adecuado para aquellos que, sin tener la condición de funcionarios, prestasen sus servicios en centros docentes estatales, cualquiera que fuera su situación académica y profesional. Según la disposición transitoria novena quedarían subsistentes los derechos de habitación o indemnización sustitutoria reconocida hasta la fecha a los Maestros nacionales de Enseñanza Primaria.

La transitoria décima establecía que el Ministerio podría habilitar excepcionalmente, a falta de titulados del grado académico correspondiente, a personas competentes para que, durante los cinco años inmediatamente posteriores a la promulgación de la Ley, pudieran impartir la enseñanza aunque no poseyesen la titulación que en la misma se exigiera para el correspondiente nivel. Cuando se tratase de centros estatales, la habilitación permitiría el posible encargo de funciones docentes, aun cuando no correspondieran a la escala a que pertenecieran los designados. Los beneficiarios de estas habilitaciones y nombramientos, sin embargo, no adquirirían derecho por ello a ingresar en los cuerpos docentes.

En la undécima transitoria se recogía que en las disposiciones de ejecución de la ley se regularía el acceso directo a los estudios universitarios de quienes, por disposiciones especiales vigentes, tuvieran reconocido dicho acceso bien fuera a estudios universitarios o a otros que, en virtud de la propia Ley, quedaban integrados en la universidad. Todos los que poseyesen un título o diploma en Centros estatales de cualquier Ministerio que exigiera cursos de duración superior a un año, y para cuyo ingreso se hubiera exigido el título de

Bachillerato Superior o equivalente, tendrían acceso directo a la universidad en la forma que reglamentariamente se preceptuase.

Por la disposición transitoria doce se establecía que en los dos años académicos siguientes a la publicación de la Ley, quienes no estuvieran en posesión del Certificado de Estudios Primarios, teniendo cumplidos los catorce años en esa fecha, podrían obtener el título de Graduado Escolar, realizando las pruebas que reglamentariamente se establecieran. Según la número trece, el Ministerio reglamentaría las enseñanzas complementarias y de adaptación necesarias para el acceso al BUP, tanto para los que estuvieran en posesión del Certificado de Estudios Primarios como para los que se hallasen cursando el vigente Bachillerato Elemental.

Según la disposición transitoria décimo cuarta, el Gobierno dictaría las normas necesarias para garantizar el uso riguroso, tanto con fines profesionales como honoríficos, de las titulaciones académicas establecidas en la ley. Deberían utilizarse completas las titulaciones administrativas correspondientes a los distintos niveles del profesorado. En la disposición décimo quinta se establecía que los Licenciados en Ciencias Políticas y Económicas y Comerciales (Secciones de Económicas y Comerciales), los Licenciados en Ciencias Políticas y Económicas (Sección de Economía) y los hasta ese momento Intendentes y Actuarios mercantiles integrados en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Ley de 17 de julio de 1953, conservarían sus denominaciones, quedando equiparados a efectos académicos en todos los derechos, sin excepción alguna. Asimismo, los Doctores y Licenciados que pertenecieran a los Colegios oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, así como aquellos que con las mismas titulaciones actuaran, tanto en la enseñanza estatal como en el ejercicio profesional, podrían pertenecer voluntariamente a las Corporaciones profesionales mencionadas en el punto 3º del artículo 145. La transitoria décimo sexta, por último, declaraba subsistente la Junta de Construcciones Escolares, de la que se determinarían competencias y funciones. A su vez, las disposiciones adicionales recogían aspectos relativos a la financiación de las reformas.

Por la primera se concedía al Ministerio de Educación y Ciencia un monto de crédito extraordinario y suplementario para gastos corrientes (1.129,8 millones de pesetas) en el ejercicio de 1970 para la aplicación de la Ley, y se establecía una modificación de créditos para el ejercicio de 1971, incrementándose en 7.219,8 millones de pesetas. Dichos créditos deberían dedicarse fundamentalmente a la Educación General Básica. Según lo estipulado en la segunda adicional, el Estado hubiera debido aportar con carácter preferente los medios económicos para la progresiva y total ejecución de la ley, con las modificaciones necesarias para su actualización en función de los resultados obtenidos y según lo previsto en su artículo 8. Los presupuestos de los diez años siguientes, de esta manera, hubieran debido priorizar los gastos corrientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

La cuarta adicional mantenía vigente la cuota de Formación Profesional (para contribuir a las necesidades de formación a través de la Organización Sindical). Las empresas privadas que sostuvieran a su costa, individual o mancomunadamente, en Escuelas propias o en otros Centros docentes, la Formación Profesional metódica y gratuita de su personal, o contribuyeran a su capacitación, especialización o perfeccionamiento técnico en forma aprobada por el Ministerio, se podrían beneficiar durante el período de tiempo que en cada caso se determinase de reducciones que llegarían hasta el 75%, si se tratara de Escuelas propias, y de hasta el 30% en los otros casos, de la cuota total que en tal concepto les correspondiera sufragar.

Según la quinta, los libros y el material necesario para el desarrollo del sistema educativo en los niveles de Educación Preescolar, Educación General Básica, Formación Profesional de primer y segundo grados y Bachillerato, estarían sujetos a la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo a las normas que reglamentariamente se establecieran.

La disposición adicional sexta estipulaba que, a partir de la promulgación de la ley, los Profesores numerarios sólo podrían ocupar plaza en una de las plantillas de los cuerpos enumerados en el artículo 108. Se autorizaba al Gobierno para disponer que el pago de las retribuciones del personal en activo

al servicio del Ministerio de Educación y Ciencia y de sus organismos autónomos se efectuase mediante nóminas unificadas, al nivel más conveniente en cada caso, confeccionadas por procedimientos automatizados y mediante entidades españolas de crédito. La prestación de este servicio sería enteramente gratuita para todos los receptores.

La Ley General de Educación finalizaba con la disposición adicional séptima donde se recogía que, en el plazo de dos años, los ministros de Educación y Ciencia y de la Vivienda propondrían al Gobierno, para que éste lo remitiera a las Cortes, un proyecto de Ley por el que se determinarían los solares a reservar para la construcción de centros educativos en las nuevas urbanizaciones y en las zonas urbanas sujetas a ordenación, de manera que, en función de la importancia de la población, se hiciera posible la construcción, bien por el Estado o por los promotores de centros no estatales, de las instituciones educativas y culturales necesarias.

Como ya se dijo antes, en la primera disposición transitoria se establecía que al plazo de implantación de la ley sería de diez años, plazo que quedó determinado por el Decreto 2459/1970, del día siguiente a la propia Ley (21 de agosto), fijando un calendario de aplicación¹⁷⁹ que pretendía implantar la reforma evaluando anualmente los resultados. Se reclamaba la participación de los interesados, con una cierta actitud autocrítica hacia el “contraste de criterios entre la Administración, los estudiantes, las familias y el personal docente”. El calendario establecía la inmediata gratuidad en los niveles obligatorios que se impartieran en centros estatales.

En lo demás, la implantación sería progresiva para los alumnos que hubieran seguido estudios según planes anteriores, aportando unos cuadros anexos que marcaban la paulatina extinción de enseñanzas y la entrada en vigor de los nuevos planes. Determinados aspectos quedaban encomendados al desarrollo de normas reglamentarias y decretos de desarrollo, temas tan importantes como la ordenación del Consejo Nacional de Educación, la Junta

¹⁷⁹ Decreto 2459/1970, de 22 de agosto, sobre calendario para aplicación de la reforma educativa (BOE de 5 de septiembre).

Nacional de Universidades, el cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad y otras.

Según el mencionado calendario y en lo que respecta a la enseñanza universitaria se seguiría la siguiente aplicación: en el curso 1971-72 entraría en vigor el COU y, con carácter experimental, el primer curso de las Escuelas Universitarias; el curso 1972-73 se implantaría con carácter general el primer curso de las Escuelas Universitarias y el primer ciclo de las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, y con carácter experimental, el segundo curso de las Escuelas Universitarias; el curso 1973-74 se implantaría el segundo curso de las Escuelas Universitarias y el segundo curso del primer ciclo de las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, y con carácter experimental, el tercer curso de las Escuelas Universitarias; el curso 1974-75 empezaría el tercer curso del primer ciclo de las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores y el tercer curso de las Escuelas Universitarias; el curso 1975-76 se implantarían con carácter general las enseñanzas correspondientes al primer curso del segundo ciclo de la educación universitaria; en el curso 1976-77 se implantaría el segundo curso del segundo ciclo de la educación universitaria y, finalmente, en los cursos académicos comprendidos entre 1977 y 1980 se completaría la implantación general del tercer ciclo.

Así, con las previsiones económicas y de ejecución de sus disposiciones la Ley General de Educación y de Financiación de la Reforma educativa se planteaba dar un salto adelante en la educación pública en España. Sin embargo, como se ha visto en el análisis pormenorizado de la Ley, eran muchos los asuntos que quedaban a expensas de la aprobación de los Estatutos provisionales de cada Universidad. Aún siendo una ley general para todos los niveles educativos, además, eran muchos los aspectos recogidos que afectaban a la universidad, a la que se incorporaban muchas enseñanzas que en la anterior Ley de 1943 quedaban al margen de ella. En su conjunto, el aspecto fundamental era sin duda la obligatoriedad de contar con estatutos específicos, cuyos plazos de presentación y entrada en vigor quedaban marcados por ley, así como la recuperación de los Patronatos -antecedente del Consejo Social. La propia LGE, en la disposición transitoria quinta, fijaba el

plazo de seis meses para que cada Universidad enviara al Ministerio su proyecto de Estatutos provisionales, por el que se regirían hasta la constitución de su Patronato (artículo 83), debiendo constituirse a su vez un Patronato provisional, que habría de ser oído preceptivamente y que se disolvería una vez aprobado el Estatuto definitivo. En el caso de que dichos proyectos de Estatutos no se presentasen dentro de los plazos establecidos, sería el Ministerio quien los redactaría y elevaría a la aprobación del Gobierno.

Transcurridos tres meses desde la aprobación por el Gobierno de dichos Estatutos provisionales, deberían quedar constituidos los Patronatos universitarios, e inmediatamente después, se constituiría la Junta Nacional de Universidades. Sin embargo, esa relativa autonomía que habrían de comportar los estatutos se vio postergada, ya que las conflictivas circunstancias y otros avatares impidieron su aprobación y entrada en vigor de los textos definitivos, de manera que no pasaron de ser provisionales, cuando no fueron directamente suspendidos.

En un primer momento sólo la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona contaban con sus estatutos propios, según artículo 3º del Decreto-Ley 5/1968 sobre medidas urgentes de reestructuración universitarias. En esa línea, siguiendo escrupulosamente los plazos estipulados, el 31 de diciembre de ese mismo año de 1970 (recordemos que la Ley era de 21 de agosto), se publicaba el Decreto 3857/1970 por el que se aprobaban los Estatutos provisionales de la Universidad Complutense de Madrid.¹⁸⁰

Según el texto, la Universidad Complutense de Madrid, oído su Patronato provisional -constituido al efecto-, había elaborado un proyecto de Estatuto provisional que, presentado al Ministerio de Educación y Ciencia, fue aprobado en Consejo de Ministros. El Estatuto se organizaba en diez títulos y tres disposiciones adicionales y transitorias.

¹⁸⁰ Que sin embargo no aparecen publicados en BOE hasta el 27 de marzo.

El título I recogía la naturaleza, fines y autonomía de la Universidad. La Complutense de Madrid quedaba constituida como “entidad de derecho público, con autonomía y plenitud de personalidad jurídica y patrimonial para el cumplimiento de sus fines”, previendo una mayor precisión de todo ello en los estatutos definitivos. El artículo 1, punto 4º, recogía que el Patrimonio de la Universidad Complutense estaría constituido por los bienes que en ese momento lo integraban, así como los que pudiera adquirir en lo sucesivo con arreglo a las normas establecidas en la Ley General de Educación y en los propios estatutos provisionales. En el ámbito docente y académico, se avanzaba que los acuerdos de los órganos de la Universidad causarían estado y las resoluciones de las Facultades, Institutos, Escuelas o Colegios Universitarios solo podrían ser recurridos en alzada, ante el Rector o la Junta de Gobierno. En cuanto a sus fines, se ceñía a los especificados en el artículo 30 de la LGE.

El título segundo se dedicaba a la organización académica. Los centros que integrarían el distrito de la Universidad Complutense quedaban pendientes de determinación. Estaría la UCM integrada por Departamentos -unidades básicas de la docencia y la investigación- y que, a efectos administrativos y de ordenación académica, se integrarían en Facultades; por Institutos y Colegios Universitarios; Escuelas Universitarias y Escuelas de Formación Profesional de tercer grado; Colegios Mayores y demás centros de asistencia social y formativa de la comunidad universitaria. Los Departamentos serían creados por el Rector a propuesta de la Junta o Juntas de Facultad interesadas, previo informe favorable de la Junta de Gobierno, y oído el Patronato. Sus órganos serían el Director, el Consejo y la Secretaría Administrativa. El primer Director de cada Departamento lo nombraría el Rector con carácter interino, a propuesta de la Facultad o Facultades interesadas, y previo informe favorable de la Junta de Gobierno, entre los Catedráticos de la disciplina/-as afectadas. Los profesores numerarios del Departamento propondrían un candidato a Director de entre los catedráticos de dichas disciplinas, propuesta que se elevaría al Rector a través de la Junta de Facultad. El cargo de Director de Departamento tendría una duración de tres años, pudiendo ser reelegido.

El Consejo de Departamento lo formarían los catedráticos, profesores agregados y profesores adjuntos numerarios, así como representantes del resto del profesorado y de los alumnos, según el Reglamento propio de la Facultad en que estuviera integrado el Departamento. El Director de Departamento tendría las funciones de convocar y presidir las reuniones del Consejo; ejecutar las previsiones de presupuesto y ordenar el gasto en la forma y medida en que le hubiese sido conferida tal función por delegación del Rector; de organizar, coordinar y supervisar la ejecución de los planes de docencia e investigación establecidos por el Consejo; de asumir la representación del Departamento ante los organismos superiores, y de realizar todas las demás funciones reservadas al Consejo.

El Consejo de Departamento tendría como funciones confeccionar el proyecto de presupuesto del Departamento; determinar los planes de docencia e investigación; proponer la creación de puestos de trabajo y la contratación de personal; aprobar la Memoria de actividades desarrolladas durante el curso académico; asistir y asesorar al Director del Departamento y, en caso de ausencia del mismo, proponer un Director interino entre los catedráticos o, en su defecto, profesores Agregados. La Secretaría administrativa del Departamento tendría a su cargo la tramitación de las propuestas que éste formulase, la ordenación y archivo de los documentos y la custodia de las actas y fondos bibliográficos de que el Departamento dispusiera, la confección de cuantos escritos de carácter administrativo o científico le fueran encomendados con autorización del Director, y la jefatura inmediata del personal auxiliar y subalterno del Departamento, así como la vigilancia de sus servicios.

Asimismo, la Universidad Complutense podría establecer Institutos Universitarios conforme al artículo 73 de la LGE, cuya regulación se recogía en los artículos 14 a 17 del propio estatuto provisional. Podrían ser institutos apoyados en Departamentos de varias facultades, funcionando a través de dichas unidades departamentales para el desarrollo de funciones de especialización e investigación, con medios personales y materiales propios, y podrían colaborar con los Departamentos de las distintas Facultades, así como con otros Centros de docencia e investigación. También podrían ser institutos

apoyados en varios Departamentos de la misma Facultad para impartir enseñanzas especializadas.

Su creación la propondría la Junta de Gobierno, previa consulta a la Facultad o Facultades interesadas, oído el Patronato y sometida a la aprobación del MEC. Iría acompañada de un Reglamento que regularía lo referente a organización y funcionamiento. Los apartados siguientes recogían la normativa relativa a Colegios Universitarios (artículos 18 y 19), Escuelas Universitarias y Escuelas de Formación Profesional de Tercer Grado (del artículo 20 al 23). Los artículos 24 a 30 recogían lo relativo a las Facultades.

Éstas se configuraban como “Centros de ordenación de las enseñanzas conducentes a la colación de grados académicos de todos y cada uno de los ciclos de la docencia universitaria sobre una determinada rama del saber”. La Universidad Complutense, inicialmente, contaría con las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia, Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, y Veterinaria. Todas ellas orgánicas, según el apartado 2º del artículo 72 de la Ley General de Educación, ya que tenían como competencia, además de las funciones ordenadoras de las enseñanzas, la de administración de los Departamentos en ellas integrados.

Las Facultades se regirían por Reglamentos de régimen interno, que deberían ser elaborados en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de los Estatutos, que deberían ser aprobados por la Junta de Gobierno, oído el Patronato Universitario, donde se recogería y adaptaría a sus circunstancias las disposiciones de la LGE y de los Estatutos de la Universidad en todo lo preceptivo. La Junta de Gobierno de la Universidad Complutense, oído el Patronato, podría proponer la creación de nuevas Facultades, siempre que el número de alumnos, la necesidad de impartir nuevas enseñanzas o la conveniencia de las regiones abarcadas por su distrito así lo aconsejasen.

El personal de las Facultades lo formaban el personal docente e investigador, el alumnado, el personal administrativo y el personal subalterno. El personal docente e investigador lo compondrían los catedráticos numerarios,

los profesores agregados, los profesores adjuntos, los profesores ayudantes, los profesores contratados, los investigadores y los becarios de iniciación a la investigación. Los profesores jubilados de la Facultad figurarían en calidad de profesores eméritos de los Departamentos y podrían formar parte de sus Consejos.

El título III recogía la enumeración, estructura y competencias de los órganos de gobierno, así como el procedimiento de elección o designación de sus titulares. Los órganos de representación, gobierno y administración serían el Rector, los Vicerrectores, el Claustro general, la Junta de Gobierno, las Comisiones Universitarias, el Patronato, el Secretario General, el Gerente general y el Vicegerente. Podría haber también un Censor de Cuentas nombrado por el Patronato, sin perjuicio de la existencia de un Interventor Delegado de Hacienda.

El Rector seguía siendo la primera autoridad en la Universidad, representante de la misma en todos los órdenes, Presidente de la Junta de Gobierno y del Claustro general. Gozaba de tratamiento y honores y ostentaba la condición de Procurador en Cortes. Sería nombrado, mediante decreto del Ministerio, de entre los catedráticos numerarios de la Universidad. El sistema de elección del Rector consistía en que cada Claustro de Facultad elegía dos catedráticos numerarios, uno de la propia Facultad y otro de otra Facultad distinta, y cada miembro del Claustro general de la Universidad votaba a tres candidatos en sufragio nominal directo y secreto. La mesa electoral en las facultades estaría integrada por el Decano como Presidente, el miembro más antiguo de cada uno de los estamentos profesoriales integrantes del Claustro y un representante de los alumnos. La Mesa de cada Facultad comunicaba el acta a la Junta de Gobierno y ésta al Ministerio de Educación y Ciencia, recogiendo el nombre de los candidatos y los votos obtenidos. Todos los miembros del Claustro tenían el deber de votar, no siendo válida la votación si no participaban como mínimo las dos terceras partes de sus miembros. El tiempo de mandato del Rector eran tres años, siendo reelegible.

Sus funciones consistían en presidir los actos universitarios, autorizar los actos de carácter extraordinario, informar -oída la Junta de Gobierno- los nombramientos de Decanos, Directores de Institutos Universitarios, Escuelas Universitarias y de Formación Profesional de tercer grado, proponer nombramientos de Vicerrectores, nombrar los Directores de los Departamentos y de los Colegios Universitarios y los Vicedecanos, velar por el mantenimiento del orden y la disciplina académica dentro del recinto universitario, expedir en nombre de la Universidad las certificaciones de estudios, representar judicial y administrativamente a su Universidad, suspender en su caso los acuerdos del Patronato –según artículo 83, párrafo 3 de la LGE-, nombrar el Secretario general y el Vicegerente general, así como informar el nombramiento del Gerente general, resolver en alzada los recursos contra las resoluciones de los órganos unipersonales de la Universidad, ordenar los gastos, supervisar la vida económica y administrativa de la Universidad y ejercer cuantas funciones fuesen necesarias y no estuvieran atribuidas a otros órganos. El Rector podría solicitar dispensa de la función docente durante el ejercicio de su cargo.

Habría cuatro Vicerrectores, con competencias específicas y delegadas del Rector y con capacidad de sustituirle en caso de vacante, por orden de antigüedad. Los Vicerrectores representarían los distintos tipos de Facultades, y serían designados por el Ministerio a propuesta del Rector, una vez oída la Junta de Gobierno, entre catedráticos numerarios de universidad. El Claustro General estaría integrado en un 50% por todos los catedráticos y profesores agregados de Universidad (excluidos el Rector, los Vicerrectores y el Secretario general, que formaban parte del Claustro en razón de sus cargos) y en otro 50% por representaciones de profesores adjuntos (25%), ayudantes (10%) y alumnos (15%), en representación corporativa. La representación claustral era personal e intransferible. El Claustro General representaba corporativamente a la Universidad en las solemnidades académicas, formulaba la opinión en la Universidad cuando fuera consultado por el Rector, y ejercía cuantas funciones le fueran atribuidas por los Estatutos. En las solemnidades académicas, a efectos de asistencia a los actos, también se consideraban miembros del Claustro los profesores jubilados y los Doctores.

La Junta de Gobierno estaba compuesta por el Rector -su presidente-, los Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos en función delegada del Decano, el Director del Instituto de Ciencias de la Educación, tres representantes de alumnos elegidos por éstos, y el Secretario General de la Universidad, que actuaría como fedatario. Cuando las circunstancias lo aconsejasen podrían asistir también con voz y voto, convocados por el Rector, el Censor de Cuentas, el Gerente General, un representante de las Escuelas Universitarias y uno de las Escuelas de Formación Profesional de tercer grado. Serían funciones de la Junta de Gobierno asistir y asesorar al Rector, aprobar el proyecto de presupuesto general universitario, conceder medallas de la Universidad, ordenar la incoación de expedientes disciplinarios, informar sobre el nombramiento y cese del Secretario general, proponer junto con el Patronato Universitario los miembros de libre designación para la constitución del mismo e informar las propuestas para la constitución del Patronato, proponer, en su caso, la aprobación de planes de estudio al Ministerio, asesorar al Rector sobre la creación de los Departamentos propuestos por las Facultades, proponer la creación de Institutos Universitarios, aprobar los contratos o conciertos con otras entidades públicas o privadas y los convenios con Colegios Universitarios y Colegios Mayores que no fueran de creación directa de la Universidad, conocer de los planes de investigación en la forma prevista en los propios Estatutos, autorizar el desempeño de funciones representativas de la Universidad por parte del profesorado fuera del ámbito universitario, elaborar el informe sobre las propuestas de los Claustros de Facultades para la designación de Rector, y cuantas funciones le fueran atribuidas por los propios Estatutos.

Se constituirían, además, las siguientes Comisiones Universitarias, siempre bajo la presidencia del Rector o Vicerrector delegado: Comisión de Planes de Estudios y Convalidaciones, de Investigación Científica, de Relaciones Internacionales, de Actividades Culturales y Extensión Universitaria, de Actividades Deportivas, de Ediciones y Publicaciones, de Asistencia a la Comunidad Universitaria, Comisión Económica, de Personal, de Admisión y Régimen de Alumnos, y de Obras, Conservación e Instalaciones. Estas Comisiones estarían integradas por el número de miembros que determinase la

Junta de Gobierno, debiendo figurar una representación del personal administrativo y subalterno en la forma que reglamentariamente se estableciera. Habría representación del alumnado en las siguientes comisiones: en la de Planes de estudios y Convalidaciones, un representante; en la de Actividades Culturales, tres; en la de Actividades Deportivas, tres; en la de Investigación Científica, uno; en la de Relaciones Internacionales, tres; en la de Ediciones y Publicaciones, uno; en la de Personal, uno y en la de Obras, conservación e instalaciones, uno. Todos los representantes estarían elegidos por sus compañeros y su representación sería corporativa.

El Patronato Universitario era el órgano de conexión entre la sociedad y la universidad. La organización y funcionamiento del Patronato se regiría por lo previsto en el artículo 83 de la Ley General de Educación. Como ya recogía la Ley, estaría compuesto por veinte miembros nombrados por el Ministerio de Educación y Ciencia. La Junta de Gobierno elevaría la propuesta para la designación de un representante elegido por cada uno de estos organismos y entidades: Reales Academias integradas en el Instituto de España; Diputaciones Provinciales del Distrito universitario; Ayuntamientos de las capitales del Distrito; Procuradores en Cortes de representación familiar por el Distrito; Organización Sindical; profesorado de los centros docentes del Distrito; Asociaciones de padres de alumnos, Asociaciones de alumnos y Asociaciones de ex alumnos de la Universidad y Colegios Profesionales en los que se exigiera el título de Licenciado, eligiendo dos representantes cada uno de ellos. El resto, hasta veinte, estaría formado por personas privadas y representantes de entidades públicas, propuestos por la Junta de Gobierno y el Patronato, de entre quienes de algún modo hubieran favorecido a la Universidad o colaborado con ella. Los miembros del Patronato se renovarían cada cuatro años por mitad. El Presidente sería nombrado por el Ministro de Educación y Ciencia a propuesta interna del propio Patronato.

Rector y Gerente podrían asistir a las sesiones con voz y voto cuando se requiriera a juicio del Rector. Si asistiera el Rector, presidiría la sesión. El Secretario General actuaría como Secretario del Patronato, asistiendo con voz, pero sin voto, a sus sesiones. Serían funciones del Patronato emitir su parecer

en todos los nombramientos en que debiera ser oído; informar los planes de actuación general y los programas o proyectos de obras, instalaciones o servicios; informar los Reglamentos de las Facultades; informar sobre propuesta y modificación de los Estatutos de la Universidad; informar sobre el Presupuesto General Universitario y sobre las cuentas de liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y de administración del patrimonio de la Universidad; proponer al Ministerio el nombramiento y cese de las Comisiones de Patronato de las Facultades y la designación de los miembros de cada una de ellas; conocer de las donaciones que se hicieran a la Universidad y de las herencias y legados, así como supervisar el cumplimiento de los fines a que se hubieran afectado; estudiar y proponer iniciativas encaminadas a la proyección social de la Universidad, al mejor cumplimiento de sus fines y a integrar en la sociedad a los graduados universitarios; promover y estimular la colaboración y aportaciones de la iniciativa privada y de las entidades públicas para la dotación económica de Universidad y el mejor desenvolvimiento de sus fines y servicios; asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad sobre la administración de su patrimonio; recoger y encauzar las aspiraciones sociales respecto a la Universidad; fomentar, coordinar y desarrollar toda clase de iniciativas en relación con las instituciones universitarias, y cualquier otra función que le atribuyeran la Ley o los Estatutos.

El cargo de Secretario general recaería en un catedrático numerario de la Universidad, nombrado por el Rector una vez oída la Junta de Gobierno. Entre sus funciones estaban la asistencia a las sesiones del Claustro general y Junta de Gobierno con voz y voto, y como fedatario, y a las del Patronato como fedatario pero sin voto; certificar los acuerdos de dichos órganos colegiados y custodiar los libros de actas y el sello de la Universidad; la organización de los actos solemnes universitarios y la conservación y cumplimiento del protocolo y el ceremonial; extender las actas de toma de posesión del personal docente; intervenir en los sorteos para la constitución de las Comisiones disciplinarias establecidas en los propios Estatutos y desempeñar las funciones que en él delegasen el Rector y la Junta de Gobierno.¹⁸¹

¹⁸¹ Llama la atención que obvia funciones de carácter administrativo como la superior dirección del personal administrativo y subalterno y la responsabilidad sobre el archivo, ni siquiera el administrativo.

Al Gerente general lo nombraría libremente el Ministerio de Educación y Ciencia de entre titulados universitarios, según lo establecido en el artículo 79 de la Ley General de Educación, de conformidad con el Rector y oído el Patronato. Serían funciones suyas, bajo la inmediata dependencia del Rector, la gestión económica y administrativa de la Universidad, la jefatura del personal no docente y la ejecución de los acuerdos del Patronato en materia administrativa o económica, y cuantas le fueran delegadas por la autoridad académica o le fueran atribuidas por los propios Estatutos. El cargo sería incompatible con cualquier tipo de actividad docente. Existiría también un cargo de Vicegerente, designado por el Rector de acuerdo con el Gerente, cuyas funciones serían las de auxiliar al Gerente, sustituirle y ejercer las facultades ejecutivas que en él delegue.

El título IV recogía lo relativo a los órganos de gobierno de las Facultades. Cada Facultad estaría regida por un Decano, al que correspondería la dirección de la vida académica y la supervisión económica y administrativa de la Facultad, la presidencia de los órganos colegiados, así como preparar y ejecutar sus acuerdos y cuantas funciones delegara el Rector o le atribuyeran los propios Estatutos. El periodo de mandato sería de tres años, pudiendo ser reelegido. Durante ese tiempo podría solicitar dispensa de docencia. Los Vicedecanos los nombraría el Rector a propuesta del Decano. Su función sería sustituir al Decano y funciones delegadas por éste. Podrían crearse, según la Facultad, dos o más Vicedecanatos a propuesta de la Junta de Facultad correspondiente. El Secretario de Facultad lo nombraría el Rector a propuesta del Decano, entre profesores numerarios. Entre sus funciones estaría la de asistir a las sesiones del Claustro, Junta de Facultad y Comisión de Patronato y dar fe de sus acuerdos, custodiar los libros de actas, expedir certificados y organizar las ceremonias universitarias de su Facultad. La gestión económico-administrativa de cada Facultad estaría encomendada a un Administrador o Gerente, que desempeñaría funciones delegadas del Gerente general.

El Claustro de la Facultad estaría constituido en un 50% por todos los catedráticos y profesores agregados de la misma (excluyendo al Decano,

Vicedecano y Secretario que forman parte del Claustro por su cargo) y en otro 50% por representación de profesores adjuntos (25%), ayudantes (10%) y alumnos (15%)¹⁸². La representación claustral sería personal e intransferible, siendo obligatoria la asistencia a las sesiones. En caso de enfermedad o ausencia justificada se podría emitir el voto por carta, con las suficientes garantías de identificación. Entre las funciones del Claustro de la Facultad estaría representar a la Facultad corporativamente, formular la opinión de la Facultad cuando fuere consultada por el Decano, elegir los nombres de los catedráticos numerarios para la designación del Rector, proponer los nombramientos de “Doctores Honoris Causa”, y formular propuesta a la Junta de Facultad para nombramiento de Decano de los tres candidatos más votados. El Claustro se reuniría a convocatoria del Decano, o cuando lo pidieran dos terceras partes de sus componentes, mediante escrito y especificando los temas a tratar. El Secretario de la Facultad actuaría como Secretario del Claustro, con voz y voto.

La Junta de Facultad estaría formada por el Decano, que la preside, el Vicedecano o Vicedecanos y el Secretario, que no entrarían en el cómputo de porcentajes para su composición; los Directores de los Departamentos; Directores de Institutos; Presidentes de Comisiones que no fueran Directores de Departamento ni de Institutos Universitarios y Presidentes de Sección no incluidos en los anteriores cargos, constituyendo un 75% de la Junta. El otro 25% estará integrado por una representación de profesores adjuntos (9%), ayudantes (7%) y alumnos de la Facultad (9%). El Decano podría convocar además a otros miembros y personal del centro cuando los asuntos lo requirieran, contando entonces con voz y voto.

La Junta de Facultad se reuniría al menos cuatro veces durante el periodo lectivo, y tendría como funciones informar sobre la terna para el nombramiento de Decano propuesta por el Claustro de la Facultad, propuesta que elevaría el Decano al Rector junto con el informe de la Comisión de

¹⁸² De nuevo se establecía la representación del alumnado en los órganos de gobierno de la Facultad. En Claustro (15%), en Junta de Facultad (9%) sin que se precisara explícitamente la representación en las respectivas Comisiones de Facultad.

Patronato; asistir al Decano en la ordenación académica y supervisión de la vida económica y administrativa de la Facultad y, en general, las funciones que se le atribuyeran por el Reglamento de Facultad. En cada Facultad existirían Comisiones de trabajo constituidas con arreglo al Reglamento del centro, y también existiría una Comisión de Patronato que desempeñaría en la Facultad funciones análogas al Patronato Universitario.

El título V recogía los criterios para la adopción y aplicación de los planes de estudio e investigación. Los planes de estudio serían elaborados y revisados por la correspondiente Comisión de la Facultad en colaboración con las Secciones y Departamentos a fin de someterlos a la Junta de Facultad para informe y envío a la Comisión Universitaria de Planes de Estudios, quien a su vez los elevaría a la Junta de Gobierno para proponer su aprobación, si procediere, al Ministerio de Educación y Ciencia.¹⁸³ Los planes de investigación serían elaborados y revisados, en colaboración con los Departamentos, por la correspondiente Comisión de la Facultad, quien los enviaría a la Comisión Universitaria de Investigación Científica, que podría hacer las indicaciones y sugerencias que estimara oportuno para la coordinación de los planes. Éstos, serían enviados a la Junta de Gobierno y Patronato Universitario para su conocimiento y efectos que procedieran conforme a Estatutos.

El título VI abordaba el tema del profesorado, sus clases y nombramiento. El profesorado de la Universidad Complutense estaría formado por funcionarios pertenecientes a los cuerpos de Catedráticos numerarios, Profesores Agregados y Profesores Adjuntos de Universidad; Catedráticos y Profesores Agregados de Escuelas Universitarias, y Profesores ayudantes y otros profesores contratados. Se podrían nombrar colaboradores de cátedra con carácter honorífico, tal y como autorizaba la LGE, que además de obtener formación, tendrían cometidos de ayuda a la docencia y en la investigación que el titular de la cátedra les asignara. Las funciones del profesorado universitario se desarrollarían exclusivamente en el ámbito de esta Universidad. Cualquier

¹⁸³ El artículo 71 y el siguiente, el 72, decretaba de hecho una cierta autonomía en cuanto a la elaboración de los planes de estudio e investigación, que quedaban a cargo de sendas Comisiones de Facultad creadas al efecto, siempre con la colaboración de las Secciones y los Departamentos.

otra función que como profesor universitario le asignara la administración, habría de ser autorizada en cada caso por la Junta de Gobierno, determinando las condiciones.

La adscripción a una plaza vacante en su categoría de los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios se haría según los artículos 114 y siguientes de la Ley General de Educación y las normas que la desarrollaran. La selección se llevaría a cabo mediante un Jurado en el que participarían profesores numerarios de Universidad, propuestos por la Junta de Facultad correspondiente y aprobados por la Junta de Gobierno. Se procuraría la participación de Catedráticos de la misma especialidad, aunque fueran de distinta Universidad y la intervención de Profesores de los diferentes cuerpos docentes.

También podría haber profesores asociados, no pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, que se podrían contratar por periodos determinados para atender campos de especialización restringida, cuando así lo acordara la Junta de Facultad por mayoría. En esos casos, los Decanos, oídos la Junta de Facultad y la Gerencia, fijarían el contenido de los contratos. Según la función que se les encomendara, los profesores contratados podrían ser asimilados, a efectos exclusivamente académicos, a Catedráticos numerarios, Agregados o Adjuntos. Para los Profesores contratados de excepcional prestigio, cuyos servicios se considerasen necesarios de modo permanente, podría establecerse contratos por tiempo indefinido que deberían ser aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia y en ningún caso implicarían la adquisición de la condición de funcionario público.

El título VII era el relativo a los alumnos, sus clases y admisión. Los alumnos de la Universidad Complutense podrían ser oficiales, autorizados (a matricularse en más de un curso) y libres, quienes al finalizar el curso estarían obligados a realizar pruebas de carácter teórico y práctico. Cada Facultad comunicaría en febrero de cada año a la Junta de Gobierno el número de alumnos que podían ingresar, y en función de dicha información, la Junta fijaría

el plan general de admisión en el mes de abril.¹⁸⁴ Del 1 al 30 de junio se solicitaría la admisión por parte de los alumnos. Los alumnos que no fueran admitidos podrían matricularse como alumnos libres, sin derecho a asistir a clases teóricas ni prácticas en la Facultad o solicitar el traslado a otra Universidad. La Junta de Gobierno aprobaría en cualquier caso las normas de admisión.

En cuanto a la representación estudiantil, en el primer mes del curso los alumnos celebrarían elecciones mediante sufragio secreto y obligatorio para elegir tres representantes. Se formarían Consejos de curso con los representantes elegidos en cada grupo. Entre los consejeros de curso serían designados por sus compañeros los que hubieran de representarles en los Consejos de Departamento y ante los profesores de cada asignatura (delegados de curso). En la primera quincena del segundo mes del curso académico tendrían lugar elecciones, para que los consejeros de todos los cursos de cada Facultad designasen a quienes les habrían de representar en cada órgano. En esa misma quincena, los representantes de alumnos en las Juntas de Facultad elegirían a quienes les representarían en los órganos generales de la Universidad Complutense. Las elecciones se celebrarían en presencia de un profesor universitario designado por la autoridad académica correspondiente, quien fijaría el lugar, día y hora. Todos los elementos del proceso no previstos en el Estatuto estarían regulados en los Reglamentos de las Facultades.

El título VIII estaba dedicado a la disciplina académica. Hasta la aprobación de un nuevo Reglamento de Disciplina Académica, seguía vigente el de 1954. La resolución de las propuestas de sanción correspondería a la Junta de Gobierno o Juntas de Facultad, según la gravedad de los casos.

El título IX recogía lo relacionado con órganos y servicios de asistencia. La Junta de Gobierno, a propuesta del Patronato Universitario y con el informe, en su caso, de la correspondiente Comisión, regularía los Colegios Mayores;

¹⁸⁴ Ello suponía aceptación de “*numerus clausus*”, el establecimiento por parte de las respectivas Facultades de las cuotas de alumnos que eran capaces de asumir.

las viviendas para el personal universitario; los transportes; las actividades culturales; las actividades deportivas; las enfermerías y dispensarios; los bares y comedores y las cooperativas para la venta de libros, material escolar y deportivo. Existiría un Consejo de Colegios Mayores presidido por el Rector (o delegación) e integrado por los Directores de los Colegios de fundación directa universitaria, dos representantes de los restantes Colegios y el Inspector de los Colegios Mayores del distrito, nombrado por el Rector una vez oído el Patronato y la Junta de Gobierno. El nombramiento de aquél recaería en un catedrático o agregado. Entre sus funciones estaría la de emitir cuantos informes fueran solicitados por el Rector u otros órganos o autoridades académicas a través del Rectorado, sobre la constitución y actuación de los Colegios; supervisión de sus actividades; formulación de iniciativas y en general cuantas funciones le delegase el Rector. Según el artículo 101, apartado 3º, de la Ley General de Educación, la Junta de Gobierno designaría los profesores que deberían formar parte del Consejo Asesor de cada Colegio Mayor, oído el Consejo.

El título X recogía lo relativo al régimen económico y presupuestario. Los órganos para la gestión económica eran el Rector, el Gerente, la Junta de Gobierno y la Comisión económica, un órgano de asistencia al Rector y a la Junta de Gobierno, que estaba compuesta por el propio Rector, como presidente, el Gerente y el Censor de Cuentas. El régimen de autorización de gastos en la Complutense se ajustaría a las disposiciones de carácter general para todas las Universidades autónomas estatales.

La actividad económica y financiera de la UCM quedaba sometida a los presupuestos anuales, según lo fijado para las entidades estatales autónomas, hasta que se dictaran las normas específicas indicadas en el párrafo segundo del artículo primero de los propios Estatutos. El presupuesto de la Universidad implicaría, más allá de ingresos y gastos, la valoración económica del Plan de actividades de todas las Facultades, Institutos, Escuelas, Colegios y demás Centros y Servicios integrantes de la Universidad, durante su periodo de vigencia. La Gerencia remitiría a todos los centros mencionados anteriormente las instrucciones aprobadas por el Rector, a propuesta de la Comisión

económica, para la elaboración de los anteproyectos de presupuestos de gastos por cada uno de los expresados Centros, para el siguiente ejercicio económico.

Recibidos los anteproyectos, se procedería a su estudio, coordinación y ajuste por la Gerencia, que elaboraría a su vez el presupuesto de ingresos de la Universidad, que junto al de gasto, aprobado por la Comisión económica e informado por el Patronato Universitario, se sometería al acuerdo de la Junta de Gobierno para la tramitación prevista en el apartado cuarto del artículo 65 de la Ley General de Educación. En el presupuesto de ingresos figurarían los recursos comprendidos en el artículo 65 de la Ley General de Educación. Igualmente la concesión de suplementos se ajustaría también a lo recogido en el mismo artículo. En el presupuesto de gastos podrían existir créditos ampliables siempre que fueran autorizados por el gobierno al aprobar el presupuesto de la Universidad. El remanente de crédito procedente de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior se consideraría como ingreso del presupuesto vigente, destinándose a financiar los suplementos de crédito y créditos extraordinarios, en la parte excedente de la previsión del remanente que figura en el propio presupuesto de ingresos en curso. La Gerencia solicitaría trimestralmente del Ministerio el libramiento de las subvenciones que figurasen en los Presupuestos Generales del Estado a favor de la Universidad Complutense.

Hasta que se dictaran las normas específicas a las que aludía el párrafo segundo del artículo primero de los propios Estatutos, la contabilidad de la Universidad se llevaría conforme a las directrices contenidas en los artículos 66 y 67 de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, y se organizaría de modo que facilitara la organización analítica del coste y rendimiento de los servicios de la misma. Las cuentas de ejecución del presupuesto las rendiría la Gerencia al Rector, a la Junta de Gobierno y al Patronato, por periodos de doce meses, y oída la Comisión económica. Las cuentas anuales y la información prescrita en el apartado quinto del artículo 65 de la Ley General de Educación, se rendirían al Gobierno y al Tribunal de Cuentas y, una vez aprobadas, se publicarían.

La Universidad Complutense de Madrid, por medio de sus Institutos, Departamentos o cátedras podría prestar servicios o llevar a cabo convenios de investigación con entidades públicas o privadas. Éstos deberían estar aprobados por la Junta de Gobierno, dándose conocimiento al Patronato Universitario. Las patentes, modelos de utilidad o diversos reglamentos de la propiedad intelectual, consecuencia de la investigación o trabajos realizados en los diversos Centros universitarios, se harían a nombre de la Universidad Complutense, pero de tal modo que quedasen también beneficiados sus autores.

En las disposiciones adicionales y transitorias se establecía que la Junta de Gobierno adoptaría las medidas precisas para la implantación gradual de los Estatutos, cuya duración máxima sería de tres años. Para la elaboración de los Estatutos definitivos se abriría un periodo de información pública a partir del primer año de la publicación de los provisionales, a cuyo término se elaboraría, por una Comisión representativa, el proyecto de Estatutos definitivos. Los Estatutos provisionales podrían ser alterados durante su vigencia, a instancia de la Junta de Gobierno de la Universidad o del Patronato, y en cualquier caso con informe del Consejo de Rectores.

Los nombramientos hechos de acuerdo con estos Estatutos provisionales caducarían en el momento de entrada en vigor de los Estatutos definitivos, salvo disposición de estos en contra.

Pero en 1972, haciendo uso de la discrecionalidad que el artículo 67 de la LGE otorgaba al gobierno y que le permitía suspender el Estatuto de una Universidad cuando se dieran graves desórdenes, se publicó el Decreto 2056 haciendo efectiva esa suspensión, en las dos universidades de Madrid.¹⁸⁵ Se

¹⁸⁵ Decreto 2056/1972 de 26 de julio por el que se aplica el artículo 67 de la Ley General de Educación a los Centros universitarios que se indican (BOE 28). La suspensión de los Estatutos provisionales se decretaba después del potente movimiento social que se había generado en contra de la Ley General de Educación. Se convocaron huelgas sucesivas a partir del 14 de febrero (al día siguiente de que el ministro Villar Palasí informase en las Cortes sobre su labor ministerial) y, finalmente, por la Coordinadora de Universidades se convocó a la huelga general indefinida, huelgas todas ellas en las que los alumnos contarían con el apoyo del movimiento obrero.

Se trataba de impedir por todos los medios la imposición de la Ley. La puesta en marcha de la Ley fue aplazada, y cayó el gabinete que la había impulsado. Para ilustrar los sucesos acaecidos en esos

ponía de manifiesto que las circunstancias que fundamentaban tal medida se habían producido en el curso 1971-72, con especial intensidad en determinados Centros, por lo que procedía aplicarles dicho artículo de la Ley. Se suspendía por tanto, por el periodo de un año, el Estatuto provisional de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, por lo que a partir de ese momento se regirían por las estrictas normas que ahora se indicaban.

Serían así derechos básicos de profesores y alumnos impartir y recibir enseñanza en las condiciones indispensables para la docencia, el normal funcionamiento de las instituciones docentes y cotidianas de la Universidad, y el mantenimiento del orden académico que garantizase el libre ejercicio de las tareas docentes e investigadoras. Serían obligaciones específicas del profesorado, entre otras, respetar y acatar a las autoridades académicas, colaborando en todo momento con el desarrollo de la vida universitaria y el mantenimiento del orden y disciplina académicos. Deberían velar por que la conducta en los Centros fuera la propia de un centro universitario, impidiendo las actividades que fueran en contra de la vida universitaria, el orden y la disciplina. En cualquier caso deberían cumplir las órdenes de sus superiores, sin perjuicio de poder exponer personalmente y con el debido respeto los inconvenientes que, a su juicio, plantease lo ordenado. Cuando un profesor se negase a acatar las órdenes de Rector, Vicerrectores, Decano o Vicedecanos, podría ser suspendido en sus funciones. El Rector tendría la potestad de decidir en estos casos, con la posterior ratificación del Director General de Universidades e Investigación o el propio Ministro de Educación y Ciencia.

El nombramiento y cese del Rector se haría mediante Decreto, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, entre catedráticos numerarios de Universidad, oídos la Junta de Gobierno y el Patronato de la Universidad. Los Vicerrectores serían designados por el Ministro de Educación y Ciencia a propuesta del Rector, entre catedráticos numerarios de la propia Universidad. El Decano ejercería la autoridad delegada del Rector, por lo que podría adoptar cuantas medidas fueran necesarias para garantizar el normal funcionamiento

momentos de efervescencia estudiantil resultan altamente ilustrativos los capítulos desarrollados por HERNÁNDEZ SANDOICA, E. en la obra colectiva *Estudiantes contra Franco*, citada anteriormente.

de la Facultad. Serían nombrados, los decanos, entre catedráticos numerarios por el Ministerio y a propuesta del Rector, oída la Comisión de Gobierno de la Facultad y la Comisión de Patronato, en su caso. Los Vicedecanos estarían bajo la autoridad del Decano, y serían nombrados por el Rector a propuesta del Decano.

La Junta de Gobierno era el órgano asesor del Rector y se reuniría bajo su presencia cuantas veces fuese convocada. Serían miembros de la misma el Rector, los Vicerrectores, los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Técnicas Superiores, el Director del Instituto de Ciencias de la Educación y el Secretario General de la Universidad. El Rector podría convocar también al Gerente y a los Directores de Escuelas y Colegios universitarios si lo estimara oportuno.¹⁸⁶ El Secretario General de la Universidad sería nombrado por el Ministro a propuesta del Rector, entre profesores de la propia Universidad.

Las Facultades serían regidas por su Decano, asistido por la Comisión de Gobierno, a su vez integrada por los Vicedecanos y el Secretario de la misma. La Comisión de Gobierno se reuniría bajo la presidencia del Decano cuantas veces fuera convocada por el Decano, quien también podría convocar a los Directores de Departamento. Al Secretario de la Facultad lo nombraría el Rector a propuesta del Decano, entre profesores de la misma.

El Gerente sería nombrado libremente por el Ministro de Educación entre titulados universitarios, de conformidad con el Rector y oído el Patronato. Los Directores de Escuelas Universitarias estarían asistidos en su gestión por una Comisión de gobierno integrada por catedráticos designados por el Rector, en un número no superior a seis. Serían nombrados por el Ministerio a propuesta del Rector de entre sus catedráticos numerarios, oídas la Comisión de Gobierno de la Escuela y la Comisión de Patronato.

A los Directores de los Colegios Mayores los nombraría el Rector, a propuesta en su caso de la entidad colaboradora, oídos la Junta de Gobierno y

¹⁸⁶ Se cortaba de raíz con cualquier tipo de representación estudiantil en Junta de Facultad, y el Rector recuperaba poderes omnímodos propios del primer franquismo.

el Patronato de la Universidad. Su cese podría ser dispuesto por el Rector sin más trámite. El Ministerio de Educación y Ciencia podría disponer que las enseñanzas correspondientes a las distintas Facultades pudieran impartirse en Centros situados fuera de su propio edificio o localidad.¹⁸⁷ Los Departamentos podrían ser reorganizados por el Rector según las necesidades y fines a que respondía el Decreto, oído el Decano de la Facultad y con autorización del Director general de Universidades e Investigación. La designación y cese de Director de Departamento correspondería también al Rector, oído el Decano de la Facultad, de entre los catedráticos numerarios.

El Director General de Universidades e Investigación, previo informe del Rector, podría contratar con carácter temporal, el profesorado no numerario que fuera preciso para atender la función docente. Cuando se produjeran circunstancias que así lo aconsejaran, se procedería por la Dirección General de Universidades e Investigación a la clausura temporal del Centro, quedando el profesorado en la situación administrativa que legalmente correspondiera. La Dirección General de Universidades e Investigación, oído el Rector, podría adscribir provisionalmente a dicho profesorado a otras tareas investigadoras, docentes o de cualquier índole que procedieran.¹⁸⁸

Según el artículo 126 de la Ley General de Educación, el derecho a ser alumno de un Centro estaría subordinado al acatamiento de la disciplina académica. El Rector, oído el Decano de la Facultad respectiva, negaría el ingreso y la matrícula oficial a quienes siguieran una conducta contraria a las obligaciones señaladas en el párrafo primero del citado artículo de la Ley. La denegación de la matrícula oficial llevaría aparejada automáticamente la prohibición de acceso al campus universitario y a sus instalaciones.¹⁸⁹ Igualmente, los profesores podrían disponer la expulsión del aula e incluso del Centro de cualquier alumno que perturbase la actividad académica, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, dando cuenta inmediata al

¹⁸⁷ Si las clases no fueran posibles en las Facultades debido a los disturbios, se abría la posibilidad de que pudieran impartirse fuera de ellas.

¹⁸⁸ Se podía clausurar un centro, se podían dar las clases fuera y se podían contratar profesores no numerarios para continuar con la función docente.

¹⁸⁹ Nueva figura de sanción no contemplada en el Reglamento de disciplina. Se podría decretar la expulsión instantánea.

Decano. Asimismo, Decanos y Rectores podrían disponer la expulsión en el acto, de los centros universitarios, de cualquier alumno que produjera alteraciones de orden académico, sin perjuicio de la posterior aplicación de las normas de disciplina.

El Consejo de Disciplina de la Universidad era el órgano encargado de velar por el mantenimiento de los derechos básicos señalados en el artículo segundo, correspondiéndole la función de salvaguardarlos, así como la de imponer las medidas y sanciones necesarias. Para ello se atendería a las disposiciones vigentes en la materia, salvo en cuanto al procedimiento, que se regiría por lo establecido por el decreto que nos ocupa. Tendría carácter de órgano permanente y estaría formado por tres profesores designados por el Rector. Sería Secretario, sin voz ni voto, el propio Secretario general de la Universidad. El Rector convocaría el Consejo de Disciplina tan pronto como tuviera noticia de un hecho que, a su juicio, pudiera merecer sanción. El procedimiento del Consejo de Disciplina sería verbal y sumario.¹⁹⁰ Reunido el Consejo de Disciplina se informaría del hecho en cuestión para poner en claro la verdad, de manera que, utilizando cuantos medios se considerase oportuno y previa citación y audiencia del interesado -si es que éste compareciere-, se adoptaría la decisión que en conciencia se estimase procedente.

La noticia de los hechos motivadores, facilitada por cualquier autoridad académica o universitaria o por los profesores en su función docente, tendría presunción de veracidad, salvo prueba en contra y siempre con audiencia del interesado.¹⁹¹ El Consejo de Disciplina sometería al Rector, dentro de las setenta y dos horas siguientes al inicio de la sesión, la decisión adoptada, y éste, en el plazo de veinticuatro horas desde el momento que recibiera dicha decisión, si procediera, habría de ratificarla. Una vez ratificada, la decisión sería inmediatamente ejecutoria y se notificaría al interesado o a su representante legal. El Consejo de Disciplina podría imponer como sanción la pérdida de una o más asignaturas, la pérdida del curso, la expulsión temporal de la

¹⁹⁰ Es decir, no habría que esperar a la constitución de ningún tipo de tribunal sancionador.

¹⁹¹ Es decir, no existía presunción de inocencia. El denunciado o sancionado era quien tenía que demostrar su inocencia.

Universidad -no pudiendo cursar estudios el sancionado, como alumno oficial, en ninguno de los centros del distrito universitario-, la expulsión definitiva de la Universidad, o la inhabilitación temporal para cursar estudios en cualquier Centro de enseñanza.

Continuarían vigentes las disposiciones complementarias de la LGE relativas al régimen económico y financiero de las Universidades. Quedarían en suspenso, en el ámbito que establece el artículo primero, la aplicación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opusieran a lo dispuesto en esta otra normativa, y se autorizaba al MEC para que dictara las disposiciones precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en este decreto que entraría en vigor al día siguiente de su publicación.

En el año 1973, más allá de la LGE y los Estatutos provisionales que se habían ido publicando, dada su suspensión y provisionalidad, el Decreto 2178/1973 regulaba los órganos de gobierno y representación de las Universidades.¹⁹² En él se aludía a que, si la Ley General de Educación había confirmado algunos de los órganos de gobierno tradicionales en las universidades españolas, al mismo tiempo había abierto cauces para que éstas establecieran otros nuevos, amparadas en su autonomía. Así, tras la experiencia adquirida de la redacción de los Estatutos provisionales, se pretendía establecer el marco normativo para, por una parte, dotar a la autoridad académica de medios apropiados de asistencia y ejecución y, por otra, hacer posible la participación eficaz de los estudiantes en la vida universitaria, *obviando cualquier tipo de asambleas excesivamente numerosas*

¹⁹² Decreto 2178/1973 de 17 de agosto, sobre órganos de gobierno y representación de las Universidades (BOE 20 septiembre). Recuérdese, no obstante que en el periodo comprendido entre la suspensión de los Estatutos provisionales en las Universidades no autónomas de Madrid y Barcelona, se habían ido dando normas de relevancia en el aspecto puramente docente.

En el año 1972 se habían dado directrices para la elaboración de planes de estudios, previos a establecer una verdadera autonomía docente. Se había procedido en 1973 a la reestructuración de las Facultades de Filosofía y Letras, desgajándolas en estudios de Filología, Filosofía y Educación, y Geografía e Historia independientes, división en parte generada por la propia especialización intrínseca de las materias y en parte también como una manera de atomizar las macro-Facultades de Filosofía y Letras, que eran las que presentaban una mayor masificación y por ello también eran de las más conflictivas.

Finalmente, también se había procedido a la reestructuración de los Departamentos, reformas todas ellas en las que nos detendremos en el apartado correspondiente.

*y faltas de agilidad para una colaboración efectiva.*¹⁹³ Según el legislador, todo ello estaba avalado por la propia Ley General de Educación en los artículos 56.1 y 64.1, que atribuían autonomía a las Universidades respecto a la adopción de sistemas peculiares de gobierno y administración.

El Rector, en sus funciones de gobierno, estaría asistido por una Comisión o Junta de Gobierno que, bajo su presidencia, se reuniría una vez al mes (excepto en agosto) y cuantas veces el Rector lo estimara conveniente. La convocatoria se haría con la antelación marcada en el Estatuto respectivo, pero por razones de urgencia el Rector podría convocarla en cualquier momento.¹⁹⁴ Aparte de las funciones atribuidas en el respectivo Estatuto, la Junta informaría sobre las cuestiones que le planteara el Rector. Serían miembros de la Comisión el Rector como presidente, los Vicerrectores, Decanos, Directores de Escuelas Técnicas Superiores, un Director de cada tipo de Escuela Universitaria designado por el Rector, y el Secretario general. Cuando los asuntos lo aconsejaran, se podría convocar al Gerente, Director del ICE o los distintos Jefes de Servicios. Podría funcionar en Pleno o en Comisiones.

En cada Universidad se constituiría una Junta de Asociaciones Estudiantiles, presidida por el Vicerrector encargado del Servicio de Estudios y Promoción Universitaria, en la cual estarían representadas por sus presidentes todas las asociaciones legalmente constituidas en la Universidad. La Junta de Asociaciones Estudiantiles sería el órgano de representación de éstas, cauce obligado para la tramitación de todos los asuntos de interés para el alumnado, debiendo informar preceptivamente sobre los proyectos de distribución de subvenciones para actividades artísticas, culturales o deportivas de los estudiantes, además de las funciones que le fueran asignadas en el respectivo

¹⁹³ Sin duda en esta pretensión tenía que ver la evolución que había ido tomando el movimiento estudiantil en algunas de sus vertientes, opuestas al margen de participación que se les otorgaba y partidarias de la acción directa y asamblearia, cuestión que inquietaba realmente a los gobiernos. De esta manera se intentaba reconducir la participación de los alumnos. Las reformas introducidas por el nuevo Ministro Julio Rodríguez Martínez iban en la línea de intentar recuperar el orden público, los estudiantes eran subversivos, “jaraneros y alborotadores”, estaban “envenenados de cuerpo y alma”..., por lo que había que recuperar las riendas del orden.

¹⁹⁴ De nuevo pesaban los acontecimientos vividos y, más allá de lo que se estableciese en los correspondientes Estatutos, el Rector se reservaba la potestad de convocatoria fuera de los plazos establecidos “por razones de urgencia”.

Estatuto. Debería reunirse una vez al mes, excepto en los meses de julio y agosto.

En cada Facultad o Escuela Técnica Superior, los Decanos o Directores estarían asistidos por una Junta de Jefes de Departamento que, presidida por aquellos, habría de reunirse una vez al mes en periodo lectivo y cuantas veces el Decano o Director lo estimasen pertinente. Le correspondería, además de otras funciones que pudieran asignarle los Estatutos, el examen de todas las cuestiones relativas a la docencia y la investigación, pudiendo asistir a las reuniones de esta Junta los Jefes de Departamento de otras Facultades que ejerciesen docencia en el Centro en que la Junta se reuniera. Cuando correspondiera proceder a la renovación del cargo de Decano o Director de Escuela Técnica Superior, el respectivo Rector haría una propuesta en terna al Ministerio de Educación y Ciencia, previa audiencia de la Junta de Jefes de Departamento y de la Comisión de Patronato.

Inmediatamente después, dos meses más tarde, otro Decreto regulaba la situación en que quedaban los Colegios Mayores.¹⁹⁵ Según el artículo 101 de la Ley General de Educación, se definía a los Colegios Mayores como “órganos de formación y convivencia educativa, integrados en la Universidad”. Una vez promulgada dicha Ley, se hacía necesario dictar una reglamentación que refundiera y adaptara la anterior normativa a las nuevas directrices¹⁹⁶. Dicho Decreto recogía la naturaleza y fines de los Colegios Mayores, la forma de creación y reconocimiento como tal, sus órganos de gobierno, la gestión económica y administrativa, la forma de ingreso y el estatuto del colegial, las tareas formativas impartidas por los Colegios, la pérdida de la condición de

¹⁹⁵ Decreto 2780/1973, de 19 de octubre, por el que se regulan los Colegios Mayores Universitarios (BOE 10 noviembre)

¹⁹⁶ Recordemos que la anterior normativa era la siguiente: Decreto de 19 de febrero de 1942 por el que se confirmaban y creaban diversos Colegios Mayores en las Universidades (BOE 9 marzo); Decreto de 21 de septiembre de 1942 por el que se organizaban los Colegios Mayores Universitarios (BOE 1 octubre); Orden de 3 de octubre de 1942 por la que se aplica el Decreto de 21 de septiembre anterior, por el que se organizan los Colegios Mayores Universitarios (BOE 9); Ley de 29 de julio de 1943 de Ordenación de la Universidad Española (BOE 31); Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se modifican los artículos 5º y 12º del de 21 de septiembre de 1942 referente a los Colegios Mayores Universitarios (BOE 24); Decreto de 26 de octubre de 1956, orgánico de Colegios Mayores (BOE 14 noviembre); Ley 24/1959 de 11 de mayo, sobre protección a los Colegios Mayores Universitarios (BOE 12) y finalmente, la Ley 14/1970, de 4 de agosto (de Jefatura del Estado), General de Educación y financiamiento de la reforma educativa (BOE 6).

Colegio Mayor, la promoción y ayuda a los Colegios Mayores por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, la creación de la Asesoría de Colegios Mayores dentro de la Dirección General de Universidades e Investigación, quiénes tendrían competencia para resolver cualquier recurso planteado en relación con los Colegios Mayores, y la creación en cada Universidad de la Comisión Consultiva de Colegios Mayores. En cualquier caso, los Colegios Mayores dejaban de ser una de las instituciones más genuinamente franquistas de control del alumnado, en el camino inexorable a convertirse en meras residencias de estudiantes, lo que sucedería finalmente tras la Ley de Reforma Universitaria del 83, si bien siempre tuteladas por el Estado a través de la Universidad.

Volviendo a los Estatutos, próximo a concluir el plazo asignado para la aprobación de los definitivos, y debido a los acontecimientos que se habían vivido y que lo habían hecho prácticamente imposible, en 1974 se elaboró un nuevo Decreto,¹⁹⁷ por el que se permitía la prórroga de los existentes. En el mismo se recogía que, próximo a expirar el periodo de vigencia de los Estatutos provisionales de las Universidades españolas, se autorizaba al Ministerio de Educación y Ciencia para que procediera a su prórroga, siempre que se aplicara el mecanismo que en ellos se preveía hasta que se procediera a la redacción y aprobación de los Estatutos definitivos en la forma que establecían las disposiciones vigentes. En relación con dicho Decreto, el mismo mes de abril de 1974 se publicó la Orden que prorrogaba los Estatutos provisionales de la Universidad Complutense.¹⁹⁸

Sin embargo la conflictividad estudiantil seguía siendo alta, por lo que aún en el mismo año de 1974 se publicaron dos decretos más, que regulaban

¹⁹⁷ Decreto 1054/1974 de 4 de abril, prorrogaba los Estatutos provisionales de las Universidades (BOE 24).

¹⁹⁸ Orden de 25 de abril siguiente, de 1974, que prorrogaba los Estatutos provisionales de la Universidad Complutense de Madrid aprobados por el Decreto 3857/1970, en la misma medida en que estaban vigentes en ese momento (BOE 20 de junio). En el caso de la Universidad Complutense, según se vio en los Estatutos provisionales, el plazo que se había establecido para la implantación gradual de los Estatutos era de tres años, transcurridos los cuales deberían haberse aprobado los definitivos.

la participación de los estudiantes en el ámbito universitario.¹⁹⁹ El primero regulaba provisionalmente la participación estudiantil y el segundo desarrollaba los aspectos recogidos por el primero. Aquél reconocía que el estudiante universitario tenía derecho a cauces adecuados para participar plenamente en la vida académica, tanto en los aspectos docentes como formativos, y que había de existir una representación estudiantil, base de la presencia estudiantil en los órganos corporativos de las Universidades, de diálogo con la autoridad académica y de la crítica constructiva. Esta representación había de ser “auténtica”, elegida con garantías de libertad e intervención de la mayoría del alumnado representado. Así la participación del alumnado podía ser mediante la representación regulada en este Decreto tanto como a través de las Asociaciones de Estudiantes (reguladas en el anterior, de 1968). Ello requería la elaboración de un sistema de participación con carácter provisional, base de la elaboración del definitivo ordenamiento jurídico de la participación universitaria.

Se elegirían representantes a nivel de curso, de Centro y de Universidad. Los representantes a nivel de curso serían elegidos por procedimiento directo, cada curso elegiría un Delegado, un Subdelegado y un número de Consejeros igual al 5% de alumnos oficiales matriculados, en cualquier caso, no superior a ocho. Para que las elecciones fueran válidas habrían de participar al menos el 50% de los alumnos oficiales matriculados y los candidatos habrían de obtener en la primera vuelta la mayoría absoluta de los votos emitidos. En la segunda vuelta sólo sería necesario el 25%.

Delegados y Subdelegados de Curso constituirían el Consejo del Centro, el cual elegiría entre sus componentes al Delegado y Subdelegado de Centro. Los Delegados y Subdelegados de Centro constituirían a su vez el Consejo de Universidad. Entre ellos se elegiría el Delegado y Subdelegado de Universidad. Para ser elector o candidato se requería ser español y alumno oficial del curso

¹⁹⁹ Decreto 2925/1974, de 17 de octubre, por el que se regulaba provisionalmente la participación estudiantil a nivel universitario (BOE 21) y Orden de 21 de octubre de 1974 que desarrollaba el Decreto sobre participación estudiantil (BOE 22) respectivamente.

correspondiente. En el caso de estar matriculado en varios cursos el elegido habría de serlo por el superior de ellos. El Rector velaría por el procedimiento.

A los representantes estudiantiles sólo se les podrían imponer las sanciones previstas en el Reglamento de Disciplina Académica vigente por una Comisión especial, integrada por un Presidente y dos vocales. El Presidente sería un Magistrado de la demarcación de la Audiencia Territorial respectiva, designado, a propuesta del Presidente de la misma, por el Rector de la Universidad. Serían vocales de aquella un Catedrático o Profesor agregado del Centro, designado por el Decano o Director del mismo y un miembro del Patronato de la Universidad, elegido por el mismo entre sus componentes.

Como fines, el Consejo tendría el participar en los órganos de gobierno y asesoramiento de las Universidades y en su Patronato; actuar como órgano de diálogo con las autoridades académicas y con el Ministerio de Educación y Ciencia; participar en la elaboración del programa de actividades académicas en conexión con las autoridades universitarias, Coordinador de Curso, Departamentos y Profesores, y en la exposición de los problemas de la vida corporativa; intervenir en la organización de la extensión universitaria y en la asignación de los fondos dedicados a ella y, finalmente, participar en la concesión de becas. La representación sería similar en las Escuelas Universitarias y Colegios Universitarios. Constituida la representación estudiantil en el año académico en curso, los representantes elegidos colaborarían con las autoridades académicas en el estudio y propuesta del definitivo Estatuto jurídico de la participación universitaria.

El segundo Decreto, de 21 de octubre, desarrollaba el anterior que regulaba provisionalmente la participación estudiantil a nivel universitario. La presente orden regulaba el régimen jurídico de la participación universitaria. La elección sería a nivel de curso, Centro universitario y Universidad, según grupos, cursos, secciones, Centros y Universidades, por ese orden. Los representantes serían elegidos por procedimiento directo. Delegado, Subdelegado y Consejeros de los diferentes grupos elegirían al Delegado, Subdelegado y Consejeros de curso. Los Delegados y Subdelegados de curso

constituirían el Consejo de Centro, el cual elegiría entre sus miembros al Delegado y Subdelegado de Centro y, finalmente, los Delegados y Subdelegados de Centros se constituirían en Consejo de Universidad y entre ellos elegirían al Delegado y Subdelegado de la Universidad respectiva. Los Consejeros de Centro y Universidad podrían constituir delegaciones o comisiones para el estudio y preparación de actividades académicas, culturales, deportivas o cualesquiera otras de índole universitaria.

Para ser elector se habría de ser estudiante, español y alumno oficial. Para ser candidato se requería la presentación expresa como tal por el interesado. El Decano o Director de Escuela fijaría la fecha de las elecciones. La Mesa electoral estaría constituida por un Profesor designado por el Decano o Director de Escuela, que sería el Presidente, y dos alumnos del curso o grupo, los que ocupasen el primer y último lugar de la lista electoral (alfabética). El voto sería personal, escrito y secreto. Dichas elecciones se celebrarían en presencia de un profesor designado por el Decano o similar del Centro respectivo cuando se tratase de Consejos de Grupo, Curso, Sección o Centro y por el Rector, cuando se tratase de Consejo de Universidad. El Rector velaría por la pureza del procedimiento. Los resultados se notificarían al Rector y, finalmente, se proclamarían los candidatos electos. El quórum para cada Consejo sería la mayoría absoluta de sus componentes, y los acuerdos se adoptarían, igualmente, por mayoría absoluta. Los Consejos de Grupo podrían convocar reuniones de los alumnos del grupo con fines consultivos o de información. Para ser autorizada, dicha convocatoria debería ser comunicada previamente al Decano o Director del Centro.

La representación estudiantil tendría como fines participar en los órganos de gobierno y asesoramiento de las Universidades y en su Patronato; actuar como órganos de diálogo con las autoridades académicas y con el Ministerio; participar en la elaboración del programa de actividades académicas y de los planes de estudio en conexión con las autoridades universitarias, el Coordinador de Curso, Departamentos y profesores y en la exposición de los problemas de la vida corporativa; intervenir en la organización de la extensión universitaria y en la asignación de fondos destinados a ella; participar en la

concesión de becas y la organización de comedores universitarios, y cualesquiera otros previstos por la Ley o por los Estatutos de la Universidad.

Las autoridades académicas facilitarían a los representantes universitarios el legítimo ejercicio de su función, ya fuera individualmente o de forma colegiada. A los representantes sólo se les podrían imponer las sanciones previstas en el Reglamento de Disciplina Académica vigente por una Comisión especial integrada por el Presidente (un Magistrado de la demarcación de la Audiencia Territorial respectiva) y dos vocales (un Catedrático o Profesor agregado del Centro a que perteneciera, designado por el Decano o similar y por un miembro del Patronato. El Ministerio podría convocar reuniones a nivel nacional con fines de asesoramiento de los representantes de las Universidades o Centros. En Colegios y Escuelas universitarias la representación sería análoga.

La disposición final segunda recogía que, una vez constituida en las distintas universidades la representación estudiantil para el periodo que comprendía el curso académico del año de redacción del Decreto que nos ocupa, los representantes elegidos colaborarían con la autoridad académica en el estudio y propuesta del definitivo Estatuto jurídico de la participación universitaria.²⁰⁰

En el año 1977, ya en plena transición, de nuevo un Real Decreto volvía a prorrogar los Estatutos provisionales de las universidades estatales²⁰¹ en tanto entrasen en vigor los definitivos, cuya elaboración se realizaría conforme a las previsiones de los Estatutos provisionales. No obstante, el Ministerio de Educación y Ciencia, al amparo del artículo 66 de la Ley General de Educación, dictaría las normas oportunas para la constitución de los órganos de gobierno de las universidades creadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha

²⁰⁰ A pesar de los Decretos sucesivos que iban otorgando mayor representatividad a los alumnos en los órganos de gobierno, la cuestión ya no era educativa sino política, y los alumnos no estaban dispuestos a participar en una universidad antidemocrática. Sin embargo, los tecnócratas seguían intentando hacer oídos sordos a lo que ya era un clamor, pensando que los parches podrían solucionar, al menos momentáneamente, los problemas existentes.

²⁰¹ Real Decreto 929/1977 de 28 de marzo (BOE 6 mayo) sobre prórroga de la vigencia de los Estatutos provisionales de las Universidades estatales

Ley, en orden a la elaboración de sus Estatutos. Y consecutivamente, por Orden del 26 de julio siguiente, se prorrogaban de nuevo los Estatutos provisionales de la Universidad Complutense de Madrid²⁰² hasta que entraran en vigor los definitivos a que se refería el artículo 66 de la Ley General de Educación.

Así se llega hasta 1983, en que previamente a la publicación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU)²⁰³, se promulgó la Ley 8/1983, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de Órganos de Gobierno de las Universidades.²⁰⁴ Dicha Ley disponía que, hasta que se elaborase la futura ley que regularía la autonomía de las universidades, y en la que quedarían recogidas, entre otros extremos, las pautas para la provisión de los órganos de gobierno de las universidades, se hacía necesario articular un conjunto de normas con carácter urgente que regulasen la elección y nombramiento de dichos órganos, sin perjuicio de lo establecido por cada Universidad en sus Estatutos o lo que se recogiera en la futura legislación.

Así, los Rectores serían elegidos por el Claustro Universitario entre funcionarios de carrera del cuerpo de Catedráticos numerarios o Profesores agregados de Universidad con destino en la Universidad respectiva. Se nombrarían mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. Los Vicerrectores y el Secretario general serían designados por el Rector entre Catedráticos numerarios, Agregados y Adjuntos de Universidad, y Catedráticos numerarios y Agregados en el caso de las Escuelas Universitarias, ya fuesen estos funcionarios de carrera, de empleo interinos o contratados. Los Decanos de Facultad, Directores de Escuelas Técnicas Superiores y Directores de Colegios Universitarios serían elegidos por el Claustro respectivo de entre los funcionarios de carrera de los cuerpos de Catedráticos numerarios, Agregados y Adjuntos de Universidad, con destino en el centro respectivo. Serían nombrados por el Rector.

²⁰² Orden de 26 de julio de 1977 sobre prórroga de los Estatutos provisionales de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 22 agosto)

²⁰³ Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE 1 septiembre)

²⁰⁴ Ley 8/1983, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia de Órganos de Gobierno de las Universidades (BOE 30) y su Corrección de erratas (BOE 29 septiembre).

Lo mismo sucedería con los Directores de Escuelas Universitarias, quienes serían nombrados en la forma establecida en el apartado anterior entre los funcionarios de carrera de las mismas, pertenecientes a los cuerpos de Catedráticos numerarios o Profesores agregados de Escuelas Universitarias. El cargo de Director de Escuela Universitaria no estatal, adscrita a la Universidad, debería recaer en un Catedrático numerario o Profesor agregado de Universidad. Los Vicedecanos de Facultades y los Subdirectores de Escuelas Técnicas Superiores, Colegios Universitarios y Escuelas Universitarias, así como los Secretarios, serían nombrados por el Rector a propuesta de los correspondientes Decanos o Directores de entre los profesores del Centro, ya fueran funcionarios de carrera, de empleo interino o contratado. Los Directores de Institutos Universitarios y de Departamento serían elegidos por éstos, y nombrados por el Rector, entre funcionarios de carrera de los cuerpos de Catedráticos numerarios o Profesores agregados de empleo interino o contratados de las Universidades respectivas. De no haber candidatos de los cuerpos antes citados, el nombramiento podría recaer en el de Profesores adjuntos de Universidad, Catedráticos de empleo interinos o contratados o Profesores agregados de Universidad, de empleo, interino o contratados de las Universidades respectivas. Los titulares de Universidad habrían de estar necesariamente en posesión del título de Doctor. De no haber candidatos que cumplieran los requisitos, la Junta de Gobierno de la Universidad, oída la del Centro, propondría las medidas provisionales oportunas.

En estos cargos sería un requisito la dedicación exclusiva y en ningún caso se podrían ejercer dos cargos simultáneamente, tampoco podrían simultanearse con ninguno de los órganos de gobierno del CSIC y sus centros, lo que había sido hasta el momento práctica común. Solo los profesores de las Facultades de Medicina que realizaran función asistencial exclusivamente en el Hospital Clínico Universitario o en el Hospital en que se impartiera docencia clínica, podrían ser elegidos para los cargos anteriormente mencionados. Excepto en las Escuelas Universitarias, los órganos colegiados que hubieran de participar en la elección de cargos académicos deberían estar constituidos, al menos en un 50%, por profesores doctores.

En las disposiciones transitorias se recogía que los nombramientos efectuados hasta ese momento con carácter provisional, se considerarían firmes siempre y cuando los titulares cumplieran los requisitos establecidos. En el plazo de un año, previos los oportunos procesos electorales, se efectuarían los nombramientos de los Rectores de Universidad, Decanos de Facultades y Escuelas Universitarias cuando los titulares previos no cumplieran los requisitos. Para el caso de Vicerrectores, Secretarios generales de Universidad, Vicedecanos, Subdirectores de Escuelas Técnicas Superiores, Colegios Universitarios y Escuelas Universitarias y Directores de Institutos y Departamentos Universitarios, así como los Secretarios de estos Centros, el plazo sería de seis meses.

Como se puede ver, en estas normas provisionales se anunciaban ya algunas de las novedades que recogería posteriormente la Ley de Reforma Universitaria, sobre todo en lo relativo a la elección de cargos y al autogobierno. Así pues, tras esta Ley “de urgencia” la Ley de Reforma Universitaria inauguraba un periodo nuevo en un Estado nuevo²⁰⁵, sin duda correspondiendo ya a otra realidad y a otra época.

A la vista del pormenorizado análisis legislativo que hemos ofrecido, se puede concluir respecto a este periodo que, si bien lo más relevante es la propia Ley General de Educación de 1970 por lo que supuso de novedad en comparación con la previa del 43²⁰⁶, sin embargo podríamos decir que las transformaciones arrancan de mediados de los cincuenta, de los intentos de modernización del Ministerio de Joaquín Ruíz-Giménez y el Rectorado de Laín Entralgo en la Universidad de Madrid²⁰⁷ y que lo que se establece es una relación dialéctica y convulsa entre las reclamaciones, fundamentalmente

²⁰⁵ La Ley de Reforma Universitaria del 83 sería la primera ley verdaderamente autónoma y democrática en el ámbito universitario. Pero los Estatutos definitivos aún tardarían en llegar, para el caso de la Universidad Complutense no se aprobarían hasta 1985.

²⁰⁶ En opinión de Ruíz Carnicer no era novedosa respecto al panorama educativo europeo del momento, pero sí para el anacrónico contexto español. Ver RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana*, citado anteriormente.

²⁰⁷ A partir de ese momento ya no se denominaría Central, sino de Madrid. Véanse los tres estudios ya citados de la profesora HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena “Reforma desde el sistema y protagonismo estudiantil: la Universidad de Madrid en los años cincuenta”; “Universidad y oposición al franquismo. Reflexiones en torno a los sucesos de 1956 en Madrid” y “La dictadura franquista y la universidad, 1951-1975 (Con especial atención al caso de Madrid)”.

estudiantiles, y las respuestas normativas –asfixiadas por las prácticas represivas-, del régimen. Un pulso entre lo que los gobernantes querían resolver como problema educativo y las demandas del estudiantado, que poco a poco, iban cobrando un componente más extendida y claramente social y político. Realmente, el propio texto de la Ley tiene una importancia relativa en el contexto, pues lo que marca el periodo en profundidad es el continuum de disposiciones que se van sucediendo desde los primeros sesenta hasta los ochenta.

Las primeras disposiciones van encaminadas fundamentalmente a dictar medidas de carácter disciplinario, en un intento de recuperar el orden en la universidad después de los violentos sucesos acaecidos. A la altura de 1965 el fracaso del SEU era palpable, y mediante la creación de Asociaciones Profesionales de Estudiantes en realidad lo que se estaba poniendo sobre la mesa era su disolución, quedando convertido en una Comisaría. Estas asociaciones, que no lo eran realmente ya que se definían como orgánicas, como parte integrante de las Facultades y Centros, y de obligada pertenencia para todos los alumnos, no hicieron sino soliviantar más los ánimos de los estudiantes, quienes al realizar la matrícula habían de cotizar también por su pertenencia a ellas. El paso siguiente en el camino de la representación estudiantil sería la posibilidad de crear “verdaderas” asociaciones desde el año 68, si bien serían aún asociaciones muy tuteladas y con escasos contenidos. Finalmente, las normas del año 74 habrían de asumir necesariamente la representación directa de los alumnos sin mediación alguna de asociaciones. Otra cosa es que, a esas alturas, los estudiantes desconfiaran o incluso rechazaran participar en una institución a la que se oponían masivamente.

La Ley de 1970, con todo, supuso un importante esfuerzo de modernización educativa, era la respuesta a toda una serie de cambios estructurales a nivel económico, y sobre todo social, que se estaban produciendo en el país, y que en el entorno que a nosotros más nos interesa, en el ámbito educativo universitario, se venían poniendo de manifiesto avivados por la acción colectiva del movimiento estudiantil. Ponía de manifiesto la necesidad de adecuar, o más bien transformar de raíz y dar carpetazo de una

vez por todas, la “clasista” y decimonónica Ley Moyano que había venido lastrando el sistema educativo español por tantos años, establecer nuevo sistema educativo al completo, más allá de modificaciones parciales, de manera que estuviera en consonancia con la realidad social del país, aun cuando esta realidad social y económica no se viera acompañada de los ansiados cambios políticos²⁰⁸.

En ese contexto, sin olvidar que se trataba de una ley franquista, las propias referencias que aparecen en la justificación de motivos, suponen un cambio radical de sensibilidad y de talante, sin duda muy alejados de la Ley de 1943 que, sin embargo, había regido la educación sin modificación alguna por casi una treintena de años. La Ley de Villar Palasí explicita algunas ideas que desde luego resultan realmente novedosas si se las compara con la anterior del 43, aunque en palabras de Ruiz Carnicer lo que resultaba anacrónico era la propia pervivencia del régimen franquista. Manifiesta también la ley de 1970 la voluntad de “proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población”, puesto que la educación ya se concibe como un derecho. Señala la “necesidad de preparación especializada de un gran número y diversidad de profesionales que requiere la sociedad moderna”, de la “necesidad de capacitar al individuo para afrontar con eficacia las nuevas situaciones que le deparará el ritmo acelerado del mundo contemporáneo y la urgencia de contribuir a la edificación de una sociedad más justa”, etc. Frente a la “clasista” Ley Moyano, esta otra se planteaba “*democratizar* la enseñanza”, reconociendo incluso cómo “generalmente se ha ido a la zaga de la presión social, al igual que en la mayor parte de los países”.

Quizá uno de los aspectos más innovadores y destacables de esta Ley es que vino precedida de un estudio previo del estado de la cuestión cuyo resultado, *La educación en España: bases para una política educativa*, conocido como “Libro Blanco”, se había publicado en febrero de 1969, lo que

²⁰⁸ “Los problemas educativos que tiene planteados hoy nuestro país requieren una reforma amplia, profunda, previsor de las necesidades nuevas y no medidas tangenciales y apresuradas con aspecto de remedio de urgencia. El convencimiento de la necesidad de una reforma integral de nuestro sistema educativo ha ganado el ánimo del pueblo español. Esta Ley viene precedida como pocas del clamoroso deseo popular de dotar a nuestro país de un sistema educativo más justo, más eficaz, más acorde con las aspiraciones y con el ritmo dinámico y creador de la España actual”.

resulta claramente novedoso para la época, independientemente de que algunos sectores consultados fueran discutibles o cuestionables.

Al mismo tiempo, era una ley que intentaba ser anticipadora, previendo la posibilidad de autocorrección y flexibilidad, con un “ánimo abierto al ensayo, a la reforma y a la colaboración”. Abría paso a la existencia de Estatutos propios de cada Universidad, que permitieran una cierta autonomía en los centros. No en vano, en el ámbito universitario y en concreto en la Universidad Complutense, los primeros Estatutos provisionales datan de diciembre de 1970, y son consecuencia directa de la LGE. Otra cuestión es que apenas llegaron a aplicarse debido a las circunstancias conflictivas por que atravesaba la Universidad.

Aun cuando no era una ley específicamente universitaria sino general, establecía el marco educativo para todos los niveles. Su impulsor había sido José Luis Villar Palasí, ministro de Educación entre 1968 y 1973, cuyo cese fue propiciado por la huelga general, exitosa, precisamente en oposición a la ley que llevaron a cabo los alumnos en el año 72 y por la llegada a la Presidencia el Almirante Carrero Blanco, quien nombró para ese cargo a Julio Rodríguez Martínez, que tomó medidas mucho más represivas.²⁰⁹ Era Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Sección de Historia, y había sido auxiliar de la cátedra de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, por lo que conocía bien la institución. Dentro del gobierno franquista había desempeñado importantes cargos, como el de Secretario Técnico del Director General del Ministerio de Información y Turismo, Subsecretario de Comercio y Director del Instituto de Estudios Administrativos en el Centro de Funcionarios Civiles de Alcalá de Henares. Durante su mandato como ministro, compatibilizó su cargo con el de Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre 1971 y 1973. Dentro del franquismo pertenecía al grupo de tecnócratas vinculados con el Opus Dei, cuya actuación se regía por el principio de eficacia. En definitiva, una larga

²⁰⁹Véase de nuevo para ello HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Pluralidad y fragmentación del movimiento estudiantil (1970-1973) y “Hacia el final del régimen (1974-1975)”, ambos contenidos en la obra colectiva *Estudiantes contra Franco...* citada anteriormente.

trayectoria política, que tuvo su reflejo en su impulso legislativo en diferentes ámbitos y muy especialmente en el educativo. La Ley General de Educación fue por ello diseñada con unos criterios técnicos precisos, nada desdeñables.

Ahora bien, si la idea era actualizadora y novedosa, no se puede decir que los cauces de participación sociopolítica fueran amplios, tan sólo intervinieron organismos como el Consejo Nacional del Movimiento, la Organización Sindical, el Instituto de Estudios Políticos, la Comisión Episcopal de Enseñanza, las asociaciones de profesores, las Hermandades de inspectores, las Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Como principales logros de la LGE hay que destacar la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria hasta los 14 años (la E.G.B.), consistente en ocho cursos organizados en tres ciclos. Tras esta primera fase, el alumno accedía al Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), de tres años de duración a lo que posteriormente había que añadir el Curso de Orientación Universitaria (COU) y la Prueba de acceso o Selectividad, o a la Formación Profesional (FP). Así se reformó el sistema educativo desde la primaria hasta la universidad, adaptándolo a las necesidades de escolarización.

Se creó también la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED.) y se posibilitó el acceso a la Universidad de las personas mayores de 25 años que no hubiesen cursado académicamente los niveles previos, mediante un examen que acreditara determinados conocimientos. La ley se planteaba que cualquier persona, a cualquier edad e independientemente su formación académica, pudiera reengancharse en cualquier momento de su vida a los estudios y la formación, por lo que sin duda, contribuyó en gran medida si no a acabar con él, al menos sí a reducir el analfabetismo, y reintrodujo en los estudios superiores a muchos españoles que no habían podido antes acceder a ellos. Pero, en cuanto a su efectiva implantación, no fue demasiado afortunada porque careció asimismo de los medios necesarios para llevarla a la práctica adecuadamente. El Estado nunca la apoyó económicamente en la alta medida en que había prometido. Por otra parte, la propia ley establecía un

plazo de diez años para su implantación progresiva, pero los cambios políticos la hicieron inviable a medio plazo.

La normativa posterior responde a lo establecido por la propia LGE, en cuanto a la obligatoriedad de dotar de Estatutos al resto de universidades “no autónomas”. Sin embargo los Estatutos no dejaron de ser provisionales, ya que no se llegaron a cumplir los plazos que permitieran su aprobación definitiva. A partir de la Ley, la legislación que vino a continuación hasta la Ley de Reforma ya en la España democrática, se adecuaría mal que bien a la situación social y política y sería dictada con carácter de urgencia para remediar los acontecimientos trascendentes que se estaban viviendo.

III.- EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA A TRAVÉS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

La evolución de los planes de estudios viene determinada en buena medida por otras dos variables: la primera, el marco legislativo general que fija las verdaderas directrices y la filosofía que hay detrás de cada uno de los cambios producidos y la segunda, la organización docente y administrativa de centros, factor éste que nos dará una idea más precisa de la realidad material que subyace a las sucesivas reorganizaciones de los específicos planes de estudios. Por ello, en nuestro análisis seguiremos en principio los periodos legislativos apuntados en el capítulo anterior, para ir introduciendo en la medida de lo posible los datos correspondientes a la práctica escolar.

Periodo 1939-1943

El periodo comprendido entre el final de la guerra y la publicación y entrada en vigor de la ley de 1943 se caracteriza por la doble intención de hacer tabla rasa del pasado reciente, inspirándose en el modelo previo de universidad, al tiempo que se sentaran las bases de unos estudios ideológicamente acomodados a las directrices del nuevo régimen. Los dos principios –el viejo y el nuevo, de aspiración fascistizante-, entablaron una fuerte lucha desde el seno mismo de la guerra, si bien en los primeros años de posguerra lo que destaca sobre todo es la urgencia de volver a la normalidad, y de dictar medidas suficientemente eclécticas como para que encajasen con la pretensión pragmática del gobierno de Franco, y de ahí la indudable sensación de improvisación y formulación contradictoria que produce el repaso de la normativa y su puesta en práctica.

Por más que se quisiera eliminar todo vestigio del periodo inmediato anterior, el marco no podía ser radicalmente rupturista. Los estudios de Geografía e Historia se seguirían impartiendo dentro de los estudios generales de Filosofía y Letras, en Facultades organizadas según el conocido patrón

decimonónico, articuladas en grandes Secciones troncales, con una limitada especialización (la propia de la época en buena parte de los países, todavía) y, en nuestro caso en particular, muy determinadas en su orientación y contenidos por la relevancia personal de los catedráticos encargados de impartir las diferentes asignaturas correspondientes a la titulación, muy variada, de sus cátedras.

Así, se asume que una vez finalizada la contienda, la misión fundamental era la reconstrucción de la Universidad en su conjunto, reconstrucción material de los edificios que, especialmente en la Ciudad Universitaria madrileña –escenario geográfico a la vez que simbólico de la confrontación-, habían quedado completamente destruidos,²¹⁰ y reconstrucción de las actividades académicas, tratando de hacer, como se dice textualmente, “borrón y cuenta nueva” con las reformas educativas del periodo republicano, y aspirando los más combativos a crear una nueva estructura académica basada en un concepto de Universidad radicalmente diferente, inspirado en los nuevos pilares que acaban pronto siendo los dos intercambiables protagonistas a partir de ese momento: la Iglesia y la Falange.

Las primeras normas generales para toda la Universidad y en particular para los estudios correspondientes al título de Filosofía y Letras, consistían en la derogación de los Planes de Estudio de 1931 y el establecimiento de unos nuevos planes que se elaboraron, de manera en principio provisional y desde luego improvisada, para hacer frente apresuradamente a la urgencia de establecer una aparente normalidad en el desarrollo de los estudios superiores. Si la República había intentado mantener una cierta continuidad durante la contienda, el nuevo orden no reconocía a los estudiantes ninguno de los estudios cursados en zona republicana, ni validaba los exámenes realizados a partir del 18 de julio de 1936, de manera que los alumnos deberían volver a matricularse, pagar las tasas correspondientes y superar los exámenes. La

²¹⁰ En la Orden de 6 de junio de 1939 (BOE 11), sobre cursos abreviados y exámenes en las Universidades, se señalaba que los cursillos empezarán “*en cuanto lo consientan las circunstancias de la desmovilización*”. Tan sólo en 1943, la Orden de 26 de enero (BOE 27), señalaba que una vez terminada la reconstrucción del edificio, a partir del 1 de febrero, todos los servicios docentes y administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras se prestarían ya en el nuevo edificio, en la Ciudad Universitaria.

mencionada Orden de 6 de junio del 39 recogía la excepción de que *“los alumnos matriculados en el curso 1935-1936 quedarían exentos de nuevos pagos en las asignaturas de la inscripción si no pudieron hacer uso de las mismas por causas de fuerza mayor o de superiores órdenes. Los demás abonarían los derechos ordinarios aun para los cursos abreviados”*. Por su parte la Orden de 31 de agosto de 1939, dictando normas específicas para cursar los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, establecía que *“se declaraban nulos todos los exámenes y actos académicos realizados en las Facultades de Filosofía y Letras con posterioridad al 18 de julio de 1936, debiendo abonar nuevos derechos de inscripción para matricularse”*. Con todo, los alumnos que se encontraran en los cursos de especialidad según el plan de 1931, terminarían sus estudios según éstos, pero quienes empezaran de nuevo sus estudios lo harían ya según los nuevos planes que –como una muestra más de la mezcla de discrecionalidad y falta de sistematicidad que tantas veces se lamenta en la planificación académica y científica- se iban aprobando curso a curso, sobre la marcha²¹¹.

La equidad hacia los estudiantes de un lado u otro de la contienda no fue una nota dominante en la reorganización, como no lo fue tampoco la atención a la calidad de lo aprendido. Los privilegios ofrecidos a los estudiantes del bando vencedor quedaron explícitos desde el primer momento. Se establecieron unos cursos abreviados para los estudiantes excombatientes en el bando nacional de manera que quedasen claramente beneficiados frente a los de la zona republicana. Aquellos podían concentrar dos cursos en uno, en periodos semestrales, siendo objeto de exámenes más benévolos, específicos y “adaptados” a su circunstancia²¹². La ya mencionada Orden de 6 de junio del 39 ponía énfasis en resaltar que una *“preocupación urgente de este Ministerio viene siendo el facilitar la rápida y eficaz reincorporación a la vida escolar de los jóvenes combatientes que, con su magnífico y ejemplar heroísmo permitieron la realización e las gestas de epopeya de nuestra Victoria y el triunfo definitivo contra la barbarie bolchevique, salvando nuestra cultura*

²¹¹ Orden de 31 de agosto... *“Los alumnos que venían cursando sus estudios por el plan de 1931 continuarán por él hasta la terminación de su Licenciatura”*

²¹² Recogido en la Orden de 6 de junio de 1939 sobre cursos abreviados y exámenes en las Universidades (BOE 11 junio).

cristiana auténtica y los ideales que integran el Glorioso Movimiento Nacional"; de manera que *"procede ahora establecer un plan rápido, eficaz y metódico, que permita conceder beneficios (...) a los excombatientes Estudiantes Universitarios que interrumpieron el curso de sus carreras y sacrificaron los mejores años de su juventud por la Causa Sagrada de Dios y de España"*. Y en definitiva, por ello *"Ha de ofrecerse, pues, un método de cursos y estudios extraordinarios que permitan a nuestra juventud excombatiente poder recuperar, al menos en parte, el tiempo consumido en la Gloriosa Epopeya por la Patria"*. Así, de esa manera, *"podrá justamente decirse que las Universidades españolas, durante los años próximos, estarán primordialmente dedicadas a conseguir para nuestra heroica juventud excombatiente las mayores facilidades en los estudios"*.

En dichos cursos, como se apuntó antes, "podían inscribirse los alumnos que estuvieron matriculados, o hubieren podido estarlo legalmente, en los Centros respectivos durante los cursos 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938 y 1938-1939, siempre que hubiesen prestado servicios militares en el Ejército o en las Milicias, salvo que, por no estar obligados a ello o por causas ajenas a su voluntad, no los hubieran podido prestar, a juicio de los Rectores, o bien que se tratase de alumnos femeninos" (sic). Dicho plan abreviado comprendía unos cursillos de repaso preparatorios, una tanda de exámenes y unos cursos semestrales que empezarían en las Universidades a partir del 15 de septiembre del mismo año 1939.

Como se señaló anteriormente, la Orden de 31 de agosto del 39²¹³, dejó sin vigencia los planes de estudio del año 31, reorganizando los estudios de Filosofía y Letras. A partir de ese momento se establecían dos cursos comunes, que empezarían a impartirse ese mismo año, y tres años de especialización cuya regulación se posponía. Los dos cursos de estudios comunes constarían de las siguientes asignaturas²¹⁴:

²¹³ Dicha Orden recogía la Orden de 6 junio de 1939, la Orden Circular de 27 de julio de 1939 y la Orden del 20 de agosto de 1939.

²¹⁴ Señalamos en negrita los relativos a los estudios de Historia.

ESTUDIOS DE FILOSOFÍA Y LETRAS ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS COMUNES (1939)
Lengua latina
Lengua griega o árabe
Lengua y literatura españolas
Introducción a la Filosofía
<i>Historia General</i>
<i>Historia de España</i>
<i>Historia del Arte</i>
Lengua francesa
Lengua alemana, italiana o inglesa

Finalizados los estudios comunes, había de superarse un examen conjunto de las materias cursadas, con pruebas orales y escritas, de cuyo aprobado dependía el paso a los cursos de Estudios especiales.

Una vez superado dicho examen, los estudiantes podían proseguir estudios en una de estas tres Secciones: Filosofía, Letras e Historia, pero la ordenación de las asignaturas quedaría pendiente, a la espera de la reforma total de los estudios universitarios.

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS ESTUDIOS ESPECIALES. Secciones (1939)
Filosofía
Letras
Historia

Como resumen de la trayectoria académica de los alumnos se establecía el “Cuaderno de Escolaridad” en que se haría constar las calificaciones curso a curso hasta conseguir su Licenciatura o Doctorado.

En ese mismo año de 1939, la Orden de 30 de octubre regulaba los primeros cursos especiales de la Facultad de Filosofía y Letras. Señalaba que al no haberse terminado aún la ley de reforma universitaria²¹⁵, para evitar la

²¹⁵ La Orden de 25 de abril de 1939 disponía la publicación del Proyecto de Ley de Reforma universitaria para el informe de los claustros universitarios (BOE 27) previamente a la elaboración de la Ley que sin embargo, por diferentes razones, no llegaría hasta 1943.

solución de continuidad se fijaban las asignaturas que conformarían el primer curso de especialidad en cada una de las tres secciones existentes, quedando pendientes las del segundo curso, que no se regularían hasta 1941, viniendo a quedar fijadas por una Orden de 8 de mayo²¹⁶, que determinaba las asignaturas que formarían parte del segundo curso de especialización, quedando finalmente como sigue (aquí nos referiremos tan sólo a las asignaturas de Geografía e Historia):

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ESPECIALIDAD	
1º Curso de especialidad de Geografía e Historia (1939)*	
	Prehistoria y Arqueología
	Historia Universal Antigua y Media
	Historia de España Antigua y Media
	Paleografía
	Geografía
	Numismática
	Epigrafía
2º Curso de especialidad de Geografía e Historia (1941)*	
	Diplomática
	Historia Universal Moderna y Contemporánea
	Historia de España Moderna y Contemporánea
	Historia de América
	Historia del Arte
	Historia de la Geografía

* Mas un curso monográfico al menos, establecido libremente por la Facultad

Periodo 1943-1970

Una vez publicada por fin la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, en ese mismo año, y tan sólo dos meses después, aparecía la Orden de 4 de septiembre²¹⁷, que determinaba las disciplinas que componían el primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras. En esta Orden se atisbaba ya la tendencia a una mayor especialización, particularmente en las disciplinas relativas a Historia, especialización que venía ya sancionada por la propia Ley y que

²¹⁶ Publicada en el BOE de 12 de mayo.

²¹⁷ Publicada en el BOE de 7 de septiembre.

continuaría desarrollándose posteriormente. Las disciplinas que componían el primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras eran las siguientes²¹⁸:

1º CURSO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (1943)	
1º Cuatrimestre	
	Lengua Latina
	Lengua griega o árabe
	Lengua y Literatura españolas
	Historia general de la Cultura (antigua y media)
	Historia del Arte (oriental)
	Fundamentos de Filosofía
2º Cuatrimestre	
	Lengua Latina
	Lengua griega o árabe
	Lengua y Literatura españolas
	Historia general de la Cultura (moderna y contemporánea)
	Historia del Arte (clásico)
	Fundamentos de Filosofía

Sin embargo, a pesar del anticipo de ese primer curso ordenado inmediatamente después de la Ley para que los nuevos alumnos pudieran empezar los estudios según las nuevas pautas, desde que terminara la guerra no se podría hablar con propiedad de un verdadero plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras hasta la publicación del Decreto de 7 de julio de 1944 sobre la ordenación de la Facultad de Filosofía y Letras²¹⁹.

En dicho decreto se reconocía de manera expresa que *“las disciplinas filosóficas, históricas, literarias o filológicas, forman un núcleo común de conocimientos”* (...) *“pero al mismo tiempo, el desarrollo moderno de estas enseñanzas exige una diversificación especializada, por cuanto sus campos se han ido desligando día a día, a medida que la moderna investigación profundizaba sobre ellos.”* Por ello, la solución sería adoptar un programa ecléctico, con *“un periodo de estudios comunes de formación básica en Filosofía, Historia y Lingüística, sin perjuicio de que las disciplinas se maticen más tarde en una etapa de especialización con trayectoria aparte.”*

²¹⁸ Señalamos en negrita las relativas a Geografía e Historia

²¹⁹ (BOE 4 agosto)

La Facultad quedaba organizada en siete Secciones (frente a las tres existentes con anterioridad, producto de la reorganización del año 39), reapareciendo la Sección de Pedagogía –que estaba en el plan del 31- y desdoblándose tanto la de Historia como la de Letras:

SECCIONES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Comparativa	
Secciones 1939	Secciones 1944
Filosofía	Filosofía
Historia	Historia
	Historia de América
Letras	Filología románica
	Filología clásica
	Filología semítica
	Pedagogía

Las enseñanzas intentaban aunar la formación científica e investigadora con la capacitación para el desempeño profesional y daban lugar a la expedición de los títulos de Licenciado y Doctor (con su correspondiente colación de grados), que eran requeridos y/o valorados como méritos para el desempeño de determinados cargos y profesiones, siendo imprescindibles para poder opositar a determinados puestos en la administración pública.

El mismo Decreto determinaba el patrón bajo cuya advocación se encontraría la Facultad, así como su heráldica e indumentaria dentro del protocolo de la Universidad.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS		
Estudios comunes (2 cursos)*		
Estudios especializados	Licenciatura	(3 cursos)*
	Doctorado	(1 curso)

* Cada curso constaba de dos cuatrimestres, excepto el de Doctorado.

El periodo de estudios comunes

Los estudios comunes respondían a la convicción de que era preciso dotar a los alumnos de un grado de cultura general de carácter filosófico, literario, geográfico e histórico considerado como mínimo, un fundamento humanístico exigible a cuantos cursaran estudios superiores en la Facultad, independientemente de la Sección a que hubieran de adscribirse después. Las enseñanzas del periodo de estudios comunes, establecidas a lo largo de dos cursos en cuatro cuatrimestres, se desarrollarían según el siguiente plan:

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS ESTUDIOS COMUNES. Sección de Historia (1944)	
Primer curso	
1er Cuatrimestre	Lengua y Literatura latinas
	Lengua y Literatura griegas o árabes
	Historia general de la cultura (Antigua y Media)
	Historia general del Arte
	Fundamentos de Filosofía
2º Cuatrimestre	Lengua y Literatura latinas
	Lengua y Literatura griegas o árabes
	Lengua y Literatura españolas
	Historia general de la cultura (Moderna y Contemporánea)
	Fundamentos de Filosofía
Segundo curso	
3er Cuatrimestre	Lengua y Literatura griegas o árabes
	Lengua y Literatura latinas
	Literatura Universal
	Historia de los sistemas filosóficos
	Historia general de España (Antigua y Media)
	Geografía general
4º Cuatrimestre	Lengua y Literatura griegas o árabes
	Lengua y Literatura latinas
	Literatura Universal
	Historia de los sistemas filosóficos
	Historia general de España (Moderna y Contemporánea)
	Geografía de España

El periodo de Licenciatura especializada

El periodo de Licenciatura especializada abarcaba tres cursos, en seis cuatrimestres. Las enseñanzas comprenderían cursos del conjunto de las disciplinas que figuraran en cada Sección, materias obligatorias para la totalidad de los alumnos de las mismas, además de cursos monográficos y prácticas de orientación del trabajo científico²²⁰. Este último aspecto se revela especialmente interesante, y dio lugar en algunos casos a ejemplos prácticos de importancia e interés en el desarrollo de las microescuelas científicas, como es el caso bien conocido de la experiencia ligada a Jaume Vicens Vives en Barcelona, tanto como discípulo como siendo maestro él mismo. Ese trabajo de los estudiantes habría de ser guiado por un tutor, que agruparía a sus estudiantes para iniciarlos en la tarea científica. Para ello, al comienzo del periodo de estudios especializados, los alumnos escogerían, de entre los catedráticos y profesores de la Facultad, uno que dirigiera sus estudios.

En la Sección de Historia las enseñanzas establecidas seguirían el siguiente plan:

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS LICENCIATURA ESPECIALIZADA. Sección de Historia (1944)	
Tercer curso	
5º Cuatrimestre	Prehistoria e Historia Universal de la Edad Antigua
	Prehistoria e Historia de España en la Edad Antigua
	Geografía general
	Arqueología
	Paleografía
	Epigrafía
6º Cuatrimestre	Historia Universal de la Edad Antigua
	Historia de España en la Edad Antigua
	Geografía general
	Arqueología
	Numismática
	Paleografía

²²⁰ El artículo treinta y dos señalaba que “durante el periodo de Licenciatura especializada, los alumnos realizarán prácticas de orientación del trabajo científico, durante el cual se familiarizarán con las fuentes, repertorios, bibliotecas (manejo y utilización); harán visitas a Museos, Archivos y Bibliotecas particulares; se les enseñarán métodos de estudios y de trabajo sobre fichas, cuadernos y colectáneas; utilizarán revistas y aprenderán, asimismo, lo necesario para la edición de trabajos (imprentas, encuadernaciones, correcciones, ediciones, etc.)”.

Cuarto curso	
7º Cuatrimestre	Historia Universal de la Edad Media
	Historia de España en la Edad Media
	Geografía de España y de los pueblos hispánicos
	Historia del Arte Medieval
	Diplomática
8º Cuatrimestre ²²¹	Historia Universal de la Edad Media
	Historia de España en la Edad Media
	Geografía de España y de los pueblos hispánicos
	Historia del Arte Medieval
	Latín medieval
Quinto curso	
9º Cuatrimestre	Historia Universal de la Edad Moderna
	Historia de España en la Edad Moderna
	Geografía descriptiva
	Historia de América
	Historia del Arte en la Edad Moderna
10º Cuatrimestre	Historia Universal de la Edad Contemporánea
	Historia de España en la Edad Contemporánea
	Geografía descriptiva
	Historia de la colonización española
	Historia del Arte en las Edades Moderna y Contemporánea

El establecimiento de las asignaturas exigidas para la Licenciatura especializada en la Sección de Historia de América se posponía de momento, y sería objeto de una disposición especial que no llegaría a publicarse hasta 1945²²².

Como es preceptivo, la normativa obligaría entonces también a que cada año, al principio de cada curso y antes de abrirse el plazo de inscripción de matrícula, habría de hacerse público el horario, aulas y profesores del plan obligatorio de estudios, así como de los cursos y seminarios voluntarios. Como cursos especiales de carácter voluntario, los alumnos de los dos últimos años

²²¹ Aunque resulte extraño, la repetición de las asignaturas relativas a la época medieval en dos cuatrimestres consecutivos, no se trata de un error, según consta en el Boletín Oficial del Estado. Esto nos lleva a pensar en el extraordinario peso concedido en el plan de estudios a las asignaturas relativas a la Edad Media, época ideal y añorada dentro del ideario impulsado por el nacionalcatolicismo de la época.

²²² Mediante el Decreto de 12 de septiembre de 1945 sobre Ordenación de la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras (BOE de 4 de noviembre) y la Orden de 22 de octubre de 1945 de corrección de errores de los artículos octavo y décimo del Decreto anterior (BOE de 4 de noviembre). Ambos se estudiarán más adelante.

podrían asistir a uno de los Seminarios establecidos por la Facultad. Los cursos monográficos eran cuatrimestrales y variaban a propuesta de los catedráticos de la Facultad. En cada una de las secciones habría como mínimo cuatro cursos monográficos en cada cuatrimestre.

Todos los catedráticos deberían presentar a la aprobación del Rector, con un mes de antelación respecto al comienzo del curso, los temas a desarrollar en el/los siguientes cuatrimestre/s. El programa aprobado debería ser explicado en su totalidad, y tenía que estar en la Secretaría de la Facultad antes del comienzo del curso, a disposición de los alumnos. Asimismo, todos los catedráticos deberían redactar diariamente una “ficha de Cátedra”, reflejando en ella la labor desarrollada y sometiéndola cada día al visado del Decano.

En ningún caso los alumnos podrían tener cada día más de cuatro horas de clases teóricas, incluyendo entre éstas la cultura superior religiosa y la formación política, materias que se imponían como obligatorias para todos los estudiantes universitarios²²³. Las clases teóricas tendrían una duración de entre cuarenta y cinco y sesenta minutos, mientras que las clases prácticas durarían el tiempo necesario para lograr el cometido propuesto.

Para la colación del grado de Licenciado en cualquiera de las Secciones, era requisito indispensable haber cursado todas las disciplinas incluidas en el plan de estudios comunes y en el de la correspondiente Licenciatura especializada, así como las disciplinas especiales de carácter religioso y político y haber realizado los ejercicios físicos y deportivos, así como los demás cursos fijados por la Ley de Ordenación de la Universidad española.

Obtención del grado de Licenciado

En cada curso se calificaba por separado cada una de las disciplinas. Las calificaciones podrían ser: Sobresaliente, Notable, Aprobado y Suspenso,

²²³ Tres Decretos y una Orden venían a regular la obligatoriedad de impartir las enseñanzas religiosas, política y de educación física en la Universidad española, normativa que estudiaremos más adelante.

pudiendo adjudicarse una Matrícula de Honor por cada veinte alumnos o fracción de veinte. Los alumnos suspensos en una o más asignaturas podrían presentarse a examen en la convocatoria de septiembre. Las calificaciones quedarían consignadas en las actas de examen, desde las que se pasaba una diligencia al “Libro Escolar” y se remitía copia a la Secretaría para que registrase las notas en el expediente correspondiente.

Al terminar el periodo de Licenciatura especializada, una vez aprobadas todas las disciplinas de los seis cuatrimestres, los alumnos habían de superar el examen de conjunto final para la obtención del grado de Licenciado. Este examen se realizaba ante un Tribunal formado por cinco catedráticos y constaba de pruebas escritas, orales y prácticas para cada Sección. En la Sección de Historia las pruebas finales para la obtención de la Licenciatura constaban de una

- a) Prueba escrita: traducción con diccionario de un texto latino de carácter histórico escogido por el Tribunal

- b) Prueba oral: exposición durante media hora de un tema de cualquiera de las disciplinas cursadas, designado por el Tribunal, pudiendo ser preparado por el alumno utilizando libros por espacio de cuatro horas.

- c) Prueba práctica, dividida en dos partes:

- Primera: reconocimiento, clasificación y comentario de objetos o monumentos de prehistoria y arqueología clásica; de monedas y epígrafes y de obras de arte medieval y moderno, elegidos por el Tribunal. El alumno podía utilizar la bibliografía que solicitase.

- Segunda: transcripción, traducción en su caso y comentario de dos documentos paleográficos, uno latino y otro español, previamente designados por el Tribunal. Para la traducción latina podía utilizarse el diccionario.

Las pruebas finales para la Licenciatura especializada en Historia de América, de nuevo, quedaban pendientes de una disposición especial.

El examen final de Licenciatura podía ser realizado en junio y si se suspendía, sería repetido en septiembre, y su resultado se recogía no sólo en las actas oficiales, sino también en el “Libro Escolar” del alumno en el que se

explicitaba la nota obtenida y aparecía la firma de los cinco miembros del Tribunal. En cada convocatoria se podían adjudicar dos premios extraordinarios por cada Sección, que daban derecho a la expedición gratuita del título, mediante un examen especial. Este examen consistía en un ejercicio escrito sobre dos temas sacados al azar de entre diez redactados por el Tribunal en el momento. Los alumnos disponían de dos horas para el desarrollo de cada uno de los temas. Para poder optar a dicho premio era necesario haber obtenido la calificación de Sobresaliente en el examen final de la Licenciatura. Las calificaciones favorables se hacían constar en los títulos correspondientes, al ser expedidos.

En las fechas de comienzo y fin de curso se llevaba a cabo el acto solemne de investidura de grado.

Obtención del grado de Doctor

Los estudios de Doctorado sólo podían ser iniciados por titulares del grado de Licenciado. Su duración, como mínimo, sería de un curso durante el cual el aspirante habría de realizar estudios especiales y redactar una tesis doctoral. Los estudios de ese año constarían de tres cursos monográficos de la propia Facultad y Sección y de uno de los generales, esta vez de Sección distinta e incluso de distinta Facultad.

Al terminar el curso de escolaridad mínima, los alumnos serían examinados de los cursos elegidos. Simultáneamente a los estudios o con posterioridad, el doctorando redactaría una tesis doctoral consistente en un trabajo de rigurosa originalidad en investigación científica, sobre una materia relacionada con las enseñanzas de la Facultad, que habría de suponer una aportación positiva al estudio del tema sobre el que versase. La tesis habría de estar redactada bajo la efectiva dirección de un catedrático numerario, quien propondría o aceptaría el tema elegido, garantizando la autenticidad de la labor efectuada. Asimismo, la propuesta o aceptación del tema, así como la supervisión e inspección del trabajo a realizar, podrían ser realizados por persona ajena a la Facultad siempre y cuando hubiera un catedrático de la

respectiva especialidad que aceptara asumir la dirección. Aprobadas las enseñanzas y elaborada la tesis con el visto bueno del Director, se sometería a un Tribunal formado por cinco catedráticos de la disciplina que hubiere sido objeto de la tesis, tribunal del que formaría parte el propio catedrático Director de la tesis.

Los estudios de grado de Doctor, según lo establecido en la propia Ley de Ordenación Universitaria, se podrían cursar en todas las Universidades, pero con una salvedad: siempre y cuando estuvieran establecidas las disciplinas necesarias. Sin embargo, la tesis habría de ser juzgada obligatoriamente en la Universidad de Madrid, por un Tribunal compuesto de Catedráticos de la disciplina objeto de la tesis, de las distintas Facultades de España. En el título se haría constar, no obstante, la Universidad de procedencia, debiendo ésta publicar la tesis leída por el nuevo Doctor.²²⁴

Por razones prácticas en parte, pero sobre todo por una tradición centralizadora que hacía de Madrid la culminación del sistema académico desde mediados del siglo XIX, se consideraba que la Universidad de Madrid era la única que tenía (y para algunos debía tener) debidamente organizados los estudios de Doctorado. Allí se podrían cursar las disciplinas necesarias que exigieran los planes de estudios de todas las Facultades para obtener el Grado.

Antes de una década, sin embargo, se extendió el doctorado a las demás universidades, que lo habrían de reclamar con insistencia. Dicho asunto quedaría regulado primero, por lo tanto, por el Decreto de 29 de abril de 1944 por el que se autoriza a la Universidad de Madrid para conferir el grado de Doctor (BOE 7 mayo), y por el Decreto de igual fecha por el que se daban normas, diferentes, para la concesión del Grado de Doctor en las Universidades de provincias. Pero años después se fue obteniendo aquella potestad por otras Universidades. Las primeras fueron Salamanca y Barcelona,

²²⁴ En un primer momento los tribunales tendrían lugar, exclusivamente, en Madrid, según lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Ordenación de la Universidad española, “*en tanto no se organizaran en todas las Facultades las enseñanzas de Doctorado (...) y el Ministerio de Educación Nacional no estime que las Facultades han alcanzado la debida organización para juzgar por sí propias las tesis doctorales, se aplicará la disposición transitoria cuarta de la Ley de Ordenación de la Universidad española*”.

ambas en 1953, una en noviembre y la otra en diciembre (Decreto de 6 de noviembre y Decreto de 4 de diciembre, respectivamente). No sería, sin embargo, hasta 1954 cuando finalizado el régimen transitorio, todas las Universidades quedarán facultadas para conceder el grado de Doctor, siéndolo por un Decreto de 25 de junio que regulaba el procedimiento para conferir el grado de Doctor en todas las Universidades (BOE 12 julio).

Volviendo a la normativa del 44 para la lectura de tesis doctoral, recordamos que, previo pago de los derechos correspondientes, la tesis sería estudiada y examinada durante un cuatrimestre como máximo, por los miembros del Tribunal. Terminado dicho plazo el Tribunal, en sesión secreta y sin levantar acta de la misma, decidiría, en principio, la aprobación o no de la misma. Acordada la lectura, el Tribunal se reuniría en sesión pública, con presencia del doctorando, quien expondría su trabajo y respondería a las observaciones que le pudieran hacer los miembros del Tribunal. Terminada la exposición, el Tribunal se reuniría de nuevo en sesión secreta para la adjudicación de la nota (Sobresaliente, Notable o Aprobado), de la que quedaría constancia en las actas oficiales y en el “Libro Escolar”.

Anualmente, se podrían adjudicar dos premios extraordinarios por cada Sección de la Facultad a las mejores tesis presentadas y que hubieran sido calificadas de Sobresaliente, actuando esta vez de Tribunal un órgano de tipo representativo, la Junta de Facultad.

Una vez aprobada la tesis doctoral, el alumno sería investido con el grado de Doctor. Cada año se celebrarían dos actos solemnes de investidura del grado de Doctor coincidiendo con los del grado de Licenciado, después de las convocatorias ordinarias. La investidura sólo podría llevarse a cabo previo pago de los derechos correspondientes del título, después de haber sido impresa la investigación que se hubiera presentado como tesis, y de haber entregado en la Secretaría de la Facultad veinticinco ejemplares de esa publicación.²²⁵

²²⁵ A estas alturas había quedado superada la Orden de 9 de diciembre de 1940 sobre expedición del título de Doctor (BOE 16). La citada Orden puede resultar un tanto anecdótica, pero refleja a las claras la

Profesorado

El mismo Decreto de 7 de julio de 1944 establecía las cátedras numerarias existentes en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid como propias de la Sección de Historia²²⁶:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID CÁTEDRAS NUMERARIAS DE LA SECCIÓN DE HISTORIA (1944)
Prehistoria e Historia Universal de la Edad Antigua
Prehistoria e Historia de España de la Edad Antigua
Historia Universal de la Edad Media
Historia de España de la Edad Media
Historia Universal de la Edad Moderna
Historia de España de la Edad Moderna
Historia Universal de la Edad Contemporánea
Historia de España de la Edad Contemporánea
Epigrafía y Numismática
Arqueología
Historia del Arte Medieval
Historia del Arte en las edades Moderna y Contemporánea
Historia general de la Cultura
Historia general de España
Paleografía y Diplomática
Historia de América e Historia de la Colonización española
Historia general del Arte
Dos cátedras de Geografía (con 2 catedráticos)

Finalmente, el decreto establecía que las Facultades de Filosofía y Letras, por medio del Consejo de Rectores, podrían proponer al Ministerio de Educación Nacional, cada cinco años, las modificaciones que a su juicio debieran introducirse en el plan de estudios, de ahí las modificaciones que se produjeron a principios de los años 50. En cuanto a especialización de la Sección de Historia de América, como ya se anunció en el Decreto de 7 de julio que regulaba en general los estudios de Filosofía y Letras, su plan de estudios sería objeto de disposición especial, disposición que vería la luz en 1945.

penuria que se vivía en la sociedad española de la inmediata posguerra respecto a la carencia de ciertas materias primas indispensables. Su texto aludía a que siguiendo la normativa vigente, para poder proceder a la expedición del título de Doctor, los doctorandos estaban obligados a presentar **treinta** ejemplares impresos de la tesis doctoral. Sin embargo, dada la escasez de papel, quedaban eximidos de tal requisito, con lo que se les expediría el título simplemente mediante la aprobación de la tesis.

²²⁶ Obsérvese de nuevo la relevancia concedida a la época medieval, existiendo además de las de Historia Universal y de España de la Edad Media, una cátedra específica de Arte Medieval, frente a una única cátedra con dos catedráticos de Geografía.

Un año después del anuncio realizado en el momento de elaboración del plan de estudios de la Sección de Historia, se procedía por fin a la publicación del plan de estudios de la Sección de Historia de América, mediante el Decreto de 12 de septiembre de 1945 sobre Ordenación de la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras²²⁷. Por él se determinaba la existencia de Secciones de Historia de América en las Facultades de Filosofía y Letras de Madrid, por su tradición americanista, y Sevilla, por su tradición indiana y por el hecho de atesorar allí los fondos documentales y bibliográficos del Archivo General de Indias, del de Protocolos Notariales y la Biblioteca Colombina.

En realidad, el nuevo plan de estudios dejaba ver a las claras la relevancia otorgada a la Historia americana por el nuevo estado, dentro de ese ideal imperial que se impulsaba y el renovado entronque con las antiguas colonias españolas, consideradas como parte sustancial de la identidad nacional. Tal intención se pone de manifiesto en los nuevos planes de estudio cuando, de ser una simple asignatura en los planes de 1939, los estudios “americanistas” cobrarán entidad hasta convertirse en una Sección que irá creciendo posteriormente con la creación de la Subsección de Antropología americana, ya en los años 60.

Así, las enseñanzas del periodo de Licenciatura se desarrollarían según el siguiente plan:

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS	
LICENCIATURA ESPECIALIZADA. Sección de Historia de América (1945)	
Tercer curso	
5º y 6º cuatrimestre	Lengua española y Literatura hispanoamericana
	Historia de los descubrimientos geográficos
	Historia de América prehispánica
	Introducción al estudio de las lenguas indígenas
	Curso práctico de Paleografía

²²⁷ Y su corrección de errores, Orden de 22 de octubre de 1945 por la que se rectifican errores en los artículos octavo y décimo del Decreto de 12 de septiembre último sobre Ordenación de la Sección de Historia de América.

Cuarto curso	
7º cuatrimestre	Geografía descriptiva e histórica de América
	Historia Universal en la Edad Moderna
	Historia de España en la Edad Moderna
	Historia de América en la Edad Moderna
	Historia del Arte en la Edad Moderna
8º cuatrimestre	Geografía política y económica de América
	Historia Universal en la Edad Contemporánea
	Historia de España en la Edad Contemporánea
	Historia de América en la Edad Moderna
	Historia del Arte en las Edades Moderna y Contemporánea
Quinto curso	
9º y 10º cuatrimestre	Historia de América en la Edad Contemporánea
	Historia del Arte hispanoamericano
	Historia del Derecho indiano
	Historia de la Iglesia y de las instituciones canónicas hispanoamericanas

Como cursos especiales de carácter voluntario, los alumnos podían asistir a uno de los seminarios establecidos por la Facultad y a los cursos monográficos de Doctorado.

Obtención del grado de Licenciado

Las pruebas finales para la valoración de los estudios cursados seguirían en todo lo avanzado por el Decreto de 1944, con excepción de que los Tribunales calificadores estarían formados por lo menos por tres catedráticos o profesores de la Sección de Historia de América. Las pruebas finales de Licenciatura consistirían en lo siguiente:

- a) Prueba escrita: traducción y comentario de un texto histórico inglés propuesto por el Tribunal
- b) Prueba oral: exposición durante media hora de un tema cualquiera de las disciplinas cursadas en la Sección, designado por el Tribunal.
- c) Prueba práctica: transcripción paleográfica y comentario de un documento de carácter histórico y otro de carácter histórico-jurídico. Clasificación y comentario de las dispositivas de Arqueología americana y de Arte hispanoamericano señaladas por el Tribunal. Estudio y comentario de un texto literario hispanoamericano.

Los estudios de Doctorado seguirían en todo lo establecido en los artículos 66 y 74 del Decreto sobre Ordenación de la Facultad de Filosofía y Letras. Y, en cuanto al profesorado, se disponía que las asignaturas coincidentes con las de la Sección de Historia se dictarían por los catedráticos de aquella.

En el caso concreto de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la Sección de Historia de América presentaba ciertas especificidades: la Cátedra de Historia de América prehispánica la desempeñaría un encargado de curso; de la asignatura de Historia del Derecho Indiano se encargaría el titular de Historia de las Instituciones políticas y civiles de América perteneciente a la Facultad de Derecho y, finalmente, de la de Historia de la Iglesia y de las Instituciones Canónicas hispanoamericanas, se encargaría el titular de Historia de la Iglesia o el de Derecho canónico de la Facultad de Derecho, a propuesta del Decano.

Para las demás disciplinas se creaban las siguientes Cátedras:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID CÁTEDRAS NUMERARIAS DE LA SECCIÓN DE HISTORIA DE AMÉRICA (1945)
Historia de los Descubrimientos Geográficos y de Geografía de América
Historia de América en la Edad Moderna y Contemporánea
Historia del Arte Hispanoamericano

Con posterioridad a los Planes de Estudios surgidos a raíz de la aprobación de la Ley de Ordenación universitaria del 43, superados ya los cinco años que preveía el Decreto de 7 de julio del 44 para poder introducir modificaciones, en 1953, se consideró la necesidad de publicar de nuevo los Planes de estudio, con carácter general y recopilatorio de las modificaciones parciales anteriores, dando lugar así a nuevos planes de estudios “tipo” para todas las Facultades, de los que luego derivarían adaptaciones particulares de cada Facultad en concreto.

Puesto que en el Decreto de 7 de julio de 1944 se preveía que “pasados cinco años se podrían proponer modificaciones, una vez transcurrido un

periodo prudencial de rodaje”, tras las propuestas aportadas por las Facultades y las reuniones de Decanos que contribuyeron a perfilar las líneas generales de los proyectos del Ministerio de Educación Nacional, y a su vez completados con las conclusiones de la Asamblea de Universidades y el preceptivo informe del Consejo Nacional de Educación, los elementos aportados desembocaron en la conveniencia de introducir algunas modificaciones que, según lo expuesto en su introducción, pretendían otorgar una mayor flexibilidad en cuanto a la organización de los estudios en cada Facultad. Se crearía así “un esquema tipo” que sirviera de orientación, pudiendo ser adaptado por cada uno de los centros según sus peculiaridades o necesidades. Con ello se perseguía “un nuevo sistema de mayor autodeterminación pedagógica” aunque asegurando unos mínimos comunes. Las asignaturas básicas habrían de completarse naturalmente, además, con las enseñanzas de Religión, Formación Política y Educación Física, obligatorias a partir del segundo curso.

En las Facultades de Filosofía y Letras el esquema sería ya entonces el siguiente:

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS ESTUDIOS COMUNES (1953)
Primer curso
Lengua y Literatura latinas
Lengua y Literatura griega o árabe
Lengua española
Historia Universal
Historia general del Arte
Fundamentos de Filosofía
Segundo curso
Lengua y Literatura latinas
Lengua y Literatura griega o árabe
Literatura española y sus relaciones con la Literatura Universal
Historia general de España
Geografía general

Estudios especializados de la Sección de Historia:

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia (1953)
MATERIAS BÁSICAS
Prehistoria
Etnología
Historia Universal antigua
Historia de España antigua
Arqueología
Historia Universal media
Historia de España medieval
Historia Universal moderna
Historia de España moderna
Historia Universal Contemporánea
Historia de España Contemporánea
Historia de América
Historia del Arte medieval
Historia del Arte moderno y contemporáneo
Paleografía
Diplomática
Epigrafía
Numismática
Geografía general
Geografía de España
Geografía descriptiva

Estudios especializados de la Sección de Historia de América:

FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia de América (1953)
MATERIAS BÁSICAS
Geografía de América
Historia Moderna de España
Historia Universal moderna
Historia de América prehispánica
Historia de los descubrimientos
Conquista y pacificación
Historia del periodo virreinal
Historia del Arte en la Edad Moderna
Antropología y Etnología de América
Historia contemporánea de América
Historia del Arte Hispanoamericano
Historia del Derecho indiano
Instituciones canónicas indianas
Historia de la Literatura Hispano-americana

ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS
Historia de España en la Baja Edad Media
Paleografía
Historiografía indiana
Arqueología americana
Instituciones americanas contemporáneas

El Decreto establecía asimismo un examen al final del segundo curso de estudios comunes, de manera que era imprescindible aprobarlo para poder matricularse en los cursos de Licenciatura especializada. Dicho examen constaba de las siguientes pruebas:

- a) Una de idiomas modernos, con diccionario, en la que sería obligatorio el idioma francés y a elección del alumno el inglés o el alemán.
- b) Una de lengua española, consistente en el comentario gramatical y literario de un texto.
- c) Una prueba oral consistente en el desarrollo de un tema que señalaría el Tribunal dentro del contenido de una asignatura elegida por el alumno. El Tribunal señalaría el tiempo que considerase oportuno para su realización.

Las pruebas de Licenciatura consistirían en el desarrollo por escrito de un tema que la Facultad señalaría a cada graduado, con antelación no inferior a tres meses, relacionado con la orientación que el alumno hubiera dado a sus estudios y que sería preparado bajo la dirección de un Catedrático de la Facultad. Dicho tema se expondría y defendería oralmente ante el Tribunal, que podría hacer preguntas y oponer objeciones pertinentes para comprobar la madurez de los graduados.

En lo referente a la expedición del grado de Doctor, en 1954 se decretaba el final de la exclusividad de la Universidad de Madrid para poder juzgar tesis doctorales.²²⁸ Se daba por finalizado, en consecuencia, el régimen transitorio establecido por la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 en su disposición

²²⁸ Decreto de 25 de junio de 1954 por el que se regula el procedimiento para conferir el grado de Doctor en todas las Universidades (BOE 12 julio), que establecía las normas que con carácter general debían seguir todas las Universidades para la colación del grado de Doctor.

transitoria cuarta por la que *“todas las Universidades podrían conceder el grado de Doctor en sus diversas Facultades, pero mediante concesión previa, cuando el Ministerio estimase que se había alcanzado la debida organización”*. A partir del curso 1954-1955, por lo tanto, todas las Universidades españolas podrían conferir el grado de Doctor en las Facultades y Secciones que las integraran, dando así por terminado el régimen transitorio y de discriminación, recuperado de épocas anteriores so pretexto de normalización.

Para obtener el grado de Doctor era imprescindible ahora también tener aprobados los cursos monográficos y trabajos de Seminario que se establecieran en cada Facultad, dentro de los plazos previstos. La tesis doctoral podría elaborarse y presentarse sin embargo en una Facultad diferente a aquella en la que se hubieran realizado los cursos y seminarios, siendo necesario para ello la autorización del Rectorado de la Universidad donde se deseara continuar, previo informe de las Juntas de Facultad respectivas. El Doctorando propondría al Decanato en cualquier caso un Director de tesis, cuya aceptación debía constar de forma expresa en la solicitud.

Podría ser Director de tesis doctoral cualquier Catedrático o Doctor de Universidad española, o bien un Profesor extranjero que perteneciera a un Centro equiparable a cualquier Facultad universitaria española. La designación de un Director no Catedrático de la Facultad en cuestión tendría que someterse previamente a acuerdo de la Junta de Facultad. Cuando el Director de la tesis no fuera Catedrático de la Facultad en que se fuera a presentar la tesis, el Decano tendría que nombrar a un Catedrático de aquélla como ponente.

Cumplidos los requisitos previos, quedaría depositado durante quince días, en la Sala de Juntas de la Facultad un ejemplar de del trabajo de investigación, para que pudiera ser examinado por los Catedráticos numerarios de aquella, cualquiera de los cuales podría dirigirse al Decano, mediante escrito razonado, pidiendo que la tesis fuera retirada en caso de hallar objeciones que hacerle. En caso contrario, el Decano, una vez oído el Director o ponente, sometería la admisión de la tesis a la Junta de Facultad, y si esta acordaba su trámite, propondría al Rector el nombramiento del Tribunal que la

habría de juzgar, debiendo presentar entonces el doctorando cinco ejemplares de la tesis para su defensa y lectura²²⁹.

El Tribunal estaría formado por esos cinco Catedráticos numerarios propuestos, entre los que figuraría el Director de la tesis si es que aquél fuera Catedrático o, en su caso, el ponente de la tesis. Otros tres, como mínimo, deberán ser Catedráticos de la asignatura a la que por su materia se referiría la tesis o, en su defecto, titulares de la materia. Al miembro que hacía el número cinco del tribunal, sin embargo, sólo se le exigiría el ser Catedrático. Además, si por la particularidad del tema de tesis no se pudiera reunir a tres expertos dentro de la propia Universidad, el Rector, a propuesta del Decanato respectivo, solicitará de los Rectores correspondientes la designación de Catedráticos de otras Universidades.

La defensa de la tesis se realizaría en sesión pública, y consistiría en una exposición del doctorando durante una hora de la labor realizada, fases de su investigación, análisis de fuentes bibliográficas y de toda clase de medios instrumentales de que se hubiera servido. A continuación desarrollaría el contenido de la tesis y las conclusiones a que hubiera llegado. Los miembros del Tribunal presentarían al candidato las objeciones que considerasen oportunas, debiendo éste responder según lo fijado por el Tribunal.

Las tesis deberían ser publicadas a expensas de la Universidad en que hubieran sido aprobadas. En cualquier caso, la Universidad habría de disponer del número suficiente de ejemplares para su envío a las restantes Universidades españolas y para cubrir otras necesidades de intercambio. En la publicación habría de constar el carácter de tesis doctoral, la Universidad y Facultad de obtención del grado, el Tribunal que la hubiere aprobado, la calificación otorgada, y los nombres del Director o del Catedrático ponente. El texto podría publicarse íntegro o extractado, según lo aprobado en Junta de

²²⁹ Obsérvese la diferencia en número, correspondiente en parte a la distinta extensión de los trabajos, que va creciendo paulatinamente, abandonando su secular delgadez. De 30 o 25 ejemplares en los primeros años cuarenta (obligación de la que se llegó a eximir en algún momento a los alumnos debido a la escasez de papel), se pasaría a los 5 ejemplares que, hasta tiempos más cercanos a los actuales, ha sido la norma a seguir.

Facultad, lo que se haría constar en la publicación. La publicación sería requisito previo e indispensable para la expedición del título de Doctor, por lo que el expediente que se incoara para la expedición debería contar en todo caso con un ejemplar de la obra, certificado por el Decano de la Facultad correspondiente.

A partir de este Decreto, la mención del título de Doctor en documento oficial debería indicar, necesariamente, la Universidad por la que hubiese sido otorgado.

Una vez fijados los planes “tipo” para todas las Facultades de Filosofía y Letras, la Orden de 12 de febrero de 1955 aprobaba el plan de estudios específico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS COMUNES (1955)	
Primer curso	
Lengua y Literatura latinas	
Lengua y Literatura griega o árabe	
Lengua española	
Historia Universal	
Historia general del Arte	
Fundamentos de Filosofía	
Segundo curso	
Lengua y Literatura latinas	
Lengua y Literatura griega o árabe	
Literatura española y sus relaciones con la Literatura Universal	
Historia general de España	
Geografía general ²³⁰	
Historia de los sistemas filosóficos	

Estudios especializados de la Sección de Historia²³¹:

²³⁰ Asignatura introducida por la Rectificación a la Orden de 12 de febrero de 1955 que aprobaba el plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 22 marzo)

²³¹ Establecida por la Orden de 30 de marzo de 1955 que aprueba el plan de estudios del periodo de Licenciatura especializada en la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 11 de abril)

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia (1955)	
Tercer curso (1º especialidad)	Prehistoria
	Etnología
	Geografía general
	Arqueología
	Epigrafía
	Historia universal
	Historia de España antigua
Cuarto curso (2º especialidad)	Historia de las religiones
	Historia Universal media
	Historia de España media
	Historia del Arte medieval árabe y cristiano
	Numismática
	Paleografía
	Diplomática
Quinto curso (3º especialidad)	Geografía de España
	Historia Universal moderna
	Historia de España moderna
	Historia Universal contemporánea
	Historia de España contemporánea
	Historia de América
	Historia del Arte moderno y contemporáneo
	Geografía Descriptiva

Estudios especializados de la Sección de Historia de América²³²:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia de América (1955)	
Tercer curso (1º especialidad)	Geografía de América
	Historia de España en la Baja Edad Media
	Antropología y Etnología de América
	Historia Moderna de España
	Historia Universal Moderna
	Paleografía
Cuarto curso (2º especialidad)	Historia de los descubrimientos
	Historia de América prehispánica ²³³
	Historia del Arte en la Edad Moderna

²³² Establecidos por la Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se aprueban los planes de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 6 marzo)

²³³ Asignatura modificada por la Orden de 30 de marzo de 1955 que rectifica el plan de estudios de la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE de 11 de abril). En lugar de denominarse “Historia de la América prehispánica” pasa a denominarse “Historia de la América prehistórica” y se añade la de “Historia de las religiones indígenas”. Posteriormente la Rectificación a la Orden de 30 de marzo de 1955 que corregía el plan de estudios de la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE de 22 de abril), vuelve a reconocer un error de imprenta y señala que donde se decía “Historia de América prehistórica”, realmente debía decir “Historia de América prehispánica”

	Conquista y pacificación
	Historiografía indiana ²³⁴
	Historia del Derecho indiano
	Historia de las religiones indígenas
Quinto curso (3º especialidad)	Historia del periodo virreinal
	Historia contemporánea de América
	Historia del Arte hispanoamericano
	Instituciones canónicas indianas
	Historia de la Literatura hispanoamericana
	Arqueología americana
	Instituciones americanas contemporáneas

Los alumnos podrían cursar además, con carácter voluntario, la asignatura “Historia de las Religiones”

La Orden de 20 de enero de 1960 disponía, a partir del curso 1959-60, la supresión del examen intermedio en los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras²³⁵, que había quedado establecido por el Decreto de 11 de agosto de 1953. Los años finales de la década de los sesenta, en cuanto a Planes de estudio, suponen un camino lento pero inexorable hacia una mayor especialización de las enseñanzas. La Orden de 7 de julio de 1967 suponía la creación de una nueva Sección en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la Sección de Arte²³⁶.

SECCIONES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COMPARATIVA		
1939	1944	1967
Filosofía	Filosofía	Filosofía
Historia	Historia	Historia
	Historia de América	Historia de América
		Arte
Letras	Filología románica	Letras
	Filología clásica	
	Filología semítica	
	Pedagogía	

²³⁴ Asignatura modificada por la Rectificación a la Orden de 15 de febrero de 1955 que aprobaba los planes de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 25 de marzo). En lugar de Historia indiana, ha de ser Historiografía indiana.

²³⁵ Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 23 de febrero

²³⁶ Orden de 7 de julio de 1967 por la que se crea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid la “Sección de Arte” (BOE 14 agosto)

Dicha Sección tendría el Plan de Estudios que se sigue.²³⁷

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Arte (1967)	
Tercer curso (1º especialidad)	Asignaturas básicas, obligatorias
	Arte Prehistórico y Primitivo
	Arte del Próximo Oriente
	Arte Clásico
	Estética
	Asignaturas optativas
	Historia antigua universal
	Historia antigua de España
	Filosofía griega
	Etnología
	Epigrafía
Cuarto curso (2º especialidad)	Asignaturas básicas, obligatorias
	Arte cristiano antiguo medieval
	Arte árabe
	Arte del renacimiento
	Arte barroco
	Asignaturas optativas
	Historia medieval universal
	Historia medieval de España
	Historia moderna universal
	Historia moderna de España
	Historia del Islam
	Instituciones y cultura islámicas
	Lengua árabe
	Literatura medieval
	Filosofía medieval
	Filosofía moderna
	Paleografía
	Numismática
Quinto curso (3º especialidad)	Asignaturas básicas obligatorias
	Arte del siglo XIX y XX
	Arte americano prehispánico
	Arte hispanoamericano
	Arte indio y del Extremo Oriente
	Asignaturas optativas
	Historia contemporánea universal
	Historia contemporánea de España
	Filosofía contemporánea

²³⁷ Orden de 1 de agosto de 1967 por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Sección de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 9 octubre). Curiosamente, el plan de estudios de la Sección de Arte aún cuando se aprobó inmediatamente después de la creación de la nueva Sección, el 1 de agosto, su publicación se retrasó hasta el 9 de octubre del mismo año de 1967. Incluso se publicó antes una modificación del de Historia de América que se había aprobado con posterioridad.

	Historia de la música
	Antropología y Etnología de América

En los cursos de especialidad el alumno debería elegir una asignatura de entre las optativas, y en tercer curso (primero de especialidad) debería pasar una prueba de traducción de francés, inglés o alemán.

El Departamento²³⁸ organizaría, como mínimo, cuatro cuatrimestres de enseñanzas monográficas para cada curso. De entre estos temas, se procuraría que los abordados en cada curso de especialidad tuvieran relación con las siguientes materias:

- *Tercer curso* (primero de especialidad): Mitología oriental y clásica, Artes decorativas en la antigüedad, Arte griego, Arte etrusco o romano, Arte español antiguo o cualquier otro de carácter monográfico relativo a la antigüedad.
- Cuarto curso* (segundo de especialidad): Iconografía, Artes decorativas y cualquier otro referente al Arte medieval y moderno.
- Quinto curso* (tercero y último de especialidad): Arte contemporáneo, Artes decorativas, Museografía, Conservación y restauración de obras de arte, Ideas estéticas del s. XX, Historia de la crítica e Historia de las artes audiovisuales.

Cada curso constaría de tres horas de clases teóricas diarias, dieciocho semanales, de las que doce corresponderían a asignaturas básicas y las otras seis, a las optativas y cuatrimestrales. El plan de materias optativas de cada alumno después del tercer curso habrá de ser aprobado por la Sección. Podría estudiarse la convalidación de asignaturas cursadas en la Escuela Superior de Bellas Artes, Escuela Superior de Arquitectura o algún otro Centro de carácter superior, si esas asignaturas no se cursasen en la Facultad.

El Decreto de 11 de agosto de 1953 que establecía los Planes de estudio “tipo”, recogía en su artículo veinte; “*Las distintas Facultades a que se*

²³⁸ Recuérdese que se habían creado en 1965, por la Ley 83/1965.

refiere el presente Decreto podrán proponer al Ministerio de Educación Nacional aquellas modificaciones respecto a los planes que aquí se regulan, que estimen convenientes, a fin de adaptarlos a su propia orientación y peculiaridades docentes y científicas, sin perjuicio de las enseñanzas básicas". Por tal motivo, en el camino que llevaba cada vez a una especialización mayor, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la Orden de 24 agosto de 1967²³⁹ planteaba una modificación respecto al de la Licenciatura especializada de la Sección de Historia de América de 1955, creándose ahora la Subsección de Antropología Americana.

El nuevo plan quedaba así:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia de América (1967) Modificación	
Tercer curso (1º especialidad)	Asignaturas básicas, obligatorias
	Geografía de América
	Historia de los descubrimientos geográficos
	Historia de América prehispánica
	Paleografía y Diplomática hispanoamericana
	Asignaturas optativas
	Instituciones españolas en la Baja Edad Media
	Teoría y Métodos de la Historia
	Geografía descriptiva
	Historia del arte español
Cuarto curso (2º especialidad)	Asignaturas básicas, obligatorias
	Historia de la Literatura hispanoamericana
	Historia de América en la Edad Moderna
	Historia del Derecho indiano
	Historia de España en la Edad Moderna
	Asignaturas optativas
	Historia de Filipinas
	Historia de la Edad Moderna
	Historia de la Cultura indiana
	Historia de la Literatura española en la Edad Moderna
Quinto curso (3º especialidad)	Asignaturas básicas obligatorias
	Historia de la Iglesia en América o Instituciones Canónicas
	Historia de América en la Edad Contemporánea
	Historiografía americana

²³⁹ Orden de 24 de agosto de 1967 que modificaba el Plan de estudios de la Licenciatura especializada en la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 27 de septiembre).

	Arte hispanoamericano
	Asignaturas optativas
	Historia del pensamiento hispanoamericano contemporáneo
	Historia económica americana
	Historia de la América anglosajona
	Historia de España en la Edad Contemporánea
	Historia Universal de la Edad Contemporánea

Los alumnos deberían escoger una asignatura entre las optativas de los cursos primero y segundo de especialidad y dos entre las del tercer curso de especialidad.

Los estudios del periodo de Licenciatura especializada en la Subsección de Antropología Americana se ajustarán al siguiente plan:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia de América (1967) Subsección de Antropología Americana	
Tercer curso (1º especialidad)	Geografía de América
	Historia de los descubrimientos geográficos
	Historia de América prehispánica
	Antropología y Etnología de América
	Antropología general
Cuarto curso (2º especialidad)	Asignaturas básicas, obligatorias
	Historia del Derecho indiano
	Historia de Filipinas
	Historia de América en la Edad Moderna
	Arqueología americana
	Etnohistoria de América
	Asignaturas optativas
	Antropología física
	Etnografía ibérica
	Culturas preincaicas
Quinto curso (3º especialidad)	Antropología social y aplicada
	Asignaturas básicas obligatorias
	Historia de América en la Edad Contemporánea
	Paleografía y Diplomática hispanoamericana
	Historiografía indiana
	Asignaturas optativas
	Cultura incaica
	Cultura maya
	Cultura azteca
	Lingüística

Los alumnos podrían elegir en los cursos segundo y tercero de especialidad una asignatura de entre las optativas que se detallan. Para poder matricularse en el tercer año (primero de especialidad) los alumnos deberían haber aprobado todas las materias que constituyen los dos años de estudios comunes. Como novedad, al finalizar los estudios los alumnos deberían presentar una tesina o trabajo de licenciatura.

Acogiéndose al mismo artículo del Decreto de 1953, también los estudios generales de Historia caminaban hacia una mayor especialización. La Orden de 21 de octubre de 1968 aprobaba el plan de estudios de la Sección de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid²⁴⁰. Dicha Sección constaría de tres cursos integrados por disciplinas comunes a todas las especialidades posibles en ella y disciplinas propias de cada especialidad, divididas a su vez en obligatorias -para todos los alumnos de una especialidad- y optativas, de manera que permitieran al alumno seleccionar libre y voluntariamente entre ellas.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID NUEVAS ESPECIALIDADES DE LA SECCIÓN DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA (1968)	
	Historia de la Edad Antigua
	Historia de la Edad Media
	Historia de la Edad Moderna y Contemporánea
	Geografía

Las materias comunes y obligatorias para los alumnos de todas las especialidades de la Sección serían:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia y Geografía (1968)	
Materias comunes y obligatorias para todas las especialidades	
Tercer curso (1º especialidad)	Prehistoria
	Historia Universal de la Edad Antigua
	Geografía física
	Geografía humana
	(Más seis horas semanales del primer curso de la especialidad que se recogen en el cuadro siguiente)

²⁴⁰ Publicada en el BOE de 21 de noviembre

Cuarto curso (2º especialidad)	Historia de España de la Edad Media
	Geografía de Europa
	Geografía de España
	(Más nueve horas semanales del segundo curso de la especialidad que se recogen en el cuadro siguiente)
Quinto curso (3º especialidad)	Historia de España de la Edad Moderna
	Historia de España de la Edad Contemporánea
	Geografía del mundo (menos Europa)
	(Más nueve horas semanales del tercer curso de la especialidad que se recogen en el cuadro siguiente)

Aparte de las disciplinas comunes, que con carácter obligatorio deberían ser cursadas por todos los alumnos de la Sección, éstos escogerían una de las especialidades de la misma, siguiendo en ella las enseñanzas precisas para reunir dieciocho horas de clases semanales. Las materias propias de cada especialidad eran:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID ESTUDIOS ESPECIALIZADOS. Sección de Historia y Geografía (1968)		
Materias propias de cada especialidad		
Especialidad de <i>Historia Antigua</i>		
Tercer curso (1º especialidad)	Historia de España en la Edad Antigua	
	Historia del Antiguo Oriente	
Cuarto curso (2º especialidad)	Epigrafía	
	Arqueología	
	Textos griegos Textos latinos	(optativas, una a elegir entre ellas)
Quinto curso (3º especialidad)	Numismática	
	Etnología Historia Universal de la Edad Media Historia de las Religiones	(optativas, una a elegir entre ellas)
	Derecho e Instituciones romanas Antropología Geografía	(optativas, una a elegir entre ellas)
Especialidad de <i>Historia de la Edad Media</i>		
Tercer curso (1º especialidad)	Paleografía	
	Latín medieval Historia de España en la Edad Antigua	(optativas, una a elegir entre ellas)
Cuarto curso (2º especialidad)	Historia Universal de la Edad Media	
	Diplomática	
	Historia de la Iglesia Historia del Islam	(optativas, una a elegir entre ellas)

Quinto curso (3º especialidad)	Historia del Arte medieval árabe y cristiano	
	Numismática	
	Historia del Derecho español Historia Universal de la Edad Moderna	(optativas, una a elegir entre ellas)
Especialidad de <i>Historia de las Edades Moderna y Contemporánea</i>		
Tercer curso (1º especialidad)	Paleografía	
	Sociología Historia Universal de la Edad Media	(optativas, una a elegir entre ellas)
Cuarto curso (2º especialidad)	Historia Universal de la Edad Moderna	
	Historia de América y de la colonización española	
	Historia económica de España Historia de las ideas y de las formas políticas	(optativas, una a elegir entre ellas)
Quinto curso (3º especialidad)	Historia Universal de la Edad Contemporánea	
	Historia del Arte moderno y contemporáneo	
	Derecho político Derecho internacional público Numismática	(optativas, una a elegir entre ellas)
Especialidad de <i>Geografía</i>		
Tercer curso (1º especialidad)	Economía	
	Fundamentos de Geología Etnología	(optativas, una a elegir entre ellas)
Cuarto curso (2º especialidad)	Geografía agraria	
	Historia del Arte moderno y contemporáneo	
	Geología dinámica (previa aprobación de Economía)	(optativas, una a elegir entre ellas)
Quinto curso (3º especialidad)	Geografía urbana e industrial	
	Historia Universal Contemporánea	
	Geografía aplicada Sociología	(optativas, una a elegir entre ellas)

Tanto las disciplinas comunes como las de la especialidad (obligatorias y optativas) tendrían una duración de tres horas semanales durante todo el curso. El número máximo de clases teóricas semanales en cada uno de los cursos sería de dieciocho.

Los alumnos podrían solicitar a la Junta de Sección cursar en lugar de una materia opcional de su especialidad, otra asignatura explicada en la Universidad de Madrid que a juicio de la Junta completara mejor su formación. Ciertas materias no existentes en ese momento en la Facultad de Filosofía y Letras podrían cursarse en otras Facultades en cuyo plan de estudios

aparecieran, o bien a través de Encargados de curso en la Facultad de Filosofía y Letras, de acuerdo con aquello que se estimara más conveniente tanto académica como administrativamente. Posteriormente, la Orden de 15 de julio de 1969²⁴¹ incluiría la asignatura de “Teoría y método de la Historia” con carácter optativo en el plan de estudios de quinto curso de la Sección de Historia, de la Universidad de Madrid.

En 1969 el Decreto 1419, de 26 de junio, refundía normas sobre el curso selectivo en las Facultades Universitarias²⁴². La implantación del curso selectivo a partir de 1953 se había llevado a cabo en las diferentes Facultades españolas a través de una serie de disposiciones dispersas²⁴³ de manera que habían dado lugar a diferencias injustificadas entre las distintas Facultades, extendiendo en dos años el periodo de selección en la de Filosofía y Letras y omitiendo su aplicación en la de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales.

Por ello se consideró necesario unificar disposiciones en un solo texto dando igualdad de trato a la Facultad de Filosofía y Letras, y extendiendo este curso a la única Facultad en que no se hallaba establecido, en previsión de una futura ley que permitiera un sistema homogéneo de estudios nocturnos. La nueva Orden venía a aclarar cierta confusión provocada por el hecho de que la Orden de 20 de enero de 1960 eliminaba el examen intermedio establecido por el Decreto de 11 de agosto del 53, pero manteniendo la obligación de aprobar los dos cursos comunes de las Facultades de Filosofía y Letras para poder pasar a los cursos de especialidad y, sin embargo, no se citaba expresamente en la relación de normas derogadas por el Decreto 1419/1969, con lo que planteaba dudas respecto a su vigencia.

²⁴¹ Orden de 15 de julio de 1969 por la que se autoriza la inclusión de la asignatura de “Teoría y método de la Historia”, con carácter optativo, en el Plan de Estudios del quinto curso de la Sección de Historia de la Universidad de Madrid (BOE 20 de agosto)

²⁴² Publicado en el BOE de 17 de julio.

²⁴³ - Decreto de 11 de agosto de 1953, art. 4º y 19º (BOE 29)

- Decreto 1684/1965 de 3 de junio, art. 3º (BOE 26)

- Decreto 1105/ 1967 de 31 de mayo, art. 6º (BOE 1junio)

- Orden ministerial de 31 de mayo de 1968 (BOE 21 junio)

- Orden ministerial de 10 de septiembre de 1968 (BOE 28)

- Orden ministerial de 11 de enero de 1968 (BOE del 26),

Se disponía pues, en ese otro momento, que en todas las Facultades Universitarias el primer curso tendría carácter de selectivo, debiendo ser aprobado en su integridad para matricularse en el curso siguiente. Los alumnos oficiales podrían presentarse hasta en cuatro convocatorias. De no superarse, deberían optar por matricularse en enseñanza libre durante otras dos convocatorias, y si tampoco las superasen, habrían de cambiar de estudios, no pudiendo matricularse en Facultades o Escuelas Técnicas Superiores que tuvieran el mismo curso selectivo. Todas las pruebas del curso selectivo se calificarían mediante una valoración de conjunto del aprovechamiento del alumno sobre la base del sistema de compensación. Se valoraría globalmente la capacidad y el rendimiento. Los exámenes en última convocatoria, ya fuera oficial o libre, se realizarían ante Tribunal para cada asignatura.

Para los alumnos extranjeros se establecía un examen para probar el conocimiento suficiente de la lengua castellana, de imprescindible superación para poder matricularse.²⁴⁴

Los estudios no facultativos en la Universidad española

En esos primeros momentos, tras la Ley del 43, también se hizo preceptivo organizar los estudios de formación religiosa, política y física, ya que precisamente, eran las tres materias genuinas de la Universidad franquista y casi podemos decir que lo verdaderamente “original” de una ley en la que subyacía en gran medida el anterior modelo liberal.

Con la Ley de Ordenación Universitaria del 43 la Iglesia había conseguido ocupar un lugar preeminente en todos los niveles educativos, y conservando su influjo en secundaria, parecía ahora particularmente intenso su peso en el nivel superior, donde tendría una presencia sustancial. Además de la existencia de símbolos, centros religiosos en las universidades, de realización de la misa y el culto, y de la introducción de representantes en los

²⁴⁴ El Decreto estableciendo las normas del curso selectivo fue confirmado por la Orden de 4 de abril de 1970 (BOE 14) que derogaba la del 20 de enero de 1960 y establecía la obligatoriedad de aplicar todo lo contenido en el artículo 1º del Decreto 1419/1969, de 26 de junio.

órganos de gobierno de la Universidad, la religión católica se hará presente con fuerza en los planes de estudios, impartándose como una asignatura más de carácter obligatorio, la cual sería necesario aprobar para superar cada curso. Pero además la Iglesia va a conseguir incluso contar con un nutrido cuerpo de profesores de religión.

Un decreto de enero de 1944²⁴⁵ recogía como una necesidad “manifiesta y urgente” el implantar cátedras de Religión en la Universidad española, con el fin “*de dotar a todos los alumnos universitarios de la ilustración religiosa que su cultura superior exige y sin la cual ni siquiera les sería dado entender nuestra literatura; de facilitarles los conocimientos de la ciencia sagrada, que han de ser sólido y perdurable cimiento de su educación moral; de formar a futuras clases directoras de la Patria a tono con las tradiciones seculares más arraigadas, con el espíritu animador de nuestra triunfadora Cruzada y los nobles afanes de nuestros siglos más gloriosos*” (...) Porque, a entender del legislador, “*La naturaleza misma de la enseñanza religiosa impone la subordinación más completa y leal al Magisterio de la Iglesia Católica y a lo dispuesto en sus Sagrados Cánones, no sólo en lo que mira a la aprobación del personal docente y a la estimación de la competencia e idoneidad de los que hayan de recibir el nombramiento de profesores a quienes tan alta misión se confíe, sino también por lo que toca a la vigilancia sobre la pureza de la doctrina y el fruto provechoso de su enseñanza. Todo ello lo debe poner en manos de la Jerarquía eclesiástica un Estado que se ufana de ser y llamarse católico.*” Así, se establecía en las Universidades españolas la enseñanza religiosa conforme a la doctrina católica, que iba a permanecer omnipresente en los estudios del grado superior. La asistencia a los cursos de dicha enseñanza sería obligatoria para todos los alumnos universitarios, siendo su régimen de matrícula y pruebas finales semejantes a las de las demás disciplinas universitarias. Los profesores de enseñanza religiosa habrían de ser sacerdotes autorizados por la jerarquía eclesiástica y tendrían la misma consideración académica que los Catedráticos numerarios, con igual remuneración. La materia se impartiría durante los cuatro primeros cursos de

²⁴⁵ Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se establece en las Universidades españolas la enseñanza religiosa (BOE 8 febrero) y su rectificación (BOE 22 febrero)

cada Facultad, a razón de una hora a la semana durante el primer cuatrimestre, y según el siguiente plan:

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA (1944)
Primer curso
Criteriología religiosa
Eclesiología
Segundo curso
Dogma
Tercer curso
Moral general
Derecho público eclesiástico
Cuarto curso
Deontologías profesionales
Temas selectos de investigación teológica

Las pruebas correspondientes tendrían lugar en el mes de febrero de cada año. En cuanto a otras garantías, diremos que la enseñanza religiosa se confiaría a profesores con condiciones específicas, para cuyo nombramiento serán requisitos indispensables:

a) Ser sacerdote en posesión de un grado mayor concedido por Universidad eclesiástica, o equivalente en su Orden cuando se tratase de religiosos.

b) Haber sido declarado apto para esta misión por la jerarquía eclesiástica, habida cuenta de sus méritos, obras publicadas y cualidades pedagógicas mediante las pruebas que la autoridad eclesiástica estimase convenientes.

En cada Universidad existiría un Director de Formación religiosa, nombrado por el Ministerio de Educación a propuesta del Ordinario de la Diócesis en que radicara la Universidad, y previo informe al Rector, un cargo académico cuyas funciones consistirían en organizar las enseñanzas de cultura superior religiosa y vigilar su desarrollo, además de impulsar la creación de la Sección propia de Bibliotecas y Seminarios de trabajo, ejercer la superior dirección e inspección de todas las prácticas religiosas y de las Instituciones

religiosas o piadosas establecidas con carácter universitario, ocuparse de la ejecución de las decisiones rectorales sobre asuntos de formación religiosa, y llevar la asesoría religiosa del SEU, el sindicato de estudiantes falangista²⁴⁶. Siempre que se trataran asuntos que pudieran afectar a sus cometidos, el Director de Formación formaría parte de la Junta de Gobierno y sería convocado por el Rector.

En el mes de marzo de 1944 varias órdenes disponían ya el comienzo de la enseñanza religiosa en todas las Universidades, en concreto a partir del día 8 de ese mismo mes de marzo, y nombraban los primeros profesores de la asignatura.²⁴⁷ En el mismo 1944, otras dos Órdenes, de 4 de marzo y de 27 de octubre respectivamente nos permiten conocer con todo detalle el programa pormenorizado que habría de seguir aquella asignatura de enseñanza religiosa en los dos primeros cursos²⁴⁸:

PRIMER AÑO
I.- CRITERIOLOGÍA RELIGIOSA
Religión
Revelación divina
Criterios de la revelación divina. Su necesidad
Principales religiones positivas, menos la Cristiana
Revelación cristiana
Aplicación de los criterios a la revelación cristiana
II.- ECLESIOLOGÍA
Iglesia de Jesucristo
Dotes y notas de la Iglesia de Jesucristo
Iglesia Católica
Romano Pontífice
Episcopado Católico
Fuentes de la revelación divina

²⁴⁶ Véase RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *El Sindicato Español Universitario*, cit.

²⁴⁷ Orden de 3 de marzo de 1944 que disponía el comienzo de la enseñanza religiosa en todas las Universidades a partir del día 8 de ese mismo mes y Órdenes de 3 y 4 del mismo mes y año de 1944 que nombraban los primeros profesores de la asignatura, todas ellas publicadas en el BOE del 5 de marzo.

²⁴⁸ BOE del 5 de marzo y 11 de noviembre respectivamente. Se transcriben aquí sólo los enunciados debido a lo prolijo del programa al completo, si bien en el texto de las Órdenes aparecen ampliamente desarrollados.

SEGUNDO AÑO
I. DOGMA
Dios Uno y Trino
Dios Creador
Creación y elevación del hombre al orden sobrenatural
Caída del hombre
Dios Redentor
La Virgen María
Dios Santificador (I)
Dios Santificador (II)
Sacramentos (I)
Sacramentos (II)
Sacramentos (III)
Novísimos

La preocupación por acercar la educación religiosa a todos los ámbitos, en ocasiones llevaba a los legisladores a tener que justificar política, social y moralmente su implantación en determinados estudios, como sucedió por ejemplo en las Escuelas de Ingenieros Industriales, de Minas, Montes, Agrónomos, Navales, de Arquitectura y de Altos Estudios Mercantiles: *“Concurre en ellos la peculiar circunstancia de que en un futuro próximo, han de dirigir masas obreras, y esto evidencia la urgente necesidad de que dichos alumnos se penetren, de modo especialísimo, de la profunda sustancia social que encierran las enseñanzas evangélicas y las Encíclicas de los Pontífices”*.²⁴⁹ Solo a finales de los años sesenta, la Ley 44/1967 reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa constataba la evolución social y de creencias habida en España, evolución a la que no se podía sustraer la educación, de manera que abriría la posibilidad de crear centros donde se impartiera enseñanza de otras confesiones religiosas.

²⁴⁹ Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se implanta la enseñanza religiosa en las Escuelas de Ingenieros... (BOE 21 octubre)

Educación Física

Un Decreto de marzo de 1944²⁵⁰ ponía de manifiesto la necesidad de la práctica de la educación física para “alcanzar la formación completa de la personalidad del escolar”. Entre las razones aducidas, estaba la clásica alusión al ideal platónico, según puede seguirse en los párrafos siguientes: *“el ordenado ejercicio físico, en cuanto significa un cambio de ocupación, despierta empeño y energía en la vuelta al estudio” (...), “excita el espíritu a la previsión, en tanto que la práctica racional proporciona seguridad de juicio por el hábito de aprovechar valiosamente las circunstancias” (...), “contribuye a subrayar poderosamente el perfeccionamiento moral cifrado en el valor y en la audacia para el vencimiento de la dificultad, en el dominio propio, en el sacrificio por el bien común que significa el conjunto deportivo, en el cultivo de la calma y de la serenidad, tan imprescindibles para las luchas de la vida interior; en el reconocimiento de la autoridad y en la entrega alegre y subordinada a la disciplina; es decir, en todo aquello que se dirige a la educación del espíritu de compañerismo y que aguza en finas calidades el sentido de la responsabilidad”.*

La práctica de la educación física no podía ser esporádica y puntual, sino que debería estar en adecuada conexión con las tareas docentes, y llevarse a la práctica en el marco de los recintos universitarios. Por ello se la habría de hacer obligatoria a lo largo de los estudios y para todos los alumnos, siendo necesaria para la continuación de los mismos la obtención de certificados anuales de haber conseguido el aprobado en la materia. Dicha asignatura se impartía a razón de tres horas semanales durante el primer cuatrimestre, estableciéndose la coordinación necesaria entre las prácticas de Educación Física y las enseñanzas facultativas. Las pruebas o exámenes, igual que en el caso de la formación religiosa y la formación política, se llevarían a cabo en el mes de febrero, con recuperaciones en junio o septiembre, sin necesidad de repetir las enseñanzas. Eso sí, se establecía la *debida*

²⁵⁰ Decreto de 29 de marzo de 1944 por el que se establecen en las Universidades cursos de Educación Física para los escolares (BOE 10 abril).

separación entre la educación física masculina y femenina. Los ejercicios prácticos comprendían tablas de gimnasia y deportes distintos según se tratara de estudiantes masculinos o femeninos, y siempre se practicaban por separado.

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EDUCACIÓN FÍSICA (1944)	
ALUMNAS	ALUMNOS
Obligatorios	Obligatorios
Gimnasia educativa	Gimnasia educativa
Gimnasia rítmica	Gimnasia de aplicación
Bailes populares	Atletismo (marcas mínimas)
	Natación (marcas mínimas)
Optativos	Optativos
Baloncesto	Baloncesto
Balonmano	Balonmano
Hockey	Hockey
Tenis	Rugby
Cualquier otro a determinar	Tenis
	Pelota vasca
	Remo
	Esgrima
	Esquí
	Montaña
	Cualquier otro a determinar

Para la implantación de los planes de Educación Física se crearía la Junta Nacional de Educación Física, formada por el Director General de Enseñanza Universitaria, un Catedrático de Fisiología designado por el Ministerio, un representante de la Delegación Nacional de Deportes y un representante de la Jefatura Nacional del SEU. En cada Universidad se crearía una Junta de Educación Física, directamente dependiente de la Nacional, presidida por el Rector y con representantes del profesorado, de la Dirección de Formación Religiosa Universitaria, de la Delegación Nacional de Deportes y del SEU.

El Profesorado lo nombraría el Ministerio, a propuesta de la Jefatura Nacional del Sindicato Español Universitario, con el informe de los respectivos Rectores. Con igual procedimiento se designaría un Profesor para cada

Universidad, que ejercería la función de Director de este Servicio en el respectivo Distrito Universitario. Dichos profesores habrían de estar en posesión de un título facultativo o técnico de grado superior o ser Diplomados de la Escuela Central de Gimnasia del Ministerio del Ejército²⁵¹, y los certificados de aptitud los expediría el Director del Servicio en cada Universidad. Los alumnos universitarios deberían abonar obligatoriamente cada curso, la cantidad que se estipulara reglamentariamente en concepto de inscripción en la asignatura de Educación Física.

Solo quedarían exceptuados de las prácticas deportivas los alumnos que no reunieran las debidas condiciones físicas, que sin embargo, quedaban sometidos a la vigilancia y dirección convenientes para su mejor desarrollo corporal. También podrían quedar exceptuados, previo abono de los derechos correspondientes, los alumnos con dispensa de escolaridad en sus estudios; los que tuvieran convalidados estudios realizados en el extranjero; los que tuvieran derecho a continuarlos por planes antiguos; los militares profesionales, los clérigos y los religiosos.

La década de los sesenta trajo novedades en lo que respecta a la Educación Física. La publicación de la Ley 77/1961²⁵² supondría un cambio de concepción en cuanto a la práctica deportiva, concebida ahora ya no sólo como un deber, sino también como un derecho. Aunque no se desprendía de la dependencia de la Iglesia, del Ejército y de instituciones franquistas varias²⁵³, mediante la citada ley se intentaba reorganizar la práctica y educación deportiva, se recogía y racionalizaba la normativa dispersa dada anteriormente, al tiempo que se creaban organismos específicos destinados a su impulso y gestión.

²⁵¹ De nuevo, el régimen se aseguraba otra vía para mantener la presencia del ejército en el ámbito universitario.

²⁵² Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física (BOE 27)

²⁵³ En alusión a la Iglesia dice *“la doctrina de la Iglesia a este respecto, manifestada especialmente por los tres últimos Papas, es verdaderamente aleccionadora”* y recoge las palabras de Juan XXIII con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en Roma. En relación al Ejército le señala como *“verdadero iniciador e impulsor de esta disciplina, creando en la segunda década de este siglo la Escuela Central de Educación Física”*. Finalmente, se alude también al Movimiento Nacional, la Sección Femenina, el Frente de Juventudes, el SEU, la Organización Sindical, la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes...”

En cualquier caso la educación física se entendía como parte fundamental de la educación española y, en calidad de tal, seguirá siendo obligatoria en todos los grados de enseñanza. El Ministerio de Educación Nacional sería el encargado de dictar las normas necesarias para hacer efectiva la educación física en los distintos grados de la enseñanza.

En lo que nos atañe específicamente, se señalaba que la función docente de la educación física en los centros de enseñanza habría de ser desempeñada por Maestros instructores de Educación Física y Entrenadores deportivos. El personal docente de Educación Física habría de poseer el título correspondiente de la especialidad, expedido por el Instituto Nacional de Educación Física o Escuelas oficialmente reconocidas. El profesorado de Educación Física sería designado por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de las Delegaciones Nacionales de la Sección Femenina y de Juventudes, así como del SEU, seleccionándolo de entre los solicitantes que acreditasen estar en posesión del título.

Formación Política

Como se vio al analizar la Ley del 43, la formación política suponía el ámbito de actuación más claramente encomendada al partido, a Falange, auténtico medio de adoctrinamiento de la población estudiantil, tal y como se desprendía del Decreto de 29 de marzo de 1944²⁵⁴ que regulaba la formación política en las Universidades.

El régimen de Franco consideraba la formación política como parte irrenunciable de la integridad educativa de la Universidad, al tiempo que ésta se consideraba a su vez en la *“obligación de ejercer magisterio sobre todo aquello que, rebasando los límites estrictos de cada saber particular, afecta al íntegro conjunto de la vida del hombre”*. Así se daba por sentado que la Universidad había de fomentar la conciencia activa del servicio a Dios y a la

²⁵⁴ Decreto de 29 de marzo de 1944 por el que se establecen en las Universidades cursos para la formación política de los escolares (BOE 10 abril)

Patria. De manera que los cursos de formación política tendrían carácter obligatorio y gozarían de una consideración semejante al resto de las disciplinas. Dichas enseñanzas se impartirían en tres cursos paralelamente al resto de las asignaturas, según el siguiente plan:

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA FORMACIÓN POLÍTICA (1944)
Primer curso
<i>La esencia de lo español, su olvido y su recuperación</i> Primera parte: <i>La esencia de lo español</i> Segunda parte: <i>Lo antiespañol en la Historia</i> Tercera parte: <i>El Movimiento Nacional, como esfuerzo para la recuperación de lo español</i>
Segundo curso
<i>La realidad económica, social y política de España</i> Primera parte: <i>La realidad económica de España</i> Segunda parte: <i>La realidad social de España</i> Tercera parte: <i>La realidad política de España</i> Cuarta parte: <i>La política exterior de España</i>
Tercer curso
<i>La empresa del Movimiento Nacional</i> Primera parte: <i>La nueva organización económica</i> Segunda parte: <i>La nueva organización social</i> Tercera parte: <i>Organización político-administrativa del nuevo Estado</i> Cuarta parte: <i>Misión de España en el mundo</i>

Las lecciones que componían cada curso, a razón de una hora a la semana, se impartirían durante el primer cuatrimestre y se completarían con algunas conferencias encargadas a personas de especial significación cultural y política. Todo ello habría de tenerse en cuenta para poder coordinarse con el resto de enseñanzas facultativas.²⁵⁵ Al final del primer cuatrimestre, en el mes de febrero de cada año, se celebrarían las pruebas de aprovechamiento de conjunto para cada curso, que eran de carácter obligatorio, con calificaciones análogas al resto de enseñanzas. Se llevarían a cabo ante Tribunales designados por el Rector, a propuesta del Jefe de Distrito Universitario del SEPES (Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior), tribunales

²⁵⁵ Todo ello quedaría regulado por la Orden de 24 de noviembre de 1945 por la que se dan normas sobre las enseñanzas de Formación Política, Religiosa y Educación Física en las Universidades y Centros de Enseñanza Superior dependientes de este Departamento (es decir, del Ministerio de Educación Nacional).

compuestos además por dos de los Profesores encargados de los cursos y un Catedrático de la Universidad correspondiente.

Los alumnos que no aprobaran durante el curso podrían repetir las pruebas en septiembre. Los alumnos suspensos en alguno de estos cursos habrían de pagar matrícula nuevamente²⁵⁶ y no podrían ingresar en la Milicia Universitaria durante ese año, aunque sí podrían continuar los estudios propios facultativos. Para la colación del grado de Licenciado en cualquiera de las Facultades Universitarias sería indispensable haber aprobado todos los cursos de formación política.

Correspondía al Jefe del Distrito Universitario del SEPES de FET y de las JONS la propuesta de las normas de organización de los cursos y la vigilancia de su desarrollo. Las enseñanzas se encomendarían a Profesores encargados de Cátedra o curso en cualquier órgano o servicio universitario, Licenciados o Doctores. Serían propuestos por el Jefe del Distrito Universitario del SEPES al Rector, quien la elevaría al Ministerio procediendo a su nombramiento. Semejante procedimiento se seguiría también para la asignación de las conferencias.

En relación con la impartición de esta materia quizá quepa señalar dos cuestiones más. En primer lugar la Orden de 4 de febrero de 1954²⁵⁷ que establecía la inclusión del estudio de la política española en África dentro de la disciplina de “Formación del Espíritu Nacional”, presencia que se refleja igualmente en algunas de las asignaturas de los planes de estudios de Filosofía y Letras, y la de 17 de marzo de 1954 que dispensaba a los alumnos extranjeros del examen de Formación del Espíritu Nacional y Formación

²⁵⁶ Orden de 5 de junio de 1945 sobre repetición de prueba de “Formación Política” en las Universidades (BOE 17)

²⁵⁷ Orden de 4 de febrero de 1954 por la que se incluye en la disciplina de “Formación del Espíritu Nacional” el estudio de la política española en África (BOE 23 marzo). Como razones, argumenta: “la marcada proyección que ha tenido África en la política internacional española desde los Reyes Católicos, tan vivamente mantenida por el Movimiento Nacional, así como la histórica vinculación de lo africano a todo lo español, exigen, ante el porvenir, una conciencia clara en las nuevas generaciones de lo que África es y significa para nosotros”.

Política, con lo que se daría la paradoja de que los estudiantes extranjeros obtendrían similar titulación a los españoles cursando menos asignaturas.²⁵⁸

Periodo 1970 - 1983

El nuevo periodo abierto por la Ley General de Educación de 1970 se iniciaba, en cuanto a disposiciones específicas, con la Orden de 14 de abril de 1971, por la que se hacía extensiva a todas las Secciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid la Orden de 2 de mayo de 1963²⁵⁹. Dicha Orden, refiriéndose a que en el plan de estudios de la Sección de Filología Clásica se establecía la prueba de licenciatura para aquellos alumnos a quienes se les hubiesen convalidado asignaturas de la expresada Sección, hacía extensiva la prueba para todas las Secciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, siempre para aquellos alumnos a quienes se les hubieran convalidado asignaturas de cualquiera de las Secciones de la expresada Facultad.

En 1972,²⁶⁰ como consecuencia de la nueva Ley General de Educación, se establecían las correspondientes directrices para la elaboración de los planes de estudios. En aras de una mayor autonomía pedagógica, se decía, producto de un nuevo concepto de educación superior, el Ministerio optaba ahora por no fijar completamente el plan de estudios a impartir, sino que se establecían tan sólo directrices para la elaboración de los respectivos planes, fijándose los contenidos mínimos que los alumnos habrían de superar para poder obtener el título, único para todo el territorio del Estado y expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Se dejaba de este modo un relativo margen de iniciativa a cada Universidad y, dentro de ella, a la respectiva Facultad o al Centro en concreto.

²⁵⁸ Orden de 17 de marzo de 1954 por la que se dispensa a los alumnos extranjeros en centros docentes del examen de Formación del Espíritu Nacional y Formación Política (BOE 26)

²⁵⁹ Publicada en el Boletín de 18 de mayo.

²⁶⁰ Orden de 23 de septiembre de 1972 sobre directrices para la elaboración de planes de estudio de la enseñanza superior (BOE 25)

Pero el Ministerio insistía en señalar que a él correspondía la sanción de los estudios, con independencia de los planes de estudios respectivos, pues todos ellos conducían a la obtención de un título expedido por el propio Ministerio de Educación y Ciencia que, además de garantizar el nivel científico alcanzado, aseguraba determinados derechos profesionales, de uso común en todo el territorio nacional. En esa necesidad por parte del Estado de asegurar la unidad de contenidos y la adecuación entre el título otorgado y la realidad material de los conocimientos adquiridos, veía su límite la relativa autonomía concedida. El clamor por la autonomía universitaria, previamente, había organizado la protesta estudiantil, dotándola de uno de sus componentes más asumibles por una parte representativa del profesorado.

De esa manera, la homogeneidad por la que velaría el Estado habría de ser conjugada con la autonomía de la Universidad, recién reconocida por la Ley General de Educación. En ella se albergaba asimismo una mayor expansión de grados académicos de especialización, que deberían permitir un desarrollo cada vez más rápido del saber, en sintonía con los avances científicos del último tercio del siglo XX, que entonces comenzaba. Para desarrollar esos principios, el artículo 37.1 de la Ley (LGE) preveía que los planes de estudio estarían compuestos por materias comunes y optativas, con la idea de que frente a los rígidos planes anteriores se diversificaran los niveles y las especialidades, distinguiendo progresivamente entre lo profesional y lo académico.

En cuanto a la estructura interna de los planes de estudios, la Ley –de acuerdo con los modelos europeos que la inspiraban– señalaba que para las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, se dividirían en tres ciclos, a modo de esquema ordenador: desde lo general y básico, formativo, a lo particular y predominantemente informativo, de modo que cada ciclo daría lugar a una titulación específica. Así, el primer ciclo no conduciría por sí mismo, directamente, a titulación alguna, pero mediante la realización de los cursos de Formación Profesional de Tercer Grado²⁶¹, permitiría la obtención de alguno de

²⁶¹ Previsto en el art. 39.1 de la Ley General de Educación

los títulos de Diplomado que se pudieran crear. En virtud del Decreto sobre implantación del primer ciclo en los estudios de Enseñanza Superior, más concretamente, se establecía lo siguiente:²⁶²

Primero.- Según el art. 37 de la Ley General de Educación, las Universidades españolas habrían de ceñirse a las directrices aprobadas en cuanto a la elaboración de sus planes de estudios:

A) Los estudios impartidos en cada Facultad o Escuela habrían de conducir a una sola titulación. Cada plan contendría todas aquellas materias cuyo conocimiento se hallase implícito en dicha titulación. En aquellas Facultades o Escuelas que estuviesen divididas en Secciones de las que se haga mención en sus títulos, cada Sección tendría su propio plan de estudios.

B) Los planes de estudios de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores se dividirían en tres ciclos:

-El 1º consistente en materias de contenido eminentemente formativo en el ámbito del saber de que se trate.

-El 2º compuesto por disciplinas de mayor contenido informativo

-El 3º formado por materias de amplia especialización.

C) Las materias obligatorias que, con carácter general fueran establecidas para cada título, serían distribuidas entre los ciclos primero y segundo, y serían las únicas exigibles para la obtención del título profesional.

Junto a ellas, las Universidades fijarían las materias optativas que, agrupadas en series o áreas, darían lugar a los títulos complementarios que expediría la propia Universidad y cuya posesión sería necesaria para el paso al tercer ciclo. Cada serie se compondría de un mínimo de cinco materias que

²⁶² Decreto 2552/1972 de 18 de agosto sobre implantación del primer ciclo en los estudios de Enseñanza Superior (BOE 23 de septiembre). Este Decreto posponía la aplicación del Decreto 2459/1970 de 22 de agosto, sobre calendario para aplicación de la reforma educativa (BOE 5 septiembre) que habiendo sido prevista para el curso 1972/73, hubo de posponerse al 1973/74, ya que era condición indispensable para ello la publicación de las directrices para elaboración de los planes de estudio.

podrían cursarse simultáneamente con las asignaturas comunes o una vez cursadas éstas.

En tercer ciclo todas las materias tendrían el carácter de optativas, pero irían agrupadas igualmente en series o áreas en vistas a una correcta especialización. Así, los planes indicarían exclusivamente el número y contenido fundamental de las distintas series o áreas, correspondiendo a la propia Universidad la determinación de las materias concretas.

Segundo.- *Junto con la propuesta de los planes, las Universidades podrían proponer también la creación de Centros de Formación Profesional de Tercer Grado²⁶³, cuya organización habría de hacerse según los medios personales y materiales de las propias Universidades. Las cuales propondrían, igualmente, los respectivos planes de estudio, cuya duración máxima sería de un año.*

Tercero.- *Una vez aprobados los planes, su implantación sería gradual y según el criterio de las propias Universidades.*

En el año 1973 vio la luz uno de los Decretos de mayor trascendencia para la Facultad de Filosofía y Letras, el de su división, que daría lugar a la creación, además de otras dos (Filología y Filosofía/Educación), de la Facultad de Geografía e Historia, documento que será estudiado en profundidad en el capítulo dedicado a la organización interna de esta última Facultad.²⁶⁴ Tras la publicación de aquél, se hacía necesaria la elaboración de los nuevos planes de estudios a implantar en las nuevas Facultades resultantes de la división, cuyas directrices se dieron inmediatamente mediante Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación del 17 de julio de 1973.²⁶⁵

²⁶³ Según el art. 39 de la Ley General de Educación

²⁶⁴ Decreto 1974/1973, de 12 de julio de reestructuración de las Facultades de Filosofía y Letras (BOE 22 agosto)

²⁶⁵ Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se determinan las directrices que han de seguir los planes de estudio de las Facultades de Filosofía y Letras (BOE de 8 de septiembre). Con posterioridad se publicó *Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se determinan las directrices que han de seguir los planes de estudio de las Facultades de Filosofía y Letras* (BOE 19 de diciembre de 1973), pero que no afecta a los estudios de Geografía e Historia, sino a la de Filología.

Directrices para la elaboración de los planes de estudio de las Facultades procedentes de Filosofía y Letras

De acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley General de Educación, correspondía a las Universidades la elaboración de sus planes de estudio, y de conformidad con las directrices dadas por el Ministerio de Educación y Ciencia²⁶⁶, procedía concretar entonces las susodichas directrices en relación con las Facultades de Filosofía y Letras. Urgía que pudieran proponer sus planes antes del comienzo del siguiente curso. El primer curso podría tener carácter coordinado, coordinación que, en su caso, determinaría el perfil concreto del plan de estudios. Las Universidades serían las encargadas de distribuir las materias, recogidas en disciplinas a distribuir en los diversos cursos. Se recomendaba que no pasasen de cinco disciplinas por curso en el primer ciclo, ni de cuatro en el segundo, ya que en éste el alumno debería comenzar una especialidad.

Se disponían también instrucciones como las siguientes: que, cuando una materia diese origen a dos o más disciplinas, a efectos de traslados, ambas habrían de ser cursadas en la misma Universidad; que la limitación de convocatorias en cada disciplina se regularía por Decreto (en ese momento eran cuatro oficiales); que en los planes de estudio figurasen también los horarios mínimos de prácticas; o que para el acceso al segundo ciclo fuera indispensable el haber aprobado todas las materias del primero.

Igualmente, en el plan de estudios debería figurar si, al término del segundo ciclo y antes de la obtención del título de Licenciado los alumnos debían realizar una Memoria de investigación o pasar una reválida. Para la obtención del título de Doctor era imprescindible a su vez, además de la licenciatura correspondiente, estar en posesión de una especialidad de las que la Facultad tuviese establecidas.

²⁶⁶ Aparte de las ya fijadas con carácter general por la Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1972 (BOE 25) y recogida anteriormente.

En cuanto a la distribución de los estudios, las Universidades propondrían planes de estudios referidos a aquellas Facultades y Secciones que en aquellos momentos tuviesen reconocidas. Para solicitar la creación de alguna que no tuvieran, deberían realizar previamente y enviar a la Dirección General, un estudio económico pormenorizado, una memoria de viabilidad. Asimismo, podrían proponer la creación o reconocimiento de alguna Sección distinta de las que allí se recogían, siempre acompañando la referida memoria, dando cuenta de sus posibilidades y las necesidades que podrían derivarse.

Finalmente, allá donde aún no se hubiera procedido a la división de facultades, a efectos de planes de estudio se consideraría que existían tres grandes divisiones, correspondientes a *Geografía e Historia*, *Filología* y *Filosofía y Ciencias de la Educación*.

Las asignaturas propuestas para los estudios correspondientes a Geografía e Historia eran las siguientes:

FACULTADES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Directrices para sus Planes de Estudios (1973)	
PRIMER CICLO	
<i>Materias comunes y obligatorias para todos los alumnos</i>	
	Geografía de España Geografía descriptiva Geografía general Historia antigua Historia medieval Historia moderna Historia contemporánea Historia del arte Historia de la filosofía Historia de la literatura Lengua latina Prehistoria

SEGUNDO CICLO
Sección de Geografía
Climatología y Biogeografía Geografía agraria Geografía de la población Geografía descriptiva Geografía económica Geografía regional de España Geografía urbana Geomorfología
Sección de Historia
Arqueología Historia de América Historia económica Historia de España (antigua, media, moderna y contemporánea) Paleografía
Sección de Historia de América
Arqueología americana Historia de América española Historia de España Historia de los Estados iberoamericanos Historia de los Estados Unidos Historia de la literatura iberoamericana Paleografía
Sección de Historia del arte
Arqueología Historia del arte español Historia del arte iberoamericano Historia del cine Historia de la música

Una vez publicadas las directrices, correspondía a cada Facultad aprobar los planes correspondientes, lo que se haría mediante Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se aprobaba el *Plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid*.²⁶⁷

²⁶⁷ Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación de 11 de diciembre de 1973, por la que se aprueba el Plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 10 de enero).

Este plan de estudios se verá modificado por la *Orden de 15 de septiembre de 1977 que modifica el Plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid* (BOE 4 noviembre), que se recoge más adelante cronológicamente. La modificación consiste en la inclusión de las asignaturas optativas establecidas por la Facultad para los cursos segundo y tercero del primer ciclo de cada Sección.

Para la división de Geografía e Historia el Plan de estudios sería como sigue:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1973)	
PRIMER CICLO	
Primer curso	
	Prehistoria
	Historia Antigua
	Historia del Arte I
	Geografía general
	Lengua latina
Segundo curso	
	Historia Media
	Historia del Arte II
	Historia de la Literatura
	Geografía descriptiva
Tercer curso	
	Historia Moderna
	Historia Contemporánea
	Historia de la Filosofía
	Geografía de España

Todas las asignaturas se impartirían durante tres horas semanales y una hora semanal como mínimo de prácticas. (Como es habitual, resulta difícil comprobar la ejecución real de este mandato).

En poco tiempo se introdujeron novedades en esa estructura, pues en 1975, de nuevo, se modificaba el Plan de estudios del primer ciclo de la División de Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense.²⁶⁸ La modificación afectaba específicamente al segundo y tercer cursos, en los que se incluían disciplinas en función de la futura Licenciatura el alumno, quedando esta vez el catálogo de asignaturas como sigue:

²⁶⁸ Mediante Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación de 17 de junio de 1975 (BOE de 29 de julio)

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1975)	
PRIMER CICLO	
Curso 1º	Materias comunes
	Prehistoria
	Historia Antigua
	Historia del Arte I
	Geografía general
	Lengua latina
Curso 2º	Materias comunes
	Historia Media
	Historia del Arte II
	Historia de la Literatura
	Geografía descriptiva
	Materias optativas
	Sección de Geografía: Geografía Humana
	Sección de Historia: Etnología
	Sección de Historia de América: Historia de América
	Sección de Historia del Arte: Teoría de las Artes Plásticas e Historia de las ideas estéticas
Curso 3º	Materias comunes
	Historia Moderna
	Historia Contemporánea
	Historia de la Filosofía
	Geografía de España
	Materias optativas
	Sección de Geografía: Geografía Física
	Sección de Historia: Historia de la Historiografía Española
	Sección de Historia de América: Geografía de América
	Sección de Historia del Arte: Historia del Arte Español

Dos años después, en 1977, se publicaba una Orden que aprobaba el segundo ciclo del Plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Madrid, hasta entonces sin definir.²⁶⁹ Dicho plan tendría carácter provisional y experimental, y se advertía –como suele ocurrir en España en los cambios de planes o modificaciones sustanciales- que en ningún caso podría suponer un aumento de dotaciones y consignaciones presupuestarias. Ése fue, a ojos de muchos, el problema fundamental. La

²⁶⁹ Orden de 15 de abril de 1977 que aprobaba el segundo ciclo del Plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Madrid (BOE de 27 de julio).

Universidad, falta de medios ajustados a las nuevas necesidades (de infraestructura especialmente, pero no solo), se enfrentaba a la necesidad de dar respuesta a una población universitaria cada vez mayor. Los alumnos asistían a unas clases muy masificadas –pero no había control alguno de asistencia, por lo general- y el cuerpo de profesores no podía crecer al ritmo (ni con los requisitos de calidad) exigidos para mantener una ratio razonable en el número de alumnos por profesor, de manera que se recurrió apresuradamente a la figura del profesor no numerario, recién licenciado por lo general, mal pagado y en condiciones laborales precarias (contrato administrativo de renovación anual, en el mejor de los casos. En 1976 con el sueldo anual de un catedrático se podía pagar a 7,7 profesores no numerarios de categoría inferior). Tanto es así que en tres años, a la altura de 1973, habían pasado del 54% a suponer un 80% de las plantillas. Todo ello, unido a la situación social extrauniversitaria y política del momento, desembocaría en la perpetuación durante un tiempo del conflicto que había caracterizado a la Universidad en las dos décadas últimas del franquismo.²⁷⁰

Volviendo ahora al plan, quedaba como sigue:

Sección de Historia del Arte

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. <i>Sección Historia del Arte</i>	
Curso 4º	Materias comunes
	Arte Clásico
	Arte Cristiano de la Alta Edad Media
	Arte Cristiano de la Baja Edad Media
	Arte Árabe
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Arte del Renacimiento
	Arte Barroco
	Arte del siglo XIX
	Arte del siglo XX
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

²⁷⁰ Véase BALDÓ LACOMBA, Marc y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena *Estudiantes contra Franco (1939-1975)*..., cit.; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo: *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea (1865-2008)*. Alianza Editorial, Madrid, 2009 y FERNÁNDEZ MONTESINOS, Andrea: “Los primeros pasos del movimiento estudiantil”, en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, Nº 1, 2009.

Sección de Historia de América

Opción A: Historia de América

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. Sección de Hª de América. Opción Hª de América	
Curso 4º	Materias comunes
	Historia de América Prehispánica
	Historia de los Descubrimientos Geográficos
	Historia de América en la Edad Moderna (Historia Social y Económica de la América Virreinal)
	Historia del Derecho Indiano (Historia de la Administración y de las Instituciones Jurídicas de América) ²⁷¹
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Historia de América en la Edad Contemporánea (Historia Social y Política de la América Independiente)
	Historia de la Iglesia en América (Instituciones Canónicas Indianas)
	Historia del Arte Hispanoamericano
	Historia Universal Contemporánea (pertenece al Departamento de Contemporánea)
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

Opción B: Antropología americana

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. Sección de Hª de América. Opción Antropología americana	
Curso 4º	Materias comunes
	Historia de América Prehispánica
	Arqueología Americana I
	Antropología cultural
	Etnología de América del Norte
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Etnología de América
	Arqueología de América II
	Etnología de América Central
	Etnología de América del Sur
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

²⁷¹ Dicha asignatura fue levemente modificada mediante la *Corrección de errores de la Orden de 15 de abril de 1977 por la que se aprueba el segundo ciclo del Plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid*, de 29 de septiembre (BOE 11 octubre), quedando como aquí aparece.

Sección de Historia

Opción A: Prehistoria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. Sección de Historia. Opción Prehistoria	
Curso 4º	Materias comunes
	Geología y Arqueología del Cuaternario
	Culturas del Paleolítico y Mesolítico de la Península Ibérica
	El Neolítico y la Edad del Bronce Antiguo y Medio en la Península Ibérica
	Arqueología clásica
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Etnología de la Península Ibérica
	Culturas Hispánicas Prerromanas
	Culturas Prehistóricas del Mediterráneo
	Prehistoria general de África y Asia
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

Opción B: Historia Antigua

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. Sección de Historia. Opción Historia Antigua	
Curso 4º	Materias comunes
	Epigrafía
	Historia del Oriente
	Historia de Grecia
	Arqueología
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Numismática
	Historia de las Religiones
	Historia de Roma
	Historia de España Antigua
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

Opción C: Historia Medieval

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. Sección de Historia. Opción Historia Medieval	
Curso 4º	Materias comunes
	Historia Universal de la Alta Edad Media
	Historia de España de la Alta Edad Media

	Paleografía
	Latín Medieval
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Historia Universal de la Baja Edad Media
	Historia de España de la Baja Edad Media
	Diplomática
	Numismática
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

Opción D: Historia Moderna

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. Sección de Historia. Opción Historia Moderna	
Curso 4º	Materias comunes
	Historia de España en la Edad Moderna I
	Historia Universal de la Edad Moderna I
	Historia de América en la Edad Moderna
	Historia Contemporánea de España I
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Historia de España de la Edad Moderna II
	Historia Universal de la Edad Moderna II
	Historia de América en la Edad Moderna
	Historia Contemporánea de España II
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

Opción E: Historia Contemporánea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. Sección de Historia. Opción Historia Contemporánea	
Curso 4º	Materias comunes
	Historia Moderna de España II
	Historia Contemporánea de España I
	Historia Contemporánea Universal I
	Historia Contemporánea de América
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Historia Contemporánea de España II
	Historia Contemporánea Universal II
	Historia Contemporánea Universal III
	Estructura Económica Mundial y de España
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

Sección de Geografía

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)	
SEGUNDO CICLO. <i>Sección de Geografía</i>	
Curso 4º	Materias comunes
	Climatología
	Geografía de la población
	Geografía Económica I
	Geomorfología
	Una asignatura optativa elegida por el alumno
Curso 5º	Materias comunes
	Geografía Agraria
	Geografía Descriptiva II
	Geografía Regional de España
	Geografía Urbana
	Una asignatura optativa elegida por el alumno

Todas las asignaturas tendrían una duración de tres horas lectivas teóricas semanales, autorizándose a la Facultad a incluir una materia complementaria por curso, elegida entre las materias optativas o entre las materias de las restantes Secciones por el alumno, de modo que cada alumno tuviera un total de dieciocho horas lectivas teóricas semanales²⁷². La Facultad ofrecería cada curso, por cada Sección u opción, un máximo de tres asignaturas optativas de duración anual, o su equivalente en cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegiría una o dos respectivamente²⁷³.

Para poder pasar a los estudios del tercer ciclo, los alumnos deberían tener aprobadas todas las asignaturas de Licenciatura y realizar y aprobar, bien un examen de Licenciatura, bien una tesina, dejándose al criterio de la Facultad decidir cuál de los dos sistemas debía adoptarse. Definitivamente, no se exigiría ningún requisito especial para el paso del tercero al cuarto curso de la carrera.

²⁷² Modificada por la *Corrección de errores de la Orden de 15 de abril de 1977 por la que se aprueba el segundo ciclo del Plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid*, de 29 de septiembre (BOE 11 octubre), quedando como aquí aparece.

²⁷³ Modificada por *Corrección de errores de la Orden de 15 de abril de 1977 por la que se aprueba el segundo ciclo del Plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid*, de 29 de septiembre (BOE 11 octubre), quedando como aquí aparece.

El Plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, dado en 1973²⁷⁴, se vio completado también en el año 1977.²⁷⁵ Dicha orden venía a incluir las materias optativas ofertadas por la Facultad para los cursos segundo y tercero del primer ciclo de cada Sección, permitiendo una mayor flexibilización del currículum y una elección de la especialización desde momentos tempranos. El plan completo quedaría así:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS PLAN DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1977)*		
PRIMER CICLO		
Curso 1º	Materias comunes	
	Prehistoria	
	Historia Antigua	
	Historia del Arte I	
	Geografía general	
	Lengua latina	
Curso 2º	Materias comunes	
	Historia Media	
	Historia del Arte II	
	Historia de la Literatura	
	Geografía descriptiva	
	Materias optativas	
	Sección de Geografía	Geografía Humana
	Sección de Hª del Arte	Hª del Arte (Teoría de las Artes plásticas e Historia de las ideas estéticas)
	Sección de Hª de América y Subsección de Antropología Americana	Introducción a los estudios históricos americanos ²⁷⁶
	Sección de Historia	Etnología
Curso 3º	Materias comunes	
	Historia Moderna	
	Historia Contemporánea	
	Historia de la Filosofía	
	Geografía de España	

²⁷⁴ Dado por Resolución de 11 de diciembre de 1973 (BOE 10 enero 1974)

²⁷⁵ Por la Orden de 15 de septiembre de 1977 que modificaba el Plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 4 noviembre)

²⁷⁶ Materia modificada por la *Corrección de errores de la Orden de 15 de septiembre de 1977 por la que se modifica el plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid*, de 4 de noviembre de 1977 (BOE 16 diciembre). La materia antes denominada “Historia de América”, pasa a llamarse “Introducción a los estudios históricos americanos”

	Materias optativas	
	Sección de Geografía	Geografía Física
	Sección de Hª del Arte	Historia del Arte español
	Sección de Hª de América y Subsección de Antropología Americana	Geografía de América
	Sección de Historia	Historia de la Historiografía

* Plan para el Primer Ciclo dado en 1973, completado con las materias optativas aportadas por la Orden de 1977. Cada una de ellas, a razón de tres horas lectivas semanales.²⁷⁷

COMPARATIVA DE MATERIAS OPTATIVAS OFERTADAS EN 1975/1977	
Segundo curso	
1975	1977
<i>Sección de Geografía:</i> Geografía Humana	
<i>Sección de Historia:</i> Etnología	
<i>Sección de Historia de América:</i> Historia de América	<i>Sección de Historia de América:</i> Introducción a los estudios históricos americanos
<i>Sección de Historia del Arte:</i> Teoría de las Artes Plásticas e Historia de las ideas estéticas	
Tercer curso	
<i>Sección de Geografía:</i> Geografía Física	
<i>Sección de Historia:</i> Historia de la Historiografía Española	<i>Sección de Historia:</i> Historia de la Historiografía
<i>Sección de Historia de América:</i> Geografía de América	
<i>Sección de Historia del Arte:</i> Historia del Arte Español	

Una vez separadas ya definitivamente las disciplinas y establecidos los planes de estudio de cada una de las nuevas Facultades, en 1981 se procedió a la aprobación del Cuadro General de Equiparaciones y Analogías de plazas de las distintas Facultades, todo ello a modo de resumen definitivo de las múltiples disposiciones parciales dadas con anterioridad, de cara a la formación de los tribunales de concursos y oposiciones para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos Numerarios, Profesores Agregados y Profesores Adjuntos de

²⁷⁷ La presente Orden, más allá de una pequeña variación en cuanto a la denominación de la materia optativa ofertada en el segundo curso de la Sección de Historia de América y la de “Historia de la Historiografía” más amplia que la anterior “Historia de la Historiografía Española”, recoge prácticamente las mismas materias que recogía la Resolución de 17 de junio de 1975, con la única diferencia de que en esta ocasión se señala el carácter de materia *optativa*, a elegir por el alumno

Universidad, con el objeto de definir con precisión los conceptos de la misma disciplina de manera equiparada y análoga.²⁷⁸

Los estudios no facultativos

La aprobación de la Ley General de Educación de 1970, así como los cambios políticos, económicos y sociales de toda la década aconsejaban adaptar a la nueva situación la enseñanza de las tres “asignaturas” más representativas del régimen franquista, de manera que sin desaparecer totalmente, perdieran aquel carácter sustancial y fuertemente ideologizado o doctrinal que tuvieron en otros tiempos.

En cuanto a la religión católica, la Ley de Educación de 1970, impulsada en buena parte por militantes del Opus Dei, “*garantizaba la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral de la Iglesia Católica en los Centros de enseñanza, tanto estatales como no estatales*”, según se recogía en la Orden de 20 de diciembre de 1976 reguladora de las actividades de formación religiosa en Centros de enseñanza universitaria²⁷⁹. Señalaba el legislador entonces cómo los compromisos adquiridos mediante el Concordato de 1953, que precisamente se hallaba en revisión en aquellos momentos, habían de adaptarse a la doctrina renovadora del Concilio Vaticano II, así como a la propia experiencia en materia de enseñanza religiosa, particularmente en el ámbito de la enseñanza superior.

Muerto ya el dictador y en desmantelamiento formal el estado franquista, era necesario dar un tratamiento más apropiado a la educación religiosa de los alumnos universitarios, si es que se quería obtener los fines de adhesión deseados. Para ello se establecía en todas las Universidades estatales un Servicio de Asistencia y Formación religiosa cuya finalidad sería promover y organizar las prácticas religiosas de la comunidad universitaria y las actividades

²⁷⁸ Orden de 27 de julio de 1981 por la que se aprueba el Cuadro General de Equiparaciones y Analogías de las distintas plazas de las Facultades Universitarias de Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas, Ciencias Geológicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Químicas, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Filología y Geografía e Historia (BOE 1 septiembre)

²⁷⁹ BOE del 29 de diciembre

formativas. Dicho Servicio actuaría bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica y contaría con los recursos que cada Universidad pudiera asignarle. Contribuiría a la enseñanza religiosa de los universitarios mediante la organización de cursos, seminarios y otras iniciativas formativas, pero sin que en ningún caso estas actividades tuvieran el carácter de asignatura obligatoria recogida en los Planes de estudio, como había sucedido hasta el momento.

La adscripción y asistencia a tales enseñanzas tendría en cualquier caso carácter voluntario, incluso para aquellos alumnos que en aquellos momentos tuvieran pendiente de aprobación la disciplina de enseñanza religiosa. Las Universidades no estatales podrían mantener sin embargo el régimen de enseñanza en materia religiosa que tuvieran hasta ese momento, sin perjuicio de lo establecido por la Ley 44/1967 de libertad religiosa.²⁸⁰

La formación religiosa en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB se ordenaría posteriormente en función de acuerdos con la jerarquía eclesiástica, ya que se alegaba que precisamente los a la sazón alumnos y futuros maestros, serían quienes llevarían a cabo la educación religiosa en los Colegios nacionales. Así pues, se mantenía el trato de privilegio hacia la Iglesia Católica, aunque a partir de ese momento la asistencia a las enseñanzas se haría sin carácter de obligatoriedad y, también, se contaría con menos medios y, desde luego, representación.

En cuanto a la educación física, recordemos que ya en 1961 se había aprobado la Ley de Educación física que regulaba la actividad²⁸¹, estableciendo su obligatoriedad en todos los grados de enseñanza y en todos los Centros docentes, ya fueran oficiales, institucionales o privados, de acuerdo con los respectivos Planes de estudio. Posteriormente, la Ley General de Educación en su artículo 136 remitía a la potestad reglamentaria del gobierno la regulación de dicha enseñanza.

²⁸⁰ Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa (BOE 1 julio), recogida anteriormente

²⁸¹ Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física (BOE 27), recogida anteriormente.

En el año de 1977, el Real Decreto de 4 de marzo establecía una nueva ordenación de la Educación Física en la Universidad²⁸². Según éste, la experiencia previa había demostrado que su obligatoriedad no era conveniente. Era más provechoso facilitar y estimular tal actividad que mantenerla como asignatura con evaluación y reflejo en el expediente académico de los alumnos. Así, en lo sucesivo, la Educación Física no se contemplaría en los Planes de estudios como asignatura sometida a pruebas obligatorias. Incluso los alumnos que tuvieran pendiente dicha asignatura, quedarían exentos.

No obstante, en las Universidades, Colegios y Escuelas Universitarias se establecería un Servicio de Educación Física y Deportiva, cuya finalidad sería promover y organizar enseñanzas y actividades deportivas adecuadas para la formación de los alumnos. Dicho Servicio dependería de los Rectorados y contaría con los medios que la Universidad pudiera asignarle. El profesorado que en ese momento estuviera impartiendo esas enseñanzas en las Universidades conservaría su situación administrativa y económica, quedando adscrito en cada Universidad a los Servicios de Educación Física y Deportiva que en ella se establecieran. En la elaboración de los Planes de estudio de las Escuelas Universitarias de profesorado de EGB, se adoptarían las medidas necesarias para garantizar la adquisición por dicho profesorado de los conocimientos requeridos para lograr el desarrollo de la capacidad físico-deportiva de los alumnos de EGB.

Pero sin duda alguna, de las tres asignaturas, la que más se vio afectada, hasta su desaparición por anacrónica, fue precisamente la asignatura de Formación Política. El Real Decreto 426/1977 de 4 de marzo suprimía la asignatura de Formación Política en la Universidad.²⁸³ La Ley General de Educación, en el artículo treinta y siete disponía que los Planes de estudio de los Centros universitarios serían elaborados por las Universidades, de acuerdo con las directrices fijadas por el Ministerio. La Orden de 23 de septiembre de 1972 de directrices para la elaboración de los Planes de estudio, a su vez, no establecía recomendación alguna respecto a las enseñanzas complementarias,

²⁸² Publicado en el BOE de 22 de marzo.

²⁸³ Publicado en el BOE de 22 marzo.

aunque dichas materias continuaron apareciendo en los Planes de estudio. Sin embargo, a la altura de 1976 las circunstancias sociales y políticas por que atravesaba el país hacían aconsejable replantearse su conveniencia y de ahí su consecuente desaparición.

En el caso de los maestros, las enseñanzas a impartir en EGB se orientarían a procurar el desarrollo del sentido cívico social. En ese sentido se publicó la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1976 por la que se establecían nuevos contenidos en las orientaciones pedagógicas del área social en la segunda etapa de la EGB.²⁸⁴ A partir de ese momento los Planes de estudios universitarios no incluirían la asignatura de “Formación política” y los alumnos que tuvieran pendiente su aprobación, como en el caso de las otras dos asignaturas, quedarían exentos.

Lo que resulta más llamativo es que los profesores de esta asignatura conservarían su situación administrativa y económica hasta el final del curso 1976-1977, momento en que quedarían sin efecto sus nombramientos. Y que no obstante todo lo anterior, Rectores, Directores de Colegios y Escuelas Universitarias podrían recabar la colaboración de este profesorado en las actividades de extensión cultural que se desarrollaran en los distintos centros universitarios.²⁸⁵ Con todo, se ordenaba que los Planes de estudio de las Escuelas Universitarias de profesorado de EGB habrían de garantizar la adquisición por parte del profesorado de los conocimientos necesarios para impartir la asignatura de Educación cívico-social dentro de la EGB. De esta manera quedaban finiquitados treinta años de impartición sistemática de las asignaturas por las que Falange e Iglesia, juntamente, habían pugnado con vehemencia y sin tregua.

²⁸⁴ Publicada también en el BOE del 3 de diciembre.

²⁸⁵ Fue así como buena parte de este personal pasó a desempeñar actividades culturales sin tenerse en cuenta su preparación para ello.

IV. ANÁLISIS DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS A LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Y SU ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Aquella Facultad de Filosofía y Letras que se inaugurara en 1931 con la mayor ilusión, quedó completamente destruida tras la contienda bélica, de manera que, una vez finalizada la guerra, fue necesario emplearse en su reconstrucción.²⁸⁶ La Orden de 26 de enero de 1943²⁸⁷ decretaba que todos los servicios docentes o administrativos se prestaran a partir del 1 de febrero en el edificio reconstruido de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria. Más allá de esto, la Ley de Ordenación de la Universidad de 1943 apenas recogía que las Facultades se estructurarían en Secciones, pero poco más, por lo que en lo fundamental, hasta los años sesenta del siglo XX se mantuvieron los esquemas previos. Circunstancialmente, pudieron aumentarse o dividirse algunas Secciones, pero poco más.

En cuanto a la estructura y organización interna del profesorado en las Facultades hay que remitirse a dos normativas bastante posteriores. Por una parte, a la Ley 83/1965 de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y su profesorado y, por otra, al Decreto 1200/1966, de 31 de marzo, sobre ordenación de Departamentos en las Facultades de Filosofía y Letras.²⁸⁸ La primera es fundamental para la organización interna de las Facultades, ya que supone el origen de los Departamentos y el establecimiento de las diferentes categorías de profesores.

Según se indica en la propia ley, aquella respondía a necesidades generadas por el extraordinario crecimiento del alumnado universitario, que hacía preciso el adecuado acondicionamiento de los espacios y el incremento

²⁸⁶ Véase LÓPEZ-RÍOS MORENO, Santiago y GONZÁLEZ CÁRCELES, Juan Antonio (coord.): *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República: Arquitectura y Universidad durante los años 30*, Madrid, 2008

²⁸⁷ BOE de 27 de enero. Recuérdese que, en 1940, la Ley de 10 de febrero había organizado la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria con el fin de reconstruir el entorno y los edificios dañados por la contienda. Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina y VALLE MORÁN, Inés: “La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y Universidad durante los años 30” en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Nº 30, 2008.

²⁸⁸ BOE del 21 de julio de 1965 y 16 de mayo de 1966 respectivamente.

de los medios didácticos, así como la promoción del profesorado y el establecimiento de una equilibrada relación profesor-alumno.²⁸⁹ Frente a la situación entonces vigente, establecida por la Ley de 1943, donde se fijaban como categorías dentro del profesorado universitario: los catedráticos numerarios o extraordinarios de Facultad; los profesores adjuntos de Facultad; los ayudantes para clases prácticas, clínicas o laboratorios y los profesores encargados de Cátedra o curso, se perseguía reforzar el contingente docente, pero sin estorbar la proporcionalidad interna de cada colectivo y, a la vez, tratando de insuflar cierta dinámica a la actividad docente e investigadora. De ahí la incorporación de un nuevo conjunto o categoría profesoral y de una estructura –más nominal que eficiente, a medio plazo-, que sin embargo para el legislador correspondían respectivamente a una adecuada estratificación de los cuerpos docentes y a una extensión a España de modelos de probada eficacia en el exterior. Surgían, pues, dos nuevas entidades académicas, que serán fundamentales de ahí en adelante, a pesar de su corta duración en el primero de los casos, y de la resistencia interna que suscitó, en el segundo: nos referimos a la figura del profesor agregado y al nacimiento de los Departamentos.

El profesor agregado se define en la ley como *“nuevo tipo de profesor universitario de rango superior en cuanto que dicta cursos regulares y dirige trabajos de investigación, pero sometido a la disciplina del Catedrático Jefe del Departamento al que figure adscrito por afinidad de contenido en su función docente”*. Como puede observarse, la reticencia de los catedráticos quedaba de momento resuelta por el legislador. Por lo demás, el departamento sustituiría a la cátedra como unidad o espacio de organización, todo lo amplio

²⁸⁹ El extraordinario incremento de alumnos que accedían a la Universidad había generado tal masificación que requería de soluciones inmediatas. En ese contexto la Ley del ministro Lora Tamayo abordaba dos aspectos fundamentales, por una parte creaba nuevas categorías de profesorado que pudieran atender los requerimientos del alumnado al tiempo que establecía la carrera docente como aliciente también a la investigación y establecía la organización departamental como unidades docentes y de investigación que facilitarían la gestión. Se consideraba que muchas de las situaciones conflictivas se originaban en buena medida como consecuencia de esos problemas de espacio que lejos de solucionarse se hicieron tan acuciantes que llevaron en 1969 al traslado o la división física de Facultades como la de Económicas que se llevó a Somosaguas, Políticas que pasó al otro lado de la carretera de la Coruña y la de Filosofía y Letras que quedó dividida entre los edificios A y B, justamente algunas de las más conflictivas. Véase BALDÓ LACOMBA, Marc y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena *Estudiantes contra Franco* cit. y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *La España de Franco (1939-1975)*. Cultura y vida cotidiana. Síntesis. Madrid, 2004.

que exigencias docentes e investigadoras hicieran necesario o conveniente: *“El Departamento integra no sólo a estos profesores agregados al equipo de Profesores Adjuntos, Ayudantes, Jefes de clínicas, Laboratorios y Seminarios y personal investigador, sino en su caso, también a Catedráticos de disciplinas afines, constituyendo una nueva unidad con auténtica coordinación en las enseñanzas, una mejor y más concentrada dotación de medios de trabajo y unos planes de investigación en constante desarrollo que hagan de cada Departamento sede de un serio y bien atendido magisterio en su doble aspecto docente y creador”*. Por primera vez, las leyes de enseñanza superior en España hablaban de la función investigadora como consustanciales a la tarea docente del profesor.²⁹⁰ Pero no cabe duda de que una parte grande de estas novedades habría de ser objeto de desconcierto y poca aclamación por parte de muchos de los afectados. La figura del agregado introducía pautas que no eran familiares en la vida académica española. Para que el profesor agregado tuviera desde le principio “rango y categoría”, el acceso habría de ser mediante oposición, como en el rango superior, y se le exigiría la dedicación plena. En un esbozo de carrera docente, se decidía que en cambio el paso a Catedrático se haría por selección entre los profesores agregados.

Otra nueva figura es la del profesor extraordinario, diferente del profesor agregado que aparecía en la ley del 43 y que desaparecerá con ésta. Dicho profesor se perfila como miembro del Cuerpo docente, abriendo la posibilidad de que intervengan circunstancialmente en la vida universitaria personalidades eminentes ajenas a ella.

El artículo primero de la Ley definía el Departamento como unidad estructural universitaria que agrupa a las personas y los medios materiales destinados a la labor docente, formativa e investigadora en el campo de una determinada disciplina o disciplinas afines. Sus funciones consistirían en: coordinar las enseñanzas que lo integrasen; proponer proyectos e investigaciones en equipo; promover el desarrollo científico y docente de las cátedras implicadas, facilitando su labor, aplicarse a la consecución y

²⁹⁰ Véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Tres décadas de educación superior en España: Universidades e Investigación”, en Cuadernos del Instituto Antonio Nebrija, 11/1 (2008).

distribución de medios y, finalmente, servir de enlace entre las cátedras a las que daría cobertura y las autoridades de la Facultad o sus Secciones. En el artículo segundo, que habla del personal docente, se recogía que los Departamentos estarían integrados por: catedráticos ordinarios y catedráticos extraordinarios, profesores agregados, profesores adjuntos, profesores extraordinarios, profesores ayudantes, el personal investigador en sus varias categorías, los lectores de idiomas, y los jefes de laboratorio, clínicas, seminarios o bibliotecas, en aquellos Departamentos cuyas características aconsejasen la existencia de estos cargos, así como el personal auxiliar y subalterno necesario para el desempeño de las diversas actividades.

El artículo tercero explicaba cómo al frente de cada Departamento habría un Director, Catedrático de Universidad obligatoriamente. Cuando hubiera varios catedráticos en un Departamento, al Director lo nombraría el Rector a propuesta del Departamento, siendo aprobado por el Decano una vez oídas la Junta de Facultad y la de Gobierno. La propuesta del Departamento se haría por votación unipersonal de los Catedráticos y agregados, sin que interviniera el resto de los componentes de la unidad, siendo necesaria la obtención de mayoría simple. El nombramiento sería por tres años. Finalmente, de no haber Catedrático en el Departamento, el Rector a propuesta del Decano, encargaría interinamente su dirección a uno de los profesores agregados. Las funciones del Director del Departamento serían: de representación ante las autoridades académicas; coordinación de los programas y el desarrollo de las enseñanzas, fijando líneas y directrices de investigación, sin perjuicio de su propia labor docente en investigadora. Sería el responsable ante el Decanato del cumplimiento de los horarios de clases y prácticas y demás obligaciones de personal afecto a su Departamento, dando a aquél cuenta de las eventualidades que se pudieran producir.

El artículo cuarto señalaba que la composición de los Departamentos se determinaría en los Decretos ordenadores de cada una de las Facultades universitarias, previo informe del Consejo Nacional de Educación. Las Facultades de cada Universidad podrían solicitar la creación de Departamentos. Dicha creación se haría mediante Decreto, previo informe del

Consejo de Educación. El establecimiento de Departamentos iría haciéndose por el Ministerio de Educación Nacional al ritmo que lo permitieran las circunstancias. El artículo quinto recogía la idea de que, mediante Orden ministerial, podrían ser asignadas a los Departamentos integrados en una Facultad misiones académicas de otras Facultades de la misma Universidad cuyos planes de estudios contuvieran las mismas materias. Para ello serían consultadas previamente las Facultades implicadas, y siempre que fuera necesario, se adoptarían medidas coordinadoras.

El Capítulo II de la Ley versaba sobre los profesores agregados. Los artículos del sexto al décimo se ocupaban esa nueva figura en la que tanto interés se había depositado: los profesores agregados serían una categoría intermedia entre el catedrático ordinario y el profesor adjunto, siendo su ingreso, como dijimos más arriba, por concurso-oposición. Tendrían funciones docentes, examinadoras y de investigación, desempeñando al menos un curso o grupo desdoblado –lo que los elevaba sustancialmente sobre el adjunto y ampliaba la capacidad docente de los departamentos, pero respetaba el número reducido de catedráticos en principio-, pudiendo formar parte de toda clase de Tribunales de examen. En cuanto a su vinculación, dice el artículo que en caso de estar integradas en un Departamento las materias impartidas por ellos –la situación más común-, su labor habría de depender del Director, pero si la asignatura de que estuviesen encargados no perteneciera a ningún Departamento, entonces dependerían directamente del Decano de la Facultad.

Podrían optar a cargos universitarios, asimismo, exceptuando aquellos para los que se exigiera ser catedrático (Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Departamento), pudiendo ocupar éstos sólo de forma interina. Estarían obligados a la plena dedicación a la Universidad y al desempeño de jornada completa, siendo sus puestos incompatibles con el ejercicio libre de la profesión y con el desempeño de funciones en otros Cuerpos del Estado, Provincia o Municipio. En todo caso, los agregados se ceñirían a lo que establecieran los Decretos ordenadores de las Facultades.

Siguiendo con el articulado de la Ley, su Capítulo III se ocupaba del acceso a las diversas categorías del Profesorado universitario, en sus artículos décimo a décimo octavo, que de abajo arriba en la carrera docente, se ocupan de las distintas figuras del profesorado: profesor ayudante de clases prácticas, profesor adjunto, profesor agregado, catedráticos ordinarios, profesores extraordinarios y profesores honoríficos.

Para ser profesor ayudante de clases prácticas se requería Grado de Licenciado o graduado de Escuela Técnica Superior. Lo propondría el titular de la cátedra a través del Director del Departamento y dicha propuesta sería informada por el Decano de la Facultad y éste, a su vez, informaría al Rector. Su nombramiento sería por un año renovable.

Los profesores adjuntos accederían al puesto mediante concurso-oposición a desarrollar en la propia Facultad a la que optasen. Se les exigiría el Grado de Licenciado o graduado de Escuela Técnica Superior y poseer la acreditación del desempeño de cargo de ayudante de clases prácticas al menos durante un año, o bien haber pertenecido durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial o reconocido (en la práctica en CSIC) o Cuerpo docente de Grado medio. La solicitud habría de ir acompañada de un informe favorable del Catedrático bajo cuya dirección hubieran actuado como Ayudantes. El nombramiento se haría por Orden ministerial, por un periodo de cuatro años prorrogable por otros cuatro.

Para el profesor agregado el ingreso sería también mediante concurso-oposición, pero esta vez de ámbito nacional y ante un Tribunal designado por el Ministerio de Educación Nacional y constituido por cinco miembros, de los que como mínimo tres serían catedráticos de disciplina igual o análoga a la de provisión. El Presidente debería pertenecer al Consejo Nacional de Educación, las Reales Academias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas en calidad de Consejero, o ser en aquel momento, o haber sido, Rector de Universidad. El concurso-oposición habría de valorar la labor docente y científica previa del candidato y su concepto y método de la disciplina, así como sus cualidades pedagógicas. Los opositores formularían por escrito, y

entregarían al Tribunal, el juicio crítico que les mereciera la labor de sus coopositores sobre dichos extremos, quienes dispondrían del procedimiento oportuno para contestar a las objeciones que se les hicieran.²⁹¹ La Facultad podría encargar la representación del Centro a un miembro del Tribunal, que haría presente el informe de la Junta de Facultad sobre las necesidades de la misma. Como requisitos, a los candidatos se les exigiría estar en posesión del título de Doctor por Facultad o Escuela Técnica Superior; acreditar experiencia docente o investigadora de tres cursos completos, como mínimo, en un establecimiento de Enseñanza Superior o de investigación, o bien ser Catedrático de Centros docentes de Grado Medio con tres cursos completos de ejercicio; ser presentado por un Catedrático de Universidad, o Escuela Técnica Superior, mediante un escrito detallando las cualidades profesionales y la labor realizada por el aspirante, informado por la Junta de Facultad o Profesores de la Escuela respectiva y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando se tratase de personas que hubieran realizado labor investigadora, bien en el propio Consejo o en otros Centros de investigación nacionales o extranjeros. El nombramiento se haría mediante Orden ministerial, a propuesta del Tribunal.

Los catedráticos ordinarios accederían a formar parte del cuerpo mediante concurso entre Profesores agregados de la misma disciplina o de las equiparadas a ella, que reunieran los siguientes requisitos: un mínimo de cinco años de servicio activo como Profesor agregado; presentación de Currículum Vitae con relación de sus trabajos y publicaciones, y una Memoria explicativa de sus directrices de investigación y del programa, método y fuentes para la enseñanza de la disciplina objeto del concurso. Estos concursos se regirían por una reglamentación específica que se establecería por Decreto, siendo el nombramiento igualmente mediante Orden ministerial.

La nueva situación, evidentemente expansiva –y coincidente con un cierto despegue de algunas materias científicas-, obligó a reajustes disciplinares más allá del mero rótulo de las asignaturas. Para que se produjera

²⁹¹ Esa práctica, ya desaparecida, se le llamó en el argot académico “la trinca”.

el ajuste entre las cátedras y el nuevo sistema departamental se hacía necesario también establecer equiparaciones de disciplinas, a efectos de participación en los concursos a plazas de profesores. Dichas equiparaciones se establecerían a posteriori en los Decretos ordenadores. Podrían declararse equiparadas para dichos concursos asignaturas de Facultades Universitarias distintas, una vez promulgados los correspondientes Decretos ordenadores (artículo 15).

En el caso de los profesores extraordinarios, finalmente, el carácter discrecional de la contratación era la norma. De modo que se disponía que el Rector, a propuesta del Decano y una vez oída la Junta de Facultad, pudiera nombrar profesores extraordinarios a personas de reconocido prestigio y competencia en las materias de que se tratase, siempre que poseyeran título universitario o equivalente. La designación sería por tiempo ilimitado, mediante contrato en el que se especificarían los servicios a prestar. Así mismo, las Universidades podrían designar profesores con carácter meramente honorífico, así como adscribir al Claustro a los Profesores extraordinarios cuando sus servicios se prolongasen durante un periodo no inferior a diez cursos.

Para ser designado profesor en cualquiera de las categorías, finalmente, sería preciso presentar una declaración jurada de acatamiento y lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, una disposición que seguiría vigente aún durante casi la siguiente década.

En el Capítulo IV se delineaba lo relativo a la dedicación plena y la actuación profesional del Profesorado universitario, aspectos a desarrollar en los Decretos ordenadores de las Facultades, que establecerían el régimen de dedicación de Catedráticos y profesores. En general, se les requeriría la dedicación plena y se optaría por la exclusión del ejercicio libre profesional y del servicio activo en otros Cuerpos. La realidad práctica, no obstante, estuvo llena de excepciones, y la ley fracasaría circunstancialmente en su aspiración maximalista de conseguir un profesorado volcado en la docencia y, a ser posible, la investigación.

Por último, de las disposiciones finales que contiene ese importante texto legal, sólo destacaremos algunas. Por ejemplo la séptima, destinada a evitar los equívocos de nominación, y por la que los Profesores denominados “agregados” en la Ley de 1943, pasarían a llamarse “Profesores extraordinarios” (lo cual podría a su vez crear confusión con los nuevos Catedráticos extraordinarios, una figura de rango muy superior); y la disposición octava, que establecía que los Decretos ordenadores de las diferentes Facultades universitarias habrían de promulgarse antes del primero de julio de mil novecientos sesenta y siete.

En cuanto a las disposiciones transitorias, nos interesa la primera, que muestra la voluntad pactista del legislador, así como supone una respuesta de repliegue ante la reacción negativa de muchos catedráticos –tanto en la prensa como en las Cortes-, pues recogía que los catedráticos anteriores al Decreto de ordenación podrían optar entre agrupar sus cátedras para constituir los Departamentos señalados en el Decreto o permanecer en la situación en que estuvieren, sin adscribirse a ningún Departamento. (Nacía así, esta nueva figura de ordenación académica, que en el diseño primero resultaba crucial, debilitada ya por presiones en contra).

El Decreto 1200/1966 de 31 de marzo²⁹² organizaba por su parte, específicamente, los Departamentos a constituir en las Facultades de Filosofía y Letras. Se entendía que, una vez establecidos los cambios pertinentes en el cuerpo docente, así como en la forma de acceso a las diversas categorías de profesorado, y creada ya la figura de los Departamentos, habiéndose cumplido el plazo fijado en la disposición final 8ª, se procedía a publicar los decretos ordenadores de los Departamentos en las diferentes Facultades. Como marcaba la ley, aquéllos estarían integrados por catedráticos ordinarios y extraordinarios; profesores agregados; profesores extraordinarios; profesores adjuntos; ayudantes y otro personal docente e investigador. En las Facultades de Filosofía y Letras de España existirían así, o podrían existir, hasta un total de 29 Departamentos, correspondientes a disciplinas de identidad muy clara y

²⁹² Publicado en el BOE de 16 de mayo.

particular: se había abandonado, claramente, el modelo americano de los grandes departamentos de alcance interdisciplinar. El cuadro siguiente recoge esa variedad, que directamente responde a la especificidad e inmensa variedad de las cátedras existentes, y a su muy próxima agrupación identitaria:

DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (1966)
Filología Griega
Filología Latina
Hebreo y Arameo
Árabe e Islam
Literatura Española
Lengua Española
Filología Románica
Lengua y Literatura Francesa
Lengua y Literatura Italianas
Lengua y Literatura Germánicas
Lengua y Literatura Inglesa y Norteamericana
Filosofía Fundamental
Filosofía Teorética
Filosofía Práctica
Historia de la Filosofía
Psicología
Ciencias Teoréticas de la Educación
Ciencias Experimentales y Diferenciales de la Educación
Ciencias Históricas de la Educación
Prehistoria
Historia Antigua
Historia Medieval
Historia Moderna
Historia Contemporánea
Historia del Arte
Paleografía y Epigrafía
Geografía
Historia de América
Antropología y Etnología

Cada Departamento agruparía las siguientes Cátedras²⁹³:

²⁹³ Sólo se detallarán las cátedras comprendidas en los Departamentos relativos a las materias de Geografía, Historia, Historia de América y Arte, que son las que nos interesan aquí.

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA (1966)
Etnología y Prehistoria
Prehistoria e Historia de España en las Edades Antigua y Media e Historia general de España (antigua y media)
Historia primitiva del hombre (Prehistoria)
Prehistoria e Historia Universal de las Edades Antigua y Media e Historia general de la cultura (antigua y media)
Arqueología
Arqueología, Epigrafía y Numismática

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA (1966)
Historia de España en la Edad Antigua
Prehistoria e Historia de España en las Edades Antigua y Media e Historia general de España (antigua y media)
Historia de España antigua y media
Historia Universal de la Edad Antigua
Historia antigua, Universal y de España
Prehistoria e Historia Universal de las Edades Antigua y Media e Historia general de la cultura (antigua y media)
Historia Universal antigua y media

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL (1966)
Prehistoria e Historia de España en las Edades Antigua y Media e Historia general de España (antigua y media)
Historia de España antigua y media
Historia de España en la Edad Media
Prehistoria e Historia Universal de las Edades Antigua y Media e Historia general de la cultura (antigua y media)
Historia Universal antigua y media
Historia Universal de la Edad Media

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA (1966)
Historia de España, moderna y contemporánea
Historia de España en las Edades Moderna y Contemporánea e Historia general de España (moderna y contemporánea) ²⁹⁴
Historia de España de las Edades Moderna y Contemporánea e Historia general de España (moderna y contemporánea)
Historia de América e Historia de la colonización española
Historia de España en la Edad Moderna
Historia Universal moderna
Historia Universal moderna y contemporánea
Historia Universal de las Edades Moderna y Contemporánea e Historia general de la cultura (moderna y contemporánea)

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA (1966)
Historia de España moderna y contemporánea
Historia de España en las Edades Moderna y Contemporánea e Historia general de España (moderna y contemporánea)
Historia de América e Historia de la colonización española
Historia de España contemporánea
Historia Universal contemporánea
Historia Universal de las Edades Moderna y Contemporánea e Historia general de la cultura (moderna y contemporánea)

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE (1966)
Historia del Arte
Historia del Arte moderno y contemporáneo
Historia del Arte hispanoamericano
Historia del Arte medieval, árabe y cristiano

²⁹⁴ En la publicación del BOE hay un error, al aparecer repetida la misma cátedra dos veces.

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE PALEOGRAFÍA Y EPIGRAFÍA (1966)
Arqueología, Epigrafía y Numismática
Epigrafía y Numismática
Paleografía y Diplomática

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA (1966)
Geografía
Historia de los descubrimientos geográficos y Geografía de América

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE AMÉRICA (1966)
Historia de América e Historia de la colonización española
Historia de América en la Edad moderna y contemporánea
Historia del Derecho indiano
Historia de los descubrimientos geográficos y Geografía de América” (en el caso de que no se incluya en otro Departamento)

CÁTEDRAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOLOGÍA AMERICANAS (1966)
Historia de América prehispánica
Arqueología americana

Algunos Departamentos podrían fusionarse en uno solo, sólo según las pautas fijadas en el propio Decreto, y también podrían existir Departamentos más genéricos en aquellas Facultades donde no existieran determinadas Secciones. Para la adecuación a la estructura departamental habrían de producirse equiparaciones de cátedras. La fusión de varios Departamentos no supondría ninguna variación de las equiparaciones establecidas, pero podrían establecerse equiparaciones con disciplinas de Departamentos de otras

Facultades cuando se hubieran promulgado los Decretos ordenadores de las mismas. Los Decanos de las respectivas Facultades de Filosofía y Letras, finalmente, con el visto bueno del Rector, enviarían las propuestas que fueran formulando las Juntas de Facultad sobre los Departamentos que desearan constituir. Aquellas cátedras que incluyeran disciplinas de diferentes Departamentos o de carácter general, habrían de adscribirse a los Departamentos más afines. Las Facultades que desearan crear Departamentos de estructura diferente a la establecida por el Decreto que acabamos de resumir, finalmente, lo solicitarían con el debido visto bueno del Rector y una vez oída la Junta de Gobierno, debiendo ser dictaminada su petición por el Consejo Nacional de Educación.

Una vez proporcionadas las pautas sobre ordenación de Departamentos en las Facultades, la Orden de 28 de mayo de 1966 determinaba los Departamentos creados en cada una de las Facultades de Filosofía y Letras de toda España²⁹⁵. La de Madrid quedaba estructurada como sigue:

UNIVERSIDAD DE MADRID. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (1966)	
Secciones	Departamentos
Sección de Filología Clásica	Filología griega
	Filología Latina
Sección de Filología semítica	Árabe e Islam
Sección de Filología bíblica trilingüe	Hebreo y arameo
Sección de Filología románica	Literatura española
	Lengua española
Sección de Filología moderna	Lengua y Literatura francesas
	Lengua y Literatura italianas
Sección de Filosofía	Filosofía fundamental
	Filosofía teórica
	Filosofía práctica
	Historia de la Filosofía
	Psicología
Sección de Pedagogía	Ciencias teóricas de la educación
	Ciencias experimentales y diferenciales de la educación
	Ciencias históricas de la educación

²⁹⁵ Orden de 28 de mayo de 1966 por la que se constituyen en las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades los Departamentos que se indican (BOE 4 julio). Es muy interesante este documento, ya que permite establecer una comparativa entre todas las Facultades de Filosofía y Letras del territorio nacional.

Sección de Historia	Prehistoria
	Historia antigua
	Historia medieval
	Historia moderna
	Historia contemporánea
	Historia del arte
	Paleografía y Epigrafía
	Geografía
Sección de Historia de América	Historia de América
	Antropología y Etnología americana

Posteriormente, por Orden de 7 de julio de 1967 se creó una nueva Sección en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la Sección de Arte²⁹⁶ con el plan de estudios que se mencionó en el capítulo anterior. Mas adelante, tres años después, la Orden de 21 de diciembre de 1970²⁹⁷ creaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid (sic)²⁹⁸ una Sección de Estudios Comunes, debido al elevado número de alumnos matriculados en los estudios comunes de dicha Facultad.²⁹⁹ Esta Sección específica agruparía los dos primeros cursos de la Licenciatura y el personal docente de los mismos. Tres años después, finalmente, el Decreto 1974/1973, de 12 de julio³⁰⁰, autorizaba la reestructuración de las Facultades de Filosofía y Letras.

A la altura de los años 70, tras la entrada en funcionamiento de la Ley General de Educación, los cambios sociológicos producidos en España

²⁹⁶ Orden de 7 de julio de 1967 por la que se crea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid la “Sección de Arte” (BOE 14 agosto). Curiosamente, el correspondiente plan de estudios de la Sección de Arte aún cuando se aprobó inmediatamente después de la creación de la nueva Sección, el 1 de agosto, no se publicó hasta el 9 de octubre del mismo año de 1967. Incluso se publicó antes una modificación del de Historia de América que se había aprobado con posterioridad. Dicho plan fue establecido por Orden de 1 de agosto de 1967 por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Sección de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 9 octubre).

²⁹⁷ Publicada en el BOE de 12 de enero de 1971.

²⁹⁸ Obsérvese que ya en 1968 se había creado la Universidad Autónoma de Madrid por lo que es la primera ocasión en que la antigua Universidad de Madrid es mencionada como “Universidad Complutense de Madrid”. Llama la atención sobre todo, si tenemos en cuenta que la Orden inmediatamente anterior en el BOE, se refiere a la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid.

²⁹⁹ Las alusiones al elevado número de alumnos es una constante y causa de la mayor parte de las reformas emprendidas en la época. Conviene recordar que el Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria (BOE 7) había propuesto una ratio de 50 alumnos por cada profesor, medida ambiciosa que en ningún momento se llegó a conseguir.

³⁰⁰ Decreto 1974/1973, de 12 de julio, por el que se autoriza la reestructuración de las actuales Facultades de Filosofía y Letras (BOE 22 agosto)

debidos al extraordinario aumento de la natalidad, a la posibilidad de acceso a estudios universitarios de una parte creciente de la sociedad y también al desarrollo intrínseco de las propias disciplinas, hacían necesario a todas luces materializar la creciente especialización y de ahí la separación de las distintas ciencias humanísticas que hasta entonces habían conformado los estudios de Filosofía y Letras³⁰¹.

Como el Decreto en cuestión reconocía, las Facultades de Filosofía y Letras incluían tres grandes áreas del saber relativas al conocimiento del hombre, su lenguaje y su conducta. El desarrollo interno de cada una de ellas en los últimos tiempos, hacía difícil el seguir conservando planes de estudios homogéneos acordes con la evolución del saber, y sobre todo, el mantenimiento de los primeros cursos comunes. Así pues, era necesario introducir la flexibilidad que permitiera una mayor eficacia docente. Así, la Comisión Permanente de la Junta Nacional de Universidades disponía:

Primero.- Autorización a las Universidades que contasen con Facultad de Filosofía y Letras para proponer la división de las mismas de acuerdo a las Secciones en ellas integradas, en: Facultades de Geografía e Historia; Facultades de Filología y Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación

Segundo.- En las Facultades de Geografía e Historia existirían a su vez, Secciones de: Geografía; Historia; Historia de América e Historia del Arte.

Tercero.- En las Facultades de Filología existirían Secciones de: Filología hispánica; Filología románica; Filología germánica; Filología clásica y Filología semítica.

Cuarto.- En las Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación existirían Secciones de: Filosofía; Psicología y Ciencias de la Educación.

³⁰¹ Conviene recordar que en Madrid existía incluso una segunda Universidad desde 1968, creada por el Decreto-Ley 5/1968, reforma llevada a cabo por el entonces ministro de Educación y Ciencia, José Luís Villar Palasí para permitir la reestructuración universitaria en profundidad que vendría dada por la Ley de 1970.

DIVISIÓN DE LAS FACULTADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS (1973)	
Nuevas Facultades	Secciones
GEOGRAFÍA E HISTORIA	Geografía
	Historia
	Historia de América
	Historia del Arte
FILOLOGÍA	Filología hispánica
	Filología románica
	Filología germánica
	Filología clásica
	Filología semítica
FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	Filosofía
	Psicología
	Ciencias de la Educación

Quinto.- Las Universidades, en principio, contarían con todas las Secciones que ya tuvieran reconocidas. Para proponer otras diferentes de las recogidas anteriormente, se hacía preciso acompañar su petición de un estudio económico, sin cuyo trámite, la propuesta no sería cursada.³⁰²

Sexto.- Abría la posibilidad de crear nuevas Secciones en un futuro, siempre sujetas a las normas de carácter general que se dictasen.

Séptimo.- Los Decanos podrían nombrar Vicedecanos o coordinadores de estudios de cada una de las Secciones de la Facultad.

Octavo.- En la Facultad de Geografía e Historia se podrían constituir los siguientes Departamentos:

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DEPARTAMENTOS (1973)
Historia Antigua
Historia Medieval
Historia Moderna
Historia Contemporánea
Historia de América
Prehistoria y Arqueología
Paleografía y Diplomática
Historia del Arte
Geografía General
Geografía Humana

³⁰² Como se ve, la preocupación por la disponibilidad o falta de medios era una constante.

Noveno.- En la Facultad de Filología se podrían constituir los siguientes Departamentos:

FACULTAD DE FILOLOGÍA DEPARTAMENTOS (1973)
Lengua Española
Literatura Española
Lengua y Literatura latina
Lengua y Literatura griega
Lengua y Literatura árabe
Lengua y Literatura hebrea
Lengua y Literatura francesa
Lengua y Literatura italiana
Lengua y Literatura inglesa
Lengua y Literatura alemana
Lengua y Literatura portuguesa

Décimo.- En la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación se podrían constituir los siguientes Departamentos:

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTOS (1973)
Historia de la Filosofía y de la Ciencia
Lógica
Metafísica
Ética
Estética
Pedagogía Sistemática
Educación Comparada e Historia de la Educación
Metodología educativa
Pedagogía experimental y orientación
Psicología general
Psicología experimental
Psicología evolutiva y diferencial
Psicología fisiológica

Undécimo.- Las Universidades poseerían únicamente aquellos Departamentos necesarios para la enseñanza de las Secciones que tuvieran reconocidas. Se podría proponer la fusión de dos o más Departamentos en uno, así como la creación de Departamentos distintos de los mencionados cuando las necesidades lo aconsejasen.

Duodécimo.- El Ministerio de Educación y Ciencia quedaba autorizado para dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para el desarrollo de este Decreto.

Publicada la Ley de 1965 de creación de los Departamentos universitarios y tras las modificaciones que introdujo la Ley General de Educación de 1970, se hacía conveniente proceder a la reestructuración de los Departamentos, lo que se llevó a cabo mediante Decreto en 1973.³⁰³ En dicho Decreto se aludía a aquél otro de 1965 en el que se establecía la estructura del profesorado de la Universidad española y la creación de Departamentos. En él, quedaban definidos como “*unidades estructurales universitarias que agruparían a las personas y los medios materiales destinados a la labor docente, formativa e investigadora en el campo de una determinada disciplina o disciplinas afines*”. En cuanto a sus funciones, consistían en “proponer proyectos e investigaciones en equipo (independientemente de los que los profesores pudieran llevar a cabo a título personal); promover el desarrollo científico y docente de las Cátedras implicadas, facilitando su labor y la consecución y distribución de medios, y, finalmente, servir de enlace entre las Cátedras y las autoridades de la Facultad o Sección”.

La Ley General de Educación, por otra parte, decía que “las Universidades, estarían integradas por Departamentos que, a los efectos administrativos y de coordinación académica se agruparían en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores”, al tiempo que los definía como “*unidades fundamentales de enseñanza de investigación en disciplinas afines que guardan entre sí relación científica*”. Es importante señalar la diferencia. Son dos organizaciones paralelas, coexistentes e interrelacionadas. Una, desde el punto de vista administrativo-docente y otra, desde el punto de vista de la función investigadora y científica que asume y encarna la Universidad. Ello permitiría que un mismo Departamento tuviera, en principio, presencia en diversas Facultades, allí donde se desarrollasen partes del saber relacionadas, aunque por razones administrativas tuviera la sede y sus órganos directivos en

³⁰³ Decreto 1977/1973, de 26 de julio, sobre reestructuración de los Departamentos universitarios (BOE 22 agosto)

una de ellas, que vendría a coincidir con aquella en que las disciplinas fuesen más acordes y tuvieran mayor número de alumnos. Podríamos decir que así, según la LGE, Facultad y Departamento son estructuras armónicamente combinables, siendo las referidas al Departamento entidades transversales de desarrollo de una parcela de conocimiento.

Por esa importancia crucial desde el punto de vista científico, el Decreto se proponía desarrollar las normas generales contenidas en la Ley General de Educación relativas a los Departamentos. Así se establecía el Departamento como unidad fundamental de la docencia y de la investigación en la Universidad. Las materias se distribuirían en ellos en razón de su mayor relación o afinidad científica, metodología y denominación. Así pues, deberían figurar en un solo Departamento las disciplinas de idéntica metodología o denominación correspondientes a varias Facultades de la misma Universidad.

Para la constitución de un Departamento, era imprescindible que un catedrático numerario se pusiera al frente. En el caso de que hubiere varios, el Rector nombraría Director a uno de ellos. Así mismo, en cada Departamento existiría un Consejo constituido por los Profesores numerarios, del que formaría parte una representación de los restantes Profesores y otra de los alumnos del tercer Ciclo o de Doctorado que colaborasen en el Departamento. El Consejo de Departamento tendría como función asesorar al Director en las cuestiones de su competencia, reuniéndose preceptivamente al menos cada tres meses dentro del periodo lectivo, y siempre que se estimase oportuno.

Serían funciones del Director de Departamento “convocar y presidir las reuniones del Consejo; elaborar propuestas de gastos que serían elevadas al Rector por el conducto reglamentario (por lo que tendría conocimiento preciso de las partidas económicas asignadas por el presupuesto universitario al Departamento en cada uno de los capítulos); dirigir y supervisar el desarrollo de la docencia y de la investigación; confeccionar la Memoria de las actividades desarrolladas durante el curso académico; la representación del Departamento ante los organismos superiores; formar parte de la Junta de Facultad y desempeñar aquellas funciones que le fueran encomendadas por el Rector,

directamente o a través de los Decanos”. El Decreto también consideraba las eventualidades de vacante del Catedrático Director de Departamento. Cada Departamento estaría integrado en una Facultad, en la que su Director tendría voz y voto en la Junta de Directores del Centro. Así mismo, asistiría personalmente o por medio de un Profesor agregado a la Junta de las otras Facultades donde se impartiesen enseñanzas integradas en el Departamento, teniendo también en ellas voz y voto.

La norma fundamental que decretaba la separación de los estudios y la creación como tal de la Facultad de Geografía e Historia es la Orden de 16 de julio de 1975, por la que se dividía la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid.³⁰⁴ Dicha Orden, recogiendo la propuesta del Rector de la Universidad Complutense, establecía que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense quedaba dividida en las siguientes Facultades:

A) Facultad de Geografía e Historia, integrada por las Secciones de:

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA	
Secciones	Geografía
	Historia
	Historia de América
	Historia del Arte

B) Facultad de Filología, integrada por las Secciones de:

FACULTAD DE FILOLOGÍA	
Secciones	Filología Clásica
	Filología Semítica
	Filología Bíblica Trilingüe
	Filología Hispánica
	Filología Románica
	Filología Moderna

³⁰⁴ Publicada en el BOE de 27 de agosto.

C) Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, integrada por las Secciones de:

FACULTAD DE FILOSOFÍA	
Secciones	Filosofía
	Psicología
	Ciencias de la Educación

La Dirección General de Universidades e Investigaciones, como era preceptivo, dictaría las disposiciones complementarias y aclaratorias precisas para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto. Dicha estructura permanecería hasta las reformas de los años 90, que desembocarían en una marcada especialización que llevó a la conversión de las Secciones en titulaciones independientes, creándose incluso otras nuevas

* * * *

Aunque no afecta sino colateralmente a la organización interna de la Facultad de Filosofía y Letras, dedicamos ahora unos párrafos a la regulación del título de Doctor, que fue una práctica que, desde 1943, se mantuvo hasta la década de los 50 y que conviene aclarar.

Según el artículo 21 de la Ley de Ordenación de la Universidad española “*todas las Universidades podrían conferir el grado de Doctor de sus diversas Facultades*”. Sin embargo, esta afirmación que parecía tajante quedaba matizada hasta suponer la exclusividad de Madrid por la disposición transitoria cuarta: “*para que pueda cumplirse lo ordenado en el artículo veintiuno respecto a la colación del grado de Doctor, será preciso que el Ministerio autorice por Decreto a cada Universidad cuando se estime que ha alcanzado plenamente la debida organización. Entretanto, los estudios del grado de Doctor que determinen los reglamentos podrían cursarse en todas las Universidades, siempre que en ellas estén establecidas las disciplinas necesarias*”, pero “*La tesis será juzgada en la Universidad de Madrid por un Tribunal de cinco catedráticos de la disciplina objeto de la tesis, de las distintas Facultades de*

España. En el título se haría constar la Universidad de procedencia, que debería publicar la tesis del nuevo Doctor”

Así pues, los tribunales tendrían lugar, exclusivamente en Madrid, según lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Ordenación de la Universidad española, “en tanto no se organizaran en todas las Facultades las enseñanzas de Doctorado (...) y el Ministerio de Educación Nacional no estimase que las Facultades habían alcanzado el grado de organización necesaria para juzgar por sí misma las tesis doctorales”. Dicho asunto quedaba regulado además por el Decreto de 29 de abril de 1944 que autorizaba a la Universidad de Madrid para conferir el grado de Doctor y por Decreto de igual fecha que daba normas para la concesión del Grado de Doctor en las Universidades de provincias³⁰⁵.

Estos Decretos estipulaban la exclusividad de Madrid al menos durante un periodo de cinco años, exclusividad que perduraría para toda España hasta 1953, en que se conferiría dicha capacidad a las de Salamanca y Barcelona. Establecía que en la “Universidad de Madrid se cursarían las disciplinas necesarias que exigieran los planes de estudios de todas las Facultades para obtener dicho Grado. Asimismo, en dicha Universidad se juzgarían las tesis y se conferirán los Grados de Doctor con arreglo a la legislación vigente. Para la colación del Grado de Doctor sería necesario un Decreto que autorizara a cada Universidad, cuando se estimase que hubiera alcanzado la debida organización.

Para el legislador era indudable que la Universidad de Madrid tenía debidamente organizados los estudios correspondientes, puesto que era la única en que se podían cursar las disciplinas necesarias y se conferían los Grados de Doctor en todas sus facultades. Poco a poco se fue obteniendo ese derecho por otras Universidades. Las primeras fueron Salamanca y Barcelona, como hemos dicho, ambas en 1953, una en noviembre y la otra en diciembre (Decreto de 6 de noviembre y Decreto de 4 de diciembre, respectivamente).

³⁰⁵ Ambas publicadas en el BOE de 7 de mayo.

Pero no sería hasta 1954 cuando finalizado el régimen transitorio, todas las Universidades quedaron facultadas para conceder el grado de Doctor, por Decreto de 25 de junio que regulaba el procedimiento para conferir el grado de Doctor en todas las Universidades.³⁰⁶ Este Decreto daba por terminado el régimen transitorio que fue previsto para su aplicación. A partir del curso 54-55 todas las Universidades españolas podrían conferir el Grado de Doctor en las Facultades y Secciones que las integran.

En Madrid, la Universidad Autónoma (segunda de la capital desde 1968, creada por el Decreto-Ley 5/1968, mediante reforma llevada a cabo por el entonces ministro de Educación y Ciencia, José Luís Villar Palasí para permitir una reestructuración universitaria), contó con dicha autorización a partir de 1971, de manera que se pudieran leer y calificar tesis doctorales en sus Facultades, poniendo fin así la normativa legal a la exclusividad de la Complutense en la capital.³⁰⁷

³⁰⁶ Publicado en el BOE de 12 de julio.

³⁰⁷ Orden de 12 de marzo de 1971 por la que se autoriza a las Facultades de Filosofía y Letras (...) de la nueva Universidad Autónoma de Madrid, para proceder a la lectura y calificación de tesis doctorales, (BOE 16 abril)

V. CONCLUSIONES

Una vez concluido el análisis legislativo relativo a la organización de los estudios de Historia en la Universidad de Madrid bajo el franquismo³⁰⁸ podemos decir que se trata de un periodo largo y complejo, que en modo alguno es homogéneo.

Siguiendo el esquema teórico “cambio-resistencia al cambio” en el desarrollo de la historia universitaria, vista en el ciclo largo y en consideración a sus estructuras y funciones, parece claro que siguieron perviviendo las prácticas, los modos de actuación y, de acuerdo con ellos, los ideales más tradicionales y conservadores provenientes de la experiencia de los liberales moderados del siglo XIX, fundamentalmente los esquemas de la Ley Moyano (1857). En los ciclos cortos, sin embargo, se sucedían movimientos basculantes de acción–reacción (con diferentes grados de inspiración política y social, además de coyunturalmente científica), que a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX quedan desbordados o contrarrestados por otros que podríamos definir como de acción–represión.

De dicho análisis, que ha tomado como referencia los marcos de organización académica derivados de las dos grandes leyes educativas que marcan el periodo en el ámbito de la educación superior se pueden extraer algunas conclusiones.

Aunque hablamos de “universidad franquista” para todo el periodo, podemos constatar que los años sesenta supusieron un punto claro de inflexión, ya que dieron inicio a una serie de transformaciones de cierto calado en el ámbito de los estudios universitarios, aunque por causa de los avatares políticos no llegaron muchos de ellos a tener una plasmación práctica. Las

³⁰⁸ Podemos denominarla también “franquista” por ser el período histórico que abordamos y como término comúnmente aceptado por los estudiosos para denominar a la universidad española de la época, que presenta peculiaridades que son específicas de la realidad española bajo el régimen de Franco, y “de Madrid”, en la denominación que le diera el Rector Pedro Laín, por oposición al concepto de “Central” en el sentido de centralista y al de “Complutense” como heredera de la de Alcalá, nombre que recibiría sin embargo de nuevo más tarde para diferenciarla de la “Autónoma de Madrid” tras la creación de ésta en 1968.

verdaderas transformaciones no vieron la luz hasta que, muerto el dictador, se llevaron a cabo desde supuestos de organización democráticos. En la antesala de esos cambios, las universidades viven reguladas por una serie de disposiciones de rango menor que a menudo se contradecían posteriormente, en ese movimiento pendular de reacción que solía venir determinado por una conflictividad enconada.

Conviene subrayar que el arranque del periodo franquista en la universidad, tras la guerra civil, no partía de un modelo a priori de universidad falangista o totalitaria, como sí había ocurrido en cambio en Alemania e Italia. Entre los ideólogos falangistas, apenas existía una reflexión teórica previa, de cierto peso, acerca de lo que debía suponer la educación universitaria en el Nuevo Estado, aspecto éste que sí estaba altamente desarrollado en los círculos católicos, avalado además por una larga trayectoria y experiencia. De esta manera, las soluciones ofrecidas, como ya señaló Mariano Peset en su momento, supusieron un sincretismo que se nutría del intento de conciliación de las diferentes tendencias en el seno del franquismo: Falange, Iglesia y Ejército.

Frente a esta cierta inconsistencia teórica, sí existía en cambio un objetivo práctico bien definido, que consistía en finiquitar cualquier reminiscencia de las personas, experiencias e instituciones del periodo republicano, a las que se veía como verdadera causa de todos los males que habían desencadenado el conflicto civil, por lo que había que erradicarlos tajantemente. Podemos hablar de una concepción “negativista” del periodo republicano, que los ejecutores de la victoria militar llevaron al extremo mediante la nueva legislación, con la depuración sistemática del profesorado en todos los niveles educativos, y simbólicamente, con la edificación de la “nueva” Universidad franquista sobre las ruinas de la Universidad arrasada, la que había surgido en Madrid, muy especialmente, con el proyecto visualizado en la República y encarnado en la Ciudad Universitaria.

El “nuevo” esquema de organización académica implantado, por lo tanto, no respondía simplemente a los modelos de universidad totalitaria o fascista.

Existía una evidente incongruencia entre un discurso radical con aspiraciones sociales modernizadoras (el de Falange), en consonancia con un hipotético “nuevo estado”, y las plasmaciones legislativas subyacentes a esa retórica (que recordaban añejos marcos que la II República había tratado de desechar). Se materializaron sin embargo, en consonancia con el control preciso de los diversos componentes sociales, algunas instituciones genuinamente falangistas como eran el SEPES y el SEU, y se creyó posible reproducir la ideología del Movimiento con una así llamada asignatura de “Formación Política”.

Por más que se voceara un discurso con aires de novedad y modernidad, en realidad lo que afloraba era el contenido tradicional, conservador y católico, muy apegado a los referentes del siglo XIX, como evidencia el calco que sobre la Ley Moyano efectúa la de 1943, que se completa con unas cuantas notas tomadas de los intentos autonomistas de la reforma de Silió, si bien eliminando la inspiración democratizadora que presentaba aquélla en 1919 y acercando el concepto de “autonomía” a los recortes de Primo de Rivera. La terminología propia de los regímenes totalitarios y fascistas que se desliza a veces en los textos legales, queda cubierta con el barniz de confesionalidad que aportan Acción Católica y los propagandistas. Parece incluso que dentro del ideario de José Antonio, haya tenido más repercusión el modelo de universidad de la época dictatorial de su padre que la faceta “revolucionaria” y novedosa del fascismo, sin estorbar la nota nacional-católica. No hemos de hablar, por tanto, de una universidad fascista, aunque sí de una universidad fascistizada, pero sobre todo muy conservadora y tradicional en el plano académico y docente.

Así, en la Ley de 1943 la universidad volvía a ser un eslabón más de la Administración Central, con un sistema de organización muy jerárquico a cuya cabeza se situaba el Rector como representante del Ministerio, que lo designaba. Reunía en su persona tanto poder que se extendía éste, prácticamente, a cualquier actividad que tuviera lugar dentro del ámbito de la Universidad y su Distrito. La autonomía económica era muy limitada, siempre dentro de los estrechos límites que marcaba el Ministerio, ante el que además, había de rendir cuentas. Éste conservaba también el monopolio de la

expedición de títulos y del acceso a los cuerpos de profesores, ya que se mantenía el sistema de oposición.

En este contexto cabe destacar el papel central y decisivo mantenido por la Universidad de Madrid. Madrid concentraba importantes dosis de decisión, muy superiores a las de las demás universidades por el peso específico de sus rectores y docentes en la vida política del país, por ser la que contaba con todos los estudios que se podían cursar en el Estado, imponiendo a las demás indirectamente sus planes de estudios. Era la única que contaba en principio con facultad de Ciencias Políticas y Económicas; algunas cátedras sólo funcionaban aquí; contaba con una mayor dotación; era la única en que se podían defender las tesis doctorales hasta 1954; dónde se celebraban obligatoriamente las oposiciones, etc. Todo ello confirma el centralismo madrileño dentro del ámbito universitario, y esto fue así hasta finales de los años sesenta, con los experimentos autonomistas limitados que dan origen a nuevas universidades.

La Ley del Ordenación Universitaria de 1943, vigente hasta 1970, intentó transmitir los principios ideológicos franquistas al estudiantado y conseguir así que la universidad cumpliera su papel de reproductora de élites dirigentes. Y aunque no consiguiera este objetivo plenamente, lo cierto es que su estabilidad a lo largo del tiempo, su duración no obstante, se consiguió gracias a una serie de disposiciones menores que permitían su adaptación a los requerimientos de cada momento.

Pero a la altura de los años sesenta el contexto económico, social y - aunque fuera tímidamente-, también el político, habían cambiado en España. Se había producido un incremento demográfico importante, un cambio generacional notable, y los contactos con el exterior eran más frecuentes, en el ámbito universitario muchos de ellos propiciados precisamente por las bolsas de viaje concedidas por el SEU, con lo que penetraban nuevas influencias que exigían una modernización de estructuras. Ese cambio de percepción coincidió en la universidad con el predominio de los denominados “camisas nuevas” falangistas, que ya no se encontraban implicados directa y afectivamente en la

guerra. Coexistían con sectores de la Iglesia ya más próximos al Opus Dei que a Acción Católica Nacional de Propagandistas -como sucediera en los primeros tiempos-, los denominados “tecnócratas” que pretendían dar soluciones de tipo práctico a problemas que, la mayoría de las veces, tenían raíces políticas.

Derivado de esas contradicciones, resultaba ya claramente visible el fracaso del proyecto de falangistización de la universidad española. Tras veinte años de insistencia, se demostraba que aquellos ideales no sólo no habían arraigado extensamente entre el alumnado, sino que, por el contrario, incluso habían ido generando rechazo, alimentando una oposición que era constante fuente de conflictos y que llevó a decretar la disolución del SEU en 1965. Pasaría a convertirse en una Comisaría, intentando sustituirse su control del alumnado mediante Asociaciones profesionales de Estudiantes, a las que era obligatoria la pertenencia pero estaban vacías de contenido. Muestran también aquel mismo proceso de disolución el fin de la obligatoriedad de adscripción y/o residencia en los Colegios Mayores, y de cursar (y aprobar) las tres asignaturas genuinamente franquistas: Formación política, Religión y Formación física. Medidas que coincidían, y al tiempo eran en parte consecuencia, de una creciente concienciación y organización del movimiento estudiantil, cuyas reivindicaciones irían adquiriendo progresivamente, un carácter más político. Al mismo tiempo iría aflorando un núcleo de profesores que apoyaban las peticiones y las protestas estudiantiles. Algunos de ellos serían expulsados por este motivo.

Dejando a un lado la cuestión de si estas actuaciones influyeron o no sustancialmente en el deterioro del régimen de Franco, lo que sí es cierto es que durante la década de los 60 la respuesta del Ministerio de Educación se caracterizó por la aplicación de reformas puntuales, que por lo general iban muy a la zaga de las reclamaciones de los estudiantes. Las demandas de participación de los estudiantes en la organización de su Universidad en los primeros momentos fueron manejadas desde el punto de vista disciplinario, aunque ya en el año 65 nacieron aquellas Asociaciones Profesionales de Estudiantes que antes citamos, y que sin embargo convivían con auténticos sindicatos de estudiantes (SDEUs) en la ilegalidad, interfiriéndose mutuamente

y siempre aspirando a una representación más auténtica, toda vez que las primeras suscitaban con frecuencia el masivo rechazo del alumnado. La legislación tecnocrática de los años 70, en torno a la Ley General de Educación (LGE), suponía –esta vez sí- un esfuerzo notable de modernización de la educación española en todos los niveles, un intento de europeización, si bien ahí la situación política de fondo perturbaría la validez del modelo legal: la falta de medios y, en ocasiones, el verdadero desprecio de las autoridades ante el conflicto permanente en la universidad, se iría enquistando.

La Ley en sí, como hemos tratado de evidenciar en el análisis, tenía mucho de novedosa, no tanto quizá si se comparaba con el contexto educativo europeo del momento -en el cual se inspiraba directamente-, pero sí desde luego en comparación con la situación preexistente. En el aspecto puramente técnico, era novedoso el ofrecer un estudio previo de la cuestión, el denominado “Libro Blanco” publicado en 1969; también el hecho de que pretendía ser una ley consensuada, reclamando el apoyo de todos los actores que intervenían en la cuestión educativa; el venir precedida de una normativa previa, promulgada con carácter de urgencia pero también con carácter experimental, y -lo que era más importante-, que contaba con una planificación precisa y se acompañaba de un calendario para su aplicación, tanto en el plano temporal como económico, incluyendo una memoria presupuestaria para el primer año, que hasta disponía la reserva de suelo para la construcción de centros educativos.

Lo crítico de la situación política al final del franquismo hizo que no llegaran a ejecutarse en su totalidad los planes previstos, debido en gran medida a la frontal oposición estudiantil a la selectividad y al “numerus clausus”, pero también a la crisis económica. Hay que insistir, no obstante, en que el intento procuraba la racionalización del panorama educativo en un esfuerzo formidable, prácticamente no dejaba ningún ámbito educativo fuera, regulando asimismo la expedición de títulos.

La ley consideraba la educación ya no sólo como un deber, sino sobre todo como un derecho irrenunciable, por lo que establecía su obligatoriedad y

gratuidad en los niveles básicos, velando jurídicamente por el cumplimiento de ese derecho. Establecía la consideración de la formación profesional dentro del ámbito educativo, la educación permanente, la educación de adultos, la educación especial, la educación a distancia, la formación permanente del profesorado... Aspectos todos éstos que por considerarse prioritarios fueron los primeros que se aplicaron y donde la ley tuvo una mayor repercusión estableciendo unos mínimos en los que ya no hubo marcha atrás.

La educación superior intentaba responder a las exigencias de profesionalización que reclamaba un mercado de trabajo cada vez más especializado; concedía una tímida autonomía en lo relativo a docencia e investigación, permitiendo la flexibilización curricular de los estudiantes. Pero no era tan avanzada desde el punto de vista económico y de auténtico autogobierno representativo, si bien fomentaba las estructuras departamentales y los institutos como unidades de investigación. Incluyendo los estudios técnicos en la universidad, abriendo un calendario para la aprobación de Estatutos específicos para cada Universidad, fue sin embargo el ámbito universitario aquél en que apenas se pudieron aplicar sus principios. Tanto es así que triunfó la huelga general, propuesta para febrero de 1972, que pretendía la suspensión de la Ley, y a raíz de ello cesó Villar Palasí y se introdujeron modificaciones. Parecía una victoria de los estudiantes.

Pero en realidad esa huelga abrió un nuevo periodo que ponía fin al “aperturismo tecnocrático”. Villar Palasí fue sustituido por Julio Rodríguez y, a partir de ese momento, la autonomía universitaria quedó relegada, incluso en las propias universidades que nacieron autónomas. En julio de 1972 quedaron suspendidos temporalmente los estatutos, volviendo a recaer el poder universitario en los rectores elegidos por el Ministerio. Los Decanos y Directores de Departamentos serían elegidos directamente por el Rector. Se creaban Consejos de disciplina para controlar las reavivadas movilizaciones, los Centros podrían ser clausurados por la Dirección General de Universidades e Investigación, los profesores podían decretar la expulsión de los alumnos, y desaparecía la representación estudiantil. Se anulaban así muchos de los avances de la Ley Villar.

Cuando se levantó la suspensión temporal, lo único que se logró fue la prórroga por tres años de los estatutos provisionales que se habían dado en el 70, de manera que la universidad española sólo obtendría la autonomía universitaria tiempo después de muerto Franco, establecido y asentado el estado democrático y tras la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Los primeros Estatutos democráticos de la Universidad Complutense no se aprobarían hasta 1985.

Quizá, la oposición frontal del movimiento estudiantil a una ley que nacía en un contexto político anacrónico y asfixiante, impidió realmente que al menos se pudieran experimentar algunos aspectos positivos de la modernización propuesta por el Ministerio de Villar Palasí, con la consecuencia indeseada de que hubiera de esperarse más de una década en una situación de absoluta provisionalidad. Las modificaciones académicas comprendidas entre mediados de los años 60 y los 70, en concreto en la Universidad de Madrid, no pueden entenderse así al margen de un contexto de reivindicación constante por parte del movimiento estudiantil. En ese sentido la legislación y la actitud del Estado frente a la cuestión o problema universitario se movió alternativamente siguiendo la dinámica de acción–reacción / represión. Hasta la muerte de Franco y el final el régimen, se negó el carácter político de las reivindicaciones.

Pero si hay algo que verdaderamente perduró a lo largo de todo el periodo, y que es una constante, es la fuerte presencia de la Iglesia, primero con Acción Católica y los propagandistas y el ideal nacional-católico, y en el segundo periodo a través de la presencia del Opus Dei, mediante el reconocimiento explícito de los derechos de la Iglesia en el ámbito educativo y el reconocimiento de universidades católicas (Navarra y Deusto), cuestión eludida durante el primer franquismo. La universidad estatal dejó de ser católica por definición y desaparecieron las asignaturas de religión de sus planes de estudio así como la obligatoriedad de cursarlas y aprobarlas. Sin embargo la Iglesia continuó teniendo una importante presencia en la universidad española, que se prolonga hasta nuestros días.

Respecto a la evolución de los estudios de Historia, cabe señalar que en el aspecto docente sí se percibió una clara evolución. Obviando el paréntesis republicano y sus planes de estudios novedosos, se pasó de los esquemas decimonónicos, plegados a las cátedras y personalidad de los catedráticos reinstalados en ellas tras la guerra, a una más que considerable especialización a mediados de los años setenta. Entre las razones principales de esta especialización hay que señalar la propia evolución intrínseca de las disciplinas científicas, junto a los requerimientos de una sociedad cambiante que demandaba mayor adaptación al mercado de trabajo. Estas premisas que eran válidas para todas las disciplinas en general, también lo eran para las asociadas tradicionalmente a los estudios de Filosofía y Letras. Por otra parte, a la altura de los años 70 se habían producido importantes cambios sociológicos en el país, que tenían un claro reflejo en el panorama universitario. Cada vez era mayor el número de alumnos que accedían a los estudios universitarios y ello facilitaba, e incluso requería, la atomización de la docencia.

En líneas generales la tendencia de los planes de estudios se caracterizó por una pausada y progresiva especialización. Los primeros planes de estudios, elaborados en agosto de 1939, eran “planes de urgencia”, que se limitaban a desmontar los de 1931 y seguían los tradicionales esquemas decimonónicos de estudios generalistas. Se aprobaban curso a curso, de manera que estuvieran dispuestos para el comienzo de las clases, a la espera de la aprobación de una ley que rigiera el conjunto de la universidad. Ésta se demoró más de lo esperado, por lo que fue necesario improvisar sobre la marcha. Se partía de una Facultad de Filosofía y Letras dividida en tres Secciones: Filosofía, Letras, e Historia, y los estudios estaban repartidos en cinco cursos, dos comunes y tres de especialidad. Las asignaturas, dentro de la disciplina de Historia, consistían fundamentalmente en Historia General, Historia de España e Historia del Arte.

Una vez aprobada la LOU, tan sólo dos meses después, aparecía una orden estableciendo las disciplinas que componían el primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras, pero sin que se pudiera hablar de un verdadero plan de estudios hasta el 7 de julio de 1944, plan en el que se reconocía

explícitamente la necesidad de una mayor especialización y que organizaba también la expedición de los grados de Licenciado y Doctor. Con el plan del 44 la Facultad pasaba de tres secciones a siete, y en concreto la de Historia se desdoblaba, creándose la Sección de Historia de América³⁰⁹. Además de las dos secciones de Historia, habría una de Filosofía, tres de Filología y una de Pedagogía. Se mantenía la misma estructura de los estudios, dos cursos comunes, tres de especialidad y uno de Doctorado. Las enseñanzas se organizaban por cátedras, contando las de Historia con diecinueve cátedras más tres que se añadirían al aprobarse la Sección de Historia de América, en total veintidós.

Es importante señalar que en los primeros meses de ese mismo año de 1944, incluso antes de la publicación de los planes generales, se había aprobado la impartición de lo que se llamaba “enseñanzas no facultativas”, es decir, formación religiosa, formación política y educación física, que a partir de ese momento pasaron a formar parte del plan de estudios como unas asignaturas más, de obligatorio seguimiento y que era preceptivo aprobar. El decreto de 1944, asimismo, preveía que a los cinco años de rodaje se podrían proponer modificaciones, y eso fue lo que se hizo a la altura de agosto de 1953. Se introdujeron modificaciones que otorgaban mayor flexibilidad a la organización de los estudios de cada Facultad, para lo que se creaba un “esquema tipo” que podía ser adaptado por cada uno de los centros según sus peculiaridades o necesidades. Con ello se pretendía mayor autodeterminación pedagógica, pero siempre asegurando unos mínimos comunes. En 1954, como aspecto relevante, se decretaba el fin de la exclusividad de la Universidad de Madrid para poder juzgar tesis doctorales. En 1955 se producía la adaptación del “plan tipo” de Filosofía y Letras a la Facultad homónima de Madrid, y en 1960 se decretaba la supresión del examen intermedio en los estudios de Filosofía y Letras, aunque sería preceptivo superar los dos primeros cursos para continuar estudiando.

³⁰⁹ Reflejo del renovado espíritu imperial y de “hispanidad” del franquismo en relación con el pasado colonial español. No obstante, dichos estudios sólo se impartirían en Madrid y en Sevilla y su plan de estudios de Historia de América quedaría pospuesto hasta 1945.

A finales de los años sesenta, acogiéndose al artículo 20 del Decreto de agosto de 1953, se abría la posibilidad de que las Facultades propusieran al Ministerio la modificación de sus planes de estudios. Así, los años finales de la década de los sesenta serían un paso más en el camino, lento pero inexorable, hacia una mayor especialización de las enseñanzas. En julio de 1967 se aprobaba, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la creación de una nueva Sección de Arte (con lo que ya eran cuatro las secciones de Historia dentro de la Facultad); en agosto del mismo año se aprobaba la modificación del plan de estudios de Historia de América, creándose la subsección de Antropología americana, y en octubre de 1968, ahondando más en esa tendencia, se crearon cuatro especialidades dentro de los estudios de la Sección de Historia y Geografía: Historia de la Edad Antigua, Historia de la Edad Media, Historia de la Edad Moderna y Contemporánea, y Geografía, aportando además los planes de estudios un número considerable de asignaturas optativas. En 1970, ante la demanda existente debido al elevado número de alumnos, se creó una Sección de Historia de estudios comunes. En junio de 1969, otro decreto había refundido las normas previas sobre el curso selectivo en las diferentes Facultades, resultando preceptiva la aprobación del primer curso de carrera para poder seguir cursando estudios.

Las siguientes modificaciones que se dieron fueron ya consecuencia de la aprobación de la LGE de 1970. Así, en 1972 se establecían directrices para la elaboración de los planes de estudios, continuando la tendencia hacia una mayor flexibilidad y autonomía de los mismos, fijando los contenidos mínimos imprescindibles para obtener la titulación oficial y dejando el resto a la iniciativa de cada Universidad, y dentro de ella de cada Facultad. El esfuerzo se centraba, pues, en conjugar homogeneidad a nivel estatal y autonomía de la Universidad. Todo ello se recogía en el artículo 37 de la LGE. Frente a la rigidez de los planes anteriores, a partir de ese momento estarían compuestos por materias comunes y optativas, favoreciendo la diversificación de niveles y la especialización tanto profesional como académica. Para favorecer su adaptación a los modelos europeos se dividirían en tres ciclos, que irían desde lo general, básico y formativo, hasta lo particular e informativo, dando lugar a titulaciones específicas.

Finalmente, el año 73 fue decisivo para el futuro desenvolvimiento de los estudios de Historia. Se decretó la división de la Facultad de Filosofía y Letras dando lugar a tres distintas: Filología, Filosofía y Pedagogía, y Geografía e Historia. De esta manera los estudios de Geografía e Historia tomaban carta de naturaleza y se les reconocía la entidad suficiente como para organizarse en una Facultad, con las secciones de Geografía, Historia, Historia de América e Historia del Arte. Consecuentemente, ello obligaba a dotarles de nuevos planes de estudios adecuados, por lo que se procedía a publicar nuevas directrices y a su adaptación a la Facultad complutense, en concreto.

Posteriormente, en 1975 y 1977 se añadieron ciertas modificaciones que introducían a su vez asignaturas optativas dentro de cada especialidad. Se mantenían las secciones de Historia del Arte, Historia de América, Historia y Geografía. Dentro de la Sección de Historia de América se mantenía la opción de Antropología americana, y dentro de la Sección de Historia las opciones de Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporánea. Es decir, de las siete opciones existentes en 1968 se pasaba a nueve en 1977, separándose ya la de Historia Moderna de la de Historia Contemporánea. Como colofón, en 1981, una vez separadas las disciplinas y establecidos los planes de estudio de cada una de las nuevas Facultades, se procedió a la aprobación del Cuadro General de Equiparaciones y Analogías.

Pero los años setenta supusieron asimismo la desaparición de las enseñanzas no facultativas de los planes de estudio. La enseñanza de la religión católica desapareció tan sólo del nivel superior, aunque la presencia de la Iglesia Católica en la universidad ha perdurado hasta nuestros días, dependiendo a partir de ese momento del Servicio de Asistencia y Formación religiosa. La educación física se vio modificada ya en 1961 mediante la aprobación de la Ley de Educación Física. Con posterioridad a la LGE, en 1977, se decretó una nueva ordenación de la educación física en la universidad tendente a potenciar la práctica deportiva, pero sin carácter de obligatoriedad y fuera de los planes de estudio. A partir de ese momento la práctica deportiva en las universidades se promovería desde el Servicio de Educación Física y Deportiva, que dependería de los Rectorados y de los medios que cada

Universidad pudiera asignarle. En cuanto a la Formación política, desapareció de raíz por el Decreto 426/1977, y ya no se volvió a impartir en ningún caso ni en ningún nivel. Fue así como desaparecieron del marco educativo aquellas asignaturas en las que había depositado sus señas de identidad más específicas el primer franquismo.

Sin embargo, todas estas modificaciones no se vieron acompañadas por las dotaciones necesarias en cuanto a medios económicos, materiales y personales, lo que unido a una afluencia creciente de alumnos degeneró en masificación en las aulas, en la contratación en precario del profesorado y en un aumento del descontento estudiantil, que continuó en situación de conflicto.

En cuanto a la estructura docente se pueden destacar varios aspectos a lo largo del periodo. La Ley 83/1965 de 17 de julio supuso la introducción de dos figuras fundamentales por la proyección que tendrían posteriormente: la creación de la estructura departamental y la creación de una nueva categoría de profesorado, los profesores agregados.

La razón fundamental para ambas era el extraordinario crecimiento del número de alumnos universitarios. Por una parte, se hacía necesario incrementar la plantilla de profesorado para mantener la ratio profesor-alumno y en ese sentido la Ley inspirada por el ministro Lora Tamayo, al introducir un nuevo escalón en las plantillas del profesorado, se proponía paliar de algún modo las carencias existentes, al tiempo que introducía la denominada “carrera docente”, en definitiva una manera de cubrir plazas de profesorado con menos coste que las de catedráticos, y de alguna manera también, estimular la investigación científica aunque fuera con el fin de hacer currículum. Sin embargo, como es bien sabido, la solución no fue definitiva. La masificación fue cada vez mayor y la falta de medios obligó a llevar a cabo contrataciones precarias de todo tipo de profesorado, profesores no numerarios, recién licenciados, por lo general bien formados pero inexpertos, sobre los que recaía el grueso de la carga docente, y desde luego mal pagados, pero que llegaron a suponer hasta el 80% del profesorado y cuya situación profesional y laboral se convirtió en un polvorín. A la altura de 1970 el problema del profesorado

persistía, y aún en ocasiones se había agravado, por lo que la ley dio algunas medidas como la introducción de la nueva figura del profesor adjunto, o la exigencia de la dedicación exclusiva entre el profesorado, pero manteniendo la coexistencia de los funcionarios con los profesores no numerarios, contratados.³¹⁰

En la misma línea de intentar solventar las necesidades generadas por el crecimiento del alumnado universitario, intentando acondicionar los espacios e incrementar los medios didácticos, estuvo la creación de los Departamentos. Constituían una nueva unidad de coordinación en las enseñanzas para conseguir una mejor y más concentrada dotación de medios de trabajo y el desarrollo de unos planes de investigación en constante despliegue, y agrupaban a las personas y los medios materiales destinados a la labor docente, formativa e investigadora en el campo de una determinada disciplina o disciplinas afines. Como funciones tenían el coordinar las enseñanzas que lo integraran, proponer la realización de proyectos e investigaciones en equipo, promover el desarrollo científico y docente de las cátedras implicadas facilitando su labor, la consecución y distribución de medios, y servir de enlace entre las cátedras y las autoridades de la Facultad o Secciones. Agrupaban todas las categorías de profesorado que pudieran existir, además del personal investigador, lectores de idiomas, jefes de laboratorio, clínicas, seminarios o bibliotecas en aquellos Departamentos que lo aconsejasen y el personal auxiliar y subalterno para el desarrollo de las actividades.

Un Departamento podría existir en varias Facultades, y su Director sería un catedrático. A los efectos administrativos, cada Departamento estaría integrado en aquella Facultad en cuyo plan de estudios ocupasen sus disciplinas un lugar preferente, y a los efectos de coordinación académica estaría representado, además, en todas las Facultades en la que impartiera enseñanza.

³¹⁰ Véase el Cuadro comparativo del profesorado. Anexo V.

En marzo de 1966 se establecían los Departamentos que podrían existir en las Facultades de Filosofía y Letras, en total podría haber hasta veintinueve, siendo diez los relativos a estudios de Historia. En el mes de mayo, un mes después, se fijaban los que habría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, serían en total veintiséis, y diez los relativos a estudios de Historia (Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia del Arte, Paleografía y Epigrafía, Geografía, Historia de América y Antropología y Etnología de América). En 1967, se creaba la Sección de Arte, y en 1970 se creó una Sección de Estudios Comunes en la UCM.

La Ley General de Educación, en el Título II, capítulo II artículos del 69 a 71, recogía muy brevemente la figura de los Departamentos: “Las Universidades estarían integradas por Departamentos que, a los efectos administrativos y de coordinación académica, se agruparían en Facultades”. Definía los Departamentos como “unidades fundamentales de enseñanza e investigación en disciplinas afines que guardan entre sí relación científica”.

En 1973 se produjo la reestructuración de la Facultad de Filosofía y Letras que daría lugar al surgimiento de la de Geografía e Historia, lo que determinó asimismo una reestructuración de sus Departamentos, de manera que la Facultad contaría con cuatro secciones (Geografía, Historia, Historia de América e Historia del Arte) y once Departamentos (Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América, Prehistoria y Arqueología, Paleografía y Diplomática, Historia del Arte, Geografía General y Geografía Humana).

La Orden de julio de 1975 ejecutaba dicha división en la UCM, y de ese modo se creaba la Facultad de Geografía e Historia, que a partir de entonces evolucionaría individualmente. Ése es el trayecto que hemos tratado de seguir.

ANEXOS

ANEXO I

MINISTROS DE EDUCACIÓN (1938-1983)

1938/39	Pedro Sáinz Rodríguez	Educación Nacional
1939/51	José Ibáñez Martín	Educación Nacional
1951/56	Joaquín Ruiz-Giménez y Cortes	Educación Nacional
1956/62	Jesús Rubio García-Mina	Educación Nacional
1962/68	Manuel Lora-Tamayo Martín	Educación y Ciencia
1968/73	José Luis Villar Palasí	Educación y Ciencia
1973/74	Julio Rodríguez Martínez	Educación y Ciencia
1974/75	Cruz Martínez Esteruelas	Educación y Ciencia
1975/76	Carlos Robles Piquer	Educación y Ciencia
1976/77	Aurelio Menéndez y Menéndez	Educación
1977/78	Iñigo Cavero Lataillade	Educación
1978/79		Educación y Ciencia
1979/80	José Manuel Otero Novas	Educación y Ciencia
1980/81	Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona	Educación y Ciencia
1981/81		Educación y Universidad
1981/82	Federico Mayor Zaragoza	Educación y Ciencia
1982/88	José María Maravall Herrero	Educación y Ciencia

ANEXO II

RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID (1939-1983)

05/05/1939	13/09/1951	Pío Zabala y Lera
13/09/1951	02/04/1956	Pedro Laín Entralgo
02/04/1956	25/11/1964	Segismundo Royo-Villanova y Fernández de Cavada
25/11/1964	09/09/1967	Enrique Gutiérrez Ríos
09/09/1967	23/04/1968	Isidoro Martín Martínez
23/04/1968	18/09/1972	José Botella Llusá
18/09/1972	19/07/1973	Adolfo Muñoz Alonso
19/07/1973	27/07/1976	Ángel González Álvarez
27/07/1976	00/01/1981	Ángel Vián Ortuño (primer rector electo)
00/01/1981	00/03/1984	Francisco Bustelo García

ANEXO III

DECANOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y GEOGRAFÍA E HISTORIA (1939-1983)

FILOSOFÍA Y LETRAS (1939-1975)

1939 1950 Eloy Bullón Fernández
1950 1958 Francisco Javier Sánchez Cantón
1958 1967 José Camón Aznar
1967 1970 José María Azcárate Ristori
1970 1973 Francisco Sánchez-Castañer Mena
1973 1975 Anselmo Romero Marín

GEOGRAFÍA E HISTORIA (1975-1986)

1975 1977 Alberto de la Hera Pérez-Cuesta
1978 1981 María Ruíz Trapero
1981 1986 José María Azcárate Ristori (2º periodo)

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN CONSULTADA (1936-1983)

- Orden del 5 de septiembre de 1936, suspendiendo la matrícula en los cursos de enseñanza superior y reclamando la presencia de los profesores en sus puestos de trabajo para asignárseles tareas (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. Burgos 10 de septiembre de 1936)
- Orden de 4 de enero de 1937, reclamando los servicios del personal docente en beneficio de la Patria (BOE. Burgos, 7 de enero de 1937)
- Ley de 20 de septiembre de 1938 sobre reforma de la Enseñanza Media (BOE 23)
- Orden de 25 de abril de 1939 disponiendo la publicación del Proyecto de Ley de Reforma universitaria para informe de los claustros universitarios (BOE 27)
- Orden de 27 de abril de 1939 disponiendo el cese en el cargo de Ministro de Educación Nacional de D. Pedro Sáinz Rodríguez (BOE 28)
- Decreto de 28 de abril de 1939 encargando interinamente del Ministerio de Educación Nacional al Excmo. Sr. D. Tomás Domínguez Arévalo, Ministro de Justicia (BOE 29)
- Decreto de 29 de abril de 1939 disponiendo cese en sus cargos de Consejero Nacional, Vocal de la Junta Política y Delegado Nacional de Educación Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, D. Pedro Sáinz Rodríguez (BOE 2 mayo)
- Orden de 6 de junio de 1939 sobre cursos abreviados y exámenes en las Universidades (BOE 11)
- Decreto de 9 de agosto de 1939 nombrando, entre otros, a D. José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional (BOE 11)
- Orden del 31 de agosto de 1939 (BOE 13 de septiembre), que reorganiza los estudios de Filosofía y Letras (recoge la Orden de 4 de mayo, Orden de 6 de junio, la Orden Circular de 27 de julio y de 20 de agosto, todas de 1939)
- Orden de 7 de septiembre de 1939 prorrogando el plazo de admisión de matrícula para los exámenes extraordinarios de septiembre (BOE 13)
- Orden de 23 de septiembre de 1939 integrando en el Sindicato Español Universitario a las Asociaciones escolares de la Comunión Tradicionalista y las que pertenecían a la Confederación de Estudiantes Católicos de España (BOE 9 octubre)

- Ley de 24 de noviembre de 1939, creando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (BOE 28)
- Orden de 15 de diciembre de 1939, aprobando las plantillas del personal técnico-administrativo y auxiliar del Ministerio de Educación Nacional (BOE 21 enero 1940)
- Ley de 10 de febrero de 1940 organizando la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria (BOE 17)
- Decreto de 10 de febrero de 1940 regulando el funcionamiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (BOE 17)
- Decreto de 10 de febrero de 1940 organizando la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria (BOE 17)
- Decreto de 10 de febrero de 1940 nombrando vocales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (BOE 17)
- Ley de 13 de agosto de 1940 por la que se crea el Consejo Nacional de Educación (BOE 4 septiembre)
- Orden de 20 de septiembre de 1940 por la que se fija la distribución de las plantillas en los Centros y Dependencias del Ministerio de Educación Nacional (BOE 27)
- Orden de 30 de octubre de 1940 referente a los primeros cursos especiales de la Facultad de Filosofía y Letras (BOE 5 de noviembre)
- Orden de 30 de octubre de 1940 complementaria de la de esta fecha sobre primeros cursos especiales en las Facultades de Filosofía y Letras (BOE 5 de noviembre)
- Orden de 9 de diciembre de 1940 sobre expedición del título de Doctor (BOE 16)
- Decreto de 27 de enero de 1941 por el que son nombrados Vocales del Consejo Nacional de Educación a los señores que se indican (BOE 3 febrero) rectificado (BOE 4 febrero de 1941)
- Orden de 8 de mayo de 1941 por la que se determinan las asignaturas que comprenderán los cursos especiales que se citan, de las Facultades de Filosofía y Letras que completa la Orden de 31 de agosto de 1939 (BOE 12)
- Decreto de 22 de enero de 1942 por el que se nombran Vocales del Consejo Nacional de Educación a los Rectores de las Universidades (BOE 5 febrero)

- Decreto de 19 de febrero de 1942 por el que se confirman y crean diversos Colegios Mayores en las Universidades (BOE 9 marzo)
- Decreto de 14 de marzo de 1942 por el que se aprueban las instrucciones para el reclutamiento y formación de la Oficialidad y Clases de Complemento (BOE 2 abril)
- Ley orgánica del Ministerio de Educación Nacional de 10 de abril de 1942 (BOE 24)
- Ley de 22 de julio de 1942 por la que se modifican algunos artículos de la de 24 de noviembre de 1939 (BOE 7 agosto)
- Decreto de 21 de septiembre de 1942 por el que se organizan los Colegios Mayores Universitarios (BOE 1 octubre)
- Orden de 3 de octubre de 1942 por la que se aplica el Decreto de 21 de septiembre anterior, por el que se organizan los Colegios Mayores Universitarios (BOE 9)
- Orden de 26 de enero de 1943 que dispone el funcionamiento de todos los servicios docentes y administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras en el edificio de la Ciudad Universitaria de Madrid (BOE 27)
- Ley de 29 de julio de 1943 de Ordenación de la Universidad Española (BOE 31)
- Orden de 4 de septiembre de 1943 reglamentando el primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras (BOE 7)
- Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se modifican los artículos 5º y 12 del de 21 de septiembre de 1942 referente a los Colegios Mayores Universitarios (BOE 24)
- Decreto de 26 de enero de 1944 (rectificado) por el que se establece en las Universidades españolas la enseñanza religiosa (BOE 22 febrero)
- Orden de 3 de marzo de 1944 por la que se dispone que la enseñanza religiosa comience en todas las Universidades el día 8 del corriente mes (BOE 5)
- Órdenes de 3 y 4 de marzo de 1944 por las que se nombran profesores de enseñanza religiosa en las Universidades que se expresan a los profesores que se citan.
- Orden de 4 de marzo por la que se establece el programa que ha de regir en el presente curso para la enseñanza religiosa en las Universidades (BOE 5)

- Decreto de 29 de marzo de 1944 por el que se establecen en las Universidades cursos de Educación Física para los escolares (BOE 10 abril)
- Decreto de 29 de marzo de 1944 por el que se establecen en las Universidades cursos para la formación política de los escolares (BOE 10 abril)
- Decreto de 29 de abril de 1944 por el que se autoriza a la Universidad de Madrid para conferir el Grado de Doctor (BOE 7 mayo)
- Decreto de 29 de abril de 1944 por el que se dan normas para la concesión del Grado de Doctor en las Universidades de provincias (BOE 7 mayo)
- Orden de 9 de junio de 1944 por la que se dan normas para los cursos de formación política a los alumnos que hayan comenzado sus estudios durante el curso 1943-1944 (BOE 23)
- Decreto del 7 de julio de 1944, que reorganiza la Facultad de Filosofía y Letras (BOE 4 de agosto)
- Ley de 19 de julio de 1944 de Protección Escolar (BOE 21)
- Decreto de 29 de septiembre de 1944 por el que se implanta la enseñanza religiosa en las Escuelas de Ingenieros Industriales, de Minas, Montes, Agrónomos, Navales, de Arquitectura y de Altos Estudios Mercantiles (BOE 21 octubre)
- Orden de 27 de octubre de 1944 por la que se establece el programa de enseñanza religiosa en las Universidades para el curso 1944-45 (BOE 11 noviembre)
- Orden de 5 de junio de 1945 sobre repetición de prueba de “Formación Política” en las Universidades (BOE 17)
- Decreto de 12 de septiembre de 1945, que reordena la Sección de Historia de América (BOE 17 de octubre, rect. BOE 4 de noviembre)
- Orden de 22 de octubre de 1945 por la que se rectifican errores en los artículos octavo y décimo del decreto de 12 de septiembre último sobre ordenación de la Sección de Historia de América (BOE 4 de noviembre)
- Orden de 3 de noviembre de 1945 por la que se regulan las actividades del profesorado de Educación Física (BOE 25)
- Orden de 24 de noviembre de 1945 por la que se dictan normas sobre las enseñanzas de Formación Política, Religiosa y Educación Física en las Universidades y Centros de Enseñanza Superior dependientes de este Departamento (BOE 17 diciembre)

- Decreto de 11 de agosto de 1953 por el que se establecen los planes de estudio de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Veterinaria y Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (BOE 29)
- Orden de 4 de febrero de 1954 por la que se incluye en la disciplina de “Formación del Espíritu Nacional” el estudio de la política española en África (BOE 23 marzo)
- Orden de 17 de marzo de 1954 por la que se dispensa a los alumnos extranjeros en centros docentes del examen de Formación del Espíritu Nacional y Formación Política (BOE 26)
- Decreto de 25 de junio de 1954 por el que se regula el procedimiento para conferir el grado de Doctor en todas las Universidades (BOE 12 julio)
- Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional (BOE 12 octubre)
- Orden del 12 de febrero de 1955, que reforma el plan de los estudios comunes de Filosofía y Letras (BOE 26, rect. BOE 22 de marzo)
- Orden de 15 de febrero de 1955 por la que se aprueban los planes de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 6 marzo, rect. BOE 25 de marzo)
- Rectificación a la Orden de 12 de febrero de 1955 que aprobaba el plan de estudios comunes a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 22 de marzo)
- Rectificación a la Orden de 15 de febrero de 1955 que aprobaba los planes de estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 25 de marzo)
- Orden de 30 de marzo de 1955 por la que se rectifica el plan de estudios de la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 11 de abril)
- Orden de 30 de marzo de 1955 por la que se aprueba el plan de estudios del periodo de Licenciatura especializada en la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 11 abril)
- Rectificación a la Orden de 30 de marzo de 1955 que rectificaba el plan de estudios de la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 22 de abril)

- Orden conjunta del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría General del Movimiento de 7 de julio de 1955 por la que se regulan las enseñanzas de Hogar, Formación Política y Educación Física en las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos (BOE 12 agosto)
- Decreto de 13 de enero de 1956 por el que se modifica el de 8 de septiembre de 1954, que aprobó el Reglamento de Disciplina académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, y precisando su ámbito de aplicación (BOE 18)
- Decreto de 26 de octubre de 1956, orgánico de Colegios Mayores (BOE 14 noviembre)
- Decreto de 5 de septiembre de 1958 por el que se precisa la naturaleza de las faltas colectivas (BOE 27)
- Ley 24/1959 de 11 de mayo, sobre protección a los Colegios Mayores Universitarios (BOE 12)
- Orden de 20 de enero de 1960 por la que se dispone quede suprimido el examen intermedio en los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras (BOE 23 febrero)
- Orden de 16 de junio de 1961 por la que se dan normas en las enseñanzas de Formación Política, Hogar y Educación Física en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos (BOE 19 julio)
- Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física (BOE 27)
- Orden de 2 de mayo de 1963 por la que se modifica la prueba de Licenciatura en el plan de estudios de la Sección de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 25 junio)
- Decreto 818/1965, de 5 de abril, por el que se regulan las asociaciones profesionales de estudiantes (BOE 7)
- Orden de 3 de junio de 1965, complementaria del Decreto 818/1965, por el que se regulan las asociaciones Profesionales de Estudiantes (BOE 5)
- Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y su profesorado (BOE 21)
- Orden de 15 de marzo de 1966 por la que se autoriza la constitución de Asociaciones Profesionales de Estudiantes en los Centros docentes que se indican (BOE 19)
- Decreto 1200/1966, de 31 de marzo, sobre ordenación de Departamentos en las Facultades de Filosofía y Letras (BOE 16 mayo)

- Orden de 28 de mayo de 1966 por la que se constituyen en las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades los Departamentos que se indican (BOE 4 julio)
- Decreto 1105/1967, de 31 de mayo, sobre asistencias a clase y convocatorias de examen (BOE 1 junio)
- Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa (BOE 1 julio)
- Orden de 7 de julio de 1967 por la que se crea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid la «Sección de Arte» (BOE 14 agosto)
- Orden de 1 de agosto de 1967 por la que se aprueba el Plan de Estudios de la sección de Arte de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 9 octubre)
- Orden de 24 de agosto de 1967 por la que se modifica el plan de estudios de la licenciatura especializada en la Sección de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 27 septiembre)
- Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa (BOE 1 julio)
- Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria (BOE 7)
- Decreto 1774/1968, de 27 de julio, por el que se desarrolla el artículo primero del Decreto-Ley de 6 de junio sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria (BOE 30)
- Orden de 10 de septiembre por la que se aclara lo establecido en el artículo segundo del Decreto 1105/1967, de 31 de mayo, sobre asistencias a clase y convocatorias de examen (BOE 28). Derogada por Decreto 1419/1969 de 26 de junio.
- Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, sobre Asociaciones de Estudiantes (BOE 23)
- Orden de 21 de octubre de 1968 por la que se aprueba el plan de estudios de la Sección de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (BOE 21 noviembre)
- Decreto 1419/1969, de 26 de junio (Ministerio de Educación y Ciencia), por el que se refunden las normas sobre el curso selectivo en las facultades universitarias (BOE 17 julio)

- Orden de 15 de julio de 1969 por la que se autoriza la inclusión de la asignatura de "Teoría y Método de la Historia", con carácter optativo, en el plan de estudios del quinto curso de la Sección de Historia de la Universidad de Madrid (BOE 20 agosto)
- Orden de 4 de abril de 1970 (Educación y Ciencia) por la que se deroga la de 20 de enero de 1960, debiendo aplicarse en las Facultades de Filosofía y Letras las normas contenidas en el artículo primero del Decreto 1419/1969, de 26 de junio (BOE 14)
- Ley 14/1970, de 4 de agosto (de Jefatura del Estado), General de Educación y financiamiento de la reforma educativa (BOE 6)
- Decreto 2459/1970 de 22 agosto, sobre calendario para aplicación de la reforma educativa (BOE 5 septiembre)
- Decreto 2749/1970, de 22 de agosto, sobre delimitación de los Distritos correspondientes a las nuevas Universidades creadas en Madrid y Barcelona por el Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio (BOE 28 septiembre)
- Orden de 21 de diciembre de 1970 por la que se crea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid una Sección de estudios comunes (BOE 12 enero)
- Decreto 3857/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos provisionales de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 27 marzo 1971)
- Orden de 14 de abril de 1971 por la que se hace extensiva a todas las Secciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid la orden de 2 de mayo de 1963 (BOE 18 mayo)
- Decreto 2055/1972, de 21 de julio, sobre aplicación del párrafo primero del artículo 77 de la Ley General de Educación (BOE 28)
- Decreto 2056/1972, de 26 de julio, por el que se aplica el artículo 67 de la Ley General de Educación a los Centros universitarios que se indican (BOE 28). Suspensión del Estatuto provisional durante un año en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid
- Decreto 2552/1972, de 18 de agosto, sobre implantación del primer ciclo en los estudios de Enseñanza Superior (BOE 23 septiembre)
- Orden de 23 de septiembre de 1972 (Educación y Ciencia) sobre directrices para la elaboración de planes de estudio de la enseñanza superior (BOE 25). Lo deroga el R.D. 1497/1987, de 27 de noviembre

- Decreto 1974/1973, de 12 de julio (Educación y Ciencia), por el que se autoriza la reestructuración de las actuales Facultades de Filosofía y Letras (BOE 22 agosto)
- Resolución de 17 de julio de 1973 de la Dirección General de Universidades e Investigación (Educación y Ciencia) por la que se determinan las directrices que han de seguir los planes de estudio de las Facultades de Filosofía y Letras (BOE 8 septiembre, rectificación BOE 19 de diciembre)
- Decreto 1977/1973, de 26 de julio, sobre reestructuración de los Departamentos universitarios (BOE 22 agosto)
- Decreto 2176/1973, de 17 de agosto, sobre órganos de gobierno y representación de las Universidades (BOE 20 septiembre)
- Decreto 2780/1973, de 19 de octubre, por el que se regulan los Colegios Mayores Universitarios (BOE 10 noviembre)
- Resolución de 11 de diciembre de 1973 de la Dirección General de Universidades e Investigación (Educación y Ciencia) por la que se aprueba el plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 10 enero 1974)
- Decreto 1054/1974 de 4 de abril, por el que se prorrogan los Estatutos provisionales de las Universidades (BOE 24)
- Orden de 25 de abril de 1974 por la que se prorrogan los estatutos provisionales de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 20 junio)
- Decreto 2925/1974, de 17 de octubre, por el que se regula provisionalmente la participación estudiantil a nivel universitario (BOE 21)
- Orden de 21 de octubre de 1974 que desarrolla el Decreto sobre participación estudiantil (BOE 22)
- Resolución de 17 de junio de 1975, de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se modifica el plan de estudios del primer ciclo de la división de Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 29 julio)

LEGISLACIÓN POSTERIOR A LA DIVISIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

- Orden de 16 de julio de 1975 por la que se divide la actual Facultad de Filosofía y Letras de la universidad Complutense de Madrid (BOE 27 agosto)

- Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1976 por la que se establecen nuevos contenidos en las orientaciones pedagógicas del área social en la segunda etapa de la EGB (BOE 3 diciembre)
- Orden de 20 de diciembre de 1976 por la que se regulan las actividades de formación religiosa en Centros de enseñanza universitaria (BOE 29)
- Real Decreto 425/1977, de 4 de marzo, por el que se establece una nueva ordenación de la Educación Física en la Universidad (BOE 22)
- Real Decreto 426/1977, de 4 de marzo, por el que se suprime la asignatura de Formación Política en la Universidad (BOE 22)
- Real Decreto 929/1977, de 28 de marzo, sobre prórroga de la vigencia de los Estatutos provisionales de las Universidades estatales (BOE 8 mayo)
- Orden de 26 de julio de 1977 sobre prórroga de los Estatutos Provisionales de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 22 agosto)
- Orden de 15 de abril de 1977 por la que se aprueba el segundo ciclo del plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Madrid (BOE 27 julio)
- CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de abril de 1977 por la que se aprueba el segundo ciclo del plan de estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 11 octubre)
- Orden de 15 de septiembre de 1977 por la que se modifica el plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 4 noviembre)
- CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de septiembre de 1977 por la que se modifica el plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 16 diciembre)
- Orden de 27 de julio de 1981 por la que se aprueba el cuadro general de equiparaciones y analogías de las distintas Facultades Universitarias de Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas, Ciencias Geológicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Químicas, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Ciencias Económicas y empresariales, Ciencias políticas y Sociología, Derecho, Filología y Geografía e Historia (BOE 1 septiembre)
- Ley 8/1983, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia de Órganos de Gobierno de las Universidades (BOE 30) y su corrección de erratas (BOE 29 septiembre)
- Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE 1 septiembre)

- Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre, sobre Departamentos Universitarios (BOE 14 enero 1985)
- Real Decreto 1930/1984, de 10 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 45. 1. de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE 5 noviembre)
- Real Decreto 861/1985, de 24 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 11 junio)

ANEXO V

CUADRO COMPARATIVO DEL PROFESORADO		
1943	1965	1973
Catedráticos numerarios	Catedráticos numerarios o extraordinarios	Catedráticos numerarios
Catedráticos extraordinarios	Profesores agregados	Profesores agregados
Profesores adjuntos	Profesores adjuntos	Profesores adjuntos
Profesores ayudantes de clases prácticas, clínicas o laboratorios	Profesores ayudantes de clases prácticas, clínicas o laboratorios	Profesores ayudantes
Profesores encargados de cátedra	Profesores encargados de cátedra o curso	Profesores contratados
Profesores agregados al servicio de una cátedra	Profesores extraordinarios	Profesores contratados de excepcional prestigio
Profesores encargados de curso	Profesores honoríficos	
Profesores encargados de curso para enseñanza religiosa y formación política		
Profesores de institutos de investigación		

ANEXO VI

ÍNDICE DE SIGLAS UTILIZADAS

Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APEs)
Archivo General de la Administración (AGA)
Archivo General de la Universidad Complutense (AGUCM)
Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP)
Bachiller Unificado Polivalente (BUP)
Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (BOJDNE)
Boletín Oficial del Estado (BOE)
Centro Nacional de Orientación y Trámite (CNOT)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Curso de Orientación Universitaria (COU)
Enseñanza General Básica (EGB)
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (FET de las JONS)
Formación Profesional (FP)
Institución Libre de Enseñanza (ILE)
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Instituto Nacional de Bachillerato a distancia (INBAD)
Junta de Ampliación de Estudios (JAE)
Ley General de Educación (LGE)
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior (SEPES) de FET de las JONS
Sindicato Español Universitario (SEU)
Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria (SPICEU)
Servicio Obligatorio de Trabajo (SOT)
Universidad Nacional a distancia (UNED)

VI. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ALCOCER MARTÍNEZ, Mariano, *Hacienda universitaria y jurisdicción del rector*. Valladolid, 1922. Tesis
- ALTED VIGIL, Alicia: "Notas para la configuración y el análisis de la política cultural del franquismo en sus comienzos: la labor del Ministerio de Educación Nacional durante la guerra", en J. Fontana (Ed.), *España bajo el franquismo*, Barcelona, 1986
- ALTED VIGIL, Alicia: *Política del Nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española*, Madrid, 1984.
- ÁLVAREZ COBELAS, José: *Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970)*, Siglo XXI, Madrid, 2004.
- ARTIGUES, D.: *El Opus Dei en España, 1928-1962. Su evolución ideológica y política*, París, 1971
- BALDÓ LACOMBA, Marc: "La larga posguerra en la Universidad (1939-1951)" en *Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil*, La esfera de los libros, Madrid, 2007.
- BALDÓ LACOMBA, Marc: "Los primeros sesenta: consolidación del antifranquismo en la Universidad" en *Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil*, La esfera de los libros, Madrid, 2007.
- *Biblioteca en Guerra*. Biblioteca Nacional. Madrid, 2005
- CARRERAS ARES, Juan José y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, eds. *La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991.
- CLARET MIRANDA, Jaime: *El atroz desmoche*. Crítica, Barcelona, 2006.
- DE MIGUEL, A.: *Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los ministros del régimen*, 7ª edición, Barcelona, 1975.
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: *Educación e ideología en la España contemporánea*, Madrid, 1999
- ESCOLAR, H.: *La cultura durante la guerra civil*, Madrid, 1987.
- FERNÁNDEZ BUEY, Francisco: "Estudiantes y profesores universitarios contra Franco. De los sindicatos democráticos estudiantiles al movimiento de profesores no numerarios (1966-1975)", en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991

- FERNÁNDEZ MONTESINOS, Andrea: "Los primeros pasos del movimiento estudiantil", en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, Nº 1, 2009.
- FERNÁNDEZ SORIA, J. M.: *Educación y cultura en la guerra civil (España 1936-1939)*, Valencia, 1984
- FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO PÉREZ, A: *Vencer y convencer. Educación y política. España 1936-1945*, Valencia, 1993.
- FERNÁNDEZ SORIA, J. M.: *Educación, socialización y legitimación política (España, 1931-1970)*, Valencia, 1998.
- FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO PÉREZ, A.: "En torno a la idea de Universidad en la España de postguerra", en *Educación superior y sociedad. Perspectivas históricas*, 2 vols., Salamanca, 1985
- FERNÁNDEZ DE SEVILLA MORALES, Miguel: *Historia jurídico-administrativa de la Ciudad Universitaria de Madrid*, 1993. Tesis
- FLORES VARELA, Carlos y PALOMERA PARRA, Isabel: "La Documentación del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid en el Período Interrepublicano", en *España entre Repúblicas 1868-1939*. Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha, 2007
- FLORES VARELA, Carlos y PÉREZ MONTES, Mercedes: "El Fondo Documental de la Antigua Escuela de Veterinaria de Madrid (1792/1943)", *Boletín Informativo* (Sistema Archivístico de la Defensa): Ministerio de Defensa. Madrid, 2007.
- FLORES VARELA, Carlos: "El Archivo General de la Universidad Complutense: punto de inflexión" en, CRUZ MUNDET, José Ramón (ed.): *Archivos Universitarios e Historia de las Universidades*, UCIII, Madrid 2003.
- FONTÁN, A.: *Los católicos y la Universidad española*, Madrid, 1961
- FUSI, Juan Pablo: "La educación en la España de Franco", en VV.AA., *Franco y su época*, 1995.
- GARCÍA MORENTE, M.: *Discurso correspondiente a la apertura del curso académico 1942-1943*, Madrid, 1942
- GIMÉNEZ CABALLERO, E.: *Genio de España*, 1932.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo: *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea (1865-2008)*. Alianza Editorial, Madrid, 2009.
- GONZÁLEZ ROLDÁN, G.: *El nacimiento de la universidad franquista. La depuración republicana y franquista de los catedráticos de universidad*. Tesis doctoral, UNED, Madrid, 2000.

- GONZÁLEZ ROLDÁN, G.: El proceso legislativo de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943 (1939-1943), Madrid, UNED, 1985, 2 vols. Memoria de Licenciatura inédita (Dir. Javier Tusell).
- GRACIA, Jordi y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana. Síntesis. Madrid, 2004.
- GUTIÉRREZ RÍOS, E.: *José M^a de Albareda. Una época de la cultura española*, Madrid, 1970.
- HERMET, G.: Los católicos y la España franquista. I. Los actores del juego político, Madrid, 1985
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Tres décadas de educación superior en España: Universidades e Investigación", en Cuadernos del Instituto Antonio Nebrija, 11/1 (2008)
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Estudiantes en la universidad española (1956-1975): cambio generacional y movilización antifranquista" en El Franquismo y la Transición en España: Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época, Coord. por Damián Alberto González, Madrid, 2008.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "La Junta de Ampliación de Estudios y la Universidad" en La Universidad de Córdoba en el Centenario de la Junta para la Ampliación de Estudios, Enrique Aguilar Gavilán (coord.) Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2008.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Represión y radicalización del movimiento estudiantil (1965-1969)" en Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil. La esfera de los libros, Madrid, 2007.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Pluralidad y fragmentación del movimiento estudiantil (1970-1973) en Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil. La esfera de los libros, Madrid, 2007.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Hacia el final del régimen (1974-1975)" en Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil. La esfera de los libros, Madrid, 2007.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "La dictadura franquista y la universidad, 1951-1975 (Con especial atención al caso de Madrid)", Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, nº 5, 2002.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Universidad y política en la España del siglo XIX. Madrid (1875-1898)" en J. L. Guereña y E. M. Fell (Eds.), *L'Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Âge à nos jours. II. Enjeux, contenus et images*, Tours, 1998.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Reforma desde el sistema y protagonismo estudiantil: la Universidad de Madrid en los años cincuenta",

en La universidad española bajo el régimen de Franco: actas del congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989 / Juan José Carreras Ares, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, 1991.

- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Universidad y oposición al franquismo. Reflexiones en torno a los sucesos de 1956 en Madrid”, en J. Tusell, A. Altet y A. Mateos (Coords.), *La oposición al régimen de Franco*, Madrid, 1990, tomo II.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET, José Luis: *Universidad, poder académico y cambio social*. Consejo de Universidades, Madrid, 1990.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Cambios y resistencias al cambio en la Universidad española (1875-1931)”, en José Luís García Delgado (Ed.): *España entre dos siglos (1875-1931): continuidad y cambio*, VII Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Vol. 1, Madrid, 1988.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET REIG, José Luís: “Laín en la Universidad de Madrid”, en *Cuadernos hispanoamericanos*, nº 446-447, 1987.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “La Universidad de Madrid en el siglo XIX. Aproximación histórica”, en L. E. Otero y Á. Bahamonde (Eds.), *Madrid en la sociedad del siglo XIX*, Madrid, 1986, tomo II.
- HERRERA ORIA, Enrique: *Historia de la pedagogía española*, Madrid, 1941
- JATO, D.: *La rebelión de los estudiantes (Apuntes para una historia del alegre SEU)*, Madrid, CIES, 1953.
- LAÍN ENTRALGO, P.: *Descargo de conciencia (1930-1960)*. Barral, Barcelona, 1976.
- LIZCANO, Pablo: *La generación del 56. La Universidad contra Franco*, Grijalbo, Barcelona, 1981. (Reedición en Leer/Documento, Madrid, 2006)
- LÓPEZ IBOR, Juan José: *Discurso a los universitarios españoles*, Salamanca, 1938
- LÓPEZ MEDEL, J.: *Ejército y Universidad*, Madrid, 1963
- LÓPEZ-RÍOS MORENO, Santiago y GONZÁLEZ CÁRCELES, Juan Antonio (coord.): *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República: Arquitectura y Universidad durante los años 30*, Madrid, 2008.
- MAEZTU, R.: *Defensa de la Hispanidad*, Cultura Española, 1934.
- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda y BLASCO GIL, Yolanda: “Las primeras oposiciones “patrióticas” a cátedras de historia en 1940-1941”, en *Spagna contemporanea*, Nº 36, 2009.

- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: "Depuración de profesores en la Universidad de Valencia", en *La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1939-1975)*, coord. por Josefina Cuesta Bustillo, 2009.
- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: *La España de los exilios. Un mensaje para el s. XXI*. PUV, Valencia, 2008.
- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: "Profesores universitarios en el exilio", en *Cuadernos republicanos*, nº 54, 2004.
- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: "Consecuencias de la guerra civil en la Universidad valenciana: depuraciones y exilios", en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, Nº 4, 2001.
- MARTÍNEZ NEIRA, Manuel y otros: *La Universidad española 1889-1939. Repertorio de Legislación*. Dykinson, Madrid, 2004.
- MESA, Roberto, ed.: *Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en Madrid*, Universidad Complutense, Madrid, 1982.
- MOLERO PINTADO, A. (ed.): "La educación durante la segunda República y la Guerra Civil (1931-1939)", *Historia de la Educación en España*, tomo IV, Madrid, 1991.
- MONTERO DÍAZ, M.: "La ACN de P. y la reconquista de la Universidad (1940-1945)", en J. Tusell, S. Sueiro, J. M. Marín y M. Casanova (Coords.), *El régimen de Franco (1939-1975)*, Madrid, 1994, vol. I
- MONTORO ROMERO, R.: *La Universidad en la España de Franco (1939-1970). Un análisis sociológico*, CIS, Madrid, 1981.
- OTERO CARVAJAL, Luís Enrique (dir.) Y OTROS: *La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo*. Editorial Complutense, Madrid, 2006.
- PALOMERA PARRA, Isabel y otros: "La Documentación del Archivo General de la Universidad Complutense: Testimonio y Memoria de los Conflictos en la Universidad Española", Actas de las IV Jornadas Archivo y Memoria. La memoria de los conflictos: legados documentales para la Historia. CSIC y FFE (Fundación de los Ferrocarriles Españoles). Publicado en CD. Madrid, 2009.
- PALOMERA PARRA, Isabel: "La organización académica y administrativa de la Facultad: legislación y fuentes documentales", en *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República: Arquitectura y Universidad durante los años 30*, Santiago López-Ríos Moreno y Juan Antonio González Cárcelos (Coord.), Madrid, 2008.
- PALOMERA PARRA, Isabel y PÉREZ MONTES, Mercedes: "La Universidad de Madrid en la Guerra Civil: Fuentes Documentales del Archivo General de la Universidad Complutense". Congreso Internacional

"La Guerra Civil Española". Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006.

- PARIS, Carlos: *La Universidad española actual: posibilidades y frustraciones*, Madrid, 1974
- PAYNE, S. G.: *Los militares y la política en la España contemporánea*, París, 1968.
- PEMARTÍN, José: *Qué es lo "Nuevo"... Consideraciones sobre el momento español presente*, Cultura Española, Santander, 1937
- PESET, Mariano: "Los orígenes de la autonomía universitaria y el proyecto de García Alix de 1901", en J. L. Guereña y E. M. Fell (Eds.), *L'Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Âge à nos jours. II. Enjeux, contenus et images*, Tours, 1998.
- PESET, M.: "La Ley de Ordenación Universitaria de 1943", en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991
- PESET, M. y MANCEBO, M^a Fernanda: "Un intento de autonomía universitaria: el fracaso de la reforma Silió de 1919", en Homenaje a Juan Vallet de Goytisolo, Madrid, 1988, tomo VI.
- PESET, M.: "Oposiciones y selección del profesorado durante los años de la Restauración", *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, I, 2 (1987)
- PESET, M.: "La autonomía de las universidades", en J.L. Peset y otros, *Pasado, presente y futuro de la Universidad española*, Madrid, 1985.
- PESET, M. y J. L.: "Los gastos públicos de enseñanza en España (1842-1875). Una rectificación de datos anteriores", *Hispania*, 39 (1979).
- PESET, M. y J. L.: *La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*, Madrid, 1974.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: Estudio introductorio a *España bajo los Borbones* de Pío Zabala y Lera. Institución "Fernando el Católico" C.S.I.C., Zaragoza, 2009.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina y VALLE MORÁN, Inés: "La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y Universidad durante los años 30" en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Nº 30, 2008.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: La Universidad de Madrid como escenario de las relaciones hispano-alemanas en el primer franquismo (1939-1951), en *Ayer*, Nº 69, 2008.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina Y OTROS: *La Universidad española, 1888-1939. Repertorio de legislación*, Dykinson, Madrid, 2002.

- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: *La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-1951)*, Dykinson, Madrid, 2002.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: "Poder y mentalidad: los primeros pasos de la Universidad de Madrid" en *Poder y mentalidad en España e Iberoamérica* / coord. por Enrique Martínez Ruiz, 2000.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: "Anhelos de reforma: Madrid ante el proceso de reforma universitaria en el primer franquismo (1939-1940)", en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, nº 2, 1999
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: "El nacimiento de la Universidad franquista: Madrid ante el proyecto de Ley de Reforma Universitaria de 1939" en VVAA, *Tiempos de silencio*, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Valencia, 1999.
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: "La Universidad en la España de Franco. Reflexiones generales y algunos apuntes sobre el caso de Zaragoza", en PEIRÓ MARTÍN, Ignacio y VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (eds.): Actas del I Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza (2008). IFC. Zaragoza 2010.
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: "El despertar del movimiento estudiantil en España (1900-1939)" en *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil*. La esfera, Madrid, 2007
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: "Años cincuenta: génesis de la movilización universitaria contra Franco" en *Estudiantes contra Franco 1939-1975. Oposición política y movilización juvenil*. La esfera, Madrid, 2007
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana. Síntesis*. Madrid, 2004.
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*. S. XXI, Madrid, 1996.
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (Coord.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco: actas del congreso celebrado en Zaragoza del 8 al 11 de noviembre de 1989*. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: *Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra. Aproximación a la historia de la Universidad de Zaragoza (1939-1947)*, Zaragoza, 1989.
- RUIZ RICO, J.J.: *El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971)*, Madrid, 1977
- SÁINZ RODRÍGUEZ, Pedro: *Testimonio y recuerdos*, Barcelona, 1978

- SEAGE, J. y DE BLAS, P.: “La administración educativa en España (1900-1971)”, en Revista de Educación, nº 240 (1975).
- TELLO, J. A.: *Ideología y política. La Iglesia católica española (1936-1959)*, Zaragoza, 1984
- VVAA: *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975). Actas del Congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y el 11 de noviembre de 1989. Dir. Por Juan José Carreras Ares y coord.. por Miguel Ángel Ruíz Carnicer*, Zaragoza, 1991
- YNFANTE, J.: *La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa mafia*, París, 1970
- YSÁS, Pere: *Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia (1960-1975)*, Crítica, Barcelona, 2004.

BIBLIOGRAFÍA DE AMPLIACIÓN

- AGUILAR GAVILÁN, Enrique (coord.): “La Universidad de Córdoba en el Centenario de la Junta para la Ampliación de Estudios”. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2008.
- ALBARRACÍN BRESCIA, T.: *Universidad e ideología en el Madrid del primer franquismo, 1939-1945*, Madrid, Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense, 1988. (Dir. Elena Hernández Sandoica).
- ALMARCHA BARBADO, A.: *Autoridad y privilegio en la universidad española: estudio sociológico del profesorado universitario*. Madrid, 1982.
- ALTED VIGIL, Alicia: “Bases político-ideológicas y jurídicas de la universidad franquista durante los ministerios de Sáinz Rodríguez y primera época de Ibáñez Martín (1938-1945)”, en J.J. Carreras Ares y M.Á. Ruiz Carnicer (Eds.), *La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991
- ÁLVAREZ COBELAS, José: *El régimen de Franco, 1936-1975: política y relaciones exteriores*. Coord. Javier Tusell Gómez. Vol. 2, 1993
- ÁLVAREZ COBELAS, José: “La renovación de las elites en el primer franquismo: los catedráticos de la Universidad de Madrid”, en AA. VV.: *Tiempo de silencio, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo*. Valencia, 1999.

- ARIÑO ORTÍZ, Gaspar: "Autonomía y reforma universitaria: la ley Maravall", *Cuenta y razón*, nº 13, 1983.
- BALDÓ LACOMBA, Marc: "La larga posguerra en la Universidad (1939-1951)" en *Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil*, La esfera de los libros, Madrid, 2007.
- BALDÓ LACOMBA, Marc: "Centralización y descentralización del Grau de Doctor (1845-1954)", *Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història*. Ejemplar en Homenatge al professor Dr. Vicent M. Roselló i Verger, nº51-52, 2001-2002.
- BERZOSA ALONSO-MARTÍNEZ, Carlos: La Ley de Reforma universitaria y la política educativa, Fundación Francisco Giner de los Ríos, Madrid, 1988.
- BLAT GIMENO, José: "Apuntes sobre la elaboración de la reforma educativa de 1968-1970", *Revista de Educación*, nº extra 1, 1992
- BUSTELO, Francisco: *La historia de España y el franquismo. Un análisis histórico y económico y un testimonio personal*. Síntesis, Madrid, 2005.
- CÁMARA VILLAR, Gregorio: *Educación y política en España, 1936-1951. Una aproximación al estudio de la ideología nacional-católica*. (Resumen de tesis doctoral). Granada, 1980.
- CARRILLO LINARES, Alberto: *Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla (1965-77)*. Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2008.
- CARRILLO LINARES, Alberto: "La Universidad contra Franco. El movimiento estudiantil sevillano en tiempos de la represión" en *Andalucía en la Historia*, Nº 2, 2008.
- CARRILLO LINARES, Alberto: "Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política y transición política a la democracia. Pasado y memoria" en *Revista de Historia Contemporánea*, Nº 5, 2006.
- CARRILLO LINARES, Alberto: "Aquél 68. Las movilizaciones estudiantiles en la Universidad de Sevilla" en *Revista de Historia Contemporánea*, vol. 2, Nº 9, 1999.
- CHAMORRO FERNÁNDEZ, M^a Inés: "Bibliografía sobre la Ley General de Educación", *Revista de Educación*, nº extra 1, 1992.
- COLOMER I CALSINA, Josep María: Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, 2 vold. Curial, Barcelona, 1978,
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Universidad y cambio", *Crítica*, nº 934, 2006.
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Ocho leyes orgánicas de educación en 25 años", Cuadernos de pedagogía, nº 348, 2005.

- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Cien años de política educativa en España", *La educación en la España del siglo XX: Primer centenario de la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes*. Biblioteca Nacional, 2001
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Política y educación: Cien años de historia", en *Revista de educación*, nº Extraordinario, 2000.
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Educación y autonomía en el modelo español de descentralización", *Revista de educación*, nº 309, 1996.
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Oscilaciones de la política educativa en los últimos cincuenta años: reflexiones sobre la orientación política de la educación", *Revista española de pedagogía*, nº 192, 1992.
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Tecnocracia y política en la reforma educativa de 1970", *Revista de educación*, nº extra 1, 1992.
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: *Política y administración educativa*, Madrid, 1991
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel (Ed.): "Nacional-catolicismo y educación en la España de la postguerra, *Historia de la educación en España*, tomo V, Madrid, 1990.
- DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel: "Una década de política educativa (1978-1988)", *Anales del Centro de Alzira de la UNED*, nº 5, 1989.
- DÍEZ HOCHLEITNER, Ricardo: "La reforma educativa de la LGE de 1970: datos para una crónica", *Revista de Educación*, nº extra 1, 1992
- EQUIPO RESEÑA: *La cultura española durante el franquismo*. Ediciones mensajero, Bilbao, 1972.
- ESPUNY I ESPUNY, Francina: *El moviment estudiantil a Barcelona (1965-1975)*. La Garriga: Malhivern, 2010.
- FERNÁNDEZ BUEY, Francisco: "Estudiantes y profesores universitarios contra Franco. De los sindicatos democráticos estudiantiles al movimiento de profesores no numerarios (1966-1975)", en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991
- FERNÁNDEZ CANTOS, José Luis y CARRASCO, Joaquín G: *Ley general de educación: espíritu y realidad de la reforma educativa española*. Sígueme. Salamanca, 1971.
- FUSI, Juan Pablo: "La educación en la España de Franco", en VV.AA., *Franco y su época*, 1995.
- GARCÍA DE LEÓN ÁLVAREZ, M^a Antonia y GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDÁ, M^a Luisa: "Universidades y universitarios (1970-1990)", *Revista de Educación*, nº extra 1, 1992

- GARCÍA NIETO PARIS, M^a Carmen y DONÉZAR, Javier M^a: La España de Franco 1939-1973. Guadiana. Madrid, 1975.
- GARMA, S. y SÁNCHEZ RON, J. M.: “La Universidad de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, *Alfoz*, nº 66-67, 1989.
- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Ángel: “La cuestión universitaria: asignaturas pendientes”, *Revista española de educación comparada*. Ejemplar dedicado a: la enseñanza superior en la nueva sociedad del saber, nº 5, 1999.
- GRACIA, Jordi y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana. Síntesis. Madrid, 2004.
- GURRIARÁN RODRÍGUEZ, Ricardo: *Inmunda escoria. A Universidade franquista e as mobilizacións estudiantas en Compostela*. Ediciones Xerais de Galicia, Vigo 2010.
- HERNÁNDEZ DÍAZ, José María: “La Universidad en España, del Antiguo Régimen a la LRU (1983): Hitos y cuestiones destacadas”, *Aula: Revista de enseñanza e investigación educativa*, nº 9, 1997.
- HERNÁNDEZ DÍAZ, José María: “L’Université dans l’Espagne contemporaine (1812-1983)”, en J. L. Guereña (Dir.) *L’Enseignement en Espagne. XVI-XVII siècles, numéro spécial de la Revue Histoire de l’Education*, 78 (mai 1998).
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Una Universidad para tiempos difíciles”, *El Noviciado de la Universidad en Madrid (1836-1846)*. Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria. Madrid, 2009.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “La Universidad de Madrid en el primer tercio del siglo XX” en *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República: Arquitectura y Universidad durante los años 30*, Coord. por Santiago López-Ríos Moreno y Juan Antonio González Cárcelos, Madrid, 2008.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Disidencias en el franquismo (1939-1975)” en *Cuadernos de historia contemporánea*, nº 22, 2000
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Universidad y política en la España del siglo XIX. Madrid (1875-1898)” en J. L. Guereña y E. M. Fell (Eds.), *L’Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Âge à nos jours. II. Enjeux, contenus et images*, Tours, 1998.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Para una interpretación retrospectiva del espacio académico: Universidad y política en el Madrid del siglo XIX”, en *Historia Social, pensamiento historiográfico y Edad Media: homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera*, Coord. por M^a Isabel Loring García, Madrid, 1997
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “Dos modelos de Universidad y una sola trayectoria histórica: el traslado de la Universidad de Alcalá de Henares a

Madrid (1823-1837)", en VVAA, *La Universidad Complutense y las artes*, Madrid, 1995.

- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Instituciones científicas y educativas" en *La edad de plata de la cultura española (1898-1936)*, Coord. por Pedro Laín Entralgo, vol. 2, 1993.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET, José Luis: *Universidad, poder político y cambio social. Alcalá de Henares, 1453 - Madrid, 1874*, Madrid, 1990.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET, José Luis: "La Universidad de Alcalá y los orígenes de la Universidad Central", *Historia* 16, 160 (1989)
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y OTROS: "Educación y enseñanza", en *Enciclopedia de historia de España / Miguel Artola Gallego (dir.)*, Vol. 1, 1988.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "La Universidad de Madrid en el siglo XIX. Aproximación histórica", en L. E. Otero y Á. Bahamonde (Eds.), *Madrid en la sociedad del siglo XIX*, Madrid, 1986, tomo II.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: *El modelo liberal de enseñanza superior en España. Madrid, 1830-1898*, Madrid, 1986 (microfichas)
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: *Historia y actualidad de la Universidad española*, Madrid, Fundación Juan March, 1985, 5 vols.
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "La Universidad Central", en J. L. Peset y otros: *Presente, pasado y futuro de la Universidad española*, Madrid, 1985
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y PESET, José Luis: *Estudiantes de Alcalá*. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 1983
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: "Instituciones científicas y de enseñanza (1875-1931)", *Historia de España de Menéndez Pidal*, tomo XXXIX: *La edad de plata de la cultura española*. Espasa Calpe, Madrid.
- LÁZARO FLORES, Emilio: "La reforma del setenta, vivida y vista por un profesional de la administración", *Revista de Educación*, nº extra 1, 1992
- LIZCANO, Pablo: *La generación del 56. La Universidad contra Franco*, Grijalbo, Barcelona, 1981. (Reedición en *Leer/Documento*, Madrid, 2006)
- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: "La consolidación del movimiento estudiantil (1920-1947)", en *Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història*, N^o 49, 1999.
- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: "El proyecto político de los universitarios: Aportación de los valencianos", en *El exilio valenciano en América: obra y memoria*, coord. por Albert Girona Albuixech y María Fernanda Mancebo, 1995.

- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: “La Universidad del exilio. El Estado franquista, editor pirata (1939-1945)”, en *La universidad española bajo el régimen de Franco: actas del congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989* / Juan José Carreras Ares, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, 1991.
- MANCEBO ALONSO, M^a Fernanda: “La Universidad de Valencia durante la guerra civil: la FUE (1936-1939)”, en *Estudis D’Historia Contemporania del Pais Valencia*, N^o 4, 1983.
- MARAVALL, José María: Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Alfaguara, Madrid, 1978.
- MARTÍ FERRANDIZ, J. J.: “Ortodoxia y control en el sistema educativo: La Inspección de enseñanza”, en Alejandro Mayordomo (coord.), *Estudios sobre la política educativa durante el franquismo*, Universidad de Valencia, Valencia, 1999.
- MARTÍNEZ NEIRA, Manuel y otros: *La Universidad española 1889-1939. Repertorio de Legislación*. Dykinson, Madrid, 2004.
- MARTÍNEZ TIRADO, J. F.: “Principios básicos y configuración del sistema educativo en la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa”, *Revista de Educación*, n^o extra 1, 1992.
- MESA, Roberto, ed.: *Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en Madrid*, Universidad Complutense, Madrid, 1982.
- MESA GARRIDO, Roberto: “La universidad de don Joaquín y sus universitarios”, en *La fuerza del diálogo: homenaje a Joaquín Ruíz-Giménez*. Alianza Editorial, Madrid, 1997.
- MONÉS I PUJOL-BUSQUETS, Jordi: “La Ley General de Educación de 1970: la administración educativa”, *Revista de Educación*, n^o extra 1, 1992
- MONTERO DÍAZ, M.: “La ACN de P. y la reconquista de la Universidad (1940-1945)”, en J. Tusell, S. Sueiro, J. M. Marín y M. Casanova (Coords.), *El régimen de Franco (1939-1975)*, Madrid, 1994, vol. I
- NADAL SÁNCHEZ, Antonio: “EL movimiento universitario y la represión” en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991
- NAVARRO SANDALINAS, Ramón: “La Ley Villar y la formación del profesorado”, *Revista de Educación*, n^o extra 1, 1992
- NICOLÁS MARÍN, Encarna: “La Universidad de los años cuarenta: por una cultura unitaria y tradicional” en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991.

- ORTEGA GUTIÉRREZ, Félix: "Las ideologías de la reforma educativa de 1970", *Revista de Educación*, nº extra 1, 1992
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: "La representación estudiantil universitaria: del monopolio al conflicto", en *Alcores: revista de historia contemporánea*. Ejemplar dedicado al asociacionismo en la dictaduras de la Europa del Sur, Nº 6, 2008.
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: "La historia de un fracaso: los patronatos de la Universidad de Valladolid en el siglo XX", en *Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea*, Nº 26, 2006.
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: "Entre Valladolid y Santiago" en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Nº 27, 2005.
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: "El SEU en las Universidades de Castilla durante el Franquismo" en *Castilla y León en la historia contemporánea*, Manuel Redero San Román y María Dolores de la Calle Velasco (coord.), 2008.
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: "La depuración de la historia", en *La memoria de los olvidados: un debate sobre el silencio de la represión franquista*, Emilio Silva, Pancho Salvador, Asunción Esteban y Javier Castán (coord.), 2004.
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: "La educación bajo sospecha: las comisiones depuradoras. Actuaciones sobre la Universidad y otros centros universitarios de Valladolid (1936-1939)", en *Entre nós: estudios de arte, xeografía e historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo*, Jesús Leopoldo Balboa López y Herminia Pernas Oroza (coord.), 2001.
- PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María: *Historia de la Universidad de Valladolid*. Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 1989.
- PASAMAR ALZURIA, G.: *Historiografía e ideología en la postguerra española: la ruptura de la tradición liberal*. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1991.
- PEIRÓ MARTÍN, Ignacio y VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (eds.): *Actas del I Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza* (2008). IFC. Zaragoza 2010.
- PELÁEZ ROPERO, José Manuel: "La universidad española en la crisis del franquismo (1974-1976)", en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991
- PÉREZ MONTFORT, Ricardo: *Hispanismo y Falange. Los sueños imperiales de la derecha española*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

- PESET, José Luis y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: “La recepción de la cultura científica en la España del siglo XX: la universidad”, en Antonio Morales Moya, *Las claves de la España del siglo XX. La Cultura* (t. 8), Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001.
- RODRÍGUEZ DE TEJADA, Sergio: “Los estudiantes y el cambio sociocultural de los 60”, en *Eppure si muove: la prerrecepción de los cambios en España (1959-1976)*, Coord. por Glicerio Sánchez Recio, 2008.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: “La historiografía española sobre universidades en el s. XX: líneas de trabajo y tendencias historiográficas”, en *Revista de historiografía*, nº 3, 2005.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina Y OTROS: *La Universidad española, 1888-1939. Repertorio de legislación*, Dykinson, Madrid, 2002.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: “Las universidades españolas en el arranque del franquismo: los años cuarenta”, en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, nº 5, 2002.
- RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: “La formación política de la Universidad franquista: Falange ante profesores y estudiantes”, en J. Tusell, S. Sueiro, J. M. Marín y M. Casanova (Coords.), *El régimen de Franco (1939-1975)*, Madrid, 1994, vol. I
- SÁNCHEZ BLANCO, Ángel: “Introducción al constituyente universitario español: De la Ley General de Educación a la Ley de Reforma Universitaria. Reforma universitaria de 1983”. *Libro homenaje al profesor José Luis Villar Palasí*. Coord. por Rafael Gómez-Ferrer Morant, 1989
- TAMBURRI, P.: “El imaginario medieval en la universidad franquista”, *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad*, 4 (2001)
- TIANA FERRER, Alejandro: “La Educación en España: dos encrucijadas” en *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, nº 28-29, 1997.
- TIANA FERRER, Alejandro (Coord.): *Historia de la educación en la España contemporánea: diez años de investigación*, Ministerio de Educación, Madrid, 1994.
- TIANA FERRER, Alejandro: “La Ley general de educación, veinte años después: elementos para una revisión”, *Revista de Educación*, nº extra 1, 1992.
- VALDELVIRA, Gregorio: *El Movimiento Estudiantil en la crisis del franquismo. La Universidad Complutense (1973-1976)*, Tesis doctoral (CDR, director A. Fernández García), UCM, Madrid, 1991.
- VALDELVIRA, Gregorio: *La oposición estudiantil al franquismo*, Síntesis, Madrid, 2006.

- VALLS MONTES, R.: “El bachillerato universitario de 1938: primera aproximación al modelo universitario franquista” en J.J. Carreras Ares y Ruíz Carnicer, M. A. (eds.): *La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975)*, Zaragoza, 1991